

JÓVENES EN LAS ESTRUCTURAS DE SOLIDARIDAD INTEGENERACIONAL

Pau Marí-Klose

Máster en Sociología
The University of Chicago

Máster en Ciencias Sociales
CEACS, Fundación Juan March

Licenciado en Geografía e Historia
Universitat de Barcelona

Tesis doctoral dirigida por Cat. Jesús M. de Miguel

Universitat Autònoma de Madrid
Octubre 2009

ÍNDICE

Prefacio	3
Índice de gráficos y tablas	9
1. Generaciones y cambio social	15
Edad y generación	17
Desigualdad e inequidad	24
Solidaridad y conflicto	34
2. Viejos y nuevos riesgos sociales	45
Estructura de riesgos en el ciclo vital	46
Precariedad laboral	50
Mecanismos de protección social	57
3. Itinerarios de inserción laboral	67
Contextos demográficos y educativos	69
Transición al mundo del trabajo	73
Circuitos de emancipación económica	76
Segmentación laboral por edad	87
4. Modelos de convivencia familiar	101
Formación de nuevas familias	103
Pautas residenciales de jóvenes	106
Frustración de deseos y expectativas	119
5. Producción de los desequilibrios de protección	133
Políticas de representación sindical	136
Representación política de los intereses de la juventud	150
Configuración de la agenda política	169
6. Redistribución del bienestar en sociedades envejecidas	187
El mito de la vejez decadente	191
Encanecimiento de la protección social	196
Ancianidad y bienestar económico	201
Futuro del pacto intergeneracional	209
7. Nuevos escenarios de solidaridad familiar	217
La familia como entramado afectivo	220
Crisis del familismo	228
(In)eficacia de la privatización del riesgo	238
Conclusiones	249
Bibliografía	278
Apéndices	
A. Fichas técnicas de las encuestas	279

PREFACIO

“Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros”.

Marco Tulio Cicerón
(106-43 AC)

La presente obra es el producto de varios años de trabajo: años de transición a la vida adulta. La investigación ha ocupado buena parte del cambio biográfico personal que analizo aquí desde un punto de vista sociológico. Habrá quien piense que eso la acerca al terreno de la cotidianidad del autor, de vivencias personales o de incidencias vitales de las que uno es incapaz de abstraerse. En este tema lo difícil es lograr la neutralidad absoluta, como exigen los cánones del método científico. Es un riesgo ante el que adopto cautelas. Son las mismas que tienen en cuenta la mayoría de los sociólogos/as que estudian, por ejemplo, las relaciones familiares, el mercado de trabajo, o las relaciones de género. Son realidades que están presentes cotidianamente en nuestras vidas, que nos configuran como personas, y que alimentan inquietudes y preocupaciones. Despegar la investigación sociológica de la propia vida es tarea casi imposible... incluso quizás contraproducente.

Esta investigación se inscribe en el campo de la sociología de la juventud. Entro de lleno en alguno de los debates de la sociología de las edades o del ciclo vital que afectan a esta etapa del curso biográfico. Concretamente, el objeto de estudio es la relación de los/as jóvenes con los sistemas de bienestar y, en particular, el lugar que ocupan en los *circuitos de solidaridad intergeneracional*. Supone una aproximación a un tema poliédrico, cuyas caras diversas son todas relevantes para comprender el fenómeno. Una buena parte de esta obra está centrada en el análisis sociológico de políticas sociales, del mercado laboral, y de las transformaciones familiares en España. Estado, mercado de trabajo, y familia conforman conjuntamente el contexto de los itinerarios vitales de la juventud que convierte a España en un caso singular en el marco de los países desarrollados. A lo largo de este trabajo analizo ese contexto singular así como los mecanismos a través de los cuáles se producen implicaciones sobre el ciclo de vida personal.

La hipótesis de partida es que, durante las últimas décadas, se produce a un proceso de cambio social que cristaliza —entre otras formas— en alteraciones sustanciales de la estructura biográfica y de los niveles de bienestar que disfrutaban las personas en las etapas del ciclo vital. Esta hipótesis me lleva a identificar los colectivos más afectados por los cambios, así como los factores que los propician. Mi trabajo entronca con una larga tradición de investigaciones teóricas y empíricas que, dentro de la Sociología, estudian el impacto diferencial de las transformaciones sociales, políticas y económicas sobre las oportunidades vitales de los/as miembros de distintas cohortes, así como las implicaciones biográficas de ese impacto a medio y largo plazo. El primer capítulo revisa las contribuciones de la Sociología al estudio de la interrelación entre cambio social, distribución de riesgos a lo largo del ciclo vital, así como la formación y consolidación de generaciones históricas. Respondo a tres preguntas: (1) ¿Cuál es el significado sociológico del término “generación” y en qué medida contribuye a arrojar luz sobre dinámicas sociales que no pueden ser explicadas de otro modo? (2) ¿Qué se entiende por desigualdad entre grupos de edad y generaciones, y qué tipo de cuestiones plantea relativas a la equidad? Y (3) ¿qué factores promueven dinámicas de solidaridad entre generaciones, y cuáles propician el desencadenamiento de conflictos?

El segundo capítulo analiza la concentración de riesgos sociales en las edades de transición a la vida adulta. Ese proceso se acentúa como resultado de cambios adversos en el entorno socioeconómico —relacionados fundamentalmente con el incremento del desempleo— y las iniciativas políticas adoptadas para corregir esas tendencias. En muchos países las consecuencias de la precariedad económica creciente de la juventud no vienen contrarrestadas por una atención mayor de los sistemas públicos de bienestar a la situación cambiante. Lejos de esto, las políticas sociales de sus Estados de Bienestar tienden a presentar un sesgo generacional cada vez más acusado a favor de las personas ancianas. Discuto también aquí el papel de las familias en la provisión de bienes y servicios a los/as jóvenes, así como su capacidad para hacerlo de forma efectiva y satisfactoria.

En el cuerpo central de la investigación analizo de forma cuantitativa la situación socio-económica de las personas jóvenes. Buena parte de esta investigación tiene carácter exploratorio. Así, en el capítulo tercero ofrezco una descripción de los itinerarios de inserción laboral con un análisis multivariante de las probabilidades de tener empleo, contrato precario, y salario reducido durante la juventud. Las fuentes principales de datos son las encuestas del Centro de

Investigaciones Sociológicas, el *Panel de hogares de la Unión Europea* de EUROSTAT, y la *Encuesta de condiciones de vida* del Instituto Nacional de Estadística. Estas fuentes de datos ermiten obtener una radiografía de los perfiles de inserción de los/as jóvenes en el mundo laboral, así como el papel que juegan ciertos atributos socioeconómicos —como género, nivel de estudios, o experiencia laboral— en la configuración de esos itinerarios. También analizo la situación de la juventud en el mercado de trabajo en comparación con otros grupos de edad. Las evidencias avalan la hipótesis de que la edad es uno de los factores principales de desigualdad en el mercado de trabajo.

Las pautas de emancipación de la juventud se estudian en el capítulo cuarto. Presento dos hipótesis para dar cuenta de los perfiles y motivaciones de las personas jóvenes para emanciparse, así como del incremento de las situaciones contradictorias en el hogar de origen —es decir, jóvenes que residen junto a sus padres, a pesar de tener trabajo. La primera de estas hipótesis pone el acento en las “ventajas” que procura la permanencia en el hogar de origen. De acuerdo con este argumento, la prolongación de la estancia de los hijos/as en el hogar de origen es consecuencia del relajamiento del control que los padres ejercen sobre los hijos/as, y de la “calidad” de las prestaciones que la juventud recibe en el hogar parental de forma gratuita. La segunda hipótesis atribuye el retraso en la edad de emancipación a las dificultades laborales y de acceso a vivienda. El énfasis se pone, en este caso, en los “costes” de la emancipación. Para dirimir la validez de estas hipótesis llevo a cabo un análisis multivariante probit controlando posibles sesgos de selección mediante el método de Heckman.

El capítulo quinto analiza la evolución de las algunas iniciativas de política social y laboral que afectan al bienestar y oportunidades de los/as jóvenes durante la etapa de consolidación del Estado de Bienestar en España, en la década de los ochenta y primera mitad de los años noventa. Estudio la implicación de varios agentes sociales y políticos en la construcción de un modelo de protección social que produce desigualdades generacionales de bienestar. El foco de atención son las actuaciones promovidas por sindicatos y gobierno a lo largo del período, y las políticas de representación de intereses sectoriales en que se inscriben. Mi objetivo es describir las condiciones de producción de algunas de las iniciativas públicas a las que pueden atribuirse en buena medida las situaciones socio-económicas descritas en capítulos anteriores.

El capítulo sexto ofrece un punto de contraste con la situación de los/as jóvenes, describiendo la mejora de las condiciones de vida de las personas de edades más avanzadas. Se

exploran las imágenes sociales sobre la juventud y la vejez, cuestionando el mito de la vejez decadente. En las últimas décadas, la calidad de vida de las personas mayores así como su autonomía social y económica han mejorado de forma sustancial. A esta mejora contribuye decisivamente la provisión pública de bienestar. El Estado de Bienestar ha invertido recursos considerables para atender necesidades y demandas de las personas de edad más avanzada, comprometiendo su capacidad fiscal para proteger a otros colectivos. En este capítulo exploro las implicaciones del envejecimiento de las sociedades y la reorganización de los ciclos vitales de cara al futuro del pacto intergeneracional sobre el que se asientan los sistemas de protección pública.

En el capítulo séptimo examino el papel de la familia en la provisión de bienestar, la legitimidad social del familismo, y la eficacia de la ayuda familiar en la provisión de bienestar para las personas jóvenes. La hipótesis principal es que el familismo ha dejado de ser un mecanismo de solidaridad suficientemente efectivo para dar respuesta a las necesidades y demandas de bienestar de las personas jóvenes. Su legitimidad social está empezando a resquebrajarse, especialmente dentro de ese segmento de la población. Para efectuar el análisis utilizo datos de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social, y Eurobarómetro, así como evidencias secundarias de la Encuesta de Población Activa, y de los estudios del Instituto de la Juventud.

Investigar y escribir resulta imposible sin el apoyo de algunas personas e instituciones; más aún si la investigación se realiza *durante* la juventud y *sobre* la juventud. En este sentido, me considero un privilegiado. He contado desde el principio con el apoyo y amistad de mi director de tesis, el catedrático Jesús M. de Miguel, cuyo aliento impregna cada una de las páginas de este libro. Mi agradecimiento va también a mis profesores/as y colegas del Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona y del *Institut de Infància i Món Urbà* (CIIMU) en Barcelona. Otras instituciones han respaldado también mi labor investigadora: Instituto Juan March en Madrid, Fundación la Caixa, el programa COST de la Comisión Europea en Bruselas, Fundación Santa María y la Universidad de Chicago. Debo destacar la importancia de la formación recibida en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. Mi proyecto de tesis fue gestándose en las clases de profesores excelentes como Elisabeth Clemens, Andrew Abbott, y Robert Sampson, con cuyo apoyo he contado en las fases más avanzadas del proyecto. La huella de seres queridos se puede notar

también en las páginas que siguen. Con varios de ellos/as he tenido la oportunidad de compartir el placer de la investigación en otros proyectos. Entre los co-investigadores pero amigos/as debo mencionar a Doug Lauen, Hongxing Yang, Xavier Escandell, Kathleen Fernicola, Javier Moreno, Francisco J. Granados, y Sandra Escapa. Las personas que más me han arropado a lo largo de esta travesía son Eva Roselló, Marga Marí-Klose y Carmelo Pinto, Lluís Bassas y Sandra Parejo, María Elena Mayans, Elena Roselló y Miguel Carnerero, amén de Adri y Miguelito. Dedico esta obra a la memoria de mi madre Rosemarie y de mi padre Jaume, a quienes pocas cosas hubieran gustado tanto como leerse en estas líneas.

Pau Marí-Klose

Barcelona, 1 de mayo de 2009.

Índice de gráficos y tablas

GRÁFICOS

Gráfico 2.1 Episodios demográficos en España

Panel A. Migraciones interiores entre provincias según grupos de edad, en 2003 (Porcentajes de personas que migran).

Panel B. Inmigraciones de retorno de españoles/as procedentes del extranjero según grupos de edad, en 2003 (Tasas por 10.000 habitantes).

Panel C. Tasas de nupcialidad según edad y género, en 2000.

Panel D. Tasa de fecundidad según grupos de edad, en 2003 (Nacidos por mil mujeres).

Gráfico 2.2 Riesgos juveniles

Panel A. Interrupciones voluntarias del embarazo reconocidas según grupos de edad, en 2000 (Tasas por mil mujeres).

Panel B. Condenados/as por delitos cometidos según grupos de edad, en 2002 (Tasas por 1.000 personas).

Panel C. Consumo de cannabis en el último mes, en 2001 (En porcentajes).

Panel D. Fallecidos/as en accidentes de tráfico, en 2003 (Tasas por 100.000 personas).

Panel E. Casos de sida, en 2004 (En miles personas).

Gráfico 2.3

Panel A. Proporción de contratos temporales (En porcentajes sobre el total de empleos).

Panel B. Proporción de jóvenes con contrato temporal (En porcentajes sobre el total de jóvenes empleados de 15 a 24 años).

Gráfico 2.4 Evolución de la proporción de contratos temporales en España según grupos de edad (En porcentajes sobre el total de personas empleadas en cada grupo de edad)

Gráfico 3.1 Evolución de la tasa de matriculación de jóvenes en la Universidad (En porcentajes de la población de su edad)

Gráfico 3.2 Evolución de la proporción de mujeres matriculadas en la Universidad (En porcentajes del total de estudiantes)

Gráfico 3.3 Probabilidad de estar empleado, según el nivel de estudios alcanzado, y los años fuera del sistema educativo

Gráfico 3.4 Probabilidad de tener contrato fijo, según nivel educativo y experiencia laboral

Gráfico 3.5 Probabilidad de tener contrato fijo, según género, estado civil y experiencia laboral

Gráfico 3.6 Indicadores de seguridad laboral según grupos de edad

Gráfico 4.1 Variación de la evolución de los salarios y el precio de la vivienda

Gráfico 4.2 Proporción de jóvenes de 25 a 29 años emancipados/as según el coste de acceso a la vivienda en las Comunidades Autónomas (En porcentajes)

Gráfico 4.3. Probabilidad de haber pensado en emanciparse, según edad y recursos económicos disponibles

Gráfico 4.4 Probabilidad de los jóvenes de haber pensado en emanciparse, según edad y género

Gráfico 4.5 Preferencias y prácticas de convivencia de los/as jóvenes, según edad (En porcentajes)

Gráfico 4.6 Deseos, expectativas y realidades de la fecundidad, según la edad de los jóvenes

Gráfico 5.1 Probabilidad de haber dejado de votar al PSOE, según edad y valoración de sus políticas

Gráfico 5.2 Evolución del porcentaje de diputados jóvenes (menores de 40 años) y de edad avanzada (mayores de 50 años) en el Congreso de los Diputados, PSOE y AP-PP

Gráfico 6.1 Riesgos de pobreza alta y severa según grupos de edad en España

Gráfico 6.2 Reducción del nivel de pobreza de personas menores de 16 y mayores de 64 años después de percibir transferencias públicas (en variaciones porcentuales)

Gráfico 6.3 Número de partícipes en Fondos de Pensiones (en cientos de miles)

Gráfico 7.1 Frecuencia con la que los/as jóvenes coinciden con sus padres en diversos temas

Gráfico 7.2 Estrategias de búsqueda de empleo a las que recurren los desempleados/as (Porcentajes de desempleados/as que utilizan cada una de ellas)

TABLAS

Tabla 2.1. Evolución de las tasas de desempleo juvenil Población desempleada, de 15 a 24 y de 25 a 54 años, por cada cien personas del mismo grupo de edad)

Tabla 2.2 Relación entre el salario medio bruto de la población adulta y la población joven (Cociente entre el salario de personas de 45 a 54 años y de 25 a 29 años)

Tabla 2.3 Evolución del gasto de programas sociales (en porcentaje del PIB)

Tabla 2.4 Jóvenes que residen en el hogar de sus padres, según género y edad (En porcentajes, para el año 2000)

Tabla 2.5 Relación entre fecundidad real y deseada (Ratio número de hijos/as tenidos y el ideal de los/as jóvenes de 25 a 34 años)

Tabla 3.1 Jóvenes que creen que van a volver a estudiar, según la edad en que abandonaron sus estudios (En porcentajes)

Tabla 3.2 Situación laboral de los/as jóvenes que estudian, según grupos de edad (En porcentajes)

Tabla 3.3 Tasas de desempleo un año después de la salida del sistema educativo, según género y nivel de estudios, en 1996 (En porcentajes)

Tabla 3.4 Situación laboral de los/as jóvenes según su nivel de estudios y años transcurridos desde que abandonaron el sistema educativo

Tabla 3.5 Análisis multivariable de los determinantes de tener empleo entre jóvenes de 15 a 29 (Coeficientes de regresión logística)

Tabla 3.6 Duración media del empleo según la edad (En años)

Tabla 3.7 Análisis multivariable de los determinantes de tener contrato fijo entre jóvenes de 15 a 29 años (Coeficientes de regresión logística, errores típicos, y significatividad)

Tabla 3.8 Análisis multivariable del salario semanal de jóvenes de 15 a 29 años que están trabajando (coeficientes de regresión lineal, error típico, significatividad)

Tabla 3.9 Variación interanual de la población ocupada, según grupo de edad (2007-2008)

Tabla 3.11 Análisis multivariable de los determinantes de trabajar a tiempo parcial

Tabla 3.12 Razones por las que trabaja a tiempo parcial, según edad y género

Tabla 3.13 Incidencia de empleos de baja remuneración según grupos de edad, género, nivel educativo y origen

Tabla 3.14 Análisis multivariable de los determinantes de los salarios netos (coeficientes no estandarizados)

Tabla 3.15 Análisis multivariable de los determinantes de recibir paga extraordinaria, recibir formación, recibir seguro médico privado (razón de probabilidad)

- Tabla 3.16** Análisis multivariable de los determinantes de tener asignadas tareas de supervisión y participar en la toma de decisiones acerca del funcionamiento de la empresa (razón de probabilidad)
- Tabla 4.1** Edad media al matrimonio (Mujeres)
- Tabla 4.2** Formas de convivencia ideal según los/as jóvenes que valoran la cohabitación de forma positiva (En porcentajes)
- Tabla 4.3** Evolución de la escala de emancipación de jóvenes de 15 a 29 años (En porcentajes)
- Tabla 4.4** Evolución de la situación laboral y residencial de las personas jóvenes de 20 a 29 años, según género (En porcentajes)
- Tabla 4.5** Proporción de jóvenes que han pensado en dejar de vivir con sus padres, según la permisividad familiar hacia determinadas actividades y hábitos (En porcentajes)
- Tabla 4.6** Análisis multivariable de los determinantes de haber pensado en dejar el hogar de la familia de origen (En coeficientes probit)
- Tabla 4.7** Proporción de jóvenes de 15 a 29 años que han pensado independizarse según su género, el hecho de tener novio/a, y grado de dependencia económica (En porcentajes)
- Tabla 4.8** Aspectos que los/as jóvenes valoran más de un trabajo, según edad, situación de pareja, y número de hijos/as (En porcentajes)
- Tabla 4.9** Motivos de los/as jóvenes para casarse en lugar de vivir juntos (Porcentaje que responden que influye “mucho” o “bastante”)
- Tabla 4.10** Pautas de emancipación y preferencias residenciales de los/as jóvenes según edad, tipo de pareja, y situación sociolaboral (En porcentajes)
- Tabla 4.11** Motivo principal por el que los/as jóvenes creen que no tendrán el número de hijos/as que desean (En porcentajes)
- Tabla 4.12** Diferencia entre el número de hijos/as que se desean y el que se cree que se llegará a tener, según género y situación laboral (En porcentajes)
- Tabla 5.1** Evolución del gasto público destinado a políticas de empleo en España 1983-1996 (en porcentaje del PIB)
- Tabla 5.2** Prestaciones por desempleo y cuantía percibida según grupos de edad (en porcentaje sobre el total de desempleados/as y en pesetas)
- Tabla 5.3** Evolución del apoyo electoral al PSOE entre 1982 y 1993, según grupos de edad
- Tabla 5.4** Valoración de la gestión del gobierno socialista en diversas áreas según grupos de edad
- Tabla 5.5** Análisis de regresión logística de los factores que explican la fuga de votantes del PSOE (en razones de probabilidad)
- Tabla 5.6** Cuál sería el mejor resultado electoral para España en los próximos cuatro años, según grupos de edad (año 1993)
- Tabla 6.1** Preocupación por las condiciones de vida de la población anciana
- Tabla 6.2** Responsabilidades sociales del Gobierno
- Tabla 6.3** Opinión acerca de los colectivos que deberían estar mejor protegidos (% que sitúa a los colectivos en primer y segundo lugar)
- Tabla 6.4** Frecuencia con la que las personas se sienten solas, según género y edad (En porcentajes)
- Tabla 6.5** Análisis multivariable de los determinantes del grado de satisfacción y grado de felicidad
- Tabla 6.6** Personas por debajo del umbral de pobreza, según género y edad (En porcentajes)
- Tabla 6.7** Nivel de pobreza de personas jóvenes y mayores antes y después de percibir transferencias monetarias públicas, por países (En porcentajes)

Tabla 6.8 Persona que aporta más ingresos al hogar, según género y edad de la persona entrevistada (En porcentajes)

Tabla 6.9 Régimen de tenencia de la vivienda, según grupo de edad (En porcentajes)

Tabla 7.1 Nivel de estudios completados por los/as jóvenes de 25 a 35 años según los estudios del padre (En porcentajes)

Tabla 7.2 Proporción de jóvenes que tiene prohibidas y permitidas ciertas actividades en el hogar de sus padres, según género (En porcentajes)

Tabla 7.3 Implicación de los/as jóvenes en tareas domésticas en el hogar de sus padres según género (Porcentaje que contestan que dedican mucho o bastante tiempo a cada tarea)

Tabla 7.4 Jóvenes que viven en casa de sus padres y que nunca realizan determinadas tareas domésticas (En porcentajes)

Tabla 7.5 Implicación de los varones en determinadas tareas domésticas, según estado civil (En porcentajes)

Tabla 7.6 Implicación de mujeres jóvenes que conviven con su pareja en tareas domésticas, según su estatus laboral (En porcentajes)

Tabla 7.7 Opinión sobre la importancia de la maternidad según la edad y ocupación de las jóvenes entrevistadas (En porcentajes)

Tabla 7.8 Evolución de las opiniones acerca de las preferencias sobre modelos de familia (En porcentajes)

Tabla 7.10 Evolución de las opiniones acerca de la participación laboral de la mujer después del matrimonio, según género de los entrevistados (En porcentajes)

Tabla 7.11 Opinión acerca de quién debe ser el responsable principal de garantizar algunos derechos de las personas (En porcentajes)

Tabla 7.12 De quién es el deber fundamental de prestar apoyo a las personas que lo necesitan, según la edad de la persona entrevistada (En porcentajes)

Tabla 7.13 Proporción de personas que consideran que el Estado invierte demasiado poco en determinadas partidas de gasto público, según grupo de edad de las personas entrevistadas (En porcentajes)

Capítulo 1

GENERACIONES Y CAMBIO SOCIAL

“Youth is when you blame all your troubles on your parents; maturity is when you learn that everything is the fault of the younger generation”

Bertold Brecht

El uso cotidiano del concepto de “generación” está plenamente extendido. Se invoca tanto para describir las diferencias entre personas que pertenecen a diferentes grupos de edad como para ubicarse a uno mismo y otras personas en un tiempo histórico. Las personas se refieren, por ejemplo, a “su” generación, a la generación de la guerra, a la generación del 68, a la generación del *baby boom*, a la generación X o a la generación @. Se dice que ciertas cohortes constituyen una “generación maldita” o “perdida”, para describir situaciones y contextos adversos en que transcurrió toda o buena parte de su vida. Identificamos a ciertas personas como pertenecientes a una “nueva” generación y reconocemos la existencia de brechas y discontinuidades generacionales en valores, actitudes, pautas de consumo u orientaciones políticas. La relación entre estas generaciones no está exenta de tensiones derivadas de aproximaciones diferenciadas a la realidad. Así, describimos los conflictos entre padres e hijos/as sobre los usos que estos últimos hacen de su tiempo libre, la ropa que visten o los amigos/as que frecuentan como conflictos intergeneracionales.

Los usos cotidianos del concepto de generación impregnan su utilización en el campo de las ciencias sociales, donde el término se maneja a menudo de forma casi tan indiscriminada e imprecisa como en los discursos profanos. En la literatura sociológica se advierten al menos cuatro significados distintos, en ocasiones, utilizados de forma simultánea (Kertzer 1983). Generación es, en primer lugar, un principio de parentesco, utilizado extensamente en la antropología social para describir las relaciones entre miembros que se sitúan en diferentes estratos de un árbol genealógico. Un segundo uso es el que realiza la demografía, donde generación equivale al concepto de cohorte. El término se utiliza, en este caso, para referirse a la sucesión de personas que transitan conjuntamente a través de la estructura de edad, ocupando en cada momento un estrato específico de la pirámide. Este uso trasciende el campo de la demografía y el estudio de cohortes de “nacimiento”. Especialistas en diversos ámbitos de investigación reconocen, por ejemplo, la existencia de distintas “generaciones” de estudios e investigaciones sobre una materia o cuestión. El tercer uso es el de los sociólogos/as que manejan el término para referirse a colectivos que se sitúan en las distintas etapas del ciclo vital. Este uso

está extendido entre los sociólogos/as que estudian “brechas” y “conflictos” entre personas que pertenecen a grupos de edad diferentes, generalmente jóvenes y personas adultas, o jóvenes y personas ancianas –con independencia de su cohorte de pertenencia. En cuarto lugar, el discurso sociológico se refiere a las “generaciones” como el conjunto de personas que viven durante un período específico de la historia, y que, por tanto, incluyen cohortes diversas. Las “generaciones históricas” definidas de este modo comparten experiencias biográficas “singulares”, que tienen un considerable poder conformador de la personalidad o de las oportunidades vitales, como una guerra, revolución política o depresión económica.

Es frecuente la utilización simultánea de varios significados del concepto en la misma investigación. Esto entraña riesgos si no se procede con la debida cautela; cautela que se echa en falta en muchos de trabajos sociológicos. Esta falta de rigor es imperdonable en una disciplina en que el estudio de la interrelación entre estructura biográfica de las personas, su cohorte de nacimiento, y el cambio social constituye uno de los ejes de reflexión que recorre algunas de las mejores páginas de nuestros clásicos. A ellos dedico mis primeras reflexiones. Las páginas que siguen tienen como objetivo presentar algunas de las dimensiones principales de análisis en que se centra mi trabajo de investigación.

Edad y generación

El trabajo que ha contribuido de forma más clara a situar la cuestión de la estructura biográfica y la sucesión generacional en un lugar preeminente dentro de la Sociología es el opúsculo de Karl Mannheim *El problema de las generaciones* de 1928 [1993]. La obra del sociólogo alemán constituye un ejercicio singular de hibridación entre tradiciones sociológicas aparentemente distantes. Por un lado, recoge intuiciones presentes en la sociología positivista francesa de August Comte, y por otra propone una teorización que se inscribe en la tradición romántica germánica de reflexión sobre el desarrollo histórico de las sociedades y de la experiencia singular de un sujeto colectivo —en este caso, la generación. Para nuestros propósitos, la reflexión más relevante de Comte que analiza el trabajo de Mannheim es haber advertido que los cambios sociales pueden ser catalizados o ralentizados por aspectos básicos del ciclo vital de las personas que viven en un período específico de la historia, como es la propia duración media de la vida de los seres

humanos. Un alargamiento de la vida tendería a producir una ralentización del progreso, debido a que “los roles de conservación, freno y retardo que desempeña la gente mayor ampliarían su efectividad” (Mannheim 1928: 510). Por el contrario, “su desaparición más rápida menguaría dicha efectividad”. En opinión de Comte, la sucesión generacional afecta al ritmo de las transformaciones sociales, pero no de forma directa. El determinante en última instancia del cambio social es el peso demográfico que adquieren los diferentes grupos de edad cuando la vida se alarga o se recorta y la sucesión generacional se ralentiza.

La intuición básica de Auguste Comte cobra plena vigencia en sociedades como la actual, en las que la longevidad es cada vez mayor y el volumen de los colectivos más jóvenes decrece rápidamente como consecuencia de la caída de la tasa de natalidad. Lo que Comte no aclara es qué convierte a las personas jóvenes en “motor” de progreso y a las personas mayores en factor propiciador de “conservación, freno y retardo”. Casi un siglo después, Karl Mannheim sugiere una posible explicación. La irrupción constante de nuevas cohortes supone un “nuevo acceso” al patrimonio cultural acumulado, y por tanto, cierto distanciamiento respecto a formas de apropiación vigentes en el pasado. Pero la posibilidad de ese nuevo acceso no se mantiene abierta a lo largo de toda la vida. Durante la infancia, los legados culturales más “aprobématicos” se transmiten de forma inconsciente, y son recibidos de forma acrítica, “como imagen natural del mundo” (1928: 539). La posibilidad del nuevo acceso nace en la juventud – “en el momento en que comienza la vida autoexperimentada” (p. 540).¹ Sólo durante esa etapa formativa pueden los seres humanos vivenciar en situación de conciencia plena la singularidad de las circunstancias socio-históricas que les ha tocado vivir, desarrollando orientaciones y actitudes generacionales específicas. Con el paso del tiempo y la consolidación de esas orientaciones, las personas pierden su “elasticidad interior” y los saberes quedan fijados.

En este punto Mannheim realiza la conexión entre la tradición positivista y el romanticismo germánico. La sincronía del ciclo vital de las personas que nacieron en el mismo período histórico “limita a los individuos a un determinado terreno de juego dentro del acontecer posible” (p. 529) –*situación generacional*– en el que germinan formas diferenciadas de conciencia histórica y pueden desencadenarse procesos de cambio impulsados por los miembros

¹ Karl Mannheim llega a cifrar la edad precisa en que se produce esta experiencia única: “la posibilidad de la ‘puesta en cuestión’ nace a los 17 años –a menudo antes, frecuentemente después” (1928: 540). Las reflexiones de Mannheim sobre las experiencias formativas que tienen lugar en la juventud están en línea con planteamientos que

de una generación. Mannheim advierte aquí paralelismos claros entre los fenómenos generacionales y los de clase social en la distinción que hace Marx entre *Klasse an sich* y *Klasse für sich*. El portador de los “impulsos generacionales” es, al igual que la clase social, un portador colectivo que, si se dan ciertas condiciones, puede “activar su potencialidad”, tornándose plenamente consciente y participando de forma activa en corrientes intelectuales y movimientos sociales que pugnan por cambiar la sociedad.² El factor crucial que posibilita la activación de esa potencialidad es la aceleración del ritmo de los procesos de cambio social. Un contexto de “aceleración del dinamismo de la sociedad es la ocasión propicia para que se active la potencialidad creativa del nuevo impulso generacional, de ese impulso que duerme en el seno de la posición que ocupa una generación” (p. 551).

Mannheim entrelaza una aproximación endógena del cambio social —provocado por el “nuevo acceso” de generaciones sucesiva— con una aproximación exógena —en que el cambio viene provocado por episodios o circunstancias singulares del contexto socio-histórico al que están expuestas las cohortes, y entre todas ellas, en especial la que atraviesa su etapa juvenil. Ambas aproximaciones han inspirado un volumen considerable de estudios sociológicos interesados en la interacción de los procesos “generacionales” descritos por Mannheim con otras estructuras y dinámicas sociales. Una primera línea de investigación se pregunta por las consecuencias de la naturaleza cambiante de la estructura biográfica de las personas sobre los procesos de cambio social. La vida de generaciones sucesivas transcurre en escenarios diferentes, en que varían de modo significativo parámetros fundamentales que afectan a los procesos sociales de maduración y envejecimiento. Un ejemplo de esta variación es la duración media de ciertas etapas importantes del ciclo vital, propiciada por el desarrollo social y económico. Hace un siglo, más de una tercera parte de los miembros de una cohorte fallecían antes de llegar a la edad adulta; actualmente, tres cuartas partes alcanzan los 65 años. Esta extensión de la longevidad tiene consecuencias de calado considerable, tanto para la vida de las personas como para las estructuras sociales. La etapa de jubilación, a la que en el pasado se llegaba de forma ocasional y era generalmente breve, representa hoy ya cerca de una tercera parte de la vida adulta. Por otra parte, la longevidad creciente implica una permanencia más prolongada en ciertos roles

realiza primero el psicoanálisis —aunque circunscribe las etapas cruciales en edades más tempranas— o la sociología fenomenológica como puede verse en Berger y Luckmann (1966).

² Mannheim ejemplifica este nivel de actuación generacional con dos movimientos juveniles: el “Movimiento de la Juventud” (*Jugendbewegung*) y el “Movimiento de la Corporación de Estudiantes” (*Burschenschaftsbewegung*)

familiares. Así, entre las parejas formadas aproximadamente hace un siglo, era común que uno o los dos progenitores fallecieran antes de que sus hijos/as alcanzasen la mayoría de edad; actualmente —cuando no se produce un divorcio— las parejas pueden llegar a convivir de cuatro a cinco décadas (Riley 1987: 7). Aparte de la longevidad, otras diferencias en la vida de las cohortes tienen implicaciones importantes en el ciclo vital. Por ejemplo, la mejora de oportunidades educativas y condiciones económicas de las familias trae consigo un aplazamiento de la emancipación económica y residencial de muchas personas jóvenes, y consecuentemente, una prolongación de su dependencia familiar.

Fenómenos como los descritos —de dilatación de ciertos roles asociados a etapas biográficas— no están exentos de desajustes, contradicciones y tensiones. La extensión de la longevidad pone sobre la mesa la necesidad de encontrar nuevos acomodos a un número ingente de personas de edad avanzada, cuya “supervivencia” no estaba prevista en los marcos sociales e institucionales heredados del pasado. Como es fácil advertir, el ensanchamiento de la pirámide de edad en sus estratos superiores tiene una serie de implicaciones sociales importantes. Supone, en primer lugar, un aumento de cargas impuestas a los estratos de mediana edad. La magnitud de la re-distribución de cargas ha dado pie a que cobren cada vez más fuerza planteamientos que sugieren revisar el estatus económico de ciertas personas inactivas con objeto de evitar la infra-utilización de los recursos humanos disponibles —como es el de las personas mayores de 64 años pero que disfrutaban de un buen estado físico e intelectual, o el de otros colectivos, como mujeres dedicadas exclusivamente a las actividades domésticas. En segundo lugar, cuando entre una tercera y una cuarta parte de la población ocupa la cúspide de la pirámide de edad, resulta urgente definir y reconocer un papel social nuevo para las personas mayores en ámbitos de los que habían permanecido alejadas, como el educativo, de ocio, o consumo. La falta de sincronización entre los ritmos de cambio demográfico y cambio social puede abocar a esas personas a tener que asumir roles inciertos o indefinidos —lo que Ernest Burgess denomina *roleless role* (ver en Riley 1987: 10).³

La extensión potencial del período de convivencia en pareja incrementa la exposición al “riesgo” de ruptura y, correlativamente, la probabilidad de que después de la disolución de una relación puedan tejerse compromisos con otras nuevas. Es cada vez mayor la proporción de parejas que se separan o se divorcian tras largos años de convivencia. Los incrementos en las

³ Lo que se podría traducir como “roles vacíos”.

tasas de divorcio y segundas nupcias, en combinación con la longevidad creciente, crea estructuras de parentesco complejas y dispersas, en que se desdibujan expectativas, responsabilidades y derechos asociados a los vínculos de parentesco clásicos y emergen nuevos circuitos de solidaridad e intercambio de afectos. La extensión de los períodos de convivencia entre padres e hijos/as en el hogar es, a menudo, más que una bendición propiciada por la creciente capacidad de las familias de invertir en una formación prolongada de sus hijos/as, una solución de compromiso por la que optan las familias frente a la dificultad de los hijos/as para afrontar el coste de la emancipación.

Otro de los parámetros que afecta de forma significativa a la estructura biográfica de los miembros de una generación es el tamaño de su cohorte. En cohortes muy pobladas, las personas suelen verse abocadas a competir por un stock limitado de oportunidades y recursos, debiendo a menudo hacer cola o guardar turno antes de poder disfrutarlos. Dentro del hogar comparten recursos familiares más limitados. Asisten a escuelas masificadas en las que reciben atención insuficiente, lo que complica las iniciativas socializadoras encaminadas a orientar intereses y actitudes de los/as jóvenes en la dirección que más interesa a la comunidad de adultos. En el mercado de trabajo afrontan condiciones de competición severa por los puestos de trabajo disponibles, lo que repercute negativamente sobre sus ingresos potenciales. Las desventajas se traducen en tasas de fecundidad bajas y en un riesgo más alto de desempleo, divorcio o suicidio. En comparación con otras cohortes, los miembros de las cohortes superpobladas arrastran retrasos en experiencias vitales significativas —como es la de incorporarse al mercado de trabajo, adquirir una vivienda o formar una familia— y suelen mostrar niveles mayores de insatisfacción y alienación política (Easterlin 1978, 1987).

Una segunda línea de investigación inspirada en las intuiciones de Karl Mannheim pone el énfasis en el poder transformador sobre la vida de las personas de determinadas experiencias históricas. En estos estudios se suele comparar la vida de dos cohortes distintas —generalmente adyacentes— o dos segmentos de la misma cohorte con distinto grado de exposición a las turbulencias ambientales con objeto de aislar su impacto duradero sobre las biografías de los/as miembros de las cohortes. Una de las evidencias más acreditadas por estos estudios es que las guerras y recesiones económicas han tenido, a lo largo del siglo XX, influencia notable en las decisiones y calendarios vitales de las cohortes más expuestas, y en especial, si atravesaban en ese momento las etapas primarias del ciclo vital. Una ilustración de este tipo de estudios la

ofrece un trabajo de Loewenberg sobre los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la psicología de las cohortes nacidas entre 1900 y 1915. En este trabajo Loewenberg (1972) argumenta que las condiciones en que estas cohortes vivieron su infancia, marcadas por la hambruna y la ausencia en el hogar de madres y de padres —empleadas en la industria militar las primeras, y alistados en el ejército los segundos— predispusieron psíquicamente a sus miembros a abrazar años después la ideología y el movimiento nazi. Loewenberg detecta una correlación alta entre la severidad de las experiencias de privación de los niños/as de la guerra y un conjunto de síntomas —ansiedad, tendencias a la agresividad y síndromes de proyección y desplazamiento— que los convierten en adultos receptivos a la retórica y el imaginario nazi.

El efecto de las vivencias dramáticas no es unívoco. En un estudio clásico, Glen H. Elder (1974) muestra cómo las situaciones de privación experimentadas dentro de muchos hogares norteamericanos por los adolescentes varones durante la Gran Depresión, lejos de lo que cabría esperar, no cristalizan en forma de desventajas permanentes en etapas posteriores de su vida. Aunque los/as adolescentes que viven en los hogares más afectados por los efectos perturbadores de Depresión experimentan inicialmente grados de ansiedad elevados, el proceso de adaptación a las condiciones de desventaja propicia el desarrollo de orientaciones favorables al esfuerzo académico y la asunción de responsabilidades económicas desde edades tempranas. Estas disposiciones y actitudes terminan ayudándoles a sacar un partido máximo de las oportunidades que se presentan para sus carreras laborales en las etapas de crecimiento económico una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. En contraposición a las pautas de emancipación económica prematura de los varones, la socialización de las adolescentes durante la Depresión conduce sus vidas por derroteros distintos. En un contexto en que asegurar una doble fuente de ingreso por hogar resulta casi imperativo, las adolescentes suplen a sus madres trabajadoras al frente de la esfera doméstica. A juicio de Elder, en el compromiso prematuro con las tareas domésticas de las mujeres pertenecientes a la cohorte que experimenta la adolescencia en plena Depresión hay que buscar el origen del reforzamiento de la división sexual del trabajo experimentada en los hogares norteamericanos a partir de la década de los cuarenta.

El poder transformador de esas experiencias históricas no se circunscribe a las personas afectadas más directamente. Los vínculos sociales que mantienen con otras personas extienden el impacto social de las turbulencias dentro de estas redes, generando efectos multiplicadores. Por

ejemplo, las mujeres de los combatientes en una guerra suelen resultar afectadas por las secuelas físicas y psicológicas que acompañan a sus maridos. De la misma forma, los padres de familia en una crisis transmiten intergeneracionalmente efectos asociados a su situación de desempleo a sus hijos/as, cuya biografía suele venir marcada por las condiciones de precariedad que experimentaron durante su infancia en el hogar familiar.

La crisis del desempleo, y del empleo precario, que afectan a España en la década de los ochenta y primera mitad de los noventa del siglo pasado constituyen un escenario singular para rastrear alguno de los procesos generacionales descritos. La situación laboral adversa que se vive durante esos años y la mejora de las oportunidades educativas invita a muchos jóvenes a alargar su permanencia en el hogar de sus padres. El volumen demográfico de las cohortes nacidas a partir de finales de la década de los sesenta y hasta finales de los setenta refuerza esas tendencias. La entrada de cohortes numerosas en el mercado de trabajo coincide con un período de baja generación de empleo y destrucción de yacimientos tradicionales de trabajo en el sector industrial y agrícola. La concurrencia de esos procesos afecta de forma importante sus vidas. Las trayectorias de inserción en el mercado laboral no sólo se dilatan. Como resultado de las reformas del mercado laboral que favorecen la contratación temporal de los trabajadores/as más jóvenes, esos itinerarios se fragmentan, se descomponen en un carrusel de trabajos precarios, períodos de desempleo y etapas de formación y reciclaje hasta que encuentran acomodo estable en el mercado laboral. Uno de los efectos inmediatos asociados a las dificultades de inserción laboral es el retraso en la formación de nuevas familias y la frustración de deseos y expectativas respecto a la independencia residencial, la convivencia en pareja o la fecundidad.

Pero no todo son noticias negativas para esta cohorte. Su permanencia forzada en el hogar paterno es más fácil de sobrellevar en un contexto en que pierden vigencia y legitimidad los rasgos más “antipáticos” de la familia tradicional: líneas de autoridad rígidas, censura moral ejercida por las personas adultas, y control asfixiante de su vida sentimental, entre otros muchos. Gracias al estatus económico alcanzado por sus padres, la vida de los jóvenes “estancados en casa” se hace relativamente cómoda. Dentro de la unidad familiar, la postergación de la emancipación es contemplada como una oportunidad de incorporación a la vida adulta por una puerta de acceso de mayor calidad, a través de la que se haga posible reproducir la condición social heredada de la familia de procedencia. Muchos/as jóvenes aprovechan las demoras que les

vienen impuestas por la situación laboral, y las nuevas posibilidades educativas, para formarse y convertir a la suya en la generación más preparada de nuestra historia.

Desigualdad e inequidad

La edad es uno de los criterios principales de división social. Un estrato de la pirámide de edad está compuesto por personas que atraviesan de forma simultánea la misma etapa del ciclo vital y que, a pesar de que puedan existir diferencias considerables entre ellas, tienden a compartir capacidades, habilidades, aficiones y motivaciones. En todas las sociedades, los roles sociales, las obligaciones y responsabilidades asociados a esos roles, suelen estar diferenciados por edad. En las sociedades más “simples”, descritas por los antropólogos/as, la edad suele ser uno de los principios más importantes de organización social, que emplaza a varones – y muchas veces también a mujeres – en categorías excluyentes, a las que se incorporan después de participar en ritos de paso elaborados. Las categorías de edad sitúan a las personas en la estructura social, les confieren estatus y determinan su identidad grupal. En el mundo occidental desarrollado, la edad juega un papel de primer orden en la configuración institucional de las sociedades. Desde pequeños/as, la socialización de los niños/as está pautada en función de su edad. La edad determina la participación de una persona en el sistema educativo, las secuencias y trayectorias que sigue, y los estadios que le corresponde haber alcanzado en cada momento. Las personas adultas desapruueban las conductas o actitudes de los niños/as que consideran impropias para su edad, bien sea porque “progresan” demasiado lentamente, o porque lo hacen a un ritmo excesivo, incurriendo en el pecado de la precocidad. Posteriormente, en el mundo del trabajo, las personas se acostumbran a ser tratadas y a esperar las recompensas —ya sea retribuciones, promociones u otros privilegios— que corresponden a personas de su edad y veteranía.

Los criterios formales de diferenciación por edad son especialmente relevantes en la esfera política y legal. Muchos derechos y responsabilidades se asocian explícitamente a ciertos tramos de edad. El derecho a trabajar, a votar, a conducir automóviles, a casarse u obtener un empleo o cargo público, suele restringirse a personas adultas, aunque en algún caso —el derecho a tener un trabajo remunerado— expira al alcanzar una edad avanzada —65 años. Los beneficiarios/as de ciertos derechos sociales, como las pensiones o ciertos servicios sociales, se

concentran mayoritariamente en períodos concretos de la vida de las personas, aunque excepcionalmente puedan extenderse a otras etapas. El Estado prescribe y proscribe determinadas formas de relación entre personas que pertenecen a grupos de edad diferentes. Tradicionalmente las leyes han sancionado a los padres que no cuidan y protegen a sus hijos/as, y en algunos casos a los hijos/as adultos que no prestan apoyo a sus progenitores ancianos o en situación de necesidad. En las últimas décadas la inmensa mayoría de los países democráticos han profundizado su compromiso con los colectivos de edades identificadas como “vulnerables”, como la infancia o la tercera edad, promoviendo nuevos derechos y formas de protección concebidos específicamente para estos grupos. Por otra parte, los sistemas penales suelen perseguir y condenar con severidad las relaciones sexuales entre adulto y menor.

Todas estas iniciativas de regulación social y política contribuyen a crear y afianzar concepciones y discursos sobre el ciclo vital que cobran un carácter “natural” que escapa al cuestionamiento o crítica. También determinan la distribución de oportunidades y el acceso a recursos sociales. Históricamente, en la mayoría de las sociedades, el poder político y económico suele recaer en personas de los estratos de mayor edad. En los regímenes políticos sustentados en principios de dominación tradicional el poder legislativo suele estar reservado a los notables y oligarcas de mayor edad. Ocupan muchas veces los llamados Consejos de Ancianos —o Senado, término de raíz etimológica similar— donde se discutían las leyes y se adoptaban decisiones vinculantes para la comunidad. Habitualmente el poder ejecutivo también correspondía a varones adultos o ancianos, que patrimonializaban el poder en su condición de patriarcas dinásticos.⁴ Frente a ellos, los varones jóvenes debían limitarse a esperar pacientemente su turno.⁵ La irrupción de los jóvenes en la esfera del poder político constituía una excepción, con frecuencia como resultado de violentación del curso ordinario de la vida política. Se producía cuando el patriarca dinástico fallecía en circunstancias inesperadas y el primogénito se veía obligado a asumir el poder. También cuando el joven conquistador o el caudillo indomable seducía a las multitudes con su magnetismo personal o sus victorias militares: Alejandro, Julio Cesar o Napoleón. Pero, incluso en esas circunstancias poco comunes, los auténticos directores de

⁴ En la actualidad, todavía pueden encontrarse reminiscencias simbólicas de tiempos pretéritos en la figura del *decano*, como miembro más antiguo de una corporación, o en la atribución de cargos provisionales a los miembros de mayor edad en las asambleas recién elegidas (Flaquer 1998: 56).

⁵ Las mujeres jóvenes apenas tenían papel público.

orquesta eran muchas veces regentes o consejeros áulicos de edad más avanzada que, desde la sombra, dictaban las actuaciones de los líderes carismáticos (Gil Calvo 2003).

Por lo que respecta al poder económico, la concentración tradicional de la propiedad de la tierra y el capital en manos del cabeza de linaje aseguraba la dependencia económica y social de su mujer, sus hijos/as y demás descendientes hasta que le sobreviniera la muerte. Gracias a esta configuración institucional, las personas de edad avanzada solían contar con el apoyo de sus descendientes cuando ya no pueden valerse por sí mismas. En las sociedades agrarias, la progenie se convierte en el principal mecanismo de protección social para los ancianos/as, como sugieren también encuestas realizadas a poblaciones agrícolas contemporáneas en el Tercer Mundo (Lee 2007: 18). Por otra parte, la transmisión hereditaria del patrimonio por vía agnaticia al primogénito refuerza la desigualdad a favor de los varones de mayor edad, negando a los hermanos más jóvenes cualquier derecho sobre la propiedad familiar. En estas condiciones, las oportunidades de mejoramiento social para los varones no llamados a convertirse en el cabeza de linaje pasaban necesariamente por el abandono prematuro del hogar y con frecuencia la emigración económica, el alistamiento militar o la vocación religiosa.

Se ha sugerido que la emergencia del capitalismo trae consigo la pérdida de poder político de las personas mayores y la pérdida de valor de los recursos económicos y sociales que controlaban. La invención del capitalismo y su propagación global como modo de producción dominante durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, supone el declive de la economía preindustrial de propietarios de la tierra

—grandes terratenientes y pequeños campesinos— o de otras formas de capital

—prestamistas, artesanos o comerciantes urbanos. Estos propietarios eran habitualmente personas adultas o de edad avanzada. En la economía industrial de trabajadores y profesionales por cuenta ajena, las personas ancianas pasan a convertirse en el eslabón más débil al devaluarse su valor de mercado cuando su productividad se resiente a causa del declive de su fortaleza física, o cuando su capital humano se convierte en obsoleto. En este contexto, la inactividad empuja a numerosas personas ancianas y desvalidas a la pobreza, hasta el punto de convertir, durante mucho tiempo, sus condiciones de vida en una de las principales lacras sociales de las sociedades capitalistas.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, en la mayoría de los países occidentales las personas ancianas continuaban ocupando el escalón más bajo de la estructura social. Investigaciones diversas sobre las pautas de participación en el mercado de

trabajo en países distintos muestran que, durante el siglo XIX, la mayoría de las personas (fundamentalmente los varones) continuaban trabajando hasta edades avanzadas. Hasta finales del siglo XIX, para la mayoría de personas ancianas en los países en vías de industrialización la “jubilación” es una experiencia desconocida (Costa 1998). Quienes, a causa del deterioro de su fuerza física o problemas de salud, no conseguían intercambiar su fuerza de trabajo por un salario se veían abocados a malvivir con ayudas puntuales de sus familiares o de instituciones públicas y privadas —habitualmente de carácter religioso. Muchas de las personas ancianas incapaces de valerse por sí mismas y sin apoyo familiar terminaban institucionalizadas en casas de caridad, en condiciones de penuria extrema.

Esta situación comienza a cambiar con la expansión del Estado de Bienestar. En la mayoría de países occidentales, los programas públicos de seguro para las personas ancianas aparecen en las primeras dos décadas del siglo XX, antes de que se desarrollen otras políticas de bienestar como los programas de cobertura al desempleo o las iniciativas de apoyo a las familias. En general, se trata de programas modestos, que prevén compensaciones limitadas. Hay que esperar al final de la segunda Guerra Mundial para que la mayoría de los países que habían participado en la contienda —siguiendo trayectorias diferenciadas— planteen reformas ambiciosas de sus sistemas de bienestar. La iniciativa pública se produce en respuesta a las condiciones excepcionales creadas durante las décadas de los treinta y cuarenta. Por un lado, la guerra y la posguerra habían agravado los problemas sociales de ciertos segmentos de la población, creando condiciones de emergencia que demandaban la intervención pública. Por otro, la situación de inflación y devastación de la propiedad había arruinado la solvencia de los planes de seguro públicos y privados pre-existentes. En esas condiciones, la mayoría de los países introducen reformas que persiguen universalizar la cobertura de sus principales programas sociales, y en especial su sistema de pensiones.

Con el paso del tiempo, las reformas introducidas propician una mejora sustancial de las condiciones de vida de la población anciana en los países desarrollados. A ello contribuyen dos factores. En primer lugar, las personas que se jubilan a partir de la década de los sesenta presentan trayectorias laborales continuas y ascendentes, lo que asegura unas bases de cotización altas cuando el derecho a la pensión está ligado a las contribuciones realizadas, como sucede en la mayoría de los esquemas. En segundo lugar, a lo largo de las últimas décadas el valor real de

las pensiones y otras prestaciones que favorecen a las personas de edad avanzada ha crecido. Los Estados del Bienestar son hoy más generosos con sus personas ancianas de lo que lo eran hace tres o cuatro décadas, a igualdad de condiciones de cotización. En muchos de estos países, el discurso público favorable a la expansión de los sistemas de protección pública durante los años sesenta y setenta se fundamentó en estereotipos poderosos sobre la situación de las personas ancianas. En esos discursos, éstas eran presentadas como un colectivo homogéneo: pobre, económicamente dependiente, frágil, objeto de discriminación, y ante todo, “merecedor” de cualquier ayuda que pueda recibir.⁶ En este contexto, las administraciones públicas han impulsado a menudo medidas complementarias a las que se habían desarrollado en etapas anteriores de expansión de la protección pública: servicios de asistencia domiciliaria, actividades de ocio programadas, subvenciones en el transporte público, medicamentos, etc. Los beneficiarios/as de la mayoría de estos servicios y subvenciones son las personas que han alcanzado cierta edad, sin distinción alguna. La elegibilidad es independiente de su condición social o el estatus económico de la persona beneficiaria.

Hay quien ha visto en la expansión de la protección de las personas ancianas la influencia creciente del “poder gris”: un bloque electoral de votantes ancianos/as con preferencias perfectamente definidas a favor del mantenimiento de un sistema de pensiones generoso, incluso en condiciones financieras adversas. En uno de los primeros análisis cuantitativos sobre gasto social de los Estados del Bienestar, Harold Wilenski (1975) ya pone de manifiesto la relación entre el tamaño de la población anciana y la magnitud del gasto social. La población anciana influye sobre el gasto de dos modos: (1) crea la necesidad de incrementar el gasto cuando la sociedad envejece, y (2) se convierte en el primer cliente del Estado de Bienestar y un apoyo político de líderes y partidos que abogan por su mantenimiento y expansión. Con posterioridad, análisis comparativos de Fred C. Pampel y John B. Williamson (1989) sugieren también que la “presión de una población anciana numerosa” es la influencia más importante sobre los niveles de gasto. Más recientemente, Paul Pierson (1994) estudia los dispositivos “micro” que blindan el sistema de pensiones y otros programas frente a los intentos de introducir recortes en un contexto de crisis financiera del Estado de Bienestar. La población anciana constituye un segmento electoral numeroso, y muy predispuesto a combatir iniciativas dirigidas a contener el gasto

⁶ Robert H. Binstock (2000) se refiere a la fiebre gubernamental por intensificar la protección social de las personas ancianas que surge en Estados Unidos en la década de los sesenta como “edadismo compasivo” (*compassionate ageism*).

público en programas de los que ellos/as son los beneficiarios principales. Ningún líder político o partido que aspire a ganar las elecciones puede permitirse arriesgar en este terreno. La mayoría optan por estrategias cautelosas de “evitación de culpa” —*blame avoidance*.

Todos estos procesos contribuyen a alimentar debates cada vez más intensos sobre justicia intergeneracional. En ellos se plantea hasta qué punto la riqueza se distribuye de forma equitativa a lo largo del ciclo vital y el papel que juega el Estado en la generación de las situaciones de ventaja comparativa para generaciones y grupos de edad concretos. Uno de los primeros autores en llamar la atención sobre estas cuestiones es el demógrafo Samuel Preston (1984). En un artículo de influencia enorme, tanto académica como social y política, Preston alerta sobre el incremento extraordinario de la pobreza infantil y juvenil en Estados Unidos. La situación de los colectivos más jóvenes se asocia tanto a transformaciones demográficas —la desestructuración creciente de las familias y el aumento consiguiente de hogares monoparentales— como a recortes en las políticas federales de apoyo a hogares en que residen menores. Preston constata que, en poco más de una década, se invierten los mapas del bienestar económico. Mientras en 1970, la incidencia de la pobreza entre la población de 65 años y más duplica la media del país, en 1982 figura por debajo de la media nacional. Por el contrario, la pobreza infantil evoluciona en sentido contrario: a inicios de los setenta es inferior a la de la población anciana (en un 37%), pero en 1982 es ya claramente superior (en un 56 %). Aunque Preston no desarrolla en profundidad las causas de ese cambio, la sugerencia implícita en su trabajo es que el “éxito” de la población anciana debe atribuirse a su capacidad de presión política.

La distribución de la renta en otros países evoluciona en la misma dirección. En un trabajo que utiliza indicadores armonizados en quince países de la OCDE, Föster y Pellizzari (2000) descubren que en once países la pobreza infantil y juvenil se incrementa más que la pobreza de la población anciana. En otro trabajo centrado en el sur de Europa, D’Ambrosio y Gradin (2000) ponen de manifiesto que en la década de los ochenta, tanto en Italia como en España, la distancia en términos de renta entre los niños/as y las personas ancianas se acrecienta a favor de estos últimos. Los niños/as se convierten en ambos países en el colectivo más expuesto a situaciones de pobreza. Los autores hacen responsables al desarrollo del Estado de Bienestar de estos desequilibrios. En Italia y España no existen prestaciones universales a familias con hijos/as, las deducciones fiscales por un menor a cargo son poco generosas y los servicios públicos de guardería están escasamente desarrollados. En cambio, en ambos países las personas ancianas se

benefician de la mejora de un sistema de pensiones que asegura mayoritariamente niveles adecuados de bienestar.

Más recientemente, la OCDE ha avalado este tipo de argumentos en *Growing Unequal?*, un informe que analiza en profundidad las tendencias en los riesgos de pobreza durante las últimas tres décadas en los países de la OCDE (OCDE 2008: 125-147). La conclusión obtenida es que los riesgos de pobreza han aumentado de forma notable y progresiva entre los grupos de edad más joven —menores de 25 años— y han disminuido en las personas de edad más avanzada. El empeoramiento de la situación de las personas jóvenes es significativo en todo tipo de hogares con niños/as, y particularmente acusado en hogares encabezados por un progenitor solo (habitualmente la madre) y en familias numerosas. En contraste, los hogares en que viven personas mayores de 64 años han experimentado una mejora notable en su situación financiera, que ha beneficiado en especial a las personas ancianas que viven solas —tradicionalmente expuestas a los riesgos más elevados de pobreza. La OCDE atribuye estas tendencias al impacto reductor sobre la pobreza de las transferencias públicas. En los países en que la pobreza infantil y juvenil aumenta, la acción pública se ha mostrado incapaz de corregir el incremento de la desigualdad asociada a las rentas del trabajo. En cambio, la reducción de la pobreza de la población anciana es el resultado de la mejora de las transferencias públicas destinadas a ese segmento de la población.

La publicación del trabajo pionero de Preston —que por ostentaba el cargo de Presidente de la *American Population Association*— y de un informe del *Council of Economic Advisors* confirmando la buena situación financiera de la población anciana, representa el arranque de un nuevo movimiento social que critica las políticas del gobierno estadounidense por entender que favorecen los intereses de los colectivos de edad más avanzada. La organización que encabeza este movimiento es *Americans for Generational Equity (AGE)*. Sus planteamientos sugieren sin tapujos que la mejora de vida de la población anciana está directamente relacionada con el deterioro del bienestar económico de los niños/as.⁷ Ésta es también la hipótesis de varios trabajos de investigación, entre los cuáles posiblemente el más conocido es el estudio de David Thompson (1989, 1993) sobre el desarrollo del Estado de Bienestar en Nueva Zelanda. De acuerdo con las tesis de este autor, una generación “egoísta” se ha hecho con las riendas del Estado de Bienestar,

⁷ Los argumentos de AGE se pueden consultar en <http://www.age-usa.org>. Se ha argumentado que la financiación de AGE proviene de la industria aseguradora, bancos y corporaciones sanitarias cuyos intereses chocan con la existencia de sistemas de protección social para las personas ancianas como Medicaid y Medicare (Quadagno 1989).

diseñando políticas sociales a su medida, que son financiadas fundamentalmente por las generaciones más jóvenes. A juicio de Thompson la creciente carga fiscal que tienen que soportar las generaciones más jóvenes para mantener a un número creciente de personas de edad avanzada, así como la evidencia de que la población anciana goza de condiciones de vida privilegiadas, pondrán de relieve de forma clara el carácter injusto del contrato intergeneracional en que se basa el Estado de Bienestar, erosionando sus bases de legitimidad.

Otros trabajos abundan en la tesis de las ventajas generacionales que disfrutaron las generaciones que en los últimos años alcanzan la tercera edad. En los últimos años se han desarrollado y aplicado métodos para cuantificar la magnitud de las diferencias en el tratamiento fiscal de colectivos generacionales distintos. Diversos economistas proponen llevar a cabo una contabilidad generacional —*generational accounting*— que ponga de manifiesto las cargas fiscales que soportan las generaciones en relación a las transferencias monetarias que reciben (Kotlikoff 1992, Auerbach et al. 1994, Kotlikoff y Liebfriz 1998).⁸ La conclusión general de estos estudios, centrados mayoritariamente en Estados Unidos y el Reino Unido, es que las generaciones que alcanzaron la jubilación en la década de los sesenta terminaron obteniendo a lo largo de la vida beneficios superiores a las contribuciones realizadas (hasta tres veces más), aunque la magnitud de estas diferencias varía entre colectivos socio-económicos —varones y mujeres, personas con distintos niveles de renta, etc. —que pertenecen a una misma generación. Hurd y Shoven (1985) y Steuerle y Bakija (1994) calculan que en Estados Unidos las cohortes que se jubilaron en la década de los sesenta obtuvieron tasas de retorno a sus contribuciones extraordinariamente altas: del 15%. Los trabajadores/as que se jubilaron en la década siguiente vieron reducida la tasa de retorno de forma significativa (8%). Esas investigaciones estiman (prospectivamente) que los/as pensionistas que se han jubilado a partir del año 2000 obtienen tasas de retorno del 2%. En un ejercicio parecido realizado en España, Joan Gil y Guillem López-Casasnovas (1999) calculan que la cohorte de 1935 recibirá tasas de retorno por las contribuciones realizadas (entre el 5% y el 6,7%) mucho más altas que cohortes más jóvenes. Los autores estiman que las tasas de retorno que recibirá la cohorte nacida en 1965 se sitúa entre el 2% y el 3,7%.

⁸ En estas estimaciones suele ignorarse el valor de otro tipo de beneficios que reciben los ciudadanos/as, en forma de bienes y servicios, como por ejemplo, educación, carreteras, atención sanitaria, o defensa nacional.

Los planteamientos anteriores han sido objeto de críticas que ponen en cuestión las asunciones en que se basan y las metodologías empleadas. Se discute también la premisa de que las políticas fiscales y de bienestar muestran sesgos invariables a favor de ciertas generaciones y grupos de edad, en detrimento de la calidad de vida de otros. Los sociólogos Gösta Esping-Andersen y Sebastià Sarasa (2002) sostienen que el bienestar de las personas jubiladas en las últimas décadas tiene que ver con conjunción de circunstancias históricas favorables, y muy particularmente con el hecho de que sus trayectorias laborales hayan sido continuas y progresivas a lo largo de períodos de crecimiento económico y revalorización de sus salarios. Aunque reconocen la importancia de las orientaciones de las políticas sociales, presentan evidencia empírica que demuestra que existe gran variabilidad en el esfuerzo que los Estados del Bienestar dedican a la población anciana. En contraposición a Preston, Thompson o los economistas de la *contabilidad generacional*, Esping-Andersen y Sarasa cuestionan la hipótesis de que un uso generoso de recursos públicos para la población anciana reste necesariamente capacidad de gasto para los colectivos más jóvenes. Los países con pensiones que garantizan niveles apropiados de seguridad económica a las personas de 65 años y más – como ocurre en los países escandinavos – suelen también destinar partidas generosas de gasto público a los problemas y necesidades de colectivos más jóvenes, como las familias con hijos/as. Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, tienen un porcentaje elevado de personas mayores, jóvenes y niños/as en situación de pobreza.

En un minucioso trabajo de investigación empírica, Julia Lynch (2006) observa que existe una variabilidad considerable en el grado de atención que los distintos países de la OCDE prestan a las políticas públicas de bienestar que benefician de forma diferenciada a grupos situados en etapas del ciclo vital distintas. A juicio de Lynch esa variabilidad refleja inercias institucionales derivadas de la naturaleza de los itinerarios de consolidación de sus Estados del Bienestar. En esa evolución, Lynch destaca dos encrucijadas decisivas (*critical junctures*) en que los Estados adquieren sus perfiles más o menos favorables hacia personas ancianas y jóvenes. La primera de estas encrucijadas coincide con la introducción de las primeras políticas de bienestar —a inicios del siglo XX— cuando un conjunto de Estados optan por adoptar programas basados en el principio de ciudadanía (que protegen a todo los ciudadanos/as, con independencia de sus estatus laboral), mientras que otros apuestan por la protección de los trabajadores/as frente a eventualidades que condicionan su capacidad de trabajar (enfermedad, desempleo, edad elevada).

El segundo momento decisivo en la configuración de los perfiles edatarios de las políticas de bienestar se produce tras la segunda Guerra Mundial, cuando el agravamiento de la situación social en muchos países como consecuencia de la devastación, abre oportunidades insólitas para el lanzamiento de nuevos programas sociales y la reestructuración de los ya existentes. De acuerdo con el argumento de Lynch, los países que, después de la segunda Guerra Mundial, mantuvieron esquemas de protección ligados al estatus laboral del beneficiario/a (lo que llama *programas de aseguramiento ocupacional*) tienden a ofrecer mayor protección a la población de edad avanzada.

El foco de atención del trabajo de Lynch es un campo amplio de transferencias directas y servicios públicos: pensiones, prestaciones de desempleo, políticas laborales, prestaciones por enfermedad, transferencias y servicios a las familias, educación, atención sanitaria, políticas de vivienda, así como ayudas y desgravaciones fiscales con el fin de promover el bienestar de ciertos colectivos. Con los datos comparativos disponibles, Lynch elabora un índice sintético que mide la relación entre gasto público en políticas destinadas principalmente a la población anciana —pensiones y servicios para ancianos y discapacitados/as— y recursos asignados al resto de la población —políticas familiares, políticas activas y pasivas de empleo y políticas educativas.⁹ Este índice de gasto relativo proporciona una idea aproximada de los sesgos de los sistemas públicos de bienestar de los países desarrollados.¹⁰ De acuerdo a los datos, los Estados de Bienestar de los países escandinavos, Holanda y algunos países anglosajones —Irlanda, Australia y Nueva Zelanda— se caracterizan por el perfil marcadamente “pro-juvenil” de sus asignaciones presupuestarias. Por el contrario, Estados Unidos, Japón, Grecia, Italia o España son los países que presentan sesgos más favorables para la población de 65 y más años.

En el período 1985-2000 los resultados de Lynch sitúan a España en el último lugar en gasto público en política familiar y en el antepenúltimo en política educativa. Por lo que respecta a políticas activas y pasivas de empleo España figura en el lugar 15º, de veinte países estudiados. Lynch apenas analiza en qué medida estas diferencias se traducen en desigualdades efectivas en niveles de renta y bienestar.¹¹ Los datos disponibles en otras fuentes son más fragmentarios, pero

⁹ Numerador y denominador están divididos por la proporción de personas correspondientes a cada colectivo —y, por tanto, por los beneficiarios/as potenciales de esos programas.

¹⁰ Como admite Lynch, este índice no incluye todas las formas de gasto de los que se puede beneficiar la población de edades distintas, ni captura la tasa de cobertura o el valor de las transferencias y servicios recibidos para las personas que se benefician.

¹¹ El único dato que ofrece en este sentido es que España es, junto con Italia, el país en que las diferencias entre la proporción de personas de 55 años y más y la proporción de personas de 25 a 34 años que son propietarios de la

todos apuntan en dirección parecida. Comparativamente, el Estado de Bienestar en España invierte poco en políticas de apoyo a la población menor de edad, jóvenes en edad de emancipación o en familias con niños/as. Ello se refleja en tasas altas de pobreza infantil, cifras elevadas de fracaso y abandono escolar prematuro, mucha precariedad laboral juvenil, y dificultades de acceso a la vivienda entre la población joven, así como problemas considerables para conciliar vida laboral y familiar (Bradshaw 2006; Marí-Klose, Gómez Granell, Brullet y Escapa. 2008; Marí-Klose et al. 2008, Comisión Europea 2008). Una pregunta evidente que suscitan estas evidencias y a la que se aspira a dar respuesta en esta tesis es cuáles son las raíces de la singularidad de los perfiles distributivos del Estado de Bienestar en España.

Solidaridad y conflicto

La presencia de conflictos intergeneracionales es una constante en la historia de la humanidad. La tensión intergeneracional es un elemento recurrente en mitos fundacionales, como prueban distintos relatos de la mitología griega —como la *Teogonía* de Hesíodo o el *Oedipus Rex* de Sófocles— o pasajes bíblicos —como la parábola del hijo pródigo. Es un tema central de grandes obras de la literatura universal —por ejemplo, en las tragedias de Shakespeare, *Hamlet* o el *Rey Lear*. Incluso el cine —*Al Este del Edén* de Elia Kazan o *Ran* de Akira Kurosawa— o los guiones de la telenovela televisiva —por ejemplo, *Falcon Crest*— reservan a menudo a las tensiones intergeneracionales un papel de primer orden. En la mayoría de esos relatos, el problema de las generaciones queda reducido a un conflicto microsociológico que se desarrolla en el ámbito familiar entre una generación que ostenta poder y posiciones de privilegio y otra que aspira a la autonomía. Ejercer la autoridad familiar constituye una empresa difícil frente a la vocación juvenil a auto-afirmarse.

Corresponde a Mannheim el mérito de haber llamado la atención sobre la importancia del conflicto intergeneracional a nivel macrosociológico. De acuerdo a su teoría, el conflicto generacional viene desencadenado por la activación de impulsos colectivos relacionados con la “posición generacional” que ocupan los grupos más jóvenes, que se traduce en su participación

vivienda en que viven es la más elevada: 41%. Lynch atribuye las variaciones en las tasas de propiedad a que algunos países han desarrollado iniciativas políticas que favorecen el acceso a la vivienda a colectivos más jóvenes.

en “corrientes intelectuales y movimientos sociales” que persiguen la transformación de la sociedad. En ese sentido, la teoría de Mannheim ha sido utilizada para explicar el descontento juvenil con las estructuras sociales heredadas en la década de los sesenta, así como la participación masiva de los/as jóvenes europeos y norteamericanos en movimientos de protesta contra la guerra, a favor de los derechos civiles, y la transformación de las instituciones políticas (Bengtson 1989).¹²

Anne Foner (1974) es la primera autora que relaciona explícitamente la potencialidad del conflicto intergeneracional con estructuras de desigualdad, aunque identifica un conjunto de mecanismos que minimizan la probabilidad de que el conflicto se materialice. Foner propone una teoría de la estratificación por edad que acepta la existencia de estratos sociales que ocupan distintas posiciones de poder y acceso a los recursos, y muestran además percepciones y actitudes diferenciadas. Estas diferencias son susceptibles de ser “activadas” en determinadas circunstancias y por ciertas cuestiones. La omnipresencia de esas desigualdades lleva a Foner a preguntarse por qué motivo no engendran más situaciones de confrontación y conflicto político entre estratos de edad. Su respuesta apela a una serie de mecanismos desactivadores del conflicto. En primer lugar, cada persona suele pertenecer simultáneamente a varios círculos sociales, en que se integran personas de edades diferentes. El ejemplo más claro es la propia familia, donde conviven personas situadas en etapas distintas del ciclo vital que mantienen lazos de dependencia económica y afectiva. A diferencia de lo que ocurre con la estratificación por clase social, donde la “promiscuidad” social se reduce significativamente como resultado de prácticas de homofilia (las personas tienden a estar rodeadas de personas de su misma clase social: en los barrios en que residen, la escuela, los lugares en que se divierten, etc.), la estratificación por edad no mantiene a los distintos estratos a distancia, limitando las oportunidades de interacción. Personas de edad diferente suelen compartir intereses, sentimientos y preferencias dentro de los grupos primarios a los que pertenecen (especialmente la familia), donde forjan vínculos de solidaridad que desactivan posibles desacuerdos derivados de la situación generacional que ocupan.

En segundo lugar, el proceso de maduración, y por tanto una cierta “movilidad ascendente” es inevitable y universal. A diferencia de lo que sucede con las desventajas de clase,

¹² Algunos trabajos de ficción han abordado el conflicto intergeneracional fuera del ámbito familiar. Resulta ilustrativa la novela de Adolfo Bioy Casares *Diario de la Guerra del Cerdo*, en la que hordas de jóvenes recorren Buenos Aires a la caza de viejos débiles y lentos. Un ejemplo similar en el cine es la película *La Fuga de Logan*,

que no desaparecen inevitablemente con el paso del tiempo, los/as jóvenes se hacen mayores y están llamados a reemplazar, a su “debido momento”, a las personas adultas en las posiciones de poder y privilegio. Los jóvenes moran en una especie de limbo social en que su situación subordinada y desventajosa encuentra una justificación convincente en el hecho de que se trata de una situación transitoria. Cualquier reivindicación se enfrenta a la incomprensión de la sociedad adulta, que simplemente pide a los jóvenes que guarden pacientemente su turno. Es comprensible que muchos/as jóvenes también se muestren reacios a implicarse en actividades en defensa de sus intereses colectivos presentes si perciben que la sociedad adulta puede sentirse ofendida y castigarlos por ello, hipotecando sus oportunidades de mejora social. Incluso cuando vencen esos temores, el proceso de maduración resta efectividad a los movimientos juveniles. Con el paso del tiempo, sus filas pierden indefectiblemente a sus miembros más experimentados/as a medida que completan su transición a la vida adulta.

En tercer lugar, Foner argumenta que es difícil convertir los agravios juveniles de índole económica y material en fundamento de movilización colectiva. A juicio de la autora, no existe una polarización clara entre intereses económicos de la juventud y los de otros grupos de edad. El hecho de que muchos jóvenes sean parte integrante de grupos sociales compuestos por personas situadas en etapas diferentes del ciclo vital, (como la familia) desdibuja su perfil colectivo y resta urgencia a sus demandas. Políticas y prácticas que, en principio, aparentan tener un sesgo generacional claro en detrimento de los intereses juveniles pueden tener efectos colaterales que los benefician. Por ejemplo, políticas laborales que protegen del despido a los trabajadores/as más veteranos o estrategias sindicales que persiguen ventajas salariales para sus afiliados (generalmente, trabajadores maduros) pueden favorecer indirectamente a las personas más jóvenes si la mayoría de éstas siguen dependiendo económicamente o comparten hogar con sus padres, como sucede a menudo en España. De la misma forma, una política de pensiones generosa alivia la carga que soportan las familias y las libera de la responsabilidad de contribuir al sostenimiento económico de sus miembros de edad más avanzada. Este aligeramiento de cargas financieras abre nuevas oportunidades de inversión, como por ejemplo, en la educación de los hijos/as.

basada en una novela homónima (también adaptada como serie televisiva), que relata los avatares de un policía en una sociedad futurista donde las personas que superan la edad límite de los 30 años son ejecutados.

Foner considera que es más probable que los movimientos juveniles emerjan para reivindicar cuestiones de índole moral, propugnando concepciones amplias sobre lo que es o no es justo en la sociedad. Este tipo de cuestiones suelen estar sólo remotamente relacionadas con intereses de los propios jóvenes como colectivo que ocupa una posición social o económicamente desventajosa. Con su militancia persiguen cambiar la sociedad, no su propia situación en ella. La diana de sus críticas y protestas no es una sociedad en que las personas adultas detentan el poder y retienen privilegios económicos, sino una sociedad en que las personas que ocupan los estratos dominantes muestran sensibilidad escasa por cuestiones que los/as jóvenes consideran prioritarias: la paz, los peligros que acechan al planeta, la pobreza en el mundo, etc. La militancia de los/as jóvenes en este tipo de causas no está sujeta, o al menos no con la misma intensidad, a los condicionantes que dificultan la creación de movimientos colectivos de defensa de intereses económicos y materiales.

Buena parte de las intuiciones teóricas de Foner han sido corroboradas por investigación empírica posterior. Varios trabajos ponen de relieve que la mayoría de las personas jóvenes aceptan la legitimidad de desigualdades por edad y no suelen percibir que sus intereses entren en conflicto con los de otras generaciones. Las normas y expectativas de solidaridad y apoyo intergeneracional gozan de buena salud, tanto dentro de las familias como en el ámbito macrosocial (Bengtson 1993, Irwin 1996). En sociedades cada vez más envejecidas, la inmensa mayoría de los jóvenes ven con buenos ojos que el Estado de Bienestar dedique muchos recursos a las personas mayores (Boeri et al. 2001, Kohli 2006).

Hay razones para pensar, sin embargo, que algunas de las condiciones que, según Foner, estarían “desactivando” el conflicto intergeneracional están cambiando. La dilatación del proceso de transición a la vida adulta y la prolongación del tiempo de interinidad implica que un número creciente de personas vive en situación de desventaja por su edad durante períodos cada vez más largos de su vida. Mientras esto sucede, se extiende cada vez más rápido la idea de que quizás, para estos/as jóvenes, su situación de precariedad no sea un fenómeno transitorio asociado a esta etapa de su vida, sino un realidad generacional, que pueda acompañarle en el decurso de su vida. Desde diversas instancias se vierte el mensaje de que esta generación puede ser la primera en muchas décadas cuyas condiciones de vida vayan a ser peores que las de la generación que les precedió. Van a tardar más en estabilizar su situación laboral, en acceder a una vivienda, o en pagar su hipoteca. Las historias laborales más precarias y fragmentadas van a dificultar su acceso

a derechos sociales. A lo largo de su vida se verán obligados/as a pagar los costes crecientes del sistema de pensiones de la generación que les precede, mientras se pone en duda la viabilidad del sistema público cuando ellos lleguen a la edad de jubilación y se les invita ya a suscribir planes de seguro privados. A diferencia de lo que sucedía cuando Anne Foner escribía sobre la desactivación de los agravios juveniles, el ciclo vital ha cambiado y los/as jóvenes de hoy tienen razones para dudar de que estén llamados a reemplazar a las personas más adultas en las posiciones de privilegio que ellos/as sí estaban llamados a ocupar en su “debido momento”.

En los últimos años la movilización juvenil ha cobrado nuevo brío. A diferencia de lo que sucedía unas décadas atrás, muchos de esos movimientos reivindican cuestiones de índole material, ligadas a experiencias biográficas de precariedad. Es el caso de los movimientos contra la especulación urbana y a favor del acceso a una vivienda digna. La estrategia de lucha más conocida es la ocupación de viviendas, edificios y espacios urbanos vacíos. Desde finales de los años sesenta, pero fundamentalmente a partir de la década de los ochenta, coincidiendo con el agravamiento de las dificultades de transición a la vida adulta en muchos países occidentales, este movimiento ha hecho de la ocupación el caballo de batalla para “activar” el descontento juvenil (Koopmans 1995, Uitermark 2004). Junto a esta forma de militancia juvenil ya consolidada y que aúna reivindicaciones diversas, surgen movimientos centrados de forma específica en el derecho de acceso a la vivienda. Un buen ejemplo son las movilizaciones que, muchas veces convocadas desde foros de internet,¹³ consiguen en 2006 y 2007 reunir a miles de jóvenes en diversas ciudades españolas en defensa de alquileres más baratos y viviendas de protección oficial. Su eslogan más conocido, “no tendrás casa en tu puta vida”, es reflejo de una nueva aproximación al fenómeno que adquiere plena conciencia del carácter generacional —no transitorio— de los problemas que afrontan los/as jóvenes.

La lucha contra la precariedad laboral y la privatización de los servicios públicos es el eje central de otras movilizaciones en que los/as jóvenes cobran el mayor protagonismo. Recientemente, en países diversos, se han articulado distintas formas de acción colectiva. En Italia y en España se ha ido gestando una red extensa de movimientos contra la precariedad y a favor de la promoción de nuevas formas de economía social que se ha convertido en un espacio

¹³ No es casual el papel que cobra internet y las nuevas tecnologías en la vehiculación de protestas y demandas de la población joven. Internet se ha erigido en el espacio “joven” por excelencia, del que a menudo quedan excluidos otros segmentos de la población de edad más avanzada por carecer de los conocimientos y destrezas requeridos para usarlo. Blogs, chats, MSN, Facebook son espacios de comunicación que atraen un público predominantemente joven.

de encuentro de distintos agentes: estudiantes, inmigrantes, asociaciones vecinales, etc. Así, bajo muchas movilizaciones estudiantiles subyacen reivindicaciones de índole económica: tasas de matrícula más baratas, más becas, posibilidad de compatibilizar trabajo y estudios, mejor financiación de la enseñanza pública. Otras se conciben como reacciones de protesta frente a la devaluación social de las credenciales universitarias.¹⁴ Un eje argumental común que recorre las retóricas de oposición de los movimientos estudiantiles es la idea de que los adultos toman decisiones que conciernen a los jóvenes sin consultarlos debidamente.

Muchas veces la naturaleza de estas movilizaciones es espasmódica. En junio de 2006 y a lo largo de varias semanas, más de 700.000 estudiantes chilenos se manifiestan contra los precios elevados del transporte público, las tasas de la matrícula universitaria, y la presencia escasa de jóvenes en instancias gubernamentales. Las manifestaciones finalizan cuando la presidenta Michelle Bachelet adquiere compromisos específicos para atender estas demandas. Durante marzo de 2006, miles de estudiantes franceses salen a la calle a protestar contra los planes del gobierno de Dominique Villepin de introducir una nueva legislación laboral para favorecer la contratación de jóvenes con baja cualificación con una nueva modalidad que otorga a los empresarios/as la potestad de prescindir del trabajador/a al cabo de dos años de prueba. La medida —destinada, en principio, a mejorar las oportunidades de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes de las *banlieues*— despierta el recelo de miles de jóvenes universitarios, a pesar de que buena parte de los analistas políticos coinciden en calificar las reformas como tímidas. La mayoría de estos últimos también coinciden en que los universitarios/as —en su mayoría estudiantes de clase media— expresan su ansiedad ante la precariedad creciente de sus vidas y la devaluación de sus credenciales educativas (por ejemplo, Pfaff 2006). En estas condiciones, la iniciativa de Villepin es criticada por los/as jóvenes como un paso más en el desmantelamiento del modelo social francés heredado de sus padres en beneficio del *capitalisme sauvage*.

Durante varias semanas de diciembre de 2008 el malestar social de los jóvenes griegos por las reformas económicas y educativas del ejecutivo conservador, unido a la frustración por la falta de perspectivas de trabajo de los/as jóvenes universitarios, lanza a miles de jóvenes a las calles para protestar contra la precariedad en que viven y la insensibilidad de la clase política a su

¹⁴ Por ejemplo, una de las críticas principales que realizan los/as estudiantes al Plan de Bolonia, impulsado en los últimos años con el objeto de crear un espacio europeo de educación superior, es la adaptación a un sistema de titulaciones universitarias de dos ciclos en el que el valor social del grado será inferior al que tradicionalmente había tenido la licenciatura.

situación. La muerte de un joven por un disparo policial desencadena una ola insólita de disturbios y acciones violentas, que se salda con incendios, destrozos de sedes ministeriales y centenares de detenciones. Las protestas de los jóvenes griegos cobran todo su significado si se analizan a luz de la evolución de la sociedad griega en los últimos años. La interpretación de los analistas coincide en atribuir las movilizaciones juveniles a la “deprivación relativa” de los/as jóvenes en un contexto de crecimiento económico cuyos frutos no alcanzan a las nuevas generaciones. En la última década el PIB por habitante crece a un ritmo superior al 4% anual, el paro baja del 12% al 7,6%, la deuda pública se reduce sustancialmente, pero los problemas de la juventud griega se agravan. Las tasas de desempleo juvenil no tienen parangón en la Unión Europea (23% en 2007, según datos de Eurostat) y los salarios de los jóvenes limitan severamente sus oportunidades vitales: se habla de la *generación setecientoseurista* (en referencia a los 700 euros que suelen ganar).¹⁵ El sistema educativo griego, y especialmente el universitario, se caracteriza por su ineficiencia. El gasto público en universidad figura entre los más bajos de la Unión Europea. La transición de los jóvenes universitarios al mercado de trabajo es larga y precaria.

Con todos estos elementos, en varios países empieza a cundir el debate sobre las causas estructurales que están conduciendo a estas situaciones y la posibilidad de que se produzca un contagio en el seno de los países europeos. Se habla de un “malestar difuso en diversos sectores de la juventud europea que puede explotar en cualquier momento y en cualquier lugar”.¹⁶ Las movilizaciones griegas desencadenan protestas en Italia, Francia y España, de mucho menor entidad, pero sintomáticas de la existencia de problemas comunes bajo los que subyacen realidades sociológicas similares.¹⁷ La *lección griega* incita a varios analistas a plantearse si el telón de fondo de estas revueltas son las dificultades que tienen los sistemas políticos para ofrecer un cauce adecuado a la expresión de demandas de la juventud y dar una respuesta efectiva a sus necesidades más acuciantes.¹⁸ Hay quien considera que los episodios vividos en Grecia se podrían haber evitado de haber existido una clase política que hubiera mostrado cierta

¹⁵ Son el equivalente de los/as *mileuristas* españoles. Su apodo refleja proporcionalmente el valor de la renta per cápita griega en comparación a la española (en aproximadamente un 25%).

¹⁶ Josep Ramoneda, *El País* 16 de diciembre de 2008.

¹⁷ En Francia, las protestas en Grecia aplazan la adopción de una reforma prevista del sistema escolar. El ministro de Educación, Xavier Darcos, cree que el “ambiente de disturbios registrado en Grecia puede trasladarse a Francia” (*El País*, 15 de diciembre de 2008)

¹⁸ El rector de la Universidad de Atenas, Cristos Kitas, expresa en una frase lacónica la situación: “hay un divorcio absoluto entre la juventud y el sistema” (*El País*, 16 de diciembre de 2008)

sensibilidad por los problemas de los/as jóvenes y hubiera sabido actuar a tiempo.¹⁹ Desde este punto de vista, los problemas de la juventud pueden interpretarse como algo más que dificultades de inserción económica y social. La raíz principal de la vulnerabilidad juvenil radica en cierta “esclerosis” de los sistemas de representación política, que les impide asignar recursos de manera flexible, atendiendo las necesidades emergentes. Entre muchos analistas, existe la convicción de que, a pesar del carácter aparatoso de las movilizaciones, su eficacia política es limitada.²⁰

Junto a las reivindicaciones juveniles, aparecen otros conatos de conflicto intergeneracional. Algunos de ellos se relacionan con la emergencia de nuevos discursos y teorías que reclaman una atención creciente a la infancia y la juventud con el fin de crear condiciones que aseguren la competitividad de un país en la sociedad del conocimiento. En círculos políticos y académicos diversos se extiende la idea de que las “inversiones sociales” en infancia y juventud son cruciales para convertirlos en adultos responsables, bien preparados y productivos, sentando así las bases de la prosperidad en el futuro. Expresiones como “*sure start*”, “*best start*”, “*good start in life*”, así como las llamadas a mejorar los procesos educativos y combatir las raíces del fracaso escolar, se hacen cada vez más comunes en publicaciones y documentos de organismos internacionales como la OCDE o la Comisión Europea durante la década de los noventa e inicios del nuevo milenio (Jenson 2006). En ese contexto, diversos países comienzan a lanzar iniciativas concretas de envergadura que implican un “rejuvenecimiento” de sus prioridades políticas. El ejemplo más conocido es el compromiso del gobierno laborista británico de reducir la pobreza infantil a la mitad en 2010 y erradicarla en 2020, acompañado de un extenso programa de desarrollo de servicios públicos destinados a niños/as y adolescentes en situación de riesgo social. Los objetivos de estas medidas se inscriben en un nuevo paradigma de inversiones de política social que enfatiza su carácter instrumental para alcanzar fines colectivos deseables (Lister 2006, Esping-Andersen 2002). Niños/as y jóvenes son vistos como el recurso principal de un país para construir estructuras económicas flexibles necesarias en los nuevos escenarios globales.

La otra cara de la moneda de estos discursos es la problematización de las políticas de vejez. En los últimos años, coincidiendo con la proliferación de discursos pesimistas acerca de la

¹⁹ Un ejemplo de este tipo de discursos es un artículo de la profesora Blanca Vila, que caracteriza al gobierno griego como “hermético” y “pasivo”, y a la oposición como “endeble”, “posibilista” y “dividida” (*El País*, 16 de diciembre de 2008).

²⁰ Vasilis Alexis, profesor de Teoría Literaria de la Universidad de Salónica lo expresa de la siguiente manera: “esto es como un carnaval y, tras los fuegos de artificio, no habrá nada. Falta una fuerza política que capitalice el

evolución demográfica de las sociedades occidentales, cobran fuerza los llamamientos a reformar el sistema público de pensiones y a reforzar los programas privados de capitalización. La mayoría de esos llamamientos tienen en común una retórica alarmista. Reformar el sistema público de pensiones debe convertirse, a juicio de analistas y expertos de diversos organismos (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE), en una prioridad pública de los gobiernos nacionales para asegurar su viabilidad financiera en un contexto de envejecimiento acelerado de la sociedad. Hasta el momento, la mayoría de los gobiernos han evitado tomar medidas impopulares, agravando con ello la magnitud del problema.

En estas circunstancias, desde diferentes instancias, se están cuestionando el *contrato intergeneracional* que fundamenta la arquitectura del Estado de Bienestar. El principio básico de ese contrato es que las personas se “ganan” ellas mismas el derecho a los beneficios que reciben en la tercera edad. Desde este punto de vista, las prestaciones a personas de mayor edad son vistas como el resultado de transferencias intertemporales de riqueza generada por el propio beneficiario/a en el pasado. Frente a este planteamiento —ampliamente aceptado durante décadas— se erigen cada vez más voces que advierten que la transformación de la composición demográfica de la población hace inviable el mantenimiento a largo plazo de los compromisos que el sistema público adquiere con las generaciones que vayan a jubilarse en el futuro. Lejos de la retórica de justicia social que había arropado a las políticas de vejez durante la fase de expansión del Estado del Bienestar, esta voces tienden a concentrarse en las implicaciones fiscales del envejecimiento de la población: esto es, la “carga” asociada al incremento de personas ancianas económicamente dependientes que cobran pensiones, y la “carga” asociada a los costes sanitarios y de atención especializada asociados a su dependencia física. El envejecimiento de la población es presentado como una de las amenazas más importantes para la competitividad de la economía y el bienestar de la sociedad en su conjunto.²¹ Las versiones más demagógicas de estos discursos caricaturizan a las personas de mayor edad como “viejos avaros” (*greedy geezers*) responsables de la ralentización del crecimiento económico y de los déficits

descontento pero, pese a lo politizado que está el país, nadie es capaz de hacerlo. Eso sí, seguro que algunos partidos lo utilizan” (*El País*, 13 de diciembre de 2008).

²¹ El peligro del envejecimiento demográfico para la economía no está relacionado únicamente con el aumento de la presión fiscal para sufragar los costes crecientes de los programas públicos de bienestar. Una de las mayores amenazas que asoman en el horizonte es, según muchos/as economistas, que la llegada a la jubilación de las generaciones más pobladas provoque una contracción de la tasa de ahorro como consecuencia de que un volumen considerable de ahorradores empiece a retirar los fondos acumulados a lo largo de su vida para sufragar sus

fiscales del Estado de Bienestar. Desde este punto de vista, los costes en que están incurriendo los gobiernos para sufragar los sistemas de protección de las personas ancianas impiden desarrollar una política social más efectiva en favor de colectivos jóvenes, pudiendo incluso comprometer el bienestar de las generaciones venideras —al transferirles la deuda que los gobiernos adquieren en el presente (Binstock 2000).

El caso español constituye un escenario privilegiado para estudiar estas dinámicas. Los perfiles de la desigualdad en España tienen una dimensión generacional clara pero, tal como predice Foner, las evidencias de confrontación intergeneracional son escasas. El mecanismo desactivador más importante de los agravios de índole económica y material han sido las prácticas familistas, que han restado urgencia a las demandas de los/as jóvenes. Durante años, las familias han ofrecido a los jóvenes en situación de precariedad techo y sustento, han financiado la prolongación de sus carreras educativas, y han participado activamente en el proceso de búsqueda de un empleo para sus hijos/as. En un contexto de crisis de empleo, precariedad laboral y precios de la vivienda inasequibles, los gobiernos de la democracia no han entendido que la inversión en políticas y programas que benefician a la juventud debiera convertirse en una prioridad. Como manifiesta elocuentemente el sociólogo Julio Iglesias de Ussel, la institución familiar ha funcionado como “el mayor Ministerio de Asuntos Sociales en España”, contribuyendo a acallar las reivindicaciones de los/as jóvenes. En los nuevos escenarios sociales y demográficos que atraviesa España, la situación puede estar cambiando, abriéndose resquicios a probables dinámicas de confrontación intergeneracional.

consumos. Las implicaciones de este proceso pueden ser enormes para los mercados financieros, creando déficits de capital inversor y presionando los tipos de interés al alza.

Capítulo 2

VIEJOS Y NUEVOS RIESGOS SOCIALES

“You are only young once, but you can stay immature indefinitely”

Ogden Nash

La mayoría de las decisiones determinantes que toman las personas a lo largo de su vida se concentran en el curso de unos pocos años. Son lo que se conoce como “años de transición” a la vida adulta. A diferencia de lo que sucede durante otras etapas del ciclo vital, estos años representan un período relativamente corto pero convulso en la vida de las personas, en que atraviesan múltiples umbrales de importancia capital en su futuro. Durante la juventud se abren espacios de libertad inusitados. Algunas de las regulaciones externas y normas que restringen, constriñen y prohíben ciertos comportamientos durante la infancia dejan de tener vigencia, otras se relajan. A efectos legales, el primer umbral de cierta importancia que se atraviesa se sitúa alrededor de los dieciséis años, en que la mayoría de las sociedades establecen el final de la escolarización obligatoria y abren las puertas al mercado laboral. A partir de los dieciocho, los/as jóvenes adquieren capacidad jurídica plena para obrar sin necesidad del consentimiento de sus padres. Pueden vivir por su cuenta, sacarse el carnet de conducir, montar su propia empresa, o casarse. Estos reconocimientos inauguran un período de incertidumbres vitales, en que los/as jóvenes están llamados a enfrentarse a las principales encrucijadas laborales y sentimentales que jalonarán su vida. Durante la juventud se realizan las primeras, quizás las únicas, probablemente las más trascendentales, elecciones de empleo y pareja.

Estructura de riesgos en el ciclo vital

La edad es uno de los principios más importantes de organización social. La vida de las personas atraviesa distintas etapas, en las que desempeñan roles sociales y participan en experiencias biográficas diferenciadas. En algunas de estas etapas se acumulan las incidencias. Como señala Ronald Rindfuss (1991), la juventud es una etapa “densa” desde un punto de vista demográfico. A excepción de la mortalidad, los fenómenos demográficos que concitan mayor interés, —la

migración, el matrimonio y la fecundidad— suelen estar protagonizados por personas jóvenes.²² Llegados/as a cierta edad, los/as jóvenes deciden “echar a volar” por su cuenta. Esto supone cambiar de domicilio, quizás de localidad o incluso de país de residencia, en una o repetidas ocasiones. Entre los veinte y treinta años tiene lugar la mayor proporción de “migraciones” que una persona efectúa a lo largo de su vida (ver **Gráfico 2.1**, Panel A y B). También es el período de la vida que las personas suelen escoger para formar, al menos por primera vez, su propia familia (ver Panel C y D). Salvo en casos excepcionales como Italia y España, en la mayoría de los países occidentales, los jóvenes contraen matrimonio o cohabitan antes de los treinta años y en torno a la mitad tienen hijos/as antes de esa edad. Algunos/as tienen tiempo de divorciarse, e incluso de celebrar segundas nupcias.

(Gráfico 2.1)

Algunos de estos episodios pueden ser fuente de gratificaciones personales considerables. Cuando se resuelven favorablemente, los lances en que los/as jóvenes se ven envueltos adquieren el rango de proezas personales que llenan de orgullo al que las protagoniza y a quienes le rodean: la graduación, primer trabajo, primeras conquistas amorosas, licenciamiento, boda, hijos/as, etc. Las personas que han dejado atrás su juventud tienden a mitificarla; suelen guardar fotos, cartas, títulos, que testimonian el carácter excepcional de esa etapa de su vida. A ello hay que añadir otras ventajas “objetivas” asociadas a la juventud. Con la mayor parte de su vida por delante, las personas alcanzan la plenitud física durante ese periodo. Las evidencias de que se dispone acerca del estado de salud de las personas a lo largo del ciclo vital son inequívocas. Los/as jóvenes suelen declarar que su estado de salud es bueno, padecen menos enfermedades y dolencias que otros grupos de edad, consumen menos medicamentos, y requieren con menos frecuencia atención médica u hospitalaria.²³ De haberse inventado, probablemente ninguna persona adulta dudaría en aceptar una pócima que permitiera recuperar la juventud perdida.

²² Las tasas de mortalidad durante la juventud se mantienen a niveles bastante bajos en comparación con las de personas de mayor edad. Ahora bien, la mortalidad presenta ciertas modalidades típicamente asociadas a la juventud, como las muertes por accidentes de tráfico o por sobredosis.

²³ Según el *Panel de Hogares de la Unión Europea* del 2000, el 92% de la población española de 18 a 29 años manifiesta gozar de buena o muy buena salud (frente al 71% de la población adulta total) (www.ine.es). El promedio de quienes declaran no haber consumido medicamentos durante las últimas dos semanas es también menor (57%, frente a 48%) (CIRES 1994). La visita al médico o el ingreso hospitalario es también menos común entre los/as jóvenes que entre otros grupos de edad. El 37% de los/as jóvenes de 18 a 29 años declara no haber ido a la consulta

Ahora bien, no conviene olvidar que la juventud es además un período vital en que se concentran un número insólito de riesgos. Dentro de la sociología abundan las investigaciones sobre riesgos típicamente “juveniles”: interrupción prematura de los estudios,²⁴ embarazos no deseados, comisión de faltas y delitos²⁵, consumo de alcohol y sustancias estupefacientes,²⁶ accidentes de tráfico, o el Sida²⁷ (ver **Gráfico 2.2**). Por otra parte, la juventud viene marcada por la falta de poder y recursos. La sociedad tiende a reservar las posiciones de autoridad y prestigio, tanto en la familia, como en el mundo del trabajo o en la arena política, a personas más adultas. La participación de jóvenes en la gestión de instituciones, grupos y organizaciones de los que forman parte —familias, asociaciones, partidos políticos universidades, empresas— es, por regla general, limitada. Mientras las personas adultas a menudo administran el bienestar y los intereses de los/as jóvenes, rara vez sucede lo contrario.

(Gráfico 2.2)

Es en el terreno económico donde las desventajas de la juventud con respecto a otras personas adultas se manifiestan de forma más clara. En muchos países desarrollados, buena parte de los/as jóvenes no disponen de recursos propios, o si los tienen, resultan insuficientes para emanciparse. En un estudio reciente sobre siete países de la OCDE (Francia, Reino Unido,

de un médico general durante el último año, en contraste con el 25% de las personas comprendidas entre 45 y 64 años y el 14% de los mayores de 64. El 61% de los/as jóvenes no han tenido que acudir a un médico especialista, por sólo el 41% de las personas de 45 a 64 años y el 40% de los mayores de 64 años (www.ine.es). De igual forma, sólo el 8% los/as jóvenes han requerido hospitalización durante el último año, casi la mitad de las veces a causa de un parto. Entre las personas de mayor edad, la proporción que fueron internadas supera el 10%, por lo general debido a intervenciones quirúrgicas y tratamientos que requieren ingresos más prolongados (CIRES 1994). La estancia media en el hospital de un/a joven (4,4 días) es significativamente menor que la de otras personas adultas (la media total de la población adulta supera los diez días) (www.ine.es).

²⁴ En 2004, en España el 30% de los jóvenes de 18 a 24 años han salido del sistema educativo sin haber completado estudios secundarios. Este porcentaje es bastante superior a la media comunitaria del 16% (Eurostat 2004).

²⁵ Los actos más habituales en que participan los/as jóvenes (en especial los varones) no suelen conllevar condena, como las peleas callejeras y la compra de drogas para consumo propio. Se trata muchas veces de actos cometidos en grupo, por pandillas y grupos de amigos/as, que constituyen unos de los principales contextos de riesgo al que están expuestos los/as jóvenes (Comas 2003: 143). En España un porcentaje ligeramente superior al 20% reconoce haber intervenido en este tipo de hechos. La comisión de delitos más graves, como la venta de drogas o el robo de vehículos, es más infrecuente (4,4% y 1,5% de los/as jóvenes).

²⁶ El consumo de alcohol y de drogas entre la juventud es fundamentalmente una práctica de fin de semana. El 16% de los/as jóvenes españoles reconocen consumir alcohol de forma abusiva durante los fines de semana. Es también durante el fin de semana cuando suele producirse el consumo de ciertas sustancias, como *speed* (del que se reconocen usuarios habituales el 1,3% de jóvenes) y las drogas de diseño (consumidas de forma habitual por el 1,1%) (Comas 2003: 111).

Alemania, Estados Unidos, Italia, Holanda y Suecia), realizado por Smeeding y Phillips (2002) se calcula que la proporción de jóvenes varones de edades comprendidas entre los veintiún y veinticinco años que están en condiciones de vivir sólo de los ingresos que obtienen de su trabajo oscila entre el 30% en Italia y el 55% en Holanda. El porcentaje de mujeres de la misma edad en situación de mantenerse gracias a sus ingresos laborales es entre cinco y diez puntos menor. Una proporción significativamente más reducida de jóvenes (por debajo del 15% en Italia y del 50% en Holanda) obtiene con su trabajo los recursos económicos necesarios para mantener una familia de tres miembros. En España el 35% de los/as jóvenes de estas edades carecen de ingreso alguno y sólo el 5% obtiene los recursos que consideran necesarios (1.021 euros al mes) para irse a vivir solos (CIS Estudio 2.370 de 1999; CIS Estudio 2.469 de 2002).

La mayoría de jóvenes que no disponen de recursos propios suficientes viven con sus padres. Entre los que han conseguido independizarse, la situación económica es muchas veces precaria. En España, la renta media por unidad de consumo de los hogares cuya persona de referencia es un/a joven menor de treinta años es sustancialmente inferior a la de los hogares encabezados por una persona de más edad.²⁸ Según datos del *Panel de Hogares de la Unión Europea* de 2001, la renta media por unidad de consumo de los hogares españoles cuyo sustentador principal es una persona de 16 a 29 años es de 7.890 euros. Este valor es inferior a la de hogares encabezados por una persona de 30 a 44 años (8.120 euros), de 45 a 64 años (9.187 euros) y de 65 años o más (8.769 euros) (www.ine.es).

Estos indicadores ofrecen una radiografía actual, pero estática, de una realidad en cambio. En este maremagnum de transformaciones pueden vislumbrarse ciertas tendencias. En algunos casos, los/a jóvenes son beneficiarios claros. Por ejemplo, el acceso a niveles educativos intermedios y superiores se ha democratizado, y con ello, se han abierto oportunidades de movilidad social inéditas. En los últimos años disminuye, por un lado, la proporción de personas jóvenes que salen del sistema educativo a edades prematuras, sin la titulación adecuada ni los conocimientos necesarios para optar con ciertas garantías a un puesto de trabajo. Por otro, aumenta de forma considerable el porcentaje de jóvenes que siguen ligados al sistema educativo

²⁷ Los casos de sida se concentran entre los 30 y 35 años. Se trata, sin embargo, muchas veces de enfermos/as que contrajeron su enfermedad antes de la treintena.

²⁸ La renta media por unidad de consumo es un indicador de bienestar más apropiado que la renta media por hogar o por persona, al tener en cuenta las economías de escala asociadas a la convivencia en una misma vivienda. Se calcula ponderando los miembros del hogar por los siguientes coeficientes: 1 para el sustentador principal, 0,5 para los siguientes adultos del hogar (personas mayores de 13 años) y 0,3 para los niños/as (13 años y menos).

más allá de los veinte años.²⁹ La revolución tecnológica propicia que algunos/as de éstos últimos consigan, gracias al valor creciente de conocimientos y destrezas de los que carecen otros grupos de edad, encaramarse a posiciones de poder y prestigio reservadas tradicionalmente a personas de mayor experiencia.

Sin embargo, la situación de la juventud se ha deteriorado en otros múltiples aspectos. La ilustración más clara de ese deterioro es el empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo. En muchos países, ese empeoramiento se manifiesta principalmente en forma de tasas altas de desempleo juvenil, una disminución acusada de la población joven que trabaja y el aumento de personas que lo hacen con contrato precario. En la mayoría de países, las dificultades para encontrar empleo han venido acompañadas por una erosión de sus ingresos salariales en comparación con los de otros grupos de edad. La falta de empleo y de ingresos adecuados están en la raíz de problemas cada vez más comunes entre la población joven, como la pobreza y la exclusión, u otros que ya se han hecho endémicos entre los/a jóvenes de algunos países, como la imposibilidad práctica de asumir los riesgos financieros que suelen ser necesarios para adquirir una vivienda, plantearse convivir en pareja o tener hijos/as.³⁰

Precariedad laboral

Hace sólo unas décadas, la mayoría de las personas que hoy llamamos “jóvenes” transitaban apresuradamente de la infancia a la vida adulta. Hoy, la juventud no encuentra el momento para dejar de serlo. Gran parte vive atrapada en una suerte de limbo entre la post-adolescencia y la madurez. Su condición civil y biológica, que les permite ejercer cualquier actividad adulta (suscribir un crédito, votar, trabajar, tener hijos/as) entra en contradicción con un marco limitado

²⁹ En los países de la OCDE el porcentaje de varones de 18 años que permanecen en el sistema educativo pasa del 49% al 64% entre 1984 y 1997. El de mujeres, del 51% al 71%. La proporción de varones que siguen estudiando a los 22 años se incrementa del 22% al 33% durante este intervalo de tiempo, y la de mujeres se dobla (del 17% al 35%) (Blanchflower y Freeman 2000: 26-27).

³⁰ Junto a estos síntomas del deterioro, se han descrito otros cuya relación con el mercado de trabajo es más difícil de establecer, aunque no necesariamente inexistente, como el incremento de los índices de criminalidad o de suicidio de personas jóvenes. Abundante evidencia demuestra que existe relación entre la falta de oportunidades laborales y la participación de los/as jóvenes en actividades delictivas. La variación en las tasas de suicidio juvenil también parece, en parte, reflejar la evolución de las condiciones laborales. En países como España e Irlanda, donde el deterioro de las situación laboral de los jóvenes a lo largo de los años ochenta es más acusado, las tasas de suicidio se multiplican por tres y por cuatro respectivamente entre 1970 e inicios de la década de los noventa, mientras que en países como Suecia y Alemania, donde no se producen esos problemas de inserción laboral, las tasas de suicidio descienden.

de oportunidades e incentivos para emanciparse de sus familias de origen. Salvo unos pocos privilegiados/as, la gran mayoría de los jóvenes de antaño no tomaban parte en ninguna de las actividades anticipatorias que conforman lo que actualmente se conoce como *cultura juvenil*, tales como la educación, el disfrute del ocio o la sexualidad. Desde la adolescencia, la transición a la vida adulta de estos jóvenes venía marcada por la iniciación temprana a la actividad laboral. Tras un lapso no demasiado largo, formaban su propia familia, lo que interrumpía de modo definitivo —en caso de haberse iniciado alguna vez— la carrera laboral de la mayor parte de las esposas. En esas condiciones, la mayoría de jóvenes alcanzaba la treintena sin demasiados sobresaltos, habiendo satisfecho, por modestas que fueran, sus expectativas de posicionamiento social. Una vez iniciada, la carrera laboral del cabeza de familia (varón) continuaba desarrollándose ininterrumpidamente, de no mediar accidente o enfermedad que perturbase lo que acostumbraba a ser una trayectoria vital ordenada y estándar: escolarización hasta los catorce años, cuarenta o cincuenta años de empleo, y al final jubilación a los 65 o 70 años (para quienes no prolongaban la actividad laboral como trabajadores autónomos o en un negocio familiar). El horizonte profesional se decidía en una o dos —a lo sumo tres— elecciones cruciales realizadas habitualmente a edad temprana, que determinaban de forma casi inalterable la adquisición de posiciones “terminales”. Las aspiraciones a una vida más holgada se concretaban a menudo en la emigración, que contribuía a lubricar los engranajes de un modelo que ofrecía escasas oportunidades de movilidad social ascendente.

A diferencia de lo que sucede hoy, la juventud se vivía como una etapa de pocos riesgos (aunque perturbadores) y un grado de certidumbre alto respecto al horizonte biográfico. La plenitud física garantizaba el empleo. El desempleo era casi inexistente y, en todo caso, de corta duración. Más bien había pluriempleo. Los riesgos vitales mayores provenían de situaciones de incapacitación para asumir las cargas de responsabilidad familiar contraídas. Las tasas mayores de pobreza se registraban en las familias con proles más numerosas o en aquellas que, a causa de la muerte o enfermedad sobrevenida del cabeza de familia, se hallaban privadas de la fuente principal de ingresos económicos.

Las razones para explicar el ocaso de esta modalidad de transición a la vida adulta son claras. Una ojeada al contexto socioeconómico en que los/as jóvenes construían esta modalidad de transición “precoz” a la vida adulta pone de relieve que ésta tenía lugar en una coyuntura especialmente favorable. En gran parte de los países europeos, sobre todo del norte del

continente, las décadas de los cincuenta y sesenta corresponden a un período de prosperidad económica. Trasladada al mercado laboral, esta coyuntura económica favorable representa entonces no sólo una garantía de empleo estable para las personas jóvenes que toman la decisión de emanciparse de su familia, sino también una fuente de ingresos suficiente para sufragar tanto el acceso perdurable a una vivienda en propiedad (o alquiler) como también los recursos necesarios para proporcionar unos estándares mínimos de bienestar a los miembros de la familia (mujer e hijos/as) a formar.

La situación ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos. Como se pone de manifiesto en la **Tabla 2.1**, desde finales de la década de los setenta, en un contexto económico más desfavorable, las tasas de desempleo aumentan en casi todos los países de la OCDE. El incremento del desempleo es sensiblemente más acusado en los/as jóvenes que en la población adulta. En cuestión de poco más de una década, la falta de empleo pasa a convertirse en un problema de primer orden en la etapa de transición a la vida adulta. En países como España, Italia o Irlanda, a inicios de la década de los noventa, en torno a una tercera parte de los/as jóvenes se encuentran desempleados. Desde entonces, las tasas de desempleo juvenil han disminuido, pero en pocos casos consiguen recuperarse los niveles de empleo juvenil vigentes antes de la crisis.

(Tabla 2.1)

Es un error dar por sentado que los cambios en las modalidades de transición a la vida adulta son un mero reflejo de los vaivenes coyunturales de la economía. Más allá de las crisis cíclicas de la economía, la mayoría de los diagnósticos coinciden en atribuir a estas transformaciones un carácter más profundo a nivel estructural. Se trata de lo que a veces se describe como una verdadera ruptura histórica, marcada por el resquebrajamiento del modelo de producción fordista, así como la emergencia de la sociedad postindustrial fundada en la terciarización de la economía y en el uso intensivo de las tecnologías de la información. Poco después de la crisis energética de la década de los setenta, la mayoría de los países industrializados introducen reformas en sus economías en consonancia con los postulados de una nueva filosofía liberal, que en sus diversas cristalizaciones, coincide en abogar por la liberalización de las actividades económicas. En las circunstancias actuales —insisten los partidarios de las doctrinas neoliberales— resulta improductivo, cuando no directamente

contraproducente, contravenir las reglas del juego que impone una economía crecientemente globalizada. Desde este tipo de planteamientos, cualquier tipo de regulaciones y restricciones públicas restan competitividad a las economías. En el nuevo régimen económico, los Estados tienden a suprimir trabas a la libre circulación de bienes y capitales a través de sus fronteras, aplican políticas fiscales y monetarias restrictivas, y amplían la libertad empresarial para contratar a los trabajadores bajo modalidades de contratación más flexibles. Las políticas laborales que impulsan tienden a fomentar la participación laboral intensiva (la re-mercantilización de las personas en edad de trabajar), especialmente de colectivos “desanimados” o reacios a trabajar a cambio de salarios bajos (como los/as jóvenes, las amas de casa o los trabajadores/as de edades más avanzadas). La retórica del individualismo y la responsabilidad personal respecto al destino propio (*you are on your own*) gana terreno a los discursos sobre los derechos sociales frente al riesgo.

Las consecuencias de estas nuevas orientaciones políticas se evidencian especialmente a partir de la década de los noventa. En la mayoría de los países desarrollados, las tasas de desempleo disminuyen durante ese período y las tasas de crecimiento de sus economías se recuperan. Ahora bien, el nuevo régimen se muestra inmisericorde con los agentes económicos que son incapaces de competir en el mercado global. En la economía global, todos —países, regiones, empresas— compiten potencialmente los unos con los otros por atraer, y luego retener, a un capital inversor cada vez más volátil. La creciente interconexión entre países, organizaciones y países posibilitada por las innovaciones tecnológicas facilita la movilidad de bienes, capitales y personas entre regiones y Estados a una velocidad inusitada. En los nuevos escenarios, los empresarios/as se ven liberados de ataduras espaciales y temporales, pudiendo localizar (y re-localizar) rápidamente sus operaciones empresariales en función de oportunidades de negocio y variaciones de los costes de la fuerza laboral. Los avances en las tecnologías de la información les permiten ejercer control sobre estructuras productivas descentralizadas y dispersas en el espacio. La incorporación de China, India y las Repúblicas ex-soviéticas a la economía global a partir de 1990 amplía considerablemente el fondo de reserva de mano de obra barata (Freeman 2007). En este juego, las ganancias pueden ser enormes, pero también se incrementan los riesgos (Hacker 2006).

Uno de los hitos históricos de esta nueva realidad es la irrupción con fuerza en el mercado laboral del trabajo precario y discontinuo, de la jornada a tiempo parcial, y del trabajo a la carta

del *free lance*. Si la “edad de oro del capitalismo” trascurrió bajo el signo del trabajo estable, en la nueva etapa que se inaugura en los años ochenta se abre paso el principio inverso: la precariedad. El determinante principal de esta evolución de los mercados de trabajo son las políticas de desregulación laboral por la que apuestan muchos gobiernos. Las empresas aprovechan estas medidas para reorganizar sus plantillas. En un contexto en que predomina la incertidumbre sobre el comportamiento de los mercados y en que resulta crucial adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, cobran relieve las ventajas de *la flexibilidad*. La contratación de trabajadores bajo modalidades precarias permite el reajuste inmediato del tamaño y composición de las plantillas en respuesta a las fluctuaciones de la demanda, para adaptarse a las nuevas tecnologías, o simplemente para debilitar el poder colectivo de los trabajadores/as. Supone, por lo tanto, una oportunidad de traspasar los riesgos del nuevo régimen económico a los trabajadores/as, y entre ellos, a los sectores más vulnerables, formados por trabajadores que a causa de la naturaleza de su contrato y su baja implicación sindical son menos proclives a movilizarse por sus derechos (Breen 1997).

Las políticas de desregulación no han erradicado el trabajo estable, como vienen anunciando de forma apocalíptica algunos teóricos (véase por ejemplo el trabajo de Ulrich Beck: 1998, 2000). Estas iniciativas suelen afectar principalmente a las nuevas contrataciones, y dentro de estas, de forma más intensa, al trabajador que busca su primer empleo. En el **Gráfico 2.3** aparece el conjunto de países desarrollados que introducen medidas desreguladoras a lo largo de la década de los ochenta e inicios de los noventa. En todos los casos puede apreciarse una tendencia al alza en la proporción de contratos temporales (Panel A). A la luz de estos datos, salvo en España, y quizás en Portugal desde finales de la década de los noventa, difícilmente podría hablarse de una transformación profunda de los mercados laborales. Distinto es si nos ceñimos a los trabajadores/as más jóvenes. Como puede observarse en el Panel B del gráfico, el incremento de la contratación temporal ha sido bastante más importante entre jóvenes con experiencia laboral escasa. En países como Francia y Alemania, además de en España y Portugal, el porcentaje de empleos temporales entre los/as jóvenes de 15 a 24 años supera, a comienzos del siglo XXI, el 40%. En Holanda, el porcentaje de empleos temporales entre los/as jóvenes casi se triplica desde inicios de los ochenta.³¹ En Italia, Bélgica o Japón los incrementos son menos

³¹ Desde inicios de la década de los ochenta, en Holanda además ha crecido espectacularmente la proporción de empleo a tiempo parcial. Actualmente representa el 30% de la población ocupada.

llamativos, aunque significativamente superiores a los que se producen en el resto de la población.

(Gráfico 2.3)

El impacto de las políticas de desregulación sobre los niveles de contratación temporal no puede entenderse sin explicar los efectos que tiene la regulación de protección contra el despido sobre las estrategias empresariales. En los últimos años, un buen número de expertos/as ha señalado que la coexistencia de costes de despido elevados para los trabajadores/as con contrato indefinido y unas políticas que facilitan la contratación temporal tienden a producir tendencias a la dualización del mercado de trabajo (Güell-Rotllan y Petrongolo 1998, Esping-Andersen 1999, Polavieja 2003 y 2004, y OECD 2004). Las barreras para desprenderse de trabajadores con contrato indefinido en situaciones económicas desfavorables —y entre ellos, especialmente, de los trabajadores con trayectoria más largas en las empresas— empujan a los empresarios/as a concentrar los reajustes de plantilla en una bolsa de trabajadores “desechables” que la nueva legislación permite contratar de forma flexible. El resultado de estas estrategias de contratación es una segmentación entre los que ya “están dentro” (*insiders*), cuya continuidad laboral rara vez se pone en cuestión, y los que ven peligrar su puesto de trabajo porque sólo tienen un contrato precario (*outsiders*).

La segmentación *insider-outsider* tiene un claro componente generacional. Algunos/as de los trabajadores/as que “ya están dentro” pertenecen todavía a la generación que disfrutó desde el principio de un contrato estable y que, hoy, dados los altos costes de despido, corren pocos riesgos de perder su empleo. Otros/as pertenecen a una generación más joven, que durante años experimentó los rigores del trabajo precario, pero que actualmente, a veces más de una década después de comenzar a trabajar, han conseguido consolidar su posición laboral. Frente a ellos se sitúan grupos más jóvenes —los hijos/as de los anteriores— que han empezado recientemente a trabajar bajo modalidades de contratación flexible. Su posición laboral es considerablemente más precaria —sobre ellos/as recaen principalmente los ajustes de empleo—, sus salarios suelen ser más bajos (a igual productividad), las oportunidades para seguir formándose en las empresas más escasas. Como su futuro dentro de la empresa es incierto y depende de la evaluación unilateral

que realiza el empresario/a, son más reacios a participar en acciones colectivas en defensa de sus intereses, como afiliarse a un sindicato o participar en una huelga.

El **Gráfico 2.4** muestra la incidencia del empleo temporal en tres segmentos de edad de la población en España, el país que presenta el mercado laboral con tendencias más acusadas a la segmentación. En el gráfico pueden observarse las consecuencias de la *Reforma del Estatuto de los Trabajadores*, aprobada por el primer gobierno socialista en 1984. En pocos años, la estructura del mercado laboral experimenta una transformación dramática. Aunque entre 1985 y 1991 se crean cerca de dos millones de nuevos puestos de trabajo, ese crecimiento corresponde únicamente a empleos temporales. A lo largo de todo el periodo se pierden cientos de miles de empleos fijos. Gran parte de este descenso en el número de empleos fijos lo explican las jubilaciones y prejubilaciones a las que se acogen entonces los trabajadores/as más veteranos. Pocas de las personas que perdieron un empleo fijo engrosaron las cifras del paro. En el lugar de trabajadores estables, los empresarios/as optaron cada vez más por contrataciones temporales. Del total de trabajadores/as contratados a inicios de la década de los noventa, cerca del 90% lo era con un contrato temporal (Polavieja 2003: 91). Se trata fundamentalmente de trabajadores jóvenes que consiguen sus primeros empleos, o están inmersos en un carrusel de rotaciones entre un empleo temporal y el siguiente. Como puede apreciarse en el **Gráfico 2.4**, el porcentaje de contrataciones temporales se mantiene a niveles muy bajos entre la población de 50 y más años, y presenta unos niveles sólo ligeramente superiores en los segmentos de edad intermedios.³²

(Gráfico 2.4)

Otra cara de la precariedad laboral de los/as jóvenes es el deterioro de su posición salarial. Las series temporales disponibles en algunos países de la OCDE muestran que, desde finales de la década de los setenta, los ingresos de los/as jóvenes han disminuido respecto a los de segmentos de mayor edad (Blachflower y Freeman 2000: 51-54). Los datos que proporciona la OCDE son concluyentes. En todos los países en los que existen series de más de una década, el

³² Un mayor nivel de desagregación de esta generación intermedia pondría de manifiesto que, dentro del grupo, existe también una graduación clara de la incidencia del empleo temporal por edad. Así por ejemplo, mientras en 1995, el 50% de los jóvenes de 25 a 29 años y el 34% de los de 30 a 34 años tenían un empleo temporal, sólo el 24% de las personas de 44 a 49 habían sido contratados bajo esta modalidad (Cerviño 2003: 251).

cociente entre el salario bruto medio de las personas adultas y jóvenes aumenta entre 1980 y 1995, y por tanto, la posición relativa de éstas últimas empeora (véase **Tabla 2.2**). Entre 1995 y 2002, la situación sigue empeorando en la mayoría de los países.³³

(Tabla 2.2)

Los datos de la OCDE no permiten analizar la evolución de los salarios en España a lo largo de todo el período. Pero la evidencia existente confirma la dualización acentuada del mercado de trabajo. Según datos de 1995, el salario de una persona de 45 a 54 años en España era 1,86 veces el de un trabajador/a de 25 a 29 años. Este ratio sitúa a los trabajadores/as jóvenes en España en la posición menos favorable en la OCDE, a distancia considerable de otros países desarrollados. En 2002, el cociente es ligeramente más bajo (1,73), pero está todavía por encima del resto de países sobre los que se disponen datos. Posiblemente la magnitud de esta brecha refleja en buena medida la situación particular de la juventud en el mercado laboral español en comparación con la de otros países. Múltiples estudios demuestran que los trabajadores temporales suelen ganar menos que sus homólogos indefinidos, aunque su productividad sea equiparable³⁴. Se puede presumir que la anomalía salarial en España esté directamente relacionada con la concentración excepcionalmente alta de trabajadores/as jóvenes en empleos precarios.

Más que de crecimiento del riesgo (Beck 1998), resulta pues más propio hablar de su redistribución. Como consecuencia de la flexibilización del mercado laboral, el riesgo seconcentra cada vez más en la población joven. A consecuencia de estos cambios, la realidad e

³³ Los datos no son estrictamente comparables debido a que el grupo de edad en el denominador ha sido definido de forma diferente.

³⁴ Los expertos/as han identificado dos mecanismos que operan para producir una diferenciación de los salarios por tipo de contrato. Según Güell-Rotllan (2000), el factor que precipita la discriminación de los trabajadores temporales es la necesidad que tienen este tipo de trabajadores de aceptar salarios más bajos a cambio de incrementar la probabilidad de conseguir la renovación de sus contratos – y, en última instancia, su conversión en contratos indefinidos. Según otros especialistas (Bentolina y Dolado 1994, Polavieja 2003), la clave para explicar la discriminación salarial es la posibilidad de los trabajadores indefinidos de afianzarse en sus puestos de trabajo y extraer mayores rentas salariales cuando las empresas se inclinan a concentrar los ajustes de plantilla en una bolsa de trabajadores temporales debido a la diferencia en los costes de despido de *estables* y *precarios*. Según datos del Panel de Hogares de la Unión Europea, los trabajadores temporales sufren una discriminación salarial equivalente al 15% de sus salario (varones) y 16% (mujeres). En España las cifras son del 16% y 19% respectivamente (OECD 2002: 144-145).

muchos/as jóvenes viene marcada por la prolongación de situaciones de dependencia “infantil” (económica y residencial) respecto de la familia de origen. A ello se suman con frecuencia períodos adicionales de semidependencia, en que viven en una suerte de autosuficiencia precaria que sobrellevan gracias a ingresos propios, al apoyo de la familia y, en algunos países a modalidades de prestación pública (becas para estudiar, subsidios de desempleo, subvenciones al alquiler, y rentas mínimas de inserción).

Mecanismos de protección social

En el escenario de las sociedades post-industriales, la transformación de los mercados de trabajo es uno de los principales determinantes de los cambios en las estructuras de desigualdad y los perfiles de exclusión. Pero no es ni mucho menos el único. Las desigualdades presentes en todas las sociedades humanas son, en buena medida, resultado de la capacidad de los padres y las madres de transmitir recursos (económicos, sociales y culturales) a sus hijos/as. La solidaridad familiar es uno de los principales mecanismos de reproducción de la estructura social en todas las sociedades humanas. Las sociedades post-industriales no constituyen una excepción. Lo que si resulta novedoso en este tipo de sociedades es el protagonismo de la acción pública de los Estados del Bienestar en la configuración de los mapas de desigualdad y exclusión social. En la mayoría de los países desarrollados el gasto social se materializa en transferencias financieras y servicios que corrigen la asignación de recursos que realiza el mercado laboral, sacando de la precariedad a colectivos vulnerables. Para algunos de estos colectivos, las prestaciones sociales constituyen su principal fuente de ingresos.

Buena parte de la expansión del gasto social en las últimas décadas va a parar a programas cuyos destinatarios principales son personas de edad avanzada, tales como pensiones y sanidad. En la mayoría de los países de la OCDE estos capítulos presupuestarios absorben cerca de dos terceras partes del gasto total. Una de las causas es la evolución reciente de la pirámide de edad. La población de los países de la OCDE envejece de forma considerable en las últimas décadas. En el conjunto de estos países, en cuarenta años la proporción de personas mayores de 65 años se incrementa un 50%: pasa del 9,4% en 1960 hasta cerca del 14% en el año 2000. Eso supone un desembolso extra importante para las arcas públicas. Sería, sin embargo, erróneo atribuir la

expansión del gasto público a favor de las personas ancianas simplemente al incremento de su peso demográfico. En todos los países de la OCDE, las pensiones son hoy más generosas que cuarenta años atrás y las condiciones de elegibilidad menos restrictivas. Del mismo modo, la asistencia sanitaria (de la que se beneficia, sobre todo, la población anciana) es también mejor, más cara y está más universalizada (Pierson 2001, O'Higgins 1988).

No puede decirse lo mismo de alguno de los programas diseñados para mejorar la condición social de colectivos más jóvenes. El caso más llamativo son los subsidios y ayudas a las familias que, salvo en los países escandinavos, siguen absorbiendo sólo una porción exigua del gasto público. Eso ocurre en el momento en que las necesidades de los/as jóvenes dispuestos a formar sus propias familias son más apremiantes, se incrementan las tasas de pobreza de los hogares con niños/as, especialmente la de los (cada vez más numerosos) hogares encabezados por madres solteras, y en algunos países, se producen crisis de fecundidad (O'Higgins 1988, Sgritta 2001, Esping-Andersen 1999). Las inversiones en educación y vivienda tampoco acaban de ajustarse a las necesidades cambiantes de la juventud. Considerando el incremento sustancial de los/as jóvenes que prolongan sus itinerarios formativos, resulta chocante que en la mayoría de los países el porcentaje del PIB destinado a gasto en educación haya permanecido estable o, en algún caso, se haya incluso reducido. Del mismo modo, las inversiones que favorecen la accesibilidad de los/as jóvenes a la vivienda disminuyen, precisamente cuando la evolución de las necesidades en ese capítulo devienen mayores (Trilla 2001). La única excepción a esta tendencia a gastar menos en políticas dirigidas a colectivos más jóvenes es el incremento de los recursos destinados a las políticas activas de empleo, aunque están lejos de compensar descensos de otras partidas (**Tabla 2.3**).

(Tabla 2.3)

Esta orientación de las prioridades públicas sugiere que la vulnerabilidad creciente de los/as jóvenes en las sociedades postindustriales no se produce únicamente en el terreno económico o laboral. Aunque queda mucho por investigar en este terreno, parece que los/as jóvenes carecen a menudo de la capacidad de grupos de edad más avanzada para impulsar demandas propias y arrastrar a los poderes públicos a “rejuvenecer” sus compromisos sociales. Las razones que se aducen para ello son diversas. En primer lugar, desde la lógica de la elección

racional, no corresponde a los/as jóvenes reivindicar derechos y beneficios que, a la postre, no van a revertir sobre ellos/as, debido al carácter transicional de la etapa juvenil. Todo proceso de cambio institucional lleva su tiempo mientras que, como reza el proverbio “la juventud es una enfermedad que se cura con la edad”. En segundo lugar, se argumenta que los agentes políticos y sociales tienden a representar los intereses de grupos de edad más avanzada, bloqueando iniciativas que pudieran redundar en beneficio de grupos más jóvenes si de este modo pudieran lesionarse los intereses de sus representados. Por ejemplo, algunos autores cargan las tintas sobre el papel de los sindicatos, comprometidos, a su juicio, en la defensa de los privilegios de afiliados, por lo general trabajadores experimentados, con contratos fijos y sueldos relativamente elevados (Layard, Nickell y Jackman 1991). Pero parece dudoso que deba otorgarse un protagonismo tan alto a la acción sindical en el preciso momento en que las organizaciones sindicales en la mayor parte de Europa atraviesan sus horas más bajas, situación propiciada por el declive de los sistemas de negociación corporativista.³⁵

Quizá la clave para entender el fracaso aparente de los/as jóvenes para ejercer una influencia mayor sobre el diseño de las políticas de bienestar sea el peso político creciente de la población anciana en la sociedad contemporánea. Quienes se dedican a analizar la expansión de los Estados de Bienestar de los países desarrollados después de la postguerra, saben que uno de los factores determinantes del gasto social es el volumen de la población mayor de 65 años (Pampel y Williamson 1988). Los Estados del Bienestar son un logro social que mejoran las condiciones de vida de las personas ancianas, más que las de ningún otro grupo social. Los ancianos/as se convierten en los clientes principales del Estado de Bienestar y sus valedores más entusiastas. Son, directa o indirectamente, los responsables máximos del inmovilismo de los sistemas de protección pública. La “maduración” de compromisos adquiridos por el Estado de Bienestar con estas generaciones en el pasado, a través de cotizaciones a lo largo de la vida laboral que confieren derechos cuando ésta termina, representa un factor de estrangulamiento presupuestario que impide la reubicación de las inversiones sociales para atender necesidades

³⁵ Es más, como pone de manifiesto Emma Cerviño (2003), en referencia al caso español, sindicatos cuya base de representación son *insiders* pueden comprometerse en la defensa de los *outsiders* por motivos de supervivencia organizativa. El crecimiento desmesurado del número de trabajadores precarios entraña riesgos organizativos fuertes para los sindicatos, al erosionar su capacidad de movilización y su poder de negociación. A partir de cierto umbral, es previsible que el temor a los costes organizativos que el aumento de la temporalidad acarrea pese más en las estrategias sindicales que las ventajas que la segmentación del mercado de trabajo tiene para las propias bases de los sindicatos. Según la autora, esto sucedió en España a partir de 1989, cuando la defensa de los trabajadores temporales se convirtió en el objetivo sindical principal.

nuevas. A efectos políticos, las personas de 65 y más años constituyen un bloque cuyos intereses tienden a la convergencia. Desatender sus necesidades y demandas supondría un suicidio electoral que ningún gobierno o partido político parece dispuesto a acometer. Como demuestra Paul Pierson (1994, 2001) en su análisis de la evolución reciente de los Estados de Bienestar, incluso los gobiernos más proclives a acometer reformas tienden a mostrarse cautos a la hora de plantear cambios que pudieran concitar el descontento de un colectivo tan numeroso y homogéneo como son las personas mayores.

Desde un punto de vista ideológico, muchos Estados invocan el principio de subsidiariedad para no intervenir, según el cuál corresponde a las familias resolver los problemas de los integrantes de la unidad doméstica que atraviesan dificultades. La asistencia que las familias prestan a sus jóvenes contribuye de forma decisiva a su desmovilización, desactivando la motivación para ejercer presión sobre el Estado. La mayoría de los/as jóvenes europeos declaran obtener recursos financieros de su familia, aunque el porcentaje de beneficiarios y la magnitud de ese apoyo varían de forma significativa. En los países con tasas bajas de desempleo y sistemas públicos relativamente generosos (como Dinamarca u Holanda) las personas jóvenes pueden valerse por sí mismas fuera del hogar de sus padres, aunque esto no excluye que recaben además apoyo económico de sus padres. La familia cobra protagonismo fundamentalmente en los países del sur de Europa, donde las condiciones materiales de los/as jóvenes son críticas y las ayudas del Estado escasas. En los países meridionales, las familias proporcionan alojamiento y manutención a los hijos/as durante un período de vida cada vez más largo. La inmensa mayoría de los/as jóvenes españoles, griegos e italianos de 20 a 24 años de ambos géneros, y más de la mitad de los varones que tienen entre 25 y 29 años, viven en el hogar de sus padres (**Tabla 2.4**).

(Tabla 2.4)

Desde un enfoque culturalista, se insiste en la singularidad del régimen familiar mediterráneo (Roussel 1992), llamado “familiarista” debido al énfasis que el sistema de valores que lo arropa concede al papel protector de la familia. Según esta interpretación, en el sur de Europa no rige con el mismo vigor la norma cultural que invita a los/as jóvenes a emanciparse a edad temprana. A su vez, los padres tendrían asumida de forma incuestionada la obligación de ayudar a sus hijos/as hasta que estos últimos eligieran independizarse económicamente y formar

su propia familia (Naldini y Jurado 1996). Con frecuencia los padres pondrían su capital social al servicio de la búsqueda de un buen empleo para sus hijos/as y sacrificarían una porción significativa de su patrimonio para ayudarles a adquirir una vivienda en propiedad. Consumada la emancipación, las redes familiares habrían facilitado que las madres que trabajan pudieran proseguir sus carreras laborales, ofreciendo “madres sustitutas”, usualmente la propias abuelas u otros parientes residiendo en las cercanías (Tobío 2002, Moreno 2002). A juicio de algunos/as analistas, esta predisposición de los padres a ayudar a sus hijos/as puede llegar a extremos socialmente perniciosos, al alimentar una suerte de “ética del gorrón” que se habría generalizado entre una juventud excesivamente consentida (A. de Miguel 1997).

La permanencia de los/as jóvenes en el hogar de sus padres contribuye de forma importante a prevenir estados carenciales extremos. Esto no sucede en otros países como el Reino Unido, donde las personas jóvenes tienden a residir fuera del hogar de sus padres, lo que se traduce, a falta de ayudas económicas adecuadas por parte del Estado, en tasas de pobreza relativamente altas. Sin embargo, poner un énfasis excesivo en la eficacia del modelo mediterráneo resulta distorsionador. Algunos datos arrojan sombras sobre la capacidad de la familia mediterránea de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de la juventud. Prolongar la estancia en el hogar paternal no es una panacea. Un porcentaje bastante alto que “elige” este modelo de convivencia vive en hogares que atraviesan dificultades económicas: un 42% en España, 35% en Portugal, 25% en Italia (Comisión Europea 1997: 81). Hay razones para pensar que, en contra de la opinión extendida, los niveles de aceptación de este modelo no son tan altos como presumen algunos analistas. Así, por ejemplo, al 68% de los/as jóvenes españoles que tienen entre 15 y 29 años y que viven con sus padres le gustaría tener una convivencia diferente a la que tienen en la actualidad, preferentemente junto con su pareja (46%) (Cruz y Santiago 1999: 59)³⁶. La proporción de jóvenes que consideran que prolongar su estancia en el hogar de sus padres es “una buena idea” es más baja en España que en todos los demás países de la Unión Europea (Eurostat 1993).³⁷ Eso sugiere que muchos jóvenes, más que observar una pauta cultural profundamente arraigada en la conciencia colectiva, aceptan quedarse con sus progenitores porque no tienen más remedio, o porque las alternativas resultan menos atractivas. Tampoco los miembros de la generación a la que pertenecen sus padres se muestran satisfechos con la

³⁶ Datos de 1996 (CIS-INJUVE, estudio 2.262).

³⁷ Datos de 1993 (Eurobarómetro 39.0).

situación. Al igual que sucede con los/as jóvenes, el porcentaje de personas adultas de 45 a 54 años que consideran que la prolongación de la convivencia entre padres e hijos es una “buena idea” es también la más baja de la Unión Europea. No sólo rechazan que sea una buena opción sino que, como observa Amando de Miguel (1997), las generaciones mayores tienden a abrigar una visión crítica del enquistamiento de los/as jóvenes en el hogar de los padres. Por ejemplo, un 53% de los españoles entre 45 y 64 años (y un 57% de los mayores de 65) declaran estar de acuerdo con que “los jóvenes no quieren salir de casa de sus padres porque así es más cómodo vivir”.

La evidencia empírica rechaza también la hipótesis de que, a diferencia de lo que sucede en otros países, las familias en las sociedades mediterráneas siguen ocupándose de sus hijos/as después de que éstos se establecen por su cuenta. En el sur de Europa el apoyo económico familiar que los hijos/as declaran recibir es escaso. Según datos de Eurostat, extraídos del *Panel de Hogares de la Unión Europea* (1994) sólo el 7% de los jóvenes emancipados entrevistados en España, el 9% en Italia, y un exiguo 2% en Portugal, manifiesta haber recibido ayuda económica por parte de su familia o amigos, mientras que estos porcentajes son superiores en países de la Europa del norte, como Holanda (12%), Dinamarca (18%), o Alemania (22%). Es difícil determinar el significado exacto de estas cifras. Una interpretación posible es que las familias mediterráneas no ayudan más porque no pueden. El hecho de que más del 70% de las familias españolas, italianas y portuguesas declaren que son incapaces de ahorrar (frente a una proporción que oscila en torno al 50% en Dinamarca, Alemania y Holanda) parece sugerir que las diferencias observadas entre Europa septentrional y la meridional responde, en buena medida, a la menor solvencia económica de las segundas (Comisión Europea 1997: 82).

Los padres que no apoyan económicamente a sus hijos/as emancipados pueden, sin embargo, jugar un papel crucial prestando otro tipo de servicios, como es el cuidado de nietos/as o la ayuda en tareas domésticas. A juicio de algunos analistas, el papel cuidador y asistencial de las redes familiares se instituye como un recurso de suma importancia para las nuevas familias en la Europa meridional, haciendo posible que un número considerable de madres empleadas puedan proseguir sus carreras laborales (Moreno 2001, Tobío 2002). Esta interpretación es excesivamente optimista. A la luz de la evidencia comparativa que comienza a disponerse, no se puede concluir que la implicación de las familias en esas actividades sea mayor en la Europa meridional que en los países nórdicos, sino que las circunstancias en que se presta la ayuda son

distintas, lo que da lugar a modalidades y estrategias diferentes. En una encuesta reciente sobre *pautas de solidaridad intergeneracional*, en seis países, se pone de manifiesto que prácticamente el doble de abuelas/os dice participar en el cuidado de los nietos/as en Noruega que en España (30% y 16 %, respectivamente), aunque en nuestro país estos cuidados se ejercen de forma más regular (Bazo 2002). Bajo estas cifras subyacen dos realidades distintas. Las familias con niños/as en Noruega cuentan con una red asistencial pública extensa que socializa el cuidado de los niños/as, lo que descarga de responsabilidades a las madres empleadas y a sus abuelas/os. Una proporción importante de abuelas presta ayuda ocasional en el cuidado de nietos/as. En España, donde la Administración Pública contribuye menos a establecer condiciones que permitan conciliar la vida laboral y familiar de las mujeres, el nivel de exigencia es mayor. Las mujeres que consiguen resolver las contradicciones entre vida laboral y familiar lo hacen a menudo gracias al sacrificio de abuelas que aceptan actuar como madres sustitutas, asumiendo la mayor parte de responsabilidades que corresponden a la madre en el modelo familiar tradicional (Tobío 2002). Pero esta realidad no debe oscurecer el hecho de que existen otras muchas mujeres que no consiguen arrancar de sus madres o suegras un apoyo de tal magnitud. Algunas se ven abocadas a retrasar el calendario reproductivo o incluso a renunciar a la maternidad para desarrollar su vida laboral. Un gran número sigue interrumpiendo sus carreras laborales tras dar a luz (Marí-Klose y Nos 1999), tienen que completar “jornadas interminables” (Durán 1986), o destinar una parte sustancial de los ingresos familiares a sufragar servicios remunerados de ayuda doméstica, atención y cuidados (Tobío 2002).

La familia mediterránea merece ser valorada como soporte fundamental que asegura unos niveles mínimos de bienestar a jóvenes que atraviesan momentos difíciles. Pero la evidencia disponible obliga a ser cautos. Es cuestionable que las transferencias intergeneracionales de recursos y servicios basten para paliar el deterioro de la situación y expectativas de los/as jóvenes provocados por el desempleo, la precariedad laboral y la desatención de la que son objeto por parte de los poderes públicos. En el transcurso de las últimas dos décadas se producen cambios considerables de las pautas de *convivencia*, *nupcialidad* y *fecundidad* de los jóvenes. Hay motivos para pensar que, en aspectos fundamentales de la trayectoria vital de los/as jóvenes, se está abriendo una brecha entre voluntad y realidad. Una mayoría de jóvenes sigue expresando deseos de independizarse económicamente e irse a vivir por su propia cuenta y riesgo, de convivir en pareja, o tener hijos/as, pero un porcentaje bastante alto tiene que renunciar a hacerlo. En las

encuestas que piden opinión a los/as jóvenes españoles sobre estas cuestiones, más del 90% de los que tienen edades comprendidas entre 16 y 24 años atribuyen mucha o bastante importancia en su vida al “trabajo” y a “ganar dinero” (CIS, Estudio 2.221, 1996), pero menos de la mitad trabajan y un porcentaje todavía inferior reconoce obtener recursos económicos suficientes para vivir exclusivamente de sus ingresos. Esas mismas encuestas indican que la institución del matrimonio goza entre ellos/as de una valoración alta, pero las tasas de nupcialidad se sitúan en niveles históricamente bajos, después de descender de forma irremisible desde finales de la década de los setenta. En los últimos años, España presenta (junto a Italia) las tasas de fecundidad más bajas de la Unión Europea, a pesar de que más de ocho de cada diez mujeres entre 15 y 29 años declaran su intención de tener descendencia. Como puede advertirse en la **Tabla 2.5** en Italia, Grecia y España, la diferencia entre el número ideal de hijos/as que mujeres y varones desearían tener y los que tienen (medida como el cociente entre estas dos cifras) es significativamente mayor que en otros países. En los tres países, el valor de este cociente disminuye durante la década de los noventa, lo que significa que se ensancha la brecha entre aspiraciones y realidad. En 2000, el número medio de hijos/as en los países del sur de Europa es la mitad del deseado.

(Tabla 2.5)

La juventud actual está protagonizando un tránsito inédito a la vida adulta. Es todavía demasiado pronto para estimar los efectos que la compleja situación laboral va a tener sobre su vida futura. Es posible que trayectorias prolongadas de bloqueo en la inserción laboral puedan alimentar, entre algunos/as jóvenes, una cultura del desafecto, amén de propiciar la pérdida de aptitudes y actitudes indispensables para competir por empleos prestigiosos. Es importante reseñar, sin embargo, que son muchos los jóvenes que no permanecen de brazos cruzados. El alargamiento del período de transición al mundo del trabajo se está convirtiendo en una oportunidad que aprovechan para preparar mejor su ingreso en la vida adulta a través de la prolongación de su formación y, entrada la treintena, programar una paternidad/maternidad responsable y autodeterminada. Aunque quizás impuesta por las circunstancias del entorno laboral, la prolongación de la experiencia educativa ofrece a los/as jóvenes un marco en el que construir una imagen positiva de sí mismos mientras esperan pacientemente a que se abran los

resquicios que posibiliten su ingreso en el mundo adulto. Hay motivos para pensar que para ciertos segmentos de la juventud, algunos de los déficits de bienestar que experimentan puedan ser paliados con creces años más tarde. Aunque resulta temerario hacer cualquier pronóstico, la fortuna de los/as jóvenes va a depender de las trayectorias vitales que sigan durante ese período singular y decisivo de su vida.

Capítulo 3

ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL

“Encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar
ni un solo día de tu vida”

Confucio

En los últimos tres decenios España encarna una imagen de progreso que desmiente la idea de que las posibilidades de desarrollo de un país vengan predeterminadas por legados políticos e inercias culturales. La recuperación de las libertades políticas, expansión de las libertades civiles, adquisición de derechos sociales, integración en Europa, extensión de la educación superior, así como la elevación del poder adquisitivo de segmentos amplios de la población, posibilitan que, en un espacio de tiempo récord, España se convierta en lugar más habitable. Es, en la actualidad, un país donde los ciudadanos/as disfrutan, al igual que en las sociedades occidentales más desarrolladas, de posibilidades amplias de realización personal. La trayectoria biográfica de los españoles/as que viven a caballo entre los dos siglos viene marcada por la confluencia simultánea de diversos procesos de modernización. Gracias a esos cambios, algunos grupos sociales que tradicionalmente experimentan en carne propia los rigores de la pobreza y la marginalidad, la exclusión social y política, la discriminación por razón de género o de orientación sexual, ven mejoradas sus oportunidades vitales. En apenas tres décadas, la sociedad española protagoniza cambios que en otros países de su entorno tienen lugar de forma gradual.

Junto a esos logros, otros desarrollos no invitan a la autocomplacencia. La evolución reciente de la sociedad española presenta varias coincidencias desafortunadas, que afectan de forma crucial las trayectorias biográficas de la primera generación de jóvenes que crece y se forma en un régimen democrático. Su llegada a la mayoría de edad pone a prueba la capacidad de integración social de la sociedad española, sometiénola a presiones extraordinarias. Se trata de la generación más numerosa de la historia, la primera que participa masivamente en los niveles medios y superiores del sistema educativo, la primera en que las mujeres tienen la voluntad de incorporarse mayoritariamente al mercado de trabajo, y la primera en que pretenden hacerlo de forma permanente. Ponen así fin a la pauta que siguen sus madres de abandonar sus empleos al casarse y/o tener hijos/as. El escenario económico en que confluyen estos procesos de cambio no es el más adecuado para absorber la masa de personas que acude, desde diferentes lugares, al mercado de trabajo.

Durante tiempo la economía española ha demostrado una capacidad escasa para generar empleo neto. Algunos economistas achacan esta dificultad a las “rigideces” del mercado de trabajo, y más en particular, a la fuerte división entre quienes “están dentro” (*insiders*) y quienes “están fuera” (*outsiders*) (Bentolina y Dolado 1994). Según este argumento, la sobreprotección de los primeros eleva los costes de contratación y despido, relegando a los trabajadores más jóvenes, a quienes buscan su primer empleo, y a las mujeres, a la economía sumergida, la subocupación, y el desempleo. Al margen de este tipo de dinámicas, además de no crear empleo, la economía española tiende a destruir empleos a un ritmo acelerado, en especial durante períodos agudos de crisis: de 1976 a 1985 y entre 1991 y 1994. A diferencia de lo sucedido en otros países del entorno, España experimenta de forma casi simultánea dos procesos que en otros países tuvieron lugar en oleadas espaciadas entre sí por varias décadas: *desruralización* y *desindustrialización* (Esping-Andersen 1999, J. M. de Miguel 1998). Esta coincidencia desafortunada provoca que precisamente cuando las cohortes más numerosas y preparadas de la historia se disponen a incorporarse al mercado de trabajo, se está destruyendo una cantidad considerable de empleos agrarios e industriales.

La concurrencia inédita de cambios estructurales a nivel demográfico, cultural y económico configura un escenario complejo para los/as jóvenes españoles, en que hacerse adulto (coloquialmente, hacerse “todo un hombre” o “convertirse en una mujer”) es una odisea que requiere una cantidad enorme de tiempo y dedicación, distribuidos en aproximaciones sucesivas, parciales e intermitentes a un destino que se muestra evasivo. En las últimas décadas los/as jóvenes pasan más tiempo que nunca formándose, buscando su primer puesto de trabajo, esperando encontrar un empleo que garantice su seguridad económica, permita adquirir una vivienda, y formar una familia. España sobresale como uno de los países desarrollados en que las personas jóvenes prolongan su educación hasta edades más tardías, pasan más tiempo buscando su primer empleo o rotando entre empleos precarios, y retrasan más tres procesos: emancipación, matrimonio y fecundidad.

Contextos demográficos y educativos

Desde que Thomas Malthus publicara en 1798 el *Ensayo sobre el principio de la población*, una de las tesis que han hecho correr más ríos de tinta dentro de las ciencias sociales es la naturaleza

de la relación entre el crecimiento demográfico de una población y su calidad de vida. En opinión de Malthus, la tendencia de las poblaciones a hacerse más numerosas aboca a segmentos de la sociedad a situaciones de pobreza extrema, al reducirse los recursos disponibles per cápita, y en particular los alimentos: “The food therefore which before supported seven millions must now be divided among seven millions and a half or eight millions” (Malthus 1970 [original 1798]: 15). Quienes resultan más perjudicados en estas situaciones son las clases bajas: “The poor consequently must live much worse, and many of them be reduced to severe distress. The number of labourers also being above the proportion of the work in the market, the price of labour must tend toward a decrease, while the price of provisions would at the same time tend to rise. The labourer therefore must work harder to earn the same as he did before. During this season of distress, the discouragements to marriage, and the difficulty of rearing a family are so great that population is at a stand” (p.15). El deterioro de las condiciones de vida de las clases bajas es, a juicio de Malthus, el requisito para la recuperación de condiciones de prosperidad que imperaban al principio y el reinicio del ciclo demográfico y económico. La pobreza empuja a los trabajadores a aceptar sueldos más bajos y condiciones más precarias y a las familias a tener menos hijos/as. La elevada demanda de alimentos incentiva a los agricultores a buscar nuevos terrenos de cultivo y a mejorar su productividad hasta que la producción de medios de subsistencia se ajusta a las necesidades de la nueva población.

Aunque las tesis de Malthus han sido puestas en entredicho desde diferentes perspectivas, sus intuiciones constituyen todavía fuente de inspiración de gran número de líneas de investigación. Una de las tradiciones más fructíferas es la que relaciona el tamaño de las cohortes nacidas en un determinado período y sus itinerarios vitales. Desde este punto de vista, las cohortes numerosas suelen estar sometidas a presiones maltusianas intensas, debido a la competencia que se establece entre sus miembros por un stock relativamente estable de recursos vitales y de oportunidades de integración. Dentro del hogar comparten recursos familiares con un número mayor de hermanos/as. Asisten a escuelas masificadas en las que reciben atención insuficiente, lo que complica las iniciativas socializadoras encaminadas a orientar intereses y actitudes de los jóvenes en la dirección que más interesa a la comunidad de adultos. En el mercado de trabajo se las tienen que ver con un volumen considerable de competidores/as potenciales por los puestos de trabajo disponibles, todo lo cual repercute negativamente sobre sus ingresos y las condiciones de trabajo que se ven forzados a aceptar. Las desventajas que afrontan

se traducen en riesgo más alto de desempleo y tasas de fecundidad más bajas. Los miembros de las cohortes superpobladas son, desde este punto de vista, el sucedáneo de las “clase bajas” de las que nos hablaba Malthus.

Según la *Revisión del Padrón Municipal de Habitantes*, de enero de 1999, hay en España cerca de dos millones más de jóvenes entre 15 y 29 años que los que había en 1970 (9,4 versus 7,4 millones respectivamente). En tres décadas la población joven crece en algo más del 25%, mientras que la población total lo hace un 18%. Con un 23,5 % de jóvenes en estas edades, España es en 1999, junto a Irlanda (25,3%) y Portugal (23,5%), el país de la Unión Europea donde los/as jóvenes representan una proporción mayor en relación con la población total. Estas cifras esconden que el crecimiento no es monotónico. El número de personas jóvenes alcanza su máximo histórico a inicios de la década de los noventa, y desde entonces comienza a descender lenta pero de forma constante como consecuencia de la caída en picado de la natalidad a finales de los años setenta e inicios de los ochenta. Según las proyecciones del INE, en 2004 la población entre 15 y 29 años ya sólo representa el 20% de la población total, lo que la sitúa cerca del valor promedio de la Unión Europea. El perfil demográfico de los/as jóvenes se transforma. Se prevé que en poco más de una década el porcentaje de jóvenes se va a reducir al 15% de la población.

Estas cifras nos sitúan en una etapa transicional, que marca el fin de una etapa en que predominan las cohortes de efectivos superpoblados. El volumen demográfico de las generaciones nacidas entre 1968 y 1978 juega un papel de primer orden en sus itinerarios biográficos. El paso de estas cohortes por la escuela, el instituto de enseñanza media, o la universidad se refleja en un aumento espectacular de las demandas educativas. Son años de “masificación” en las aulas. Este fenómeno se ve agravado por la dificultad de encontrar acomodo laboral para contingentes tan numerosos. En esas condiciones, prolongar el período formativo se presenta muchas veces como la alternativa menos mala, lo que retroalimenta la intensificación del uso de los recursos educativos existentes.

Pero esta situación está tocando a su fin. Aunque los/as jóvenes de 25 y 29 años todavía pertenecen a una cohorte voluminosa, las que vienen detrás son significativamente más reducidas en número. Según proyecciones del INE, en 2004 hay 3,4 millones de personas de 25 a 29 años, 2,7 millones de 20 a 24 y sólo 2,2 millones de 15 a 19. Estos números sugieren que se están configurando espacios vitales nuevos para los miembros de las cohortes más jóvenes. El tamaño

de los hogares es cada vez menor. Debido a la fuerte caída de la fecundidad en los años ochenta, una mayoría amplia de miembros de las cohortes más pequeñas se cría en hogares de tres o cuatro miembros, habitualmente junto a sus progenitores y quizás un hermano/a (Requena 1999). El número de niños/as en los colegios, también disminuye sensiblemente, aunque no así el número de estudiantes cursando estudios medios y superiores, a causa del incremento en la tasa de participación en estos niveles educativos. Es la época en que las clases medias bajas acceden por fin a la Universidad. El crecimiento de la población universitaria a finales de los años noventa es notorio si se tiene en cuenta que ya se ha iniciado aunque de forma gradual, la disminución del tamaño de sus cohortes. Como se observa en el **Gráfico 3.1**, la proporción de jóvenes de 18 a 23 años que cursa estudios universitarios pasa del 19% en el curso 1980/81 al 44% en el 1999/00. Estas tendencias sugieren que, coincidiendo con la reducción del tamaño de los hogares, las familias parecen haber intensificado la apuesta por la educación de sus hijos/as. Según algunas interpretaciones, esta estrategia familiar refleja un cambio adaptativo de las mentalidades a un entorno rápidamente cambiante, en el que los progenitores demuestran una voluntad creciente de sacrificar recursos para asegurar el posicionamiento social de sus hijos (Gil Calvo 2001). Desde un punto de vista alternativo, no es necesario invocar un cambio de preferencias para explicar esta tendencia (Easterlin 1987). Es probable que la inversión en “calidad” de los hijos/as obedezca al hecho de que las familias necesitan dispersar cada vez menos los recursos que están dispuestas a destinar a su educación. *Ceteris paribus*, al disminuir el número de personas dependientes en el hogar, se incrementa la capacidad de las familias para utilizar una cantidad mayor de recursos en la educación de cada uno de sus hijos/as, prolongando su formación hasta edades más tardías.

(Gráfico 3.1)

Hay razones para pensar que la evolución reciente de los parámetros demográficos va a tener implicaciones de gran trascendencia en el futuro. El tamaño considerable de las cohortes que se incorporan al mercado de trabajo durante las décadas de los ochenta y noventa representa una garantía para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones en el corto plazo. Sin embargo, a medio plazo las cargas financieras van a recaer sobre cohortes más pequeñas, y previsiblemente, de no producirse un aumento de las cotizaciones (lo que parece contraindicado

en el entorno económico actual) o una reducción de las prestaciones, van a aumentar los niveles de déficit del sistema. De acuerdo a las proyecciones del Ecofin (2000), la tasa de dependencia (población de 65 y más años por cada 100 personas de 16 a 64 años) pasarán del un 27% en el año 2000 a un 42% en el 2030 y un 66% en 2050. Bajo supuestos verosímiles de crecimiento económico y de evolución demográfica, este incremento de las tasas de dependencia lleva aparejado un aumento de entre 6,4 y 8,3 puntos en la proporción del PIB que se debe dedicar a gasto público en pensiones.³⁸ El precio que va a tener que pagar la sociedad española para mantener las cotas de bienestar conquistadas para su población anciana es casi inalcanzable. Estas proyecciones abren un escenario perturbador. Es previsible que las mayores amenazas para la viabilidad financiera del sistema público de pensiones sobrevengan precisamente cuando llegue el momento de la jubilación para las cohortes que han sufrido de modo más intenso los rigores de la crisis del desempleo, la falta de oportunidades para emanciparse o para formar una familia.

Transición al mundo del trabajo

Con un retraso de varias décadas respecto a otros países, en los últimos años se produce una expansión extraordinaria del sistema educativo en España, que permite no sólo recortar diferencias en las tasas de escolarización en los diferentes niveles formativos, sino superar las de países que tradicionalmente presentan tasas mucho mayores, como Italia o Reino Unido. El acceso a la educación se democratiza. Un 23% de jóvenes de 25 a 29 años cuyo padre tiene estudios primarios, y un 38% de los/as que tienen padres que terminaron la enseñanza secundaria, tienen ahora la oportunidad de completar estudios superiores (CIS, *Estudio 2.221*, 1996).³⁹ Además, las mujeres se incorporan masivamente a todos los niveles educativos, hasta el punto que, en la actualidad, hay más mujeres que varones matriculadas en el bachillerato y carreras universitarias (**Gráfico 3.2**).

(Gráfico 3.2)

³⁸ Este incremento equivale a más de un 70% del gasto actual en pensiones, y representa una porción del PIB superior a la que se destina a capítulos como sanidad o educación.

Al examinar la distribución por edades de la población escolarizada a la luz de lo que ocurre en los países que se sitúan a la cabeza de la OCDE, se pone de manifiesto que las diferencias más importantes radican en la población de 15 a 19 años. Mientras en España sólo el 73% de los jóvenes en estas edades estudian, en Estados Unidos lo hace el 82 %, en Suecia el 86%, en Alemania el 90%, y en Francia el 96%. Entre los jóvenes de 20 a 29 años, las diferencias son menores, y en muchos casos la tendencia se invierte. En España el 44% de los jóvenes entre 20 y 24 años y el 16% de los que tienen 25 a 29 sigue estudiando, en Estados Unidos es 32% y 12% respectivamente, en Suecia 40% y 20%, en Alemania 32% y 13%, y en Francia 51% y 11% (OECD 1998b). La expansión del sistema educativo en España es evidente en las edades más tardías, entre quienes han superado la criba que tiene lugar tras la finalización de la etapa de escolarización obligatoria. Llegado este momento crítico, en España (y en otros países del sur de Europa) se plantea una disyuntiva entre seguir estudiando y buscar un empleo (por difícil que resulte encontrarlo). Sólo una minoría contempla la posibilidad de combinar ambas opciones.

Los/as jóvenes que abandonan el sistema educativo a edades tempranas tienden a hacerlo de forma definitiva (**Tabla 3.1**). Menos de un tercio de los jóvenes que abandonan el sistema educativo antes de los 17 años piensan que volverán en algún momento a estudiar. Sus expectativas educativas contrastan con las de los jóvenes que prolongan sus estudios post-obligatorios. Entre los jóvenes que prolongaron sus estudios hasta los 23 años (la mayoría, después de cursar estudios superiores), más del 70 % de jóvenes creen que volverán a dedicarse a estudiar en algún momento. En un contexto en que la inserción laboral resulta dificultosa, para muchos/as jóvenes que han prolongado su formación por encima de los veinte años graduarse no significa poner fin a su carrera educativa si las credenciales educativas logradas no aseguran una puerta de acceso de suficiente calidad al mercado de trabajo.

(Tabla 3.1)

Los jóvenes que permanecen en el sistema educativo lo hacen a tiempo completo: su contacto con el mundo del trabajo es mínimo. Como puede observarse en la **Tabla 3.2**, entre

³⁹ Esto no significa que se hayan suprimido (quizás ni siquiera aminorado) las diferencias en el logro educativo de los/as jóvenes en función de su extracción social. Entre los jóvenes que han finalizado sus estudios, el 59% de los hijos/as de padres con estudios superiores también los tienen, pero sólo un 10% de los hijos/as de padres sin estudios.

los/as jóvenes de 15 a 19 años que estudian sólo un 2% trabaja y menos de un 1% realiza un programa de formación profesional en empresas. En otros países de la OCDE un porcentaje significativo de los/as jóvenes de estas edades que estudian también trabajan (14% en Suecia, 32% Estados Unidos, 36% en el Reino Unido y en Canadá, 40% en Australia) o realizan un programa de formación profesional en empresas (23% en Alemania, 32% en Austria, 35% en Suiza). La dedicación exclusiva a los estudios tiende a prolongarse más allá de los 20 años entre los/as jóvenes que prosiguen su educación. En España el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que trabajan además de estudiar es el 10%. En Suecia esta proporción es el 20%, en Estados Unidos 59%, en el Reino Unido 43%, en Canadá 44%, y en Australia 63%. En Alemania, Austria y Suiza trabaja 11%, 19% y 45% respectivamente, y un porcentaje significativo sigue vinculado a programas de formación profesional dentro de empresas (28%, 11% y 20% respectivamente). Entre los 25 y 29 años, más del 70% de los jóvenes norteamericanos, australianos o suizos que estudian también trabajan. En el Reino Unido lo hace el 64%, en Austria y Suecia un poco más del 40%. En España sólo el 30%. En España, algunos/as jóvenes que estudian se encuentran desempleados/as, pero la inmensa mayoría, especialmente los menores de 24 años, se mantienen inactivos mientras estudian. A diferencia de lo que sucede en otros países, ser estudiante significa de modo habitual carecer de recursos económicos propios generados a partir del trabajo remunerado. El 62% de los estudiantes a tiempo completo manifiestan carecer de ingresos personales de tipo alguno (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).⁴⁰

(Tabla 3.2)

Diversas causas explican la singularidad de estas pautas. La precariedad laboral conduce a muchas personas jóvenes a permanecer lejos del mercado de trabajo. Posiblemente, en esta decisión cuentan con el apoyo de la sus padres, que albergarían la confianza de que un mayor esfuerzo educativo de los hijos/as puede ayudarles a alcanzar una posición social mejor, o al menos equivalente, a la que disfruta la familia de origen (Requena 2002, Gil Calvo 2002). Los

⁴⁰ Es probable que los bajos niveles de participación de los jóvenes que estudian en el mercado de trabajo afecten negativamente a sus perspectivas laborales. La mayoría de análisis internacionales sugieren que los/as jóvenes que trabajan un número moderado de horas (sin comprometer el tiempo necesario para obtener buenos rendimientos académicos) alcanzan mejores resultados en el mercado laboral una vez finalizados los estudios. Algunas investigaciones circunscriben esos rendimientos positivos del trabajo a la empleos relacionados con el campo de estudios que está realizando el/la joven (Dundes y Marx 2006, Salamonson y Andrew 2006).

costes relativamente bajos de la educación en España facilitan esta estrategia. Pero, el mercado laboral en España presenta otra peculiaridad que dificulta la conciliación de la vida laboral y los estudios. En 1999, los contratos a tiempo parcial constituyen el 7,9 % del total, que aunque es casi el doble que a finales de los ochenta, está aún lejos de la media de la Unión Europea que es el 16,4% (OCDE 2000).⁴¹ Esto provoca que los/as jóvenes que desean trabajar y estudiar, por regla general sólo pueden hacerlo si aceptan empleos a jornada completa. Sólo el 13% de los jóvenes de 15 a 29 años que estudian y trabajan tienen un contrato de jornada reducida, frente al 33% de media en la Unión Europea (Comisión Europea 1997: 43).⁴² En estas condiciones, trabajar mientras se prosiguen los estudios comporta un coste personal elevado, que pocos jóvenes están dispuestos o en condiciones de asumir.⁴³

Circuitos de emancipación económica

La inserción en el mercado de trabajo es uno de los tránsitos más significativos de incorporación a la vida adulta. El valor de un empleo para la juventud no reside únicamente en los ingresos que reporta. Tener un empleo acarrea beneficios diversos de índole no estrictamente económica, aunque muchos de estos beneficios acaben repercutiendo también positivamente sobre el “valor de mercado” del trabajador/a. Se han descrito una serie de funciones “latentes” de la actividad profesional que cobran un relieve especial en proceso de transición a la vida adulta (Jahoda 1981, Furnham 1994). Así, desde la perspectiva de la *teoría del capital humano*, tener un empleo es una oportunidad de adquirir conocimientos y destrezas que capacitan al trabajador/a para realizar tareas cada vez más complejas, cumplimentarlas de forma más eficiente, y/o asumir mayores dosis de responsabilidad, lo que con el paso del tiempo debe traducirse en remuneraciones más elevadas. Desde un planteamiento psicologista, en el ejercicio de su actividad profesional, los

⁴¹ Este sesgo del mercado laboral español se debe a un marco legislativo que desincentiva el uso de este tipo de contratos y al predominio de las pequeñas empresas industriales, menos proclives a ofrecer estos empleos. A lo largo de la década de los noventa, los gobiernos han hecho algunos esfuerzos para impulsar este tipo de contratación a tiempo parcial (Samek Lodovici 2000).

⁴² Datos de 1995.

⁴³ Según investigaciones realizadas en diversos países, la realización de algún tipo de actividad laboral (o, en su defecto, práctica de formación en empresas) mientras se estudia reduce el riesgo de desempleo tras la finalización de los estudios. De ahí que, la OCDE abogue sistemáticamente desde finales de la década de los noventa por que los gobiernos implementen medidas para facilitar la posibilidad de que los/as estudiantes combinen formación con algún tipo de experiencia laboral.

trabajadores/as desarrollan cualidades y hábitos personales importantes para desenvolverse socialmente. La jornada laboral estructura la vida cotidiana de las personas al imponer una secuencia cronológica a todas sus actividades. La actividad profesional promueve la interacción social y abre posibilidades de establecer vínculos fuera del círculo más próximo. Buena parte de los proyectos y propósitos que albergan las personas adultas están ligados, de una forma más o menos directa, a los empleos que tienen o que ambicionan tener. El trabajo confiere estatus y es uno de los factores principales en la configuración de la identidad social de las personas. De ahí que la falta de recursos sea sólo una de las consecuencias (a menudo de las menos relevantes) que acarrea el desempleo. Como ponen de relieve un buen número investigaciones que se realizan a partir de la década de los ochenta, los trabajadores/as desempleados/as (o empleados/as de forma intermitente o en empleos de baja calidad) corren el riesgo de entrar en una vorágine perversa. En todos los sondeos disponibles, las personas que atraviesan dificultades laborales tienden a declararse menos felices y satisfechas con su vida que aquellas que tienen un buen empleo (Gallie y Paugam 2004: 45). Para algunas de estas personas, la experiencia del desempleo, especialmente cuando ésta es duradera, puede representar un revés serio en sus vidas, con repercusiones para su salud mental, y en última instancia, riesgos importantes de exclusión social (Warr 1987, Winnefield y Tigemann 1990).⁴⁴ Diversos estudios empíricos realizados tanto en Estados Unidos, como en algunos países europeos (como Gran Bretaña, Francia, Suecia y Alemania) ponen de manifiesto que las personas que han experimentado problemas de inserción laboral mientras eran jóvenes presentan carreras más erráticas cuando son adultos (salpicadas a menudo por episodios de desempleo), oportunidades de movilidad ascendente restringidas y remuneraciones significativamente más bajas.⁴⁵ Se han atribuido estas desventajas acumulativas a “cicatrices” psicológicas que provoca el desempleo en quienes lo experimentan, como la pérdida de autoestima, motivación para trabajar o de ciertos hábitos y habilidades sociales que valoran sus empleadores/as.⁴⁶

⁴⁴ Las respuestas individuales a situaciones de desempleo varían extraordinariamente en función de atributos demográficos y psicológicos de las personas. La aparición de problemas sociales y psicológicos severos (aislamiento, desmotivación, apatía, resignación, hábitos poco saludables) está asociada habitualmente con la prolongación de la situación de desempleo (Kieselbach 2004, Jahoda y otros 1933).

⁴⁵ Paul Ryan (2001) realiza una revisión excelente de la literatura que analiza los efectos “retardados” de los problemas laborales que se experimentan durante la juventud.

⁴⁶ Desde otro punto de vista (aunque no necesariamente contradictorio) se ha señalado que los empleadores/as prefieren contratar (o conceden los mejores empleos) a trabajadores/as cuyas trayectorias laborales anteriores no están jalonadas por períodos de desempleo. Bajo condiciones de incertidumbre respecto a la productividad real de

Pese a la magnitud de los problemas laborales de los/as jóvenes en España existe poca investigación acerca de sus experiencias como desempleados o trabajadores precarios. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y los países europeos punteros en la investigación social, tampoco existen estudios longitudinales de la envergadura necesaria para acometer este tipo de análisis. Esto obliga a trabajar con información retrospectiva recogida en estudios de carácter estático. Con estas limitaciones resulta imposible analizar las cicatrices que deja el desempleo. Lo más que puede hacerse es ofrecer una radiografía general de los itinerarios de inserción y especular sobre las consecuencias previsibles de estas trayectorias a la vista de la evidencia de que se dispone en otros países.

Para la mayoría de los/as jóvenes españoles el primer contacto serio con el mundo del trabajo se produce después de la finalización de los estudios reglados, aunque pocas veces de forma inmediata. La incorporación al mundo del trabajo en España es lenta. Habitualmente, quienes buscan un trabajo tras finalizar sus estudios comienzan un largo periplo —en que entran en un carrusel de trabajos precarios, períodos de desempleo y de formación ocupacional— hasta encontrar un empleo “significativo”.⁴⁷ A diferencia de lo que ocurre en otros países, la búsqueda de un empleo suele ser larga para todo el mundo, con independencia de su nivel educativo. La **Tabla 3.3** presenta tasas de desempleo en 1996 entre las personas que llevan fuera del sistema educativo un año, según el nivel de educación alcanzado. Puede advertirse que, en la mayoría de los países, el desempleo es más habitual entre varones y especialmente mujeres con niveles educativos más bajos. Esta pauta confirma la expectativa de que los esfuerzos educativos se ven recompensados por una mayor facilidad para encontrar empleo inmediatamente.

(Tabla 3.3)

Sin embargo, el mayor interés radica en las excepciones a esa pauta. Por un lado, es notable la capacidad del modelo educativo alemán para encontrar trabajo para los segmentos de la población joven con menos estudios. La clave del modelo alemán consiste en ofrecerles opciones curriculares para formarse profesionalmente mediante contratos de aprendizaje en empresas. Por

cualquier candidato a un empleo, los empleadores/as manejan la historia laboral como un indicio imperfecto acerca de la “calidad” de los candidatos/as.

⁴⁷ Se consideran “empleos significativos” aquellos con una duración mínima de seis meses y una jornada de al menos 20 horas semanales.

otro lado, llaman la atención las tasas elevadas de desempleo entre los jóvenes del sur de Europa, y muy especialmente entre los/as que tienen estudios superiores. En España la tasa de desempleo entre estos últimos/as un año después de haber finalizado sus estudios (tanto entre varones como entre mujeres) es el doble que la media de los países de la OCDE. Es sólo superior en Italia. Se trata de jóvenes que, como se ha tenido oportunidad de comprobar antes, tienen una experiencia laboral escasa (suelen haberse dedicado exclusivamente a estudiar), y que no han descartado seguir estudiando.

La salida del sistema educativo inaugura una etapa de incertidumbres laborales, en que resulta difícil hacer planes de futuro. La mayoría de los/as jóvenes tardan años en consolidar su situación laboral. Trascurridos entre dos y tres años sólo un 19% tiene un contrato fijo. Teniendo en cuenta que, según datos de 2002 (CIS, *Estudio 2.469*), los/as jóvenes que viven en casa declaran que necesitarían (por término medio) 1.021 euros para irse a vivir fuera de casa de sus padres, el salario medio que perciben (666 euros) se mantiene lejos del que consideran que puede ofrecerles la oportunidad de emanciparse. La **Tabla 3.4** pone también de manifiesto que las dificultades laborales tienen un carácter endémico entre los/as jóvenes de todos los niveles educativos. Entre seis y diez años después de abandonar el sistema educativo sólo un tercio de los/as jóvenes con estudios superiores que trabajan (una quinta parte de los que tienen estudios primarios) han conseguido un contrato fijo y su salario medio sigue siendo inferior al que creen necesario para sufragar sus gastos fuera del hogar de sus padres.

(Tabla 3.4)

El problema principal de la juventud española ha sido durante mucho tiempo el desempleo. Así lo reconocen los/as propios jóvenes, que preguntados por los problemas más acuciantes del país, sitúan de forma consistente el paro muy por encima de otros. La tasa de paro entre los menores de 25 años llegó a alcanzar el 40% a mediados de la década de los noventa, situándose en más del doble de la media de la Unión Europea. El desempleo de jóvenes disminuye de forma significativa desde entonces coincidiendo con la mejora de otras variables macroeconómicas y la introducción de políticas laborales de fomento de la contratación juvenil,

aunque esa tasa sigue figurando entre las más altas de Europa.⁴⁸ Las cifras agregadas ocultan diferencias importantes en la incidencia del problema del desempleo. El desempleo de los/as jóvenes en España tiene una serie de componentes que es necesario analizar.

La **Tabla 3.5** presenta los resultados de un modelo de regresión logística sobre una muestra de jóvenes de 15 a 29 años que trabajan o se declaran dispuestos a trabajar (CIS, *Estudio 2.370*).⁴⁹ La variable dependiente diferencia a los/as jóvenes que trabajan de quienes están desempleados (o buscan su primer empleo).⁵⁰ En las columnas de la tabla aparecen los coeficientes correspondientes a una serie de variables independientes tras calcular cinco modelos. En el primer modelo sólo aparecen dos variables dicotómicas, que indican si el nivel de estudios más alto alcanzado por el/la joven es “secundario”, o si es “superior”. La categoría omitida es la de “estudios primarios”, y por tanto, los coeficientes correspondientes a cada variable describen en qué medida aumenta (o disminuye) las probabilidad de empleo entre los jóvenes con “estudios secundarios” o “superiores”. Que ambos coeficientes sean positivos indica que la probabilidad de estar empleado/a (en lugar de desempleado/a) es mayor entre jóvenes con estudios secundarios o superiores que entre jóvenes con estudios primarios, aunque la diferencia de estudios superiores y primarios no es significativa.⁵¹ Este último dato resulta sorprendente, habida cuenta de la creencia generalizada de que la inversión educativa redundará en una mayor protección frente al desempleo. En los *modelos 2, 3, y 4*, que incorporan variables adicionales, el coeficiente correspondiente a la variable de estudios terciarios sigue sin ser significativo (e incluso pasa a ser negativo en el modelo 3). Los resultados del *modelo 2* apuntan que la variable “mujer” tiene una influencia significativa sobre la probabilidad de estar empleado. El *modelo 3* sugiere que la edad influye sobre la probabilidad de estar empleado/a (con los años, aumenta la probabilidad de estar empleado/a). En la misma línea, *el modelo 4* evidencia que los “años fuera del sistema educativo” afectan positivamente a la probabilidad de estar empleado/a. El principal cambio se produce al

⁴⁸ En 2005, la tasa de desempleo se ha reducido a la mitad (19,7%) respecto a los peores años de la crisis económica. Sin embargo, sigue estando muy por encima de la tasa de desempleo de la población adulta (25 a 54 años). Respecto a la población activa de esa edad, su situación empeoró. Si en 1995 la tasa de desempleo de los jóvenes (16 a 29 años) era dos veces la de la población adulta, en 2005 la razón se ha incrementado a 2,5.

⁴⁹ La ventaja de este modelo estadístico es que, como es sabido, a diferencia de los cruces bivariados de variables, permite controlar la aparición de asociaciones espurias entre la variable dependiente y los factores incluidos en el modelo. Es decir, los coeficientes representan la magnitud del efecto estadístico depurado de la influencia de otras variables.

⁵⁰ Se consideran únicamente los/as jóvenes que han dejado sus estudios.

⁵¹ El nivel de significación del coeficiente es 0,98. En el *Modelo 1* no aparecen diferencias estadísticas significativas entre las probabilidades entre jóvenes con estudios terciarios y jóvenes con estudios secundarios.

introducir en el *modelo 4* dos variables adicionales para estudiar el efecto de la interacción entre estudios y años fuera del sistema educativo. El coeficiente correspondiente a la variable “Estudios superiores” pasa a ser negativo y significativo. Es decir, si se mantiene el resto de variables a valores constantes (género, edad, años fuera del sistema educativo), existe una diferencia significativa entre la probabilidad de estar empleado/a entre jóvenes con estudios superiores y jóvenes con estudios primarios, pero sorprendentemente, a favor de los/as jóvenes con estudios primarios. Ahora bien, esta diferencia sólo existe durante los tres primeros años tras la finalización de los estudios. A partir del cuarto año la probabilidad de estar empleado/a es mayor entre los/as jóvenes con estudios superiores. Con el tiempo, la brecha entre ambas probabilidades se va ensanchando. Así puede observarse en el **Gráfico 3.3**, donde se dibujan las probabilidades de tener empleo, según el nivel de estudios y los años transcurridos desde que la persona de referencia (en este caso, una mujer de 29 años)⁵² salió del sistema educativo. Los resultados confirman, como también se puede apreciar en las tablas 3.3 y 3.4, que, a corto plazo, un título universitario no representa ninguna garantía para encontrar empleo en el mercado de trabajo español, pero abre un horizonte laboral más despejado a medio y largo plazo.⁵³

(Tabla 3.5)

(Gráfico 3.3)

Según datos del *Panel de Hogares de la Unión Europea*, España es el país donde los jóvenes tardan más en encontrar su empleo. Utilizando datos longitudinales recopilados entre 1994 y 2000, Quintini y Martín (2006) calculan que la duración media que un joven tarda en encontrar su primer empleo significativo es de 35 meses, más de dos veces más que un/a joven danés o irlandés, entre 1,5 y 2 veces más que un joven alemán, británico, austriaco, griego o portugués. Sólo los jóvenes franceses (24 meses), italianos (26 meses) y finlandeses (28 meses) se aproximan a la cifra que se da en España. El largo período de búsqueda del primer empleo es, sólo en parte, responsable de las tasas elevadas de desempleo juvenil. A diferencia de lo que

⁵² La elección de la persona de referencia para calcular las probabilidades no influye sobre los efectos descritos en el gráfico.

ocurre en otros países, donde el riesgo de desempleo juvenil se concentra entre quienes buscan su primer empleo, la mayoría de los desempleados/as han trabajado con anterioridad (Comisión Europea 1997: 49). Se trata en su mayoría de jóvenes que se encuentran provisionalmente en paro, mientras transitan de un trabajo precario al siguiente.⁵⁴ En el período 1994-2000, el 57% de los jóvenes que han experimentado dos o mas periodos de desempleo y sólo el 17% no se ha encontrado desempleado/a (Quintini y Martín 2006: 47). La proporción de jóvenes que han tenido dos o más experiencias de desempleo en el periodo considerado (1994-2000) es muy superior a la que puede encontrarse en otros países europeos. En Finlandia afecta al 38% de los/as jóvenes, en Francia al 35%, en Italia al 32% y en Portugal y Bélgica al 31%. En el resto de países de la Unión Europea (UE-12) está por debajo del 25%.⁵⁵

Para entender la estructura cronológica peculiar de las oportunidades de empleo es necesario analizar la temporalidad. Desde 1984, como resultado de una reforma del mercado laboral que introduce un amplio abanico de modalidades nuevas de contratación, la inmensa mayoría de jóvenes que trabajan lo hacen con contrato temporal. Como resultado de esta reforma y la expansión económica del quinquenio 1985-1990, desde mediados de la década de los ochenta, la cantidad de buscadores de primer empleo ha disminuido. Se ha desatascado la entrada a la ocupación, pero la duración de los empleos es reducida. En España la duración media de los empleos de los/as jóvenes de 15 a 24 años es de un año, la más baja de los países de la OCDE.⁵⁶ Bajo esta cifra subyacen desigualdades considerables. La duración del 87% de los empleos que declaran haber tenido los/as jóvenes de 15 a 19 años y el 71% de los que han tenido los/as de 20 a 24 años no llega a un año (**Tabla 3.6**). Entre los/as que tienen de 25 a 29 años, la situación mejora algo. Cerca de la mitad de los empleos (el 45%) que declaran haber tenido a lo largo de su vida laboral ya son de una duración superior a un año (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

⁵³ Es probable que el período de búsqueda de empleo de los/as jóvenes universitarios se alargue debido, quizás a que, gracias a su extracción social generalmente más acomodada, disponen de un margen más amplio que otros grupos para aplazar la entrada en el mercado de trabajo hasta encontrar un empleo idóneo.

⁵⁴ Una minoría de jóvenes de 15 a 24 años (23% en 2004) la constituyen parados de larga duración, es decir, desempleados/as durante más de un año.

⁵⁵ La duración media del tiempo que pasaron desempleados/as en el período considerado es de 23 meses (o lo que es lo mismo, una cuarta parte del tiempo). Salvo Italia (23 meses) y Grecia (18 meses), en el resto de países, los jóvenes pasaron menos de 15 meses desempleados (Quintini y Martín 2006: 47).

⁵⁶ La elevada rotación en el empleo a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta provoca que, a diferencia de lo que ocurrió durante los años de crisis de empleo (1976- 1985), la inmensa mayoría del paro juvenil en España sea “paro experto” (es decir, paro de personas con experiencia laboral previa) (Garrido 1996).

(Tabla 3.6)

Con el paso del tiempo, la rotación laboral de los/as jóvenes decrece. Es posible que bastantes jóvenes acaben encontrando un trabajo que consideran idóneo, o bien terminen renunciando a seguir buscándolo.⁵⁷ Se ha señalado también que, gracias a la experiencia laboral, los/as jóvenes desarrollan habilidades y conocimientos específicos que contribuyen a mejorar su empleabilidad e incrementan el interés de sus empleadores/as en retenerlos. Como pudo observarse antes, con el curso de los años, aumenta lentamente la proporción de jóvenes que tienen contrato fijo, permanente. La **Tabla 3.7** presenta los resultados de una regresión logística en que la variable dependiente distingue a los/as jóvenes que declaran tener (o haber tenido en su último empleo) “un contrato fijo, indefinido, continuado” de quienes tienen (o han tenido) otro tipo de contrato o trabajan sin contrato. La lista de variables independientes incluye una serie de factores que influyen de forma significativa sobre la probabilidad de tener un contrato fijo.⁵⁸ Entre las variables explicativas, además de los sospechosos habituales (edad, estudios, género), figura la experiencia laboral,⁵⁹ un conjunto de variables dicotómicas que miden el tamaño del municipio de residencia (en número de habitantes),⁶⁰ otra variable dicotómica que indica si el/la joven trabaja en una empresa familiar o no, y finalmente dos más sobre el estado civil/situación de convivencia del/a joven.⁶¹ Además se incorpora al modelo una variable para estimar si la relación estadística entre estado civil y probabilidad de tener contrato fijo depende del género (Casado*Mujer).

(Tabla 3.7)

⁵⁷ Es probable que los/as jóvenes que encuentran mayores dificultades en el mercado laboral lo abandonen de forma definitiva.

⁵⁸ Inicialmente, se incluye en el test una serie de variables adicionales, pero se decide excluirlas del modelo tras comprobar que su influencia sobre la variable dependiente no es estadísticamente significativa.

⁵⁹ En la tabla aparece una especificación cuadrática de la variable que permite estimar la naturaleza no lineal de su efecto sobre la variable dependiente.

⁶⁰ La categoría omitida (de referencia) corresponde a municipios de más de un millón de habitantes, es decir, Madrid y Barcelona.

⁶¹ La categoría omitida incluye a jóvenes solteros, viudos o separados/as que no viven en pareja.

Llama la atención, de nuevo, la configuración de efectos de las variables que miden el nivel educativo, y en particular, el hecho de que la probabilidad de tener un contrato fijo sea mayor entre los/as jóvenes con estudios secundarios que entre los que tienen estudios superiores (a igualdad del resto de condiciones).⁶² Como es de prever, esta probabilidad aumenta también significativamente a medida que los jóvenes acumulan experiencia laboral en el mercado de trabajo, pero el efecto no es lineal (como indica el valor negativo del coeficiente de la variable al cuadrado). Dicho de otro modo: *la experiencia laboral tiene rendimientos decrecientes*. Así puede apreciarse en el **Gráfico 3.4**, donde se muestran las probabilidades de tener contrato fijo, según nivel de estudios y experiencia laboral, de personas con el siguiente perfil: varones solteros (y que no viven en pareja), de 29 años, residen en un municipio grande (más de un millón de habitantes) y no están empleados en una empresa familiar.⁶³ El significado del efecto del tamaño del municipio es difícil de desentrañar. Es posible que la probabilidad de tener un contrato fijo sea significativamente menor entre los/as jóvenes que viven en municipios pequeños debido a la mayor concentración en estos lugares de actividades productivas que utilizan esta modalidad de contratación, como la agricultura y el turismo. El coeficiente correspondiente a “empleado en empresa familiar” es positivo. Es decir, los/as jóvenes empleados en empresas familiares tienen una probabilidad mayor de disfrutar de un contrato fijo. Este dato abunda en la idea de que la familia puede jugar un papel fundamental en el mercado de trabajo, en este caso, garantizando la estabilidad laboral.

(Gráfico 3.4)

El análisis de los coeficientes de las variables “Mujer”, “Casado/a” y “Casada*Mujer” merece mención aparte. El valor negativo del coeficiente de “Mujer” evidencia que, manteniendo otros parámetros constantes, las mujeres lo tienen más difícil que los varones para conseguir un contrato fijo. En la sociedad actual, el trabajo realizado por mujeres y varones sigue sin merecer igual recompensa, aunque posean las mismas cualificaciones o experiencia laboral. Por su parte, el valor del coeficiente de la variable “Casado/a” indica que las personas casadas tienen una

⁶² La categoría omitida vuelve a ser “estudios primarios”. La probabilidad de que un/a joven con estudios secundarios o terciarios tenga un contrato fijo es significativamente mayor que la probabilidad de que lo tenga un/a joven con estudios primarios (las razones de odds son de 2,1 y 1,5 respectivamente).

⁶³ La elección de la persona de referencia no influye sobre las pautas descritas en el gráfico.

probabilidad mayor de disfrutar de un contrato fijo.⁶⁴ Esta “ventaja” asociada al matrimonio es prácticamente inexistente para las mujeres. Para calcular la probabilidad de que las mujeres casadas disfruten de un contrato fijo, hay que sustraer al efecto de *Casado/a* el valor negativo del coeficiente de “Casado/a*Mujer”. En el **Gráfico 3.5** aparecen perfiladas las probabilidades correspondientes.

(Gráfico 3.5)

Una interpretación plausible de estos resultados es que el matrimonio incrementa el “valor” en el mercado de un trabajador varón, pero no así el de una trabajadora. Desde un planteamiento estrictamente economicista, existe abundante evidencia que demuestra que los varones casados tienden a ser más productivos que sus congéneres solteros (Becker 1981, 1985, Gray 1997, Korenman y Neumark 1991). Por tanto, en consonancia con las predicciones de la teoría neoclásica, en un mercado competitivo, su mayor productividad revierte en mejores condiciones laborales.⁶⁵ La situación de las mujeres casadas es algo más compleja. En ciertos aspectos, en ausencia de mecanismos que faciliten la conciliación, la vida matrimonial de la mujer entra con frecuencia en contradicción con su actividad laboral. Algunos estudios sugieren que el matrimonio y los hijos/s disminuyen la motivación de las mujeres para trabajar, así como el grado de compromiso con sus actividades profesionales (Becker 1985, 1991), con lo que su productividad se resiente; pero existen dudas de que estos aspectos psicológicos expliquen enteramente las condiciones desventajosas en que se encuentran las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo (Waldfogel 1997). El mercado de trabajo sigue penalizando trayectorias laborales jalonadas por interrupciones, como la de la mujer joven que abandona su trabajo transitoriamente para dar a luz y criar hijos/as pequeños (Jacobsen y Levin 1995). Es también posible que, como señalan otras investigaciones, en previsión de que estas interrupciones puedan producirse, los empresarios tiendan a mostrarse más reacios a contratar mujeres.⁶⁶

⁶⁴ La relación de causalidad puede ser también la inversa: la probabilidad de casarse se incrementa cuando las personas tienen un contrato fijo.

⁶⁵ En los planteamientos economicistas tiende a ocultarse que la mayor productividad de los varones casados suele sustentarse, como nos recuerda la teoría sociológica feminista, en el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres.

⁶⁶ Según la teoría de la “discriminación estadística”, los empresarios/as tienden a contratar a varones y mujeres en función de la productividad marginal que promedian en una determinada ocupación. Si, por ejemplo, las mujeres

La **Tabla 3.8** presenta los resultados de un análisis de regresión multivariante. Los coeficientes describen en qué medida (en puntos porcentuales) varía la variable dependiente “Salario” al incrementarse (o reducirse) cualquiera de las variables independientes.⁶⁷ Al igual que en las dos tablas anteriores, el nivel de estudios, el género, la edad y la experiencia laboral influyen significativamente sobre la variable dependiente. El matrimonio influye positivamente también sobre el salario de los varones, y mucho menos sobre el de las mujeres. La configuración de los efectos estadísticos de variables que miden el nivel de estudios es, sin embargo, distinta. Un/a joven con estudios superiores percibe un salario significativamente superior al de un/a joven con estudios secundarios.⁶⁸ Cabe apuntar también que la discriminación salarial entre las mujeres con estudios superiores respecto a los varones del mismo nivel educativo es menor que entre las que tienen estudios primarios o medios (como indica el signo positivo del coeficiente de la interacción “Mujer* estudios superiores”). Los valores de los coeficientes de las variables “sin contrato” “otro contrato” y “contrato temporal” ponen de manifiesto que los/as jóvenes empleados bajo estas modalidades de contratación cobran significativamente menos que los/as jóvenes que disfrutan de un contrato fijo (a igualdad de horas trabajadas, edad y experiencia laboral).⁶⁹

(Tabla 3.8)

El conjunto de evidencias presentadas sugieren que tanto el sistema educativo como el mercado laboral imponen a los/as jóvenes españoles períodos considerables de espera. Quienes deciden abandonar el sistema educativo a edades tempranas ven seriamente mermadas sus oportunidades laborales: tardan bastante en encontrar empleo y están más expuestos a afrontar situaciones de desempleo, precariedad y salarios bajos. Quienes prolongan sus estudios ven mejoradas algo sus perspectivas laborales aunque, salvo en el aspecto salarial, no se aprecia que los estudios de grado superior confieran ventajas importantes sobre los estudios de grado medio a la hora de eludir el desempleo o estabilizar la situación laboral a corto y medio plazo. Este dato

tienden a dejar sus puestos de trabajo con más frecuencia, y con ello hacen incurrir al empresario en costes adicionales de búsqueda y formación de nuevos empleados, la probabilidad de que sigan contratando mujeres o les ofrezcan contratos fijos se resiente.

⁶⁷ La variable dependiente es resultado de una transformación logarítmica de la variable original.

⁶⁸ Los cálculos que lo prueban no figuran en la tabla.

sugiere que la expectativa que albergan muchas familias de que prolongando la inversión educativa en su hijos/as hasta edades más tardías les preparan mejor para valerse por sí mismos en el mercado laboral podría estar sólo justificada parcialmente.⁷⁰ Los resultados también ponen de manifiesto que, a pesar de que cada vez más mujeres se incorporan a la actividad laboral formal, siguen persistiendo desigualdades de género en el acceso al empleo, en las oportunidades de disfrutar de un puesto de trabajo estable y en la remuneración salarial. La educación ofrece a las mujeres jóvenes una oportunidad de reducir algo las desigualdades en la remuneración salarial. En cambio, las mujeres no obtienen las mismas ventajas laborales asociadas al matrimonio que los varones.

Segmentación laboral por edad

El empleo y las políticas de mercado de trabajo (tanto las medidas “pasivas” como las “activas”)⁷¹ han cumplido una función clave en el modelo de integración social desarrollado en Europa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Los augurios que, hace unos años, predecían el final del trabajo (asalariado) parecen hoy totalmente infundados, y en la mayoría de países desarrollados (y España es un país especialmente aventajado a este respecto) ha crecido la proporción de ciudadanos/as que participan en el mercado laboral. Nuestras sociedades siguen encontrado en el empleo la principal vía para asegurar la cohesión social y prevenir riesgos de exclusión económica. A pesar de ello, en la mayoría de los países se ha extendido durante los últimos años la percepción de inseguridad del empleo. La evolución de los mercados y de los sistemas productivos (determinada en buena medida por las fuerzas de la globalización y los avances tecnológicos) ha impuesto el debate sobre la flexibilidad laboral como un imperativo para el éxito económico y la competitividad internacional. Los despidos masivos y las altas tasas de desempleo (primero) y el aumento de los trabajos temporales y a tiempo parcial (después) han

⁶⁹ No ocurre lo mismo con los/as jóvenes contratados a tiempo parcial, como demuestra el hecho de que el coeficiente no sea estadísticamente significativo.

⁷⁰ Los datos parecen apuntar que las ventajas puedan aparecer más adelante. Las muestras poblacionales de las encuestas del CIS que se utilizan no permiten evaluar detalladamente esta posibilidad.

⁷¹ Las políticas de mercado de trabajo “pasivas” son aquellas que aseguran la sustitución de ingresos en situaciones de desempleo o producidas por otras circunstancias del mercado de trabajo (jubilación anticipada, por ejemplo), sin que exista obligación alguna de percibir cursos de formación o trabajar. Las políticas “activas” contemplan diferentes

acentuado la sensación de que los nuevos empleos son muy diferentes de los de antaño. A juicio de numerosos autores/as, el mercado laboral sigue cumpliendo actualmente la función integradora que le corresponde, pero cada vez con menos efectividad, debido a la desaparición gradual del empleo de tipo estable, bien remunerado, protegido jurídicamente y base de la ciudadanía social (Rifkin y Helbroner 1995, Beck 2000).

En los últimos años la opinión que proclama el fin del trabajo estable ha sido cuestionada por abundante investigación que sugiere que resulta todavía aventurado insinuar la desaparición de los trabajos seguros y a largo plazo. En la mayoría de los países desarrollados, el valor del empleo estable sigue siendo reconocido y defendido desde muchas instituciones, la legislación continúa ofreciendo garantías de protección al empleo y la seguridad en el empleo continúa estando en lo alto de la clasificación de aspectos más deseables por los trabajadores/as⁷². Tampoco se dispone de pruebas suficientes que demuestren que las propias empresas prefieran, de forma uniforme, relaciones de empleo flexibles, con un alto grado de rotación laboral. La mayor parte de libros de microeconomía llegan a la conclusión de que muchas empresas se benefician de las relaciones de empleo duraderas, que les permiten recuperar costes de selección y formación de los trabajadores/as y aprovechar el capital específico que desarrollan los trabajadores/as en la empresa cuando mantienen una relación prolongada con su empleador/a.

La cuestión que se plantea en este contexto es encontrar nuevos equilibrios entre flexibilidad y seguridad (*flexi-security*) que satisfagan demandas muchas veces contradictorias. Las vías recorridas por distintos países para lograrlo son variadas. En la década de los ochenta y noventa muchos países introducen cambios legislativos importantes que afectan a la configuración de las relaciones en el mercado de trabajo. Algunos países (especialmente los centro-europeos) han mantenido sólidos sistemas de regulación laboral, que garantizan niveles altos de calidad del empleo, pero que, por otro lado, han sido poco efectivos en la creación de empleo. Otros optan por diferentes medidas de flexibilización, con efectos más o menos extendidos y más o menos traumáticos. En algunos países, como Dinamarca, las políticas de flexibilización han venido acompañadas de medidas de potenciación del capital humano a través del desarrollo de políticas activas de empleo y formación, con un éxito considerable en la creación de empleo y reducción de desempleo.

iniciativas para potenciar el capital humano del trabajador/a. Las prestaciones de sustitución de ingresos suelen incentivar a los trabajadores que buscan empleo de forma activa o penalizar a los que no lo hacen.

⁷² Y que, por tanto, puede configurar también sus preferencias como votantes.

En países como España, las políticas de flexibilización han producido un deterioro de la calidad del trabajo, pero que no afecta a todos los trabajadores/as por igual. El resultado de las estrategias adoptadas ha sido una segmentación clara entre trabajadores/as que tienen empleos de tipo estable, bien remunerado y que confieren derechos a prestaciones sociales a los trabajadores/as y a sus familias (*insiders*), y una masa de trabajadores/as con vinculaciones precarias al mercado laboral, sueldos bajos y derechos restringidos (*outsiders*). En un mercado laboral segmentado, los riesgos de pérdida de empleo se concentran. Las barreras para desprenderse de trabajadores con contrato indefinido en situaciones económicas desfavorables — debido fundamentalmente a elevados costes de despido— empujan a los empresarios a concentrar los reajustes de plantilla en una bolsa de trabajadores “desechables” que la nueva legislación permite contratar de forma flexible. Pero junto a riesgos diferenciados de pérdida de empleo, aparecen otros ejes desigualdad. Algunos de los efectos más importantes de la segmentación es la dualización en la calidad del empleo en cuestiones como las remuneraciones salariales, los beneficios no salariales o las oportunidades de participación en las organizaciones en las que trabajan.

Por lo que respecta a la seguridad en el empleo, los trabajadores de más edad disfrutan de las mejores condiciones de trabajo. El **Gráfico 3.6** describe diferencias entre trabajadores/as de grupos de edad distintos en seis indicadores de seguridad laboral. Lo primero que hay que destacar es que la inmensa mayoría de trabajadores/as de edades avanzadas (40 años y más) tienen un contrato fijo, lo que constituye, sin duda, el principal mecanismo de protección frente a la pérdida de empleo. Como puede observarse en el gráfico, esa protección se refleja en una mayor seguridad frente a la amenaza de despido por incumplimiento laboral. En segundo lugar, es de destacar que mientras prácticamente uno de cada cinco trabajadores/as de 25 años o menos han estado desempleados durante el año, el paro es una experiencia poco común entre los trabajadores/as de edades más avanzadas. El único indicador en que los valores de los distintos grupos de edad se asemejan es el porcentaje de personas que temen perder su empleo (*inseguridad subjetiva*). Es probable que el temor de los trabajadores/as de edad más avanzada no refleje tanto la probabilidad de perder su empleo como el miedo a que si esto ocurriera, tendrían muchas dificultades para encontrar uno nuevo.

(Gráfico 3.6)

La investigación comparativa pone de manifiesto que en los países de la OCDE las tasas de ocupación de los/as jóvenes son más sensible a cambios en el ciclo económico que las tasas de ocupación de los trabajadores de edad más avanzada (Quintini y Martin : 2006: 58). La evolución del empleo en España en las últimas décadas confirma esta tendencia. Los riesgos de pérdida de empleo se acentúan en momentos de recesión económica. Es en estos períodos cuando se hace más patente la vulnerabilidad de los grupos más jóvenes. En términos agregados, tanto en las crisis económicas de 1993 como de 2008, los más afectados/as por la disminución de la población ocupada son los grupos más jóvenes. Según resultados de la Encuesta de Población Activa, entre el último trimestre de 1992 y el último de 1993, en España desciende la población ocupada en 414.000 personas.⁷³ Pero esos descensos no se distribuyen equitativamente entre todos los grupos de edad. Entre las personas de 16 a 19 años, la población ocupada disminuye un 15%. Entre las de 20 a 24, un 8,4%. La población ocupada se mantiene estable en los grupos de edad más avanzada. Entre las personas de 25 a 54 sólo disminuye un 0,4%. Entre las personas de 55 a 64 años, desciende un 4,7%. Los efectos diferenciales de la crisis de 2008 sobre el desempleo son incluso más evidentes. A lo largo del año disminuye el número de ocupados/as en 620.000 personas. El descenso es muy acusado entre las personas más jóvenes. El número de personas menores de 30 años ocupadas se reduce en 517.000 efectivos. Por el contrario, el número de personas mayores de 50 años ocupadas se incrementa en 111.000. La variación interanual en porcentaje de personas ocupadas según edad apunta claramente donde se concentran los costes de la crisis (**Tabla 3.9**)

(Tabla 3.9)

La creación de empleo en etapas de expansión económica presenta perfiles más contradictorios. Durante la expansión económica de 1986 a 1990, la reducción del desempleo beneficia fundamentalmente a los/as jóvenes. Gracias a ello, la razón entre jóvenes desempleados/as y personas desempleadas de 25 a 54 años pasa de 2,8 a 2,1. A lo largo de la expansión económica de 1995 a 2007 se produce también una reducción sustancial de la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años: pasa del 40% al 18%. Sin embargo, en términos relativos, los/as jóvenes no se han beneficiado tanto como los grupos de edad más avanzada.

⁷³ Se utilizan datos del cuarto trimestre.

Mientras en 1995 la tasa de desempleo juvenil era 2,0 veces superior a la de trabajadores de 25 a 54 años, en 2007, la razón entre ambas tasas es de 2,6.

Un segundo ámbito de precariedad de los/as jóvenes en el mercado de trabajo está relacionado con su concentración en empleos a tiempo parcial. Siguiendo la estela de otros países europeos, el trabajo a tiempo parcial se está introduciendo lentamente en el panorama laboral español. En la Estrategia Europea de Empleo elaborada por la Comisión Europea, el empleo a tiempo parcial está llamado a jugar un papel de importancia capital en el objetivo de incrementar las tasas de empleo y favorecer la competitividad de las economías europeas. El trabajo a tiempo parcial es visto como una de las principales vías de reconciliación entre trabajo y vida familiar y una posible estrategia para promover la participación laboral de trabajadores de mayor edad, favoreciendo la continuidad de las carreras laborales hasta edades tardías.

Sin embargo, la investigación sobre trabajo a tiempo parcial indica que, aunque en algunos países (como Holanda) aparece plenamente integrada en el mercado de trabajo como una modalidad que enriquece el abanico de opciones laborales de trabajadores/as con necesidades diversas, en otros sigue siendo una opción marginal a la que llegan muchas veces de forma involuntaria. La investigación también pone claramente de manifiesto el carácter fuertemente segmentado del mercado de trabajo a tiempo parcial, con un claro predominio femenino. Muchas de estas mujeres han optado por el trabajo a tiempo parcial como una estrategia de conciliación de tiempos de trabajo y tiempos familiares, en un contexto en que ellas siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades domésticas y de cuidado a menores y personas ancianas. Pero otras se han visto abocadas a este tipo de modalidad, de forma involuntaria, ante las dificultades de encontrar un trabajo con una jornada más larga.

De la misma forma que sucede en otros países, en España el trabajo a tiempo parcial lo realizan fundamentalmente mujeres. Casi una de cada cinco mujeres trabaja a tiempo parcial. En cambio, sólo el 4,5% de los hombres tienen este tipo de empleos (EPA 2007, segundo trimestre). Ello invitaría a pensar que el trabajo es una estrategia de conciliación entre vida familiar y laboral de quienes siguen manteniendo, en la mayoría de los casos la responsabilidad principal en el ámbito doméstico. Sin embargo, los datos sugieren una interpretación más compleja. Las mujeres con cargas familiares (por ejemplo, con hijos menores de 15 años) son más proclives a trabajar a tiempo parcial que las que no los tienen. Sin embargo, también hay que decir que es precisamente en las edades de inserción en el mercado de trabajo (entre los 16 y 25 años), antes

de que buena parte de ellas se hayan emancipado y hayan formado una familia, donde las tasas de participación en el mercado de trabajo a tiempo parcial son más altas. Algo más de una de cada tres mujeres de estas edades tienen trabajo a tiempo a tiempo parcial. Esto sugiere que, para algunas mujeres, el trabajo a tiempo parcial parece una forma de vinculación precaria al mercado laboral en las fases de inserción del mercado de trabajo.

(Tabla 3.10)

Análisis descriptivos como los presentados hasta ahora corren el riesgo de dar por buenas asociaciones espurias. Para analizar en qué medida la edad y las dificultades de conciliación influyen en la probabilidad de trabajar a tiempo parcial, los introducimos conjuntamente en una regresión logística. Con esta técnica de análisis multivariable es posible “aislar” el efecto real (no contaminado por otros factores) de una variable explicativa sobre una variable dependiente dicotómica, en este caso, el “riesgo” de que la persona desarrolle un trabajo a tiempo parcial en lugar de un trabajo a tiempo completo. Junto a las variables explicativas analizadas (género y número de hijos), se incluyen en el modelo otras variables que la literatura considera habitualmente relevantes para explicar las condiciones de trabajo, con el fin de “controlar” los efectos debidos a esas variables: educación, asalariado en el sector público/privado y número de trabajadores/as en el establecimiento (**Tabla 3.11**).

(Tabla 3.11)

El análisis logístico realizado estima la razón entre la probabilidad de trabajar a tiempo parcial y la probabilidad de hacerlo a tiempo completo. Para realizar la interpretación de las razones es necesario comparar los valores con la categoría de referencia. Valores superiores a 1 indican que la proporción de los que trabajan a tiempo parcial es superior a la categoría de referencia. Por ejemplo, controlados todos los factores, la razón de probabilidad de trabajar a tiempo parcial es un 65% mayor entre las mujeres que tienen un hijo/a que entre las que no tienen ninguno, un 140% entre las que tienen dos hijos/as y un 163% entre las que tienen tres o más. Los resultados confirman lo apuntado anteriormente. A igualdad de otras condiciones, las mujeres tienden a optar por el trabajo a tiempo parcial cuando tienen más hijos/as.

Sin embargo, por otra parte, el análisis pone de manifiesto que la razón de probabilidad de trabajar a tiempo parcial aumenta también considerablemente entre las mujeres menores de 26 años en edad de trabajar, con independencia de su situación familiar. Para algunas de estas mujeres el trabajo a tiempo parcial representa una fórmula para conciliar tiempo de trabajo con actividades formativas. Para otras constituye una forma de participación en el mercado de trabajo de “baja calidad” en las fases iniciales de inserción laboral ante la imposibilidad de encontrar otro tipo de empleo. La razón de la probabilidad de que un trabajador varón trabaje a tiempo parcial también aumenta significativamente en las etapas iniciales de inserción en el mercado laboral (16 a 25 años). Pero, a diferencia de lo que sucede con las mujeres, la presencia de hijos menores de 15 años reduce la razón de la probabilidad de recurrir a jornadas reducidas. Dicho de otro modo, la existencia de hijos refuerza el rol del hombre como “sustentador principal” del hogar y responsable del bienestar material de la familia, lo que exige participación laboral a tiempo completo.

Otra perspectiva sobre la función del trabajo a tiempo parcial es su “voluntariedad”. Las razones de las personas para trabajar a jornada reducida pueden ser diversas. Según datos de la Encuesta de Población Activa (2007, segundo semestre), sólo el 12% de las personas que trabajan a tiempo parcial declaran no querer un trabajo a jornada completa. Un porcentaje adicional del 13% aduce seguir cursos de enseñanza o formación para optar por el trabajo a tiempo parcial. Aproximadamente un 60% se refiere a impedimentos de diversa índole para no trabajar a jornada completa. Se trata de personas cuya capacidad para trabajar a tiempo completo está severamente constreñida. Un 31% afirma no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa. Un 15% esgrime responsabilidades familiares (cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores) y un 14% otras obligaciones familiares o personales. Un 1,2% aduce enfermedad o discapacidad. A ello hay que añadir un 14% que declara otras motivaciones.

Género y edad son factores de primer orden para entender la distribución de motivos para trabajar a tiempo parcial. Como puede advertirse en la **Tabla 3.12**, más de la mitad de los varones y cerca de la mitad de las mujeres de 16 a 24 años afirman elegir empleos a tiempo parcial porque están formándose. Este período de “excepcionalidad” se prolonga bastante más para los hombres que para las mujeres. Uno de cada tres varones de 25 a 34 años aduce trabajar a tiempo parcial por el mismo motivo. Pero, junto a la formación, a estas edades se advierten otros impedimentos para trabajar a jornada completa. No es desdeñable el porcentaje de varones (24%)

y mujeres (36%) de 16 a 24 años que declaran trabajar a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo de jornada completa.

(Tabla 3.12)

Un poco más adelante en el ciclo vital (en las edades de emancipación) se produce una clara bifurcación entre motivaciones de hombres y mujeres para trabajar a tiempo parcial. Un porcentaje creciente de varones se ve abocado a la jornada reducida contra su voluntad. Eso se refleja en el aumento de la proporción de varones que trabajan a tiempo parcial cuando no encuentran trabajo a jornada completa entre los 25 y 44 años. En cambio, las mujeres trabajan a tiempo parcial en condiciones de “voluntad constreñida”. El 36% de las mujeres (pero solo el 4,7% de los hombres) afirma que trabaja a tiempo parcial para conciliar trabajo con cuidado de personas y otras obligaciones familiares y personales. Esta pauta está muy acentuada entre las mujeres en las etapas intermedias del ciclo familiar, entre los 35 y 44 años, cuando se erigen muchas veces en responsables del cuidado de dos generaciones: sus hijos/as y sus padres/suegros y madres/suegras. El 45% de las mujeres de 35 y 44 años declaran que trabajan a tiempo parcial por estos motivos. Al final de la carrera laboral, repunta la proporción de hombres, y sobre todo mujeres, que afirman no querer un trabajo a jornada completa.

Los resultados sugieren que el trabajo a tiempo parcial cumple funciones en períodos específicos del ciclo de vida individual y familiar. Permite optar por jornadas reducidas cuando resulta necesario armonizar el trabajo con otras actividades, como los estudios o las responsabilidades familiares. Sin embargo, es necesario advertir de la estrecha asociación entre el trabajo a tiempo parcial y ciertas formas de precariedad contractual y salarial. La proporción de empleos a tiempo parcial que se realizan bajo modalidades de contratación temporal prácticamente dobla a la de los empleos a tiempo completo. La renta salarial que recibe un trabajador a tiempo parcial suele ser significativamente más baja que la que recibe un trabajador a tiempo completo, a igualdad de condiciones.⁷⁴ Eso obliga a ser extremadamente cauteloso a la

⁷⁴ Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo indican que el salario medio por hora de un trabajador a tiempo completo es 8,7 euros, mientras que la de un trabajador temporal es de 6,9. La distribución de las diferencias no es uniforme. Las diferencias son muy acentuadas entre los trabajadores con bajo nivel de renta (primer y segundo quintil), pero no existen diferencias entre los colectivos con mayor nivel de renta salarial (personas con ingresos salariales superiores al cuarto quintil).

hora de valorar el trabajo a tiempo parcial simplemente como una mejora de oportunidades del trabajador/a.

La tercera gran dimensión donde se hacen evidentes las desventajas de la edad en el mercado de trabajo son las remuneraciones salariales y los beneficios no salariales. En una sociedad de mercado, la capacidad adquisitiva de los salarios es un determinante de primer orden del nivel de vida de los trabajadores/as por cuenta ajena. Habitualmente la distribución de la masa salarial entre la población ocupada es la primera causa de desigualdad de rentas en las población, y por tanto, un factor clave de estratificación social. La falta de ingresos adecuados del trabajo puede convertirse en un factor de exclusión puesto que la capacidad adquisitiva individual queda limitada por las bajas remuneraciones salariales. Es importante recalcar, sin embargo, que no implica automáticamente una disminución de los estándares de vida de los trabajadores/as, ya que en la mayoría de las ocasiones estos dependen no sólo de sus rentas salariales sino de las de otros miembros de su hogar (como ocurre con muchos/as jóvenes que viven con sus padres). Aún así, esta dependencia económica puede representar una fuente importante de insatisfacción si, como ocurre en España, retrasa o trunca proyectos personales (como el de emanciparse) y familiares (como el de tener hijos/as).

En las investigaciones sobre estas cuestiones, un indicador que utilizan de forma frecuente organismos internacionales como la OCDE o la UE, es la proporción de personas con empleos de baja remuneración (*low-paid jobs*). Este indicador se define en términos relativos como la proporción de trabajadores/as que perciben rentas salariales del trabajo inferiores a dos tercios de la mediana de rentas netas del trabajo. En España, en 2005, este umbral se sitúa en 7.320 euros (ECV 2006). El porcentaje de personas que se sitúan por debajo de este umbral relativo varía extraordinariamente entre países y a lo largo del tiempo. Según datos de la OCDE, la incidencia del empleo de baja remuneración en España se sitúa a medio camino entre los países con tasas más altas

—Hungría, Corea, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia— y los que presentan tasas más bajas —Suecia, Italia, Dinamarca y Finlandia (OCDE, *Employment Outlook*, 2006: 175). Esta incidencia ha disminuido ligeramente entre 1994 y 2005 (del 18 al 15,7%), coincidiendo con el ciclo de expansión económica (OCDE 2006 y cálculos propios a partir de la ECV 2006).

La cifra agregada de empleo de bajo salario encubre una dispersión considerable en su incidencia entre trabajadores/as de diferente perfil. La proporción de trabajadores/as con empleos

de estas características aumenta considerablemente entre los trabajadores/as más jóvenes, las mujeres, las personas con nivel educativo más bajo y la población de origen inmigrante (no procedente de la Unión Europea) en parte debido a la mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial en estos grupos. Ahora bien, las desigualdades persisten si examinamos sólo a los asalariados que trabajan a tiempo completo. Entre éstos/as, la incidencia del empleo de baja remuneración es sobre todo alta entre los trabajadores de 16 a 25 años (27%), y disminuye drásticamente en etapas más avanzadas del ciclo vital (**Tabla 3.13**).

(Tabla. 3.13)

Las desventajas salariales de las personas jóvenes se explican, en buena medida, por la naturaleza de sus contratos. Como hemos visto antes, más de la mitad de los trabajadores/a menores de 30 años desarrollan su actividad laboral bajo una modalidad de contrato temporal. Esto repercute en sus retribuciones salariales.⁷⁵ Según datos de la OCDE (2002) del año 1997, España es el país de la Unión Europea donde la diferencia salarial entre el salario bruto por hora de un trabajador/a con contrato indefinido y un trabajador/a temporal es más acusada. En 1997 el salario de este último representaba, por término medio, apenas el 47% del salario de un trabajador/a estable. En 2005, aunque en términos relativos el salario bruto de un trabajador/a temporal había mejorado, constituía todavía sólo el 62% del salario de un trabajador con contrato indefinido (ECV 2006, elaboración propia).⁷⁶ Para medir el impacto independiente del contrato temporal sobre el salario es importante utilizar técnicas de análisis multivariable. La **Tabla 3.14** presenta estimadores basados en regresiones lineales calculadas de forma independiente para varones y mujeres. Además de la variable referida al tipo de contrato, se incluyen toda una serie de variables utilizadas habitualmente para explicar el salario de un trabajador/a.⁷⁷

(Tabla 3.14)

⁷⁵ Algunos especialistas consideran que las desventajas salariales del trabajo temporal son producto de la necesidad que tienen estos trabajadores/a de aceptar peores condiciones laborales a cambio de incrementar la probabilidad de conseguir la renovación de sus contratos y, en última instancia, su conversión en contratos indefinidos (Güell-Rotllan 2000). Una explicación alternativa sugiere que la clave para explicar la discriminación salarial es la capacidad de los trabajadores/as con contratos indefinidos de afianzarse en sus puestos de trabajo y extraer mayores rentas salariales cuando las empresas tienen incentivos para concentrar los ajustes de plantilla en la bolsa de trabajadores temporales (debido a la diferencia en los costes de despido de estables y precarios) (Polavieja 2003).

⁷⁶ Se consideran únicamente trabajadores/as con jornadas superiores a 30 horas semanales.

Los resultados sugieren que los trabajadores/as temporales perciben peores salarios que los trabajadores estables, una vez se han controlado características individuales, del empleo y de la empresa en que se desarrolla. El efecto es estadísticamente significativo tanto entre los varones (0,128 puntos logarítmicos) como entre las mujeres (0,122 puntos logarítmicos). Dicho de otro modo, a igualdad del resto de condiciones, la penalización salarial del empleo temporal es de un 13% entre las mujeres y de un 14% entre los varones.⁷⁸ En la tabla puede observarse asimismo que, con independencia del carácter permanente o temporal de su trabajo y de otras características individuales, del empleo y del entorno laboral, las personas jóvenes tienden a percibir salarios más bajos que los trabajadores/as veteranos. Así, a igualdad de condiciones, un varón de 16 a 25 años percibe un salario un 23% inferior al de un hombre de 55 a 64 años (0,208 puntos logarítmicos).⁷⁹ El efecto combinado de ambas penalizaciones explica las considerables desventajas salariales que experimentan los trabajadores/as jóvenes, así como la mayor probabilidad de tener un empleo con salario bajo.

Además del salario, buena parte de los trabajadores/as se benefician de retribuciones no salariales u otras ventajas asociadas a su actividad laboral. Las más comunes son las pagas extraordinarias, los seguros médicos privados y el acceso a formación profesional. Según datos del Estudio 2.634 del Centro de Investigaciones Sociológicas (2006), el 60% de los trabajadores/as tiene paga(s) extraordinaria(s), un 14% dispone de seguro médico privado que sufraga la empresa y un 17% tiene la oportunidad de acceder a formación profesional en la empresa. La distribución de estas ayudas y beneficios es desigual. En general, las empresas tienen menor interés en conceder estos beneficios a los trabajadores/as con los que mantienen vinculaciones más débiles. Ello explica que, entre los trabajadores/as temporales, la proporción

⁷⁷ Se incluyen en el análisis sólo trabajadores/as que trabajan a tiempo completo.

⁷⁸ Estas penalizaciones representan una leve mejora respecto a la situación en 1997. La penalización salarial del empleo temporal entre los hombres, calculada por la OCDE con datos de 1997, se situaba en el 17%. Las mujeres con empleo temporal percibían, de acuerdo a estos mismos cálculos, un salario un 20% inferior al de las que tenían contrato indefinido.

⁷⁹ Entre la edad y el nivel educativo existe un efecto de interacción. En análisis estadísticos realizados con los mismos datos (que no mostramos aquí) se pone de manifiesto que la penalización asociada a la juventud es más intensa y más prolongada entre las personas con estudios superiores. El efecto estadístico de ser joven de 16 a 25 años con estudios universitarios (licenciatura o estudios universitarios de ciclo corto) es de -0,35 puntos logarítmicos (o lo que es lo mismo, los jóvenes con estudios superiores perciben un salario un 42% inferior a un trabajador/a de más de 55 años, a igualdad de condiciones). Si el joven tiene entre 25 y 34 años, su salario es un 28% más bajo.

que percibe una paga extraordinaria se reduce al 32%, la que tiene seguro médico al 6,3%, y la que recibe formación al 7,6%.

Los siguientes modelos de regresión logística profundizan en el análisis de las desventajas de tener un empleo temporal, a igualdad de otras condiciones. De lo que se trata es de estimar si, una vez controladas otras variables, subsiste un efecto estadístico significativo de la temporalidad sobre la probabilidad de percibir una serie de beneficios extra-salariales, como son paga extraordinaria, seguro médico privado, o formación profesional en la empresa. Los resultados confirman las sospechas que se derivan del análisis descriptivo. A igualdad de condiciones, la razón de probabilidad de tener paga extraordinaria y no tenerla se reduce prácticamente a la mitad si el trabajador/a tiene un trabajo temporal. La razón de probabilidades de contar con seguro médico sufragado por la empresa se reduce un 27% y la de recibir formación un 40% (**Tabla 3.15**). En este caso, la edad no tiene un efecto estadístico significativo independiente que se sume al que tiene, por si sólo, la forma de contratación.

(Tabla 3.15)

La última dimensión en que se evidencian las ventajas comparativas de los trabajadores de más edad tiene que ver con aspectos organizativos de las actividades laborales. La estratificación social en las sociedades capitalistas no puede entenderse sin prestar atención a las relaciones de control dentro de las empresas. La capacidad de control sobre el trabajo de otros/as y la influencia sobre la organización de los procesos productivos es un recurso (una forma de *capital*) distribuido desigualmente. Una larga tradición de estudios sociológicos se ha dedicado a estudiar los perfiles y determinantes de la desigualdad dentro de las organizaciones productivas desde premisas que trascienden los planteamientos de la economía neoclásica (que proclama que existe una relación estrecha entre la posición que ocupa un trabajador y su productividad en el desempeño de las funciones encomendadas). Los factores de desigualdad más comunes examinados por las investigaciones sociológicas son la clase social de origen del trabajador/a o su grupo étnico (estudios de inspiración marxista), las credenciales educativas como mecanismo de cierre (la escuela weberiana) o el género (escuela feminista). Es menor el volumen de trabajos de investigación que hayan examinado el papel estratificador de la edad dentro de las empresas. Se asume a menudo que los trabajadores/as de edades más avanzadas ocupan posiciones más

ventajas dentro de la organización porque (a igualdad de otras condiciones) pueden aportar como valor añadido su experiencia. Desde un planteamiento puramente economicista, cuando las organizaciones colocan a los trabajadores/as veteranos en posiciones de supervisión o que les permiten influir más activamente en los procesos productivos están recompensando habilidades y competencias adquiridas en el curso de su vida laboral.

El valor económico indudable de la veteranía no significa que siempre se recompense igual. En algunas organizaciones y sectores industriales, la experiencia confiere menos ventajas que la preparación asociada a la educación formal. Se argumenta incluso en algunas economías, como la estadounidense, el valor de las credenciales educativas es mayor que en otras —como, por poner un caso, la japonesa— lo que da lugar a estructuras ocupativas diferenciadas. En Japón las posiciones directivas tienden a estar monopolizadas por trabajadores/as con una larga trayectoria en la organización (Brinton y Ngo 1993). Cuanto más valor tenga la educación formal frente a la experiencia más beneficiados salen las personas jóvenes, puesto que en condiciones normales pueden avalar su capacitación para ocupar un puesto de trabajo con credenciales educativas, pero suelen carecer de experiencia. Existe, por otra parte, abundante evidencia que muestra que a igualdad de años de experiencia y de credenciales educativas, a menudo subsisten todavía desigualdades en las recompensas. Esta desigualdad *residual* poco tiene que ver con la productividad del trabajador/a, sino con determinadas formas de discriminación y segmentación del mercado de trabajo.

La **tabla 3.16** muestra los efectos reales de la edad y una serie de variables explicativas de control sobre dos variables dependientes (dicotómicas): “tener asignadas tareas de supervisión” y “participar en la toma de decisiones acerca del funcionamiento de la empresa”. La categoría de referencia al estimar el efecto de la edad son los trabajadores/as de 36 a 45 años. Controlados el nivel educativo alcanzado y la experiencia en el trabajo (y otras variables explicativas de uso común), la razón de probabilidad de tener asignadas tareas de supervisión se reduce a más que la mitad cuando el trabajador tiene entre 16 y 25 años. De forma similar, la razón de probabilidad de participar en la toma de decisiones acerca del funcionamiento de la empresa se reduce el 39%. Ambos efectos son significativos. Los jóvenes ocupan posiciones subordinadas en las relaciones de control dentro de la empresa, incluso cuando sus credenciales educativas o su experiencia en el desempeño del trabajo son similares a las de otros trabajadores/as. Las posiciones de supervisión e influencia tienden a estar monopolizadas por trabajadores de edad más avanzada.

(Tabla 3.16)

Todos estas desventajas en el mercado de trabajo contribuyen a emplazar a los/as jóvenes en un lugar diferenciado en la estructura social. Resulta cada vez más difícil aceptar —como hizo durante mucho tiempo la Sociología de la Juventud— que la juventud es una transición y no una condición o un estado social. Los/as jóvenes son, como diría Anne Foner (1974), un auténtico estrato social, que tiene acceso restringido a los recursos económicos y ocupa posiciones de poder subordinadas. Las reformas del mercado de trabajo y el crecimiento económico de los últimos años en España ha permitido que un número creciente de jóvenes se incorporen al mercado de trabajo, pero el carácter precario de sus vinculaciones laborales ha dinamitado la continuidad de sus itinerarios biográficos, creando nuevas situaciones liminales donde los/as jóvenes se mantienen durante períodos cada vez más prolongados a la espera de alcanzar la autonomía adulta plena. Las trayectorias laborales de la juventud se apartan cada vez más de los itinerarios canónicos de inserción en la vida adulta que siguieron sus padres. Bloqueadas las vías de inserción clásicas, cambia el significado biográfico de episodios como la finalización de los estudios o el acceso al trabajo. Lo que sucede después de estas encrucijadas vitales es cada vez menos previsible, y por tanto, se presta menos a la planificación. Las recetas heredadas tienen también un valor limitado en una situación socioeconómica que tiene poco que ver con la que conocieron generaciones anteriores. Frente a tanta incertidumbre, prevalece la aversión al riesgo. La inmensa mayoría de los/as jóvenes permanecen en el hogar de sus padres, aunque lo que desearían muchos de ellos/as es vivir por su cuenta o junto a su pareja. Entre los pocos/as que consiguen instalarse de forma independiente junto a su pareja, una proporción creciente apuesta por la cohabitación, aunque entre ellos/as predominan los que desean institucionalizar la relación a través del matrimonio.

Capítulo 4

MODELOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR

“Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo”

Marie von Ebner-Eschenbach

Hasta hace poco, la imagen de una persona adulta estaba unida estrechamente al matrimonio. Salvo casos puntuales,⁸⁰ la mayoría de los adultos/as contraían matrimonio y permanecían casados/as “hasta que la muerte nos separe”. La ceremonia matrimonial constituía el rito de paso a la vida adulta más importante, al inaugurar una nueva etapa en la trayectoria biográfica de los contrayentes que entrañaba una metamorfosis identitaria. A las personas casadas se les conminaba a cambiar de hábitos y gustos, a apartarse de ciertos ambientes, y variar sus relaciones sociales. De la persona casada se esperaba que hiciera gala de un carácter sobrio, responsable, incluso adusto, lejos de la frivolidad característica de la juventud.

Actualmente la frontera de separación entre *juventud* y *edad adulta* es cada vez más borrosa. Hoy en día sería difícil argumentar que el matrimonio constituye un rito de paso a la edad adulta. Los españoles/as se casan en primeras nupcias cada vez más tarde. Sin embargo, su carrera sentimental suele iniciarse mucho antes. La inmensa mayoría de jóvenes españoles ha mantenido una o varias relaciones de pareja antes de llegar al matrimonio. Gran parte de ellos/as mantienen su relación “a distancia”, es decir, viven en hogares separados, por regla general, junto a sus padres. Constituyen el grupo cada vez más numeroso de lo que Kathleen Kiernan (2000) denomina LAT (de *living apart together*), habitualmente obligados por las circunstancias a aplazar proyectos de vida en común.⁸¹ Un porcentaje algo menor opta por la convivencia en pareja pero sin matrimonio. La relación de pareja dentro de una cohabitación puede asemejarse en muchos sentidos a la relación matrimonial, incluso formalizarse en forma de unión civil (no matrimonial). La diferencia principal entre el matrimonio y la cohabitación radica en su estabilidad. Al cabo de pocos años, las parejas que cohabitan suelen terminar la relación u optan

⁸⁰ Como el de la “tietta”, que glosa Juan Manuel Serrat en su célebre canción.

⁸¹ Según Kiernan, sólo el 26% de los LAT españoles prefieren su situación actual a la de irse a vivir con su pareja (datos de 1995, de la Encuesta Europea de Fecundidad y Familia). Este porcentaje es el más bajo en los países europeos sobre los que dispone evidencia. En Alemania Occidental el porcentaje de los/as LAT que manifiestan que viven separados por propia voluntad es del 72%, en Suiza del 63%, en Austria del 48%, en Lituania y Hungría el 40%. Sólo en Francia la situación de los LATS se aproxima a la española, con un 29% que manifiestan su preferencia por esta opción.

por el matrimonio civil o religioso.⁸² Tanto las *relaciones a distancia* como la *cohabitación* se han erigido en fórmulas adaptativas a una realidad en que hacerse adulto a través del matrimonio resulta complicado.

Formación de nuevas familias

Las cosas nunca han resultado sencillas para los/as jóvenes que buscan establecer su propia familia. En un pasado no demasiado remoto en España, los obstáculos que se interponían entre varones y mujeres en edad de matrimoniarse eran muchos. Aunque a unas y a otros se les había inculcado desde pequeños la importancia del matrimonio, las oportunidades para forjar una relación de pareja eran, en principio, escasas, y las pocas que existían, eran administradas celosamente por guardianes familiares, por lo general mujeres (madres, abuelas), comprometidas en hacer respetar los códigos de decoro y buen hacer. La ceremonia matrimonial era el colofón a una etapa larga de noviazgo, en que el joven (varón) debía persuadir a su familia política de que reunía las condiciones morales y económicas para hacerse cargo de la joven y de la futura descendencia. Los tiempos han cambiado, y con ellos, las normas que prescribían un itinerario canónico que todas/os debían seguir. En la actualidad, las trayectorias familiares se han desestandarizado, quedando las formas de entrada, permanencia y salida de la vida familiar a merced de decisiones individuales y procesos de negociación en los que intervienen casi exclusivamente los miembros de la pareja. El papel de la familia de origen en la conformación de proyectos y formas de vida de sus hijos/as es cada vez menor. En el mismo sentido, pierde relevancia lo que piensen otros familiares, vecinos/as o agencias de control como la Iglesia Católica (Meil 1999).

A resultas de estos cambios normativos, se han reducido los costes sociales en que incurren quienes optan por alternativas al matrimonio. En las últimas décadas, en todas las sociedades desarrolladas aumenta significativamente la proporción de la población que está de acuerdo con la actividad sexual prematrimonial, la cohabitación, o la madresoltería. Al mismo

⁸² En los países en los que existen datos precisos sobre la duración de las relaciones de cohabitación se ha determinado que, transcurridos cinco años, más de la mitad de estas parejas terminan casándose o disolviéndose. Sólo en Suecia predominan las cohabitaciones de “larga duración”. En otros países europeos, la cohabitación suele

tiempo, los métodos anticonceptivos reducen el riesgo de embarazos indeseados, y la interrupción voluntaria del embarazo ofrece segundas oportunidades a quienes, no habiendo tomado las precauciones oportunas, no están dispuestas/os o preparadas/os para asumir la paternidad/maternidad. Gracias a estos avances tecnológicos, las relaciones sexuales han dejado de estar ligadas a la procreación. La importancia de este tránsito es mayúscula, especialmente para las mujeres, puesto que les permite gozar libremente de su sexualidad sin tener que preocuparse acerca de la idoneidad de su pareja para, eventualmente, corresponsabilizarse de la crianza de un hijo/a que todavía no ha nacido. Al suprimir los riesgos ligados al ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio, los métodos anticonceptivos precipitan cambios en la identidad de las mujeres así como en la significación del matrimonio.

A pesar de todo ello, como demuestran en los últimos años los datos del *World Values Survey*, en casi todos los países desarrollados el matrimonio sigue siendo una institución que goza del favor mayoritario de la población, incluidos los/as jóvenes.⁸³ En el sondeo de 1995-97, más del 85% de los/as japoneses, estadounidenses o canadienses de 18 a 29 años, entre el 80 y 85% de los/as noruegos, suecos, irlandeses/as, más del 75% de los británicos, italianos y holandeses, y en torno al 70% de los/as daneses, belgas, alemanes y españoles, están en desacuerdo con que el matrimonio es una institución obsoleta. Pero en muchos países, existe evidencia abundante de que la juventud sigue percibiendo ventajas asociadas al matrimonio. En opinión de un amplio espectro de la población joven, el matrimonio contribuye a la felicidad, la estabilidad de la relación, el bienestar económico, y ofrece el entorno idóneo para la crianza de los hijos/as.

Así ocurre también en España. La práctica totalidad de los estudios actuales sobre estas cuestiones coinciden en enfatizar el elevado concepto del matrimonio que tiene la juventud española (Iglesias de Ussel 1997, Moreno Mínguez 2002). Una amplia mayoría de los/as jóvenes consideran que el matrimonio es una institución socialmente importante (63%), que les merece mucha o bastante consideración desde el punto de vista personal (62%). Un porcentaje aún mayor (76%) cree que el matrimonio, sea por vía religiosa o civil, es la forma de convivencia que mejor contribuye a la estabilidad de la pareja, aunque una proporción considerable (35%) opina que el matrimonio debe ir precedido por un período de cohabitación. Sólo un 18% sugiere que la forma

ser antesala del matrimonio. En Estados Unidos, la mayoría de las parejas que cohabitan terminan separándose (Kiernan 2000, Cherlin 2000).

⁸³ Los datos del WVS están disponibles en <http://www.worldvaluessurvey.com/services/index.html>.

de convivencia que mejor contribuye a la estabilidad de la pareja es “vivir juntos sin estar casados” (Cruz Cantero y Santiago Gordillo 1999: 90-91, basado en CIS, *Estudio 2.262* de 1996).

La buena consideración que merece el matrimonio no basta para contrarrestar la tendencia a retrasar el casamiento. La juventud deja de ser para muchas personas el momento elegido para casarse. En la **Tabla 4.1** puede observarse que, en todos los países europeos para los que existe evidencia empírica, la edad media de las mujeres al contraer el primer matrimonio aumenta durante las dos décadas que van de 1980 a 2000, en la mayoría de casos en más de tres años. En algunos de los países donde las tasas de cohabitación y madresoltería son más altas, el incremento de la edad media al contraer matrimonio es incluso más notable.

(Tabla 4.1)

En España, la edad media al contraer el primer matrimonio se sitúa en máximos históricos, después de recuperarse de un descenso acusado que se inicia después de la Guerra Civil y culmina a inicios de la década de los ochenta. Mientras en 1980, la edad media de entrada de las mujeres al primer matrimonio es de 24 años y la de varones de 26, actualmente las cifras se sitúan en torno a los 28 y 30 años respectivamente (INE 2004). El incremento de la edad media de entrada al primer matrimonio se debe en una pequeña parte al aumento de las tasas de cohabitación. En 1999, el 27% de los/as jóvenes (de 15 a 29 años) que declaran tener una pareja estable con la que conviven manifiestan hacerlo fuera del matrimonio (CIS, *Estudio 2.370*). Esto no significa que conciban esta situación como definitiva. La mayoría de los jóvenes (de 15 a 29) años que afirman que podrían imaginarse viviendo en pareja sin casarse, muestran una orientación favorable al matrimonio, y tienden a considerar la convivencia prematrimonial como una etapa previa al matrimonio. Preguntados acerca del modelo de convivencia ideal en pareja, el 45% de jóvenes que ven la cohabitación con buenos ojos se inclinan por el matrimonio precedido por la cohabitación, y un 19% adicional se inclina por el matrimonio civil (5%) o religioso (14%) a secas (Tabla 3.2). Sólo un 32% de estos/as jóvenes expresan su preferencia por opciones que no incluyan el matrimonio. Aunque la evidencia disponible no permite ofrecer datos más precisos, es probable que haya que atribuir una parte del retraso en la edad al primer matrimonio a la tendencia a iniciar la vida en común a través de uniones consensuales previas al matrimonio. Sin

embargo, existen razones para pensar que las causas fundamentales del aplazamiento del matrimonio son otras.

(Tabla 4.2)

Pautas residenciales de jóvenes

Los/as jóvenes que cohabitan constituyen el 3% de la población joven de 15 a 29 años (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). El grueso de los/as jóvenes que no están casados permanece en el hogar de sus padres. Se trata de jóvenes que en su mayoría, a su dependencia residencial, mantienen también una dependencia económica. La proporción de jóvenes (de 15 a 29 años) que viven en casa de sus padres aumenta a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta y buena parte de los noventa hasta alcanzar el 80% en 1998, iniciando luego un leve cambio de rumbo desde entonces.⁸⁴ En el curso de estos años disminuye también el porcentaje de jóvenes de estas edades que afirman vivir con recursos propios exclusivamente (en especial entre los jóvenes mayores de 25 años), y aumenta por tanto el de los que reconocen recibir algún tipo de ayuda, generalmente de su familia. La **Tabla 4.3** da una idea más precisa de los cambios que se producen. La diferencia más significativa entre el escenario de los años ochenta y el de los años más recientes es la disminución de los/as jóvenes en situación de “dependencia infantil” y el aumento de “situaciones contradictorias en hogar de origen”, en que los/as jóvenes pueden sufragar con sus ingresos algunas o la totalidad de sus necesidades pero permanecen en el hogar de sus padres.

(Tabla 4.3)

La **Tabla 4.4** proporciona evidencia adicional del aumento de “situaciones contradictorias”. Las categorías empleadas y los datos de 1986 y 1994 proceden de un estudio pionero del demógrafo Juan A. Fernández Córdón. Los datos de 1999 y 2002 se extraen de los *Estudios 2.370* y *2.469* del CIS. En la tabla se describen una serie de situaciones ocupacionales y

residenciales que atraviesan los/as jóvenes en el curso de su proceso de emancipación. Se contemplan cuatro posibilidades ocupacionales (inactividad, desempleo, trabajo, y entre las mujeres inactivas y que viven dependientes, dedicación a labores domésticas)⁸⁵ y dos residenciales (vivir en el hogar de los padres o vivir independiente). La tabla confirma la mejora de las perspectivas laborales de la juventud a finales de la década de los noventa e inicios del nuevo siglo. En los últimos años, el porcentaje de mujeres y varones jóvenes que se encuentran empleados es significativamente superior que durante los momentos de crisis que se viven durante los ochenta e inicios de los noventa. Esto se debe a la disminución importante de las cifras de desempleo y, en menor medida, de inactividad. El mayor descenso del desempleo tiene lugar entre varones (pasa del 27% en 1986 al 10% en 2002). La disminución del porcentaje de jóvenes que se declaran inactivos/as es leve. Posiblemente, haya que atribuirla a que una mayor proporción de personas que estudian, entran en el mercado de trabajo cuando las condiciones del mismo mejoran.⁸⁶

(Tabla 4.4)

Lo sorprendente es que el incremento de las tasas de empleo no se traduce en un aumento de la proporción de jóvenes que viven fuera del hogar de sus padres. Proliferan más bien las “situaciones contradictorias”. Uno de los cambios más notables que puede apreciarse en la tabla es el incremento del número de jóvenes que trabajan y viven en casa de sus padres. Prácticamente la totalidad del incremento porcentual de varones que trabajan entre 1986 y 2002 corresponde a situaciones en que el joven sigue viviendo dependiente. El aumento del porcentaje de varones que trabajan y viven en la casa de origen equivale a la disminución de los jóvenes desempleados. Es decir, aunque cambie de manera sustancial la incidencia del desempleo entre los varones activos, el porcentaje de los que viven dependientes se mantiene intacto.

⁸⁴ En 2002, la proporción se sitúa en el 74%.

⁸⁵ Fernández Córdón no ofrece datos correspondientes sobre la proporción de varones que se dedican exclusivamente a labores domésticas y viven independientes en 1986 y 1994. En su lugar, incluye este segmento de la población masculina en la inactividad. Estos datos se obtienen para los años 1999 y 2002, pero se prefiere preservar el formato original de la tabla de Fernández Córdón, debido al interés que tiene la serie temporal y el número insignificante de varones que se dedican a esas tareas.

⁸⁶ El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que estudian y trabajan pasa del 6% en 1996 (CIS, estudio 2.262) al 13% en 2003 (CIS, estudio 2.536).

La evolución de las pautas femeninas es más compleja. El aumento de la proporción de mujeres jóvenes que trabajan es mayor que el de los varones. La mayor parte de este incremento corresponde a mujeres que viven en casa de sus padres, que pasan de constituir el 19% en 1986 al 39% en 2002, es decir, duplicándose. Este dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que el aumento de las mujeres jóvenes que trabajan y viven con sus padres compensa en buena medida la disminución de las mujeres que viven con sus maridos y se dedican al trabajo doméstico (del 20% en 1986 al 6% en 2002). Quizás algunas de estas mujeres no encuentren varones “idóneos” para casarse, esto es, varones que pudieran erigirse en cabezas de familia como “los de antes”. Es también posible que algunas mujeres jóvenes se muestren cada vez más reacias a comprometerse a la formación de nuevas familias en que pudieran verse obligadas a renunciar a su vida profesional. Prolongar la estancia con los padres no impone esta clase de sacrificios. En este sentido, hay que destacar también el incremento de mujeres que trabajan y viven independientes, que se sitúa ya por encima del 20%. Entre ellas, la mayoría convive junto a una pareja que también trabaja. La mujer joven parece cada vez menos dispuesta a que su vida familiar trunque su carrera laboral.

La Sociología española invoca de forma habitual dos tipos de argumentos para explicar el incremento de la edad media de emancipación y el aumento significativo de las situaciones contradictorias (J. M. de Miguel, 1998). Según la primera de estas explicaciones, permanecer en casa de los padres resulta cada vez más conveniente. Se argumenta con frecuencia que las familias españolas tienden a “mimar” a niños/as y jóvenes (A. de Miguel 1997: 110). A esta pauta contribuye, por ejemplo, el hecho de que un porcentaje significativo de madres se dedique todavía de manera exclusiva al trabajo doméstico. Si bien esto ha venido ocurriendo tradicionalmente en España, en el pasado también regían principios de autoridad desventajosos para los/as jóvenes, que se hacían intolerables cuando éstos alcanzaban edades adultas. La emancipación equivalía a una suerte de liberación de ataduras familiares. En la actualidad, a diferencia de lo que ocurría entonces, en la mayoría de los hogares españoles reina un clima de permisividad y tolerancia. Los padres y madres son menos estrictos con sus hijos/as, tienden a recabar su opinión, a buscar compromisos para tomar decisiones, y amplían de modo considerable el abanico de actividades que sus hijos/as pueden llevar a cabo mientras residen en la casa de origen (Cruz Cantero y Santiago Gordillo 1999, Tobío 1999, Requena 2001, 2002). Así, el 59% de los/as jóvenes manifiestan que su padre es poco o nada estricto y el 68% señalan

lo mismo de su madre. Actividades y hábitos que difícilmente habrían sido tolerados en el hogar de antaño pueden llevarse a cabo en muchos casos sin problema. Por ejemplo, el 54% de los/as jóvenes declaran que pueden llegar por la noche a casa a la hora que quieran sin ninguna consecuencia, el 53% que pueden pasar la noche fuera de casa, y el 20% que pueden acostarse con otras personas en casa de sus padres (CIS, *Estudio 2.469*, 2002). Desde esta perspectiva, la crisis del patriarcalismo —la “estrella menguante del padre”, en expresión de Lluís Flaquer (1999) —lima las aristas que pueden provocar conflictos intergeneracionales, convirtiendo los hogares españoles en espacios en que los/as jóvenes son unos privilegiados para los que apenas existen obligaciones impuestas por sus progenitores. En palabras de Flaquer (1997:40), los jóvenes son “los *free riders* [...] por antonomasia”. Al relajarse el control que ejercen los padres sobre los hijos/as, desaparecen los principales incentivos de los/as jóvenes para emanciparse.

La objeción principal que debe hacerse a esta hipótesis es que no ha sido contrastada empíricamente. Si bien los padres de los/as jóvenes son cada vez menos estrictos con sus hijos/as, la relación positiva entre el grado de control paterno y la proclividad de los jóvenes a emanciparse debe ser puesta en entredicho tanto desde un punto de vista teórico como empírico. El argumento de que los/as jóvenes tienden a permanecer en hogares permisivos asume, desde una perspectiva de elección racional, que el valor que tiene para un/a joven convivir con sus padres aumenta cuando disminuye el grado de control que éstos ejercen sobre él. Las obligaciones que la familia impone a los/as jóvenes entra, desde esta perspectiva, en el cómputo de costes que supone para los jóvenes la aceptación de la dependencia. Son, en palabras de Miguel Requena (2002: 22), “un tributo” que los/as jóvenes tienen que pagar a cambio de transferencias intergeneracionales que los padres realizan en su favor (en forma de derechos como por ejemplo residir en una vivienda que no les pertenece, bienes y servicios).

Desde bases teóricas distintas, es legítimo cuestionar este planteamiento. Como señala Durkheim en su estudio clásico sobre el suicidio (1898), el control social es un dispositivo funcional que mantiene a los grupos sociales cohesionados. El relajamiento del control social (anomia) tiene una suerte de efecto desequilibrante que favorece la desvinculación grupal, en última instancia, a través del suicidio. Sin llegar tan lejos, sería concebible catalogar como “emancipación anómica” la de aquellos jóvenes que residiendo junto a unos padres tolerantes y permisivos albergan la intención de independizarse. Desde este punto de vista, las experiencias de libertad y autonomía que disfrutaban en casa de sus padres, lejos de propiciar la permanencia en los

hogares, estimulan el deseo de vivir de forma independiente. En contraste con la hipótesis según la cual la motivación para independizarse está relacionada positivamente con los costes que acarrearán para el joven las obligaciones que impone la familia, un planteamiento de corte durkhemiano sugiere que los/as jóvenes que viven en entornos familiares más estrictos y controladores desarrollan menos interés por independizarse.

La evidencia empírica tiende a respaldar la segunda hipótesis. Como puede observarse en la **Tabla 4.5**, los/as jóvenes que viven en hogares más permisivos son, por lo general, más proclives a plantearse la posibilidad de vivir fuera del hogar de sus padres. En cambio, jóvenes que viven en hogares donde la familia ejerce un control más intenso sobre las actividades y hábitos de sus hijos/as se muestran más reacios a dejar la casa de sus padres. En la tabla existe una sola excepción: los jóvenes que tienen prohibido “reunirse en casa con un grupo de amigos/as” expresan en su mayoría un deseo de abandonar la casa de los padres. Es posible que la relación entre control y voluntad de independizarse no sea lineal. Niveles de control asfixiante (como el que supone la prohibición de reunirse en casa con un grupo de amigos/as) empujan, probablemente, a los/as jóvenes a independizarse. Pero, en líneas generales, a la luz de los datos resulta difícil mantener que los/as jóvenes huyen de entornos familiares estrictos, y resulta temerario atribuir a la democratización de la familia española el aplazamiento de la emancipación juvenil.⁸⁷

(Tabla 4.5)

El segundo argumento que invoca la literatura para explicar la permanencia prolongada de los/as jóvenes en casa de sus padres hace hincapié en aspectos económicos (Martín Serrano y Velarde Hermida, 1996; Garrido y Requena, 1996; Requena 2002). La mayoría de los/as autores que se abonan a esta línea de argumentación atribuyen la prolongación de la convivencia con los padres a los problemas laborales descritos en el capítulo anterior. Como ya se ha señalado, las tasas de desempleo entre los/as jóvenes son elevadas, las tasas de contratación indefinida bajas, y los niveles salariales se mantienen alejados de los que podrían permitirles sufragar el precio de su autonomía. Este precio no es constante. En los últimos años, de forma sistemática el crecimiento

⁸⁷ Esta interpretación tampoco casa con la evidencia de otros países. En sociedades en que los entornos familiares son mucho más permisivos con los hijos/as que los españoles, como las del norte de Europa, los/as jóvenes abandonan el hogar de sus padres mucho antes que en España.

de los salarios es menor que el incremento del precio de adquisición de viviendas (**Gráfico 4.1**). Aunque los tipos de interés hipotecario caen desde inicios de los años noventa, el precio que los españoles pagan por adquirir una vivienda representa una carga financiera enorme. Un estudio realizado con datos de 1994 por la Federación Hipotecaria Europea situaba el esfuerzo de acceso a la vivienda que realizan los/as españoles por encima de ocho de los diez países europeos estudiados, sólo por detrás de Portugal. El coste anual del préstamo medio firmado representaba en 1994 un 40% de los ingresos medios netos (citado en Trilla 2001: 110-11). Desde entonces, los tipos de interés hipotecario se han reducido sensiblemente, desde más del 10% a menos del 5%, pero el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en España se ha doblado. Según un informe del BBVA, el pago de una hipoteca absorbe a finales del 2002 cerca de un 50% del salario medio (*El País* 16 mayo 2003). Esta carga es incluso mayor para los jóvenes que trabajan, puesto que promedian salarios más reducidos. Un informe reciente del Observatorio de la Vivienda del Consejo de la Juventud (2004) sitúa la proporción de los ingresos que un/a joven debe dedicar a financiar la adquisición de una vivienda durante 25 años en el 53 %.

(Gráfico 4.1)

A todo ello hay que añadir las dificultades que encuentran los/as jóvenes con estatus laboral precario para acceder a los créditos necesarios para adquirir una vivienda. El parque inmobiliario español se caracteriza por la escasez de oferta de alquiler y la práctica inexistencia de parque de vivienda social. En 1999, sólo el 12% del parque inmobiliario lo constituyen viviendas de alquiler privado, y un exiguo 2% viviendas de alquiler social (el porcentaje más bajo de Europa). En estas condiciones, aunque quisieran, abandonar la casa de los padres es difícil, incluso cuando disponen de recursos económicos para sufragar el resto de sus gastos. El 56% de los jóvenes que viven con recursos exclusivamente propios vive en casa de sus padres (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

El Gráfico 4.2 ofrece una perspectiva distinta sobre la misma situación. Aparecen las diecisiete comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, representadas en función del coste de acceso a la vivienda para un hogar joven de 25 a 29 años (en el eje de las X) y el porcentaje de jóvenes de esa edad que ya han salido de casa de sus padres (en el eje Y). Salvo unas cuantas excepciones, los casos se agrupan en torno a una recta de tendencia central. Cuanto mayor es el

coste de acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma, menor es el porcentaje de jóvenes independizados/as. La varianza explicada (R^2) por el coste de acceso a la vivienda es del 20%. Los/as jóvenes son proclives a independizarse pronto en Extremadura y la Comunidad Valenciana, donde los costes de acceso a la vivienda tienden a ser bajos, y en Baleares, donde sin ser del todo bajos, se dan unas particularidades especiales: las oportunidades de acceso al mercado de trabajo son buenas y la población joven emigrada de otras comunidades es alta. Los menos propensos a independizarse son los/as jóvenes de Madrid y el País Vasco (donde los costes de la vivienda son extraordinariamente altos), Asturias y Cantabria. Estas dos últimas Comunidades son las que se desvían más de la recta central. Llama la atención el contraste entre las tasas de emancipación en estas comunidades y las de las Islas Baleares o Cataluña. En las cuatro Comunidades el coste de la vivienda se sitúa entre el 40 y 45%, pero en las dos comunidades de la franja cantábrica se ha independizado aproximadamente un 20% menos de jóvenes. Estas divergencias reflejan en buena medida las diferentes condiciones laborales de cada Comunidad. La situación del mercado laboral en Cataluña y Baleares es propicia para plantearse vivir fuera del hogar paterno. La tasa de ocupación de la población joven es significativamente mayor (85 y 83% respectivamente) que la de los/as jóvenes cántabros (73%) y asturianos (62%), y su tasa de desempleo es menor (en Baleares y Cataluña se sitúa entre el 5 y 10%, en Cantabria es del 13% y en Asturias el 16%). A esto se suma el hecho de que los puestos de trabajo a que pueden aspirar los/as jóvenes en las Baleares y Cataluña son más estables: en Asturias sólo un 34% de los/as jóvenes de 25 a 29 años tienen contrato indefinido, en Cantabria el 37%, en las Islas Baleares el 45% y en Cataluña el 53% (Consejo de la Juventud 2004).

(Gráfico 4.2)

Pese a todas las trabas que encuentran, la mayoría de las personas jóvenes ha pensado en independizarse. El porcentaje de los que dicen vivir exclusivamente de sus ingresos y no ha pensado en independizarse no llega al 35% y se concentra fundamentalmente entre los menores de 20 años. Entre los/as jóvenes de 25 a 29 años, más de un 75% declara haber pensado en independizarse. La imagen que arrojan estos datos está alejada de la que presenta a unos/as jóvenes empotrados/as en casa de sus padres, reacios a asumir las responsabilidades que comporta la vida adulta y a renunciar a los privilegios de que disfrutaban en casa. El análisis de

regresión probit descrito en la **Tabla 4.6** aporta una idea más exacta del perfil y motivaciones de los/as jóvenes españoles que muestran una disposición mayor a abandonar la casa de sus padres, controlando los efectos espurios sobre la variable dependiente (“haber pensado en independizarse”). Se analizan únicamente a los jóvenes (de 15 a 29) años que permanecen en casa de sus padres. Esta decisión, justificada en razón a la información de que se dispone a partir de la encuesta utilizada (CIS, *Estudio 2.469*), implica que pueda producirse potencialmente un sesgo de selección, ya que se parte de una muestra obtenida originariamente entre toda la población de esas edades.⁸⁸ Es posible que las personas que han abandonado el hogar paterno presenten un perfil diferente al de las que se han quedado, y como consecuencia, los coeficientes que se obtendrían con la submuestra empleada en un análisis de regresión probit convencional estuvieran sesgados. Es preceptivo, por lo tanto, corregir la posibilidad de que, debido a este sesgo, se obtenga una imagen distorsionada de los factores que influyen sobre la motivación de independizarse. La técnica que aquí se utiliza es el método de Heckman, basado, en este caso, en la estimación de una ecuación “de selección” que incluye una serie de variables instrumentales asociadas con la probabilidad de permanecer en casa de los padres (y, por tanto, de pertenecer a la submuestra analizada).⁸⁹

(Tabla 4.6)

Para analizar la influencia de las “ventajas” que para los/as jóvenes supone quedarse en casa de los padres, la lista de variables independientes incluye un índice que mide el grado de control social que ejercen los padres sobre los hijos/as (“Control social”) y un indicador del esfuerzo que el/la joven debe invertir en la realización de actividades domésticas (“Carga

⁸⁸ Con las encuestas disponibles en la actualidad en España resulta imposible analizar con profundidad las causas que precipitan la salida del hogar paterno. En ninguna encuesta existente se proporciona la información longitudinal necesaria para investigar los factores explicativos de este tránsito. No pueden, por tanto, utilizarse los métodos continuos en el tiempo para el análisis de datos longitudinales con una variable dependiente de naturaleza cualitativa (análisis histórico de acontecimientos) (Castilla 1998). A falta de esta información, el análisis empleado representa la mejor aproximación al fenómeno de la emancipación residencial.

⁸⁹ Las variables instrumentales incorporadas a la ecuación de selección son “Edad” (edad del entrevistado/a), “Casado” (indica si el entrevistado/a está casado/a), “Trabaja” (indica si trabaja) y tres variables dicotómicas (“Clase 1” “Clase 2” “Clase 3”) que reflejan el nivel educativo de los padres del entrevistado/a. El análisis de regresión probit se ha estimado con el procedimiento *Heckprob*, disponible en el paquete estadístico STATA.

doméstica”).⁹⁰ Para estimar la influencia de aspectos cognitivos y afectivos de las relaciones intergeneracionales se introducen dos variables adicionales. “Sintonía intergeneracional” refleja en qué medida el/la joven considera que él y sus padres piensan de forma igual.⁹¹ “Estado de la relación” es una valoración que hace el/la joven de lo bien o mal que va la relación con sus padres.⁹²

Para analizar cómo influyen las consideraciones económicas, se incluye una batería de variables dicotómicas que indican si el/la joven vive exclusivamente de sus ingresos (“Recursos exclusivamente propios”), principalmente de sus ingresos (“Recursos principalmente propios”) o principalmente de los ingresos de sus padres (“Recursos principalmente de los padres”). La categoría omitida (de referencia, a efectos del análisis) corresponde a la de los/as jóvenes que viven exclusivamente de los ingresos de sus padres.

El resto de las variables que aparecen en los modelos calibran el efecto de otros factores “de control” que influyen en las pautas de emancipación. En primer lugar, se introduce una variable dicotómica para calibrar el efecto de “estar estudiando” sobre la probabilidad de haberse planteado la emancipación. Con objeto de estudiar la asociación estadística de la religiosidad con la variable dependiente, se construyen, de nuevo, tres variables dicotómicas: “Católico practicante” indica si el/la joven se declara católico practicante, “Otra confesión” si profesa otra fe religiosa, “Católico no practicante” si se identifica de esta manera. La categoría omitida incluye a quienes se declaran “ateos” e “indiferentes” desde un punto de vista religioso.

Las variables “Clase 1”, “Clase 2”, “Clase 3” son dicotómicas. Indican el nivel educativo alcanzado por el cabeza de familia (siempre que no se trate del propio joven) y se utilizan como indicadores de la clase social del hogar de origen del/la joven. La categoría omitida corresponde al nivel educativo más bajo, es decir, sin estudios. Es razonable pensar que la falta de medios y unas condiciones de vida precarias favorecen la salida temprana del hogar de los/as jóvenes de clase baja. En cambio, la clase alta puede permitirse el lujo de retener a los hijos/as

⁹⁰ Ambas variables han sido obtenidas mediante un análisis factorial exploratorio. “Control social” es el resultado de convertir las once variables descritas en la Tabla 3.4 en un solo factor. La fiabilidad de la escala obtenida es del 0,83. “Carga doméstica” es un factor que agrupa cinco variables que miden el grado de participación del joven en la realización de tareas domésticas (limpiar, ordenar la casa; trabajar en la cocina; lavar la ropa, planchar, coser; hacer la compra de alimentos; reparar cosas que se rompen). La fiabilidad de la escala es del 0,81.

⁹¹ Es una escala de 1 a 4. Los/as jóvenes que contestan que piensan de forma radicalmente distinta reciben el valor 1. Los que consideran que piensan de forma igual tienen el valor 4 (véase cuestionario del CIS, *Estudio 2.469*, disponible en www.cis.es)

⁹² Los/as jóvenes que declaran que la relación va muy bien reciben un 1. Los jóvenes que consideran que la relación va muy mal, el 5.

contribuyendo a hacer su vida más confortable o prolongando el esfuerzo inversor en su educación.

Se incorporan también al modelo las variables “Mujer” y “Edad”. Mujeres y varones afrontan la emancipación de modo distinto. Tanto los incentivos como las expectativas sociales de unas y otros difieren. La edad tiene efectos directos e indirectos. En todas las sociedades existen expectativas y normas biográficas estrechamente asociadas con la edad. Aunque la mayoría de los/as jóvenes españoles vivan durante lapsos de tiempo cada vez más dilatados en casa de sus padres, el sistema normativo imperante contempla que los/las jóvenes rompan de forma paulatina con su identidad infantil y que vayan construyendo paso a paso su identidad adulta definitiva, sin demoras injustificadas. Por otro lado, la edad está relacionada con otro tipo de procesos cronológicos, como la acumulación de experiencia educativa y laboral, que influyen asimismo en la disposición a independizarse.

Los resultados del análisis probit son inequívocos. Una vez que se descuentan los efectos de las variables de “control”, no existe evidencia de que los/as jóvenes tiendan a mostrarse más reacios a abandonar una casa en que el grado de control social o la carga de obligaciones domésticas son altos. Tanto el coeficiente de “Control Social” como de “Carga doméstica” son negativos e insignificantes.⁹³ En cambio, las variables *económicas* tienen un efecto *neto* positivo sobre la variable dependiente. Así queda manifiesto en el Panel A del **Gráfico 4.3**. Los/as jóvenes que tienen recursos propios son más proclives a pensar en independizarse en todas las edades. Resulta llamativo que las probabilidades sean similares entre los/as jóvenes con “recursos exclusivamente propios” y “recursos principalmente propios”.⁹⁴ Entre los/as jóvenes mayores de 20 años con recursos propios sólo una minoría no se ha planteado la emancipación. Frente a ellos/as, se sitúan claramente, los/as jóvenes en situación de dependencia infantil estricta o mitigada, que si bien tienden a plantearse la emancipación a medida que se hacen mayores, presentan sistemáticamente probabilidades mucho más bajas.

(Gráfico 4.3)

⁹³ Si no se incluye “Edad” en el modelo, el coeficiente de “Control social” es negativo y significativo. Al contrario de lo que sostiene la tesis según la cual los jóvenes tienden a permanecer en hogares donde reina un clima de permisividad notable, la evidencia empírica apunta más bien en dirección opuesta.

⁹⁴ Es difícil dilucidar con los datos disponibles a qué se debe la falta de una diferencia mayor entre estas la probabilidad de haber pensado en emanciparse entre estas dos tipologías de jóvenes. Es posible que existan un núcleo

Los resultados ponen también de relieve, aunque no exista una influencia significativa de variables que miden el control social al que están sometidos los/as jóvenes en el hogar paterno o las actividades domésticas en que se reclama su participación, sí puede observarse un efecto neto significativo de la variable “Sintonía intergeneracional”. Como puede observarse en el Panel B del gráfico, los/as jóvenes que manifiestan pensar de forma igual a sus padres (o sólo algo distinta) presentan probabilidades más bajas de haber pensado en independizarse, a igualdad del resto de condiciones. Lejos de la imagen del parásito oportunista, lo que parece pesar en la decisión de quedarse en casa de los padres es la posibilidad de mantener con ellos una relación basada en la sintonía sobre cuestiones fundamentales.

El comportamiento de algunas variables de control también merece comentario. Cuando se controla el resto de las variables, la probabilidad de que las mujeres jóvenes piensen en independizarse es cerca de 10 puntos porcentuales superior a la de los varones (ver **Gráfico 4.4**). Los datos disponibles en el *Estudio 2.469*, del CIS (del año 2002) no permiten analizar pormenorizadamente los causas de esta mayor proclividad de las mujeres a plantearse salir de casa de sus padres. Resulta algo más factible con el *Estudio 2.370* (del año 1999), que, además de aportar una muestra significativamente superior (6.492 entrevistas), proporciona información acerca de las relaciones de pareja de los/as jóvenes que no conviven con un marido/mujer o compañero/a.

(Gráfico 4.4)

La **Tabla 4.7** arroja más luz sobre las circunstancias en que mujeres y varones plantean emanciparse. Lo primero que llama la atención en la tabla es el mayor porcentaje de mujeres que han pensado en emanciparse. Esta diferencia es especialmente alta entre las que cuentan con recursos propios. El 73% de las mujeres de 15 a 29 años que viven exclusivamente con recursos propios, por el 63% de los varones, ha pensado en dejar la casa de sus padres. Una clave para entender sus planteamientos respecto a la emancipación radica en que tengan pareja formal o no.

duro (aunque minoritario) de jóvenes reticentes a marchar de casa a toda costa, incluso cuando disponen de recursos para hacerlo.

Las mujeres con recursos propios manifiestan de forma mayoritaria albergar la disposición a independizarse, tengan o no tengan pareja formal (el 73% de las que viven exclusivamente de sus ingresos, con y sin pareja formal). Buena parte de los varones que tienen recursos propios albergan también esa disposición, pero en este caso, la pareja cobra mayor importancia. Los varones con recursos económicos propios pero sin pareja formal se muestran más reacios a plantearse salir de casa de sus padres (sólo el 58%) que las mujeres (73%) o sus congéneres con pareja (67%). Se pueden adivinar varias hipótesis para explicar la mayor reticencia de los varones sin pareja formal a plantearse salir de casa. Es probable que, en consonancia con planteamientos de la sociología feminista, haya que atribuir estas pautas a que los varones están menos dispuestos a ensayar regímenes de convivencia que supongan renunciar a los servicios que prestan generalmente las mujeres (madres, abuelas, hermanas) en el hogar paterno o cuando conviven en pareja.⁹⁵

(Tabla 4.7)

Volviendo a la **Tabla 4.6** es reseñable, asimismo, el efecto de la religiosidad. Los/as católicos, en especial si son practicantes, y los/as afiliados a otras confesiones religiosas (aunque de forma no significativa) tienen una probabilidad significativamente menor de haber pensado en independizarse que los/as jóvenes que se declaran ateos o indiferentes. La afiliación religiosa de los/as jóvenes influye directa e indirectamente en las motivaciones de los/as jóvenes para independizarse. Desde un punto de vista doctrinal, el catolicismo y otras confesiones religiosas prohíben o desaconsejan la convivencia en pareja fuera del matrimonio. En este sentido, la salida del hogar paterno suele dilatarse hasta que el/la joven encuentra la pareja idónea para casarse. Raramente anticipan esa salida a través de la cohabitación.⁹⁶ El suyo es un matrimonio “para toda la vida”, que en principio no admite rectificaciones, puesto que divorciarse supone contravenir preceptos sociales y, quizás convicciones íntimas. Es decir, respecto a otros jóvenes, para los/as

⁹⁵ De hecho, entre los/as jóvenes ya emancipados hay una proporción ligeramente superior de mujeres viviendo solas o junto a compañeros/as (en viviendas compartidas) que varones.

⁹⁶ Según datos de la Encuesta de Fecundidad y Familia (FFS), realizada durante la primera mitad de los años noventa en la mayoría de países europeos, el 90% de los/as españoles que tenían entre 20 y 39 años en el momento de la entrevista y declaraban que iban a veces a la iglesia se casaron directamente, sin optar por la cohabitación previa. Frente a esta cifra, un porcentaje algo menor de personas que declaraban no ir nunca a la iglesia se casaron directamente (80%) (Kiernan 2000: 54). Es concebible que, en los últimos años, durante los cuáles la cohabitación se

jóvenes religiosos, las oportunidades de recabar información sobre la pareja (a través de la convivencia pre-matrimonial) son menores y los costes de elegir “mal” superiores. La prolongación de la estancia en el hogar paterno corresponde en buena medida al mayor tiempo que necesitan para tomar decisiones que afectan a su vida de forma más dramática. Por otra parte, indirectamente, dada la correlación alta entre religiosidad de hijos/as y padres, cabe pensar que la religiosidad sea un indicador de ciertas cualidades del contexto familiar en que residen los/as jóvenes, como quizás el grado de cohesión interna de la familia.

Se observan asociaciones estadísticas débiles entre la clase social del cabeza de familia (medida por su nivel educativo alcanzado) y la probabilidad de haber pensado en independizarse. Al igual que sucediera con otras condiciones internas del hogar paterno (esto es, la permisividad de la que gozan los hijos/as para hacer lo que quieran o no ayudar en las tareas domésticas), las ventajas aparentemente objetivas de pertenecer a una familia acomodada apenas influyen en la forma de pensar acerca de la emancipación. Paradójicamente son los/as jóvenes de extracción social elevada (con padres que tienen estudios superiores), y que por tanto, en apariencia, menos incentivos tienen para salir de casa de forma prematura, muestran mayor proclividad a plantearse la salida.⁹⁷

Los/as jóvenes abandonan la casa de sus padres cada vez con más edad. Para muchos/as, la juventud ha dejado de ser el momento en que deciden formar sus propias familias, ya sea a través del matrimonio o de la convivencia en pareja. La mayoría de jóvenes permanece en casa de sus padres en situación de semidependencia. Disponen de algún tipo de recursos propios, que a menudo administran de forma autónoma. También gozan de márgenes de libertad amplios para relacionarse con sus amigos/as y divertirse. Pero sería un error confundir estos espacios de autonomía y permisividad que se han ido abriendo con las causas reales del aplazamiento de su emancipación. Las claves para entender este fenómeno son mucho más complejas. Por un lado, las oportunidades para prolongar estudios hasta edades más tardías y las dificultades de inserción laboral los mantienen en situaciones de dependencia económica. Por otro, el coste elevado de los bienes (fundamentalmente vivienda) y servicios alternativos a los que ofrece la familia de origen impiden su emancipación incluso cuando disponen de recursos propios.

ha convertido en una opción a la que recurre un número cada vez mayor de personas, la brecha entre jóvenes religiosos y no religiosos ha aumentado.

Aunque pocos/as lo consigan, la inmensa mayoría de los/as jóvenes, especialmente a partir de los veinte años, se ha planteado independizarse. Los resultados aquí presentados cuestionan las interpretaciones que sostienen que la dilatación del tiempo que los/as jóvenes pasan en casa de sus padres tiene que ver con una suerte de oportunismo parasitario que los empuja a capitalizar las ventajas crecientes asociadas a esta forma de convivencia. Contrariamente a una convicción bastante extendida (representada también en ciencias sociales), la inmensa mayoría de la juventud no suscribe aquello de que “en ningún sitio se está mejor que en casa” (de los padres, se entiende). Tampoco vive instalada en la conformidad, como resultado de reajustar sus preferencias a lo que le resulta posible conseguir, como la zorra que, en la fábula de Mandeville, renunciaba a las uvas para no admitir que es incapaz de cogerlas. Como se comprueba en el próximo epígrafe, los niveles de frustración de la juventud en sus deseos y expectativas son considerables.

Frustración de deseos y expectativas

El tiempo que transcurre siendo jóvenes es como una galaxia: se expande a la vez que envejece. En opinión de las personas de 15 a 19 años se deja de ser joven a los 31. Las personas de 20 a 24 años creen que se deja de “ser joven” un poco más tarde, a los 34. Entre los que tienen entre 25 y 29 años, la juventud finaliza a los 36 (CIS *Estudio 2.370*, 1999; son valores promedio). Quizás esta tendencia a prolongar la juventud a medida que se acumulan años “juveniles” a las espaldas obedezca en parte a que a muchos/as jóvenes les cuesta cada vez más meterse en el papel que la sociedad reserva tradicionalmente a un ser adulto: el de un individuo que *encarrila* su vida en una dirección definitiva. Como señala el sociólogo Gil Calvo (2001: 157) en el pasado, hacerse adulto consistía en encontrar un empleo definitivo para iniciar una *carrera laboral*, y una pareja definitiva para iniciar un *hogar familiar*. Eran tiempos de estabilidad laboral, en que los/as jóvenes veían mejoradas sus condiciones laborales de forma paulatina, a medida que acumulaban experiencia en su puesto de trabajo. Eran también tiempos en que el matrimonio era “para toda la vida”. El objetivo consistía en encontrar al compañero/a ideal, la “media naranja”, el “padre” o la

⁹⁷ Los/as jóvenes de clase alta pueden plantearse la salida del hogar de los padres a sabiendas de que la transición a un hogar propio resulta más fácil gracias a la capacidad sus familias de apoyarlos económicamente y reintegrarlos en el hogar de origen si las cosas les fueran mal.

“madre de tus hijos”. Una vez encontrados, el sistema normativo vigente prescribía suspender cualquier búsqueda ulterior, bajo amenaza de censura social (e incluso sanción jurídica) severa, ya sea por deslealtad o adulterio.

Aquellos tiempos pasaron, y hoy la mayoría de los/as jóvenes intuyen que, en el contexto social en que les toca vivir, sus empleos no son definitivos y sus relaciones convivenciales o conyugales son considerablemente más frágiles que las de sus progenitores. Sin embargo, el prestigio del *modelo biográfico* que esos tiempos nos legaron apenas se ha erosionado. A pesar de las transformaciones profundas de la sociedad española, y quizás debido a la propia rapidez de los cambios, los/as jóvenes de hoy siguen aspirando a consolidar sus empleos y sus relaciones de pareja en un entorno hostil, en que los empleos son flexibles y sus parejas están dispuestas a reiniciar otra vida cuando el “amor” desaparece. En tiempos de volatilidad laboral y afectiva, la juventud sigue anhelando mayoritariamente lo que la sociedad brindaba a los adultos de antaño sin apenas buscarlo. Pese a la caducidad del modelo, hacerse adulto/a a la antigua usanza es un patrón todavía a imitar. En ese sentido, los/as jóvenes españoles se diferencian de los de otros países europeos, más hechos a la idea de que los avatares de la vida actual en las *sociedades del riesgo* imponen la necesidad de cultivar la capacidad adaptativa de improvisación. Aunque las transformaciones fundamentales están todavía por llegar, se advierten ya las primeras señales de cambio en la sociedad española.

Entre las cualidades que hacen un empleo más atractivo para los/as jóvenes están precisamente las que permiten construir una carrera laboral clásica: la estabilidad de un empleo y la posibilidad de promocionarse. En tiempos de tasas altas de desempleo, la seguridad es el aspecto más valorado de un trabajo. En 1996, con la tasa de desempleo juvenil situada por encima del 30%, preguntados acerca del aspecto que consideran más importante para que un trabajo pueda considerarse bueno, el 56% de los/as jóvenes (de 15 a 29 años) contesta que sea *un empleo fijo/estable* (frente a un 9% que valora en primer lugar que esté bien remunerado) (CIS, *Estudio 2.221*, 1996).⁹⁸ Un 23% adicional opta por la “seguridad” como segunda cualidad más importante de un trabajo. Es significativo que otros aspectos, como que el empleo tenga horarios flexibles (que permitan compatibilizarlo con otras actividades, como el estudio o la vida familiar) son escogidos por pocas personas (un 1,4%) como el aspecto que más valoran. Una encuesta

⁹⁸ Las respuestas incluidas en el cuestionario son: que sea un trabajo seguro (estable/fijo); que tenga prestigio social (bien visto por los que le rodean); que le permita desarrollar las capacidades personales/profesionales; que esté bien pagado; que tenga un buen horario; no sabe; no contesta.

realizada poco después en toda Europa confirma la consideración que merecía la estabilidad entre los/as jóvenes españoles. Preguntados/as por lo que harían probablemente en situación de paro, el porcentaje más alto entre las opciones disponibles corresponde al de los/as jóvenes que contestan que aceptarían cualquier empleo siempre que fuera estable (25%), proporción que está por encima de la media europea (20%) y sólo por detrás de la portuguesa (36%).⁹⁹ No hay prisa por encontrar un empleo si de lo que se trata es de cimentar las bases de una carrera laboral estable. De modo significativo, una proporción menor de jóvenes contesta que, en una situación de paro, aceptaría cualquier empleo, fuesen cuales fuesen las condiciones (22%) (Cruz Cantero y Santiago Gordillo 1999: 23-24). Esta situación está cambiando, aunque sigue siendo difícil hablar de ruptura con las orientaciones y actitudes arraigadas en la sociedad española. En 1999, la estabilidad sigue siendo un aspecto valorado por los/as jóvenes, pero al mismo tiempo, cobran importancia otras dimensiones, como el sueldo o las cualidades del propio trabajo (“que sea interesante, divertido”) (**Tabla 4.8**). Inmersos en una realidad que impone la rotación laboral pero permite encontrar empleo con más facilidad, los/as jóvenes desarrollan preferencias distintas en función de la edad y sus compromisos familiares. La preferencia por la estabilidad laboral (y las posibilidades de promoción) cobra relevancia cuando los/as jóvenes se acercan al umbral biográfico de los treinta años, establecen relaciones de pareja más estables, o tienen hijos/as.

(Tabla 4.8)

De modo paralelo, los/as jóvenes españoles siguen casándose mayoritariamente con la intención de que sea “para la toda la vida”, aunque las condiciones para cumplir ese deseo son las más adversas de la historia. La tendencia a la baja de los niveles de creencia y práctica religiosa, así como el debilitamiento del papel social de la Iglesia Católica, el derecho al divorcio, y la creciente independencia económica de las mujeres, han transformado el principio de indisolubilidad del matrimonio. Las personas divorciadas dejan de ser el blanco de censuras y

⁹⁹ Los datos han sido extraídos del *Eurobarómetro 47.2* (1997), de una muestra de 9.400 jóvenes, representativa de la población de edades entre 15 y 24 años de cada país de la Unión Europea. El texto de las posibles respuestas es: aceptar cualquier empleo, cualquiera que sean las condiciones; aceptar cualquier empleo siempre que sea estable; aceptar cualquier empleo siempre que esté bien pagado; aceptar cualquier empleo, siempre que se corresponda con mi nivel de cualificación; aceptar solamente un empleo bien remunerado y que corresponda a mi nivel de cualificación; aceptar actividades de voluntariado; aprovechar para viajar y visitar países diferentes; intentar crear mi propia empresa; trabajar “en negro”, es decir, sin declarar lo que gano; hacer prácticas, formación que me reorienta profesionalmente; otras; no sabe o no contesta.

recriminaciones sociales. Al contrario, en los últimos años se afianza con fuerza una corriente de opinión favorable a reducir los costes de salida del matrimonio, reflejada, por ejemplo, en la promesa electoral del PSOE en 2004 de reformar la ley del divorcio para agilizar los trámites administrativos y judiciales, o en el reconocimiento de que la violencia de género dentro de las familias constituye un problema grave que exige una intervención pública decidida. Por otra parte, la generalización del trabajo femenino remunerado pone fin a una situación en que no se separa quien quiere, sino quien puede; y este último era en la mayoría de las ocasiones el marido. Gracias a la emancipación económica de las mujeres que tienen empleos extradomésticos, se abre un horizonte nuevo para las que contemplan el divorcio como una salida de una relación conyugal insatisfactoria. El resultado es que, desde inicios de los años noventa, se produce un incremento sustancial de las tasas de divorcio.¹⁰⁰

La mayor proclividad de las parejas a revocar los compromisos contraídos ha tardado en reflejarse en un cambio de actitudes de los/as jóvenes hacia el matrimonio. El matrimonio como institución que ofrece a la pareja garantías de estabilidad mantiene en buena medida intacto su pedigrí, resistiendo las embestidas de una realidad empeñada en demostrar que el signo de los nuevos tiempos es la transitoriedad de las relaciones de pareja.¹⁰¹ Entre los/as jóvenes de 18 a 24 años, la proporción que piensa que el matrimonio es una institución pasada de moda es prácticamente la misma en 2002 (41%) que en 1981 (37%). La coincidencia es aún mayor entre los jóvenes de 25 a 34 años: el 31% pensaba que el matrimonio es una institución pasada de moda en 1981, el 29% lo piensa veintiún años después (Orizo 1996: 178; CIS, *Estudio 2.442*, 2002). Las orientaciones hacia el matrimonio de los/as jóvenes de hoy son casi idénticas a las que mantenía la generación de sus padres cuando eran jóvenes.¹⁰²

Una muestra de la adhesión a la institución matrimonial es la actitud ambivalente que manifiestan los/as jóvenes hacia la convivencia en pareja fuera del matrimonio. Aunque las actitudes tolerantes hacia la cohabitación se generalizan, la mayoría de los jóvenes se inclinan por la opción matrimonial y contemplan la cohabitación como una etapa transitoria, o un período de

¹⁰⁰ En el año 2000 se producen 18 divorcios al año por cada 100 matrimonios que se celebran. En 1985, poco después de que se aprobara la ley del divorcio, eran sólo nueve.

¹⁰¹ El 61% de jóvenes de 15 a 29 años cree que asegurar “la estabilidad de la pareja” es una razón que influye mucho o bastante para casarse en lugar de convivir (CIS *Estudio 2.262*, 1997). Entre la población adulta, el porcentaje es ligeramente inferior, el 55 % (CIS *Estudio 2.087*, 1994) (véase Cruz Cantero y Santiago Gordillo 1999: 92).

¹⁰² Siendo esto cierto, es necesario apuntar que la proporción de jóvenes que consideran el matrimonio una institución caduca va al alza. La valoración del matrimonio parece haber alcanzado su apogeo en la década de los

prueba, que puede preceder pero no sustituir el compromiso matrimonial (Moreno Mínguez 2002: 37-38). Aunque sólo el 4% desaprueba la cohabitación, el 40 % sigue manifestando que nunca convivirían con su pareja sin casarse (CIS, *Estudio 2.262*, 1997). Prueba de la escasa significación social de la cohabitación es el hecho de que España es uno de los países europeos que presenta las tasas de cohabitación más bajas entre personas de 16 a 29 años (12% en 1998)¹⁰³, sólo por delante de Grecia e Italia (Eurostat 2003). En su mayoría, los/as jóvenes consideran que vivir juntos puede acarrearles inconvenientes de diverso tipo. El matrimonio es a su juicio la mejor opción para aplacar presiones familiares y sociales, promueve la estabilidad de la pareja, tiene ventajas económicas y fiscales, y facilita la educación de los hijos/as (**Tabla 4.9**).¹⁰⁴

(Tabla 4.9)

Los cambios en las actitudes hacia la fecundidad son algo mayores. Entre las nuevas generaciones hay una tendencia a desear un número menor de hijos/as y, entre las mujeres, una mayor inclinación a rechazar la maternidad como una imposición social o como la única vía para autorealizarse y ser feliz (M. Marí-Klose y Nos 1999: 89-99). En los años noventa disminuye la proporción de jóvenes que desean más de dos hijos/as y aumenta los que quieren uno, están dispuestos a renunciar a la paternidad/maternidad, o no saben contestar a la pregunta porque no han pensado en el número de hijos/as que quieren tener. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la inmensa mayoría de los/as jóvenes (85%) quiere tener hijos/as. En España sólo el 4% de los jóvenes (de 15 a 29) años manifiesta su voluntad de *no tenerlos*. El modelo ideal actual es la “parejita”, es decir niño-niña. En 1999, la mitad de los españoles de 15 a 29 años desea tener dos hijos/as, un 18% tres, un 7% uno, y un 9% cuatro o más. Un 2% adicional acepta “los que vengan” (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

noventa. A inicios del nuevo siglo, los primeros datos de que se dispone sugieren que puede haberse producido un cambio de tendencia.

¹⁰³ La tendencia es de nuevo al alza. Según datos de 1994 del *European Community Household Panel*, la convivencia de pareja fuera del matrimonio era entonces excepcional. Sólo un 1% de los jóvenes de 20 a 24 años, y el 3% de los/as jóvenes de 25 a 29 cohabitaban (Comisión Europea 1997: 70).

¹⁰⁴ Respecto a esta última consideración, España es uno de los países de la Unión Europea donde se producen menos nacimientos fuera del matrimonio. En 2000, 17 de cada 100 nacimientos tenía lugar fuera del matrimonio, frente a 24% en Portugal, 42% en Francia o más de la mitad en Suecia (Eurostat, 2004).

Pese al calado de las transformaciones sociales que afectan al mundo del trabajo y de la familia, los datos evidencian una línea de continuidad intergeneracional clara (y hasta cierto punto, sorprendente) en las orientaciones y actitudes hacia la carrera laboral y familiar. Frente a una realidad que exige una capacidad considerable de flexibilidad e improvisación, los ideales y valores heredados pesan de forma desproporcionada en las aspiraciones acerca del modo de organizar su vida como adultos/as. La mayoría sigue deseando encontrar un puesto de trabajo fijo, consolidar su relación de pareja a través del matrimonio, y tener hijos/as, en unos tiempos en que trabajos fijos, relaciones de pareja estables e hijos/as son bienes de lujo. En estas circunstancias, proliferan las situaciones en que, en el curso de su transición a la vida adulta, los/as jóvenes desean aquello que les es negado.

Un ejemplo diáfano es el de las preferencias residenciales. La mayoría de los jóvenes españoles/as expresa, al igual que la generación de sus padres, una preferencia por la emancipación temprana, que desmiente la tesis de que renuncien a hacerse adultos/as, comportándose como parásitos oportunistas de sus familias que alargan interesadamente el tiempo que pasan en casa de sus padres. Desde los dieciséis años, a más de la mitad de los jóvenes le gustaría vivir fuera de casa de los padres. Pero cuando tienen veintiocho años, sólo la mitad de los/as jóvenes han logrado emanciparse. Como puede apreciarse en el **Gráfico 4.5**, hay una brecha considerable entre la proporción de jóvenes que desean independizarse y los que lo hacen. Esta brecha viene impuesta por un desajuste entre las preferencias por una emancipación temprana, un sistema normativo que preconiza un tránsito a la vida adulta reflexivo, prudente y sensato, y unas condiciones objetivas que imponen rupturas, aproximaciones parciales y demoras reiteradas.

(Gráfico 4.5)

Como puede apreciarse en el gráfico, en todas las edades predominan los/as jóvenes que les gustaría vivir fuera de casa de sus padres. Las diferencias entre preferencias y prácticas de convivencia ya son acusadas a edades prematuras. Aunque la inmensa mayoría de los menores de veinte años viven con sus padres, sólo un 40% de jóvenes de estas edades está a gusto en el hogar paterno. Del resto, un 36% preferiría vivir en su propia casa y a un 21% le gustaría compartir piso con amigo/as o compañeros/as (21%) (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). El deseo de tener casa propia

es más frecuente entre aquellos/as jóvenes de 15 a 19 años que han atravesado precozmente ciertos umbrales biográficos en el proceso de incorporación a la vida adulta, como son el abandono (premature) de los estudios, trabajar o formalizar una relación de pareja. Entre los/as jóvenes menores de veinte años que sólo estudian o “principalmente estudian”, aunque puedan realizar algún trabajo ocasional para sacar algo de dinero, sólo un 37% declara que le gustaría vivir en su propia casa (véase **Tabla 4.10**). En cambio, en torno a un 50% de los/as que trabajan o están en paro (ya sea porque buscan su primer empleo o se encuentran desempleados/as habiendo iniciado su carrera laboral en el pasado) les gustaría disponer de vivienda propia. De modo parecido, la proporción de jóvenes de 15 a 19 años que desean vivir en su propia casa es mayor entre los/as que tienen novio/a o pareja con la que conviven que entre los/as que no tienen. En todos los casos, a estas edades, los deseos están muy lejos de cumplirse.¹⁰⁵

(Tabla 4.10)

La preferencia por vivir en un piso compartido, experiencia habitual entre jóvenes europeos en los países nórdicos, es en España un ideal propio de post-adolescentes que mantienen con sus padres vínculos económicos y afectivos de dependencia “infantil”. En España, donde el margen de autonomía económica de los/as menores de 20 años es muy reducido y el parque de vivienda de alquiler privado o social escaso, irse a vivir a un piso compartido con compañeros/as y amigos/as es un ideal que consiguen llevar a la práctica menos del 3% de los/as jóvenes a los que les gustaría vivir así. Se trata de una preferencia más común entre los/as jóvenes que sólo estudian (23%) que entre los/as que sólo trabajan (12%), y entre los que no tienen novio/a formal o pareja (17%) que entre los que sí la tienen (10%) (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). Esta modalidad de convivencia tiene más partidarios/as entre los jóvenes menores de 20 años (21%) que entre los que tienen de 20 a 24 años (11%) o de 25 a 29 (4%) (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

A edades más avanzadas, los/as jóvenes quieren salir de casa de sus padres para vivir solos o, en su mayoría, con una pareja. Pero únicamente los más afortunados/as lo logran. Mientras la proporción de los que viven en casa de sus padres antes de cumplir los 20 años supera el 80%, este porcentaje se reduce progresivamente hasta el 40% a los 29 años. Entre quienes se

¹⁰⁵ Llama la atención, el bajo porcentaje de jóvenes de estas edades que, conviviendo con su pareja, disponen de vivienda propia (55%). Se trata, en su mayoría, de parejas tuteladas por los padres.

quedan en casa después de cumplir los 20 años, más de dos terceras partes preferirían otra opción. El 63% de los jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años y el 77% de los que tienen edades de 25 a 29 años vivirían, si pudieran elegir, en su propia casa. Sólo el 24% de los jóvenes de 20 a 24 años y el 17% de los/as que tienen edades comprendidas entre los 25 y 29 años y viven en casa de sus padres manifiestan que ésta es la opción que más les satisface (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

Las pautas residenciales de los/as jóvenes se van diferenciando en función del ritmo de adopción de roles propios de adultos.¹⁰⁶ Así, mientras entre los/as jóvenes menores de 20 años el porcentaje de los que viven en su propia casa es prácticamente el mismo si trabajan que si estudian, o si tienen contrato fijo que si no lo tienen, las trayectorias se van diversificando con la edad en función de su experiencias laborales (como puede observarse en la tabla anterior). Puede observarse una tendencia lenta, pero progresiva, a que los/as jóvenes que trabajan, y en especial los que tienen contrato fijo, vayan independizándose, especialmente a partir de los 25 años. En el grupo de edad de 25 a 29 años, cerca de la mitad de los/as jóvenes que trabajan ya viven en su propia vivienda (frente a menos de un 10% de los que estudian). Sin embargo, desde otro punto de vista, “la botella está medio vacía”: más de la mitad de estos/as jóvenes permanece en el hogar paterno, a pesar de que una abrumadora mayoría (el 85%) se inclinaría, si pudieran elegir, por vivir en su propia casa. Hay razones para pensar que el motivo principal por el que no cumplen ese deseo es económico. El 61% de los/as jóvenes de 25 a 29 años que trabajan pero no disponen de vivienda propia aducen que no pueden pagar todos sus gastos (y los de su pareja, si la tienen), y sólo el 39% tiene un contrato fijo (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

Entre los/as jóvenes que estudian, la brecha entre las preferencias y las pautas que impone la realidad se hace progresivamente más grande, debido a que el porcentaje de estos/as jóvenes que desean vivir independientes aumentan con la edad pero la proporción que lo consigue se mantiene relativamente estancada. A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde los/estudiantes universitarios viven a menudo en campus situados a cientos de kilómetros del hogar de sus padres y realizan actividades laborales a tiempo parcial que les permiten sufragar parte de sus gastos, los/as estudiantes españoles permanecen en casa de sus padres y carecen de recursos propios para independizarse. Los factores que explican estas divergencias tienen que ver con las características de la oferta educativa destinada a los jóvenes de estas edades en España

¹⁰⁶ Se está asumiendo que no existen diferencias significativas entre cohortes sucesivas.

(amplia disponibilidad de centros educativos públicos a lo largo de toda la geografía española, apenas existen polos de atracción de estudiantes), del mercado de trabajo (bajas tasas de contratación a tiempo parcial), y el apoyo económico público escaso o nulo a los/as jóvenes que estudian.

También resultan decisivas las nuevas estrategias familiares. Dentro de muchas familias la prolongación del esfuerzo educativo es concebida como una estrategia de aplazamiento del tránsito a la vida adulta con el objeto de favorecer que, una vez finalizados los estudios, este tránsito pueda ser rápido y más exitoso (Gil Calvo 1995, 2002; Attias-Donfut y Wolf 2000). Prueba de ello es que los/as jóvenes que prosiguen sus estudios cuentan con la complicidad de sus padres. Entre los/as que prosiguen sus estudios después de los veinte años, el 80% indica que habla con frecuencia sobre “estudios o trabajo” en casa, con su familia. El 44% dice coincidir “casi siempre” con sus padres sobre estos temas. Un 46% adicional señala que coinciden “alguna vez”. Menos de un 10% manifiesta niveles altos de discrepancia, es decir, no coincidir “nunca” o “casi nunca” (CIS, *Estudio 2.469*, 2002).

Hay motivos para pensar que las demoras impuestas por este tipo de estrategias promueven una verdadera “falsificación de las preferencias” de los/as jóvenes. Los/as jóvenes que prosiguen sus estudios se ven forzados a hacer sacrificios en otros planos (como el económico y residencial), a la espera de tiempos mejores para colmar sus aspiraciones. Los datos sugieren que los/as jóvenes que estudian dejarían mayoritariamente de vivir con sus padres en caso de que pudieran acceder a su propia vivienda. El hecho de no disponer de recursos económicos suficientes y las condiciones del mercado de la vivienda imponen períodos de demora indeseados.¹⁰⁷

La suerte de los/as jóvenes parece, en muchos sentidos, destinada a cambiar unos años más tarde. Lo cierto es que la mayoría de los/as jóvenes que atravesaron una larga travesía por el desierto en los años ochenta y noventa, marcada por los problemas de inserción laboral y las dificultades de acceso a la vivienda, son hoy adultos/as que tienen un puesto de trabajo estable y han adquirido una vivienda en propiedad.¹⁰⁸ Otras cosas tienen más difícil solución. Buena parte

¹⁰⁷ Existen pocas investigaciones que permitan averiguar qué harían los/as estudiantes si dispusieran de los recursos necesarios para satisfacer sus preferencias. En un estudio que utiliza datos de las encuestas realizadas por el Instituto de la Juventud en los años ochenta se pone de manifiesto que uno de cada dos estudiantes dejaría de estudiar si le ofrecieran un buen empleo (Martín Escudero 1994: 130).

¹⁰⁸ El 29% de las personas de 30 a 39 años tienen contrato temporal, frente al 53% de las de que tienen 20 a 29 años (EPA 2000). El 83% de los hogares en que la persona de referencia tiene entre 30 y 44 años son de propiedad,

de ellos/as no van a llegar a tener el número de hijos/as que les hubiera gustado tener. Las incertidumbres que se ciernen sobre la carrera laboral de los/as jóvenes, el retraso de la edad al primer matrimonio y el acceso a una vivienda propia, se traducen en un aplazamiento de la maternidad/paternidad y, en cada vez más ocasiones, en una revisión de expectativas de fecundidad. La edad media a la maternidad ha aumentado en las últimas dos décadas en más de dos años. Actualmente la mayoría de las mujeres españolas (el 64%) tiene sus hijos/as superado el umbral de los treinta años.¹⁰⁹ Aproximadamente el 45% de las mujeres dan a luz por vez primera cuando tienen entre 30 y 35 años y sólo un 19% prolonga la espera hasta después de los 35 años. El 6% de mujeres de 40 años no tiene hijos/as todavía, y es probable que la inmensa mayoría no los llegará a tener (o, al menos, no propios). (INE, *Encuesta de Fecundidad*, 1999).

La edad es el factor principal que configura las expectativas de los/as jóvenes respecto a la fecundidad. Como puede apreciarse en el **Gráfico 4.6**, con el paso de los años, la brecha entre el promedio de hijos/as deseados y el de hijos/as que se considera que se llegará a tener se amplía de forma progresiva. En el transcurso de la juventud, los/as jóvenes revisan a la baja la estimación del número de hijos/as que llegarán a tener. En cambio, sus preferencias se mantienen casi intactas.¹¹⁰ Como consecuencia de ello, a medida que se acercan al umbral de los treinta años, cerca del 25% de los/as jóvenes piensan que no llegarán a tener el número de hijos/as que desean, en contraste con el 13% que piensan así antes de cumplir los veinte años. Los motivos principales para albergar estas expectativas respecto a la fecundidad tienen que ver, de nuevo, con problemas económicos y de incertidumbre respecto al horizonte biográfico. El 48% de los/as jóvenes que cree que no llegará a tener el número de hijos/as que le gustaría aduce falta de ingresos como el motivo principal. Un 13% menciona la “inseguridad laboral”, un 11% “falta de tiempo para atenderlos/as” y un 9,8% “inseguridad en el futuro de los hijos/as” (**Tabla 4.11**).¹¹¹

mientras es el 67% cuando la persona de referencia tiene entre 16 y 29 (INE, *Panel de Hogares de la Unión Europea*, 2001).

¹⁰⁹ Durante la treintena, debido a los riesgos que entraña un embarazo tardío para el feto, tienden a concentrar la fecundidad en los primeros años.

¹¹⁰ Contrariamente a lo que se suele afirmar, las preferencias de los/as jóvenes no son *adaptativas*. La evidencia sugiere que, tanto en lo que respecta a su voluntad de abandonar la casa de sus padres como a su deseo de tener hijos/as, los/as jóvenes no tienden a revisar sus preferencias para ajustarlas a lo que les es posible conseguir.

¹¹¹ La evidencia comparativa pone de relieve la preocupación de los jóvenes españoles por la estabilidad económica y laboral, así como la capacidad de dar a los/as hijos una educación buena. En una encuesta que se realiza a los/as jóvenes de 15 a 24 años en la Unión Europea (Eurobarómetro 55.1, 2001), el motivo que a juicio de los españoles influye más en la decisión de tener hijos/as es tener un trabajo seguro. El 75% de los españoles/as considera que es uno de los tres principales factores, frente al 65% de la media europea. Este porcentaje es superior al de todos los

(Gráfico 4.6)

(Tabla 4.11)

Otros factores que influyen en la configuración de las expectativas sobre fecundidad son género y situación sociolaboral. Los segmentos de la población joven que, a partir de los veinticinco años, se muestran más proclives a revisar a la baja sus expectativas de fecundidad son las mujeres jóvenes que estudian o trabajan (el 31% y 26% respectivamente) así como los varones desempleados (el 27%). Las mujeres en paro y las que se dedican a las labores domésticas, así como los varones que estudian o trabajan, son las/os más confiados en que podrán llegar a tener el número de hijos/as que desean. Por ejemplo, sólo el 14% de las mujeres que se dedican a las labores domésticas, y el 11% de los varones que prolongan sus estudios después de los veinticinco años creen que tendrán menos hijos/as de los que desean. Las carreras profesionales de varones y mujeres inciden de forma inversa en sus expectativas de satisfacer sus preferencias personales de descendencia. Mientras las mujeres tienden a ver amenazada la posibilidad de colmar sus aspiraciones a tener el número de hijos/as deseado si participan en el mercado laboral o prolongan sus estudios hasta edades avanzadas, el mayor riesgo percibido por los varones está relacionado con la exclusión del mercado de trabajo (**Tabla 4.12**). Mujeres y varones de la misma edad y en la misma situación sociolaboral contemplan el futuro de forma diferente. La disyuntiva a la que se enfrentan muchas mujeres a partir de los veinticinco años es optar entre su carrera laboral y una vida familiar satisfactoria. Los varones que trabajan o todavía estudian confían, en cambio, en tener el número de hijos/as que desean.

(Tabla 4.12)

La juventud es una larga travesía en que las personas cobran conciencia de lo difícil que es vivir en concordancia con sus ideales respecto a aspectos fundamentales de su trayectoria vital, como emancipación, participación en el mercado laboral, o fecundidad. La brecha entre el

países excepto Francia. Un 58 % menciona además la capacidad para dar a los hijos/as una buena educación (frente al 45% de media europea).

“quiero y no puedo” se ha ampliado en los últimos años. Las causas principales de este desajuste creciente son fundamentalmente económicas. Las mayores complicaciones para cerrar esa brecha tienen que ver con las dificultades de inserción laboral y el comportamiento del mercado de la vivienda. La información empírica presentada evidencia que los/as jóvenes no han abdicado de su voluntad de emanciparse y formar una familia. Sin embargo, las raíces del desajuste no son exclusivamente económicas. La otra cara de la cuestión radica en la misma naturaleza de las preferencias normativas que abrigan los/as jóvenes. Las transformaciones profundas de la sociedad española en los últimos años apenas se reflejan todavía en el sistema de ideales y valores de los/as jóvenes. Los/as jóvenes españoles siguen prefiriendo emancipaciones a “la vieja usanza”, por vía matrimonial, prudentes y responsables. La cuestión principal para muchos jóvenes (en especial los varones) no es tanto (o sólo) cuándo podrán satisfacer sus deseos de salir de casa, sino cuándo estarán preparados para iniciar una carrera familiar conforme a parámetros normativos tradicionales, esto es, con los estudios finalizados y una carrera laboral bien encaminada (a ser posible, con un trabajo estable). Existe una reticencia bastante extendida a ensayar modalidades de emancipación más comunes en otras latitudes, como compartir piso o cohabitar, que introducen elementos de flexibilidad que podrían facilitar la salida del hogar familiar en los nuevos entornos laborales e inmobiliarios. La mayoría de los/as jóvenes siguen abandonando el hogar paternal para casarse cuando tienen vivienda propia.¹¹²

Las mujeres jóvenes en España afrontan un problema adicional. El éxito académico y la conquista de la independencia económica tienen un precio. La apuesta que hacen las mujeres por la educación y la incorporación al mundo laboral engendra inquietudes acerca de los márgenes disponibles para tener los hijos/as que desean.¹¹³ En el contexto actual, un porcentaje significativo de mujeres entiende que los compromisos que exige su vida profesional van a impedirles colmar sus aspiraciones de fecundidad. El gran salto cualitativo respecto a las generaciones precedentes es que las mujeres que trabajan ya no dejan sus empleos para ser

¹¹² Utilizando datos de 1994 del Panel de Hogares del Eurostat, Gerardo Meil (1998: 26) estima que el 58% de los matrimonios que llevan hasta dos años casados viven en una vivienda de propiedad y un 10% adicional en una vivienda cedida. Para evaluar exactamente en que medida los jóvenes salen de su casa cuando pueden comprarse una casa (o su familia les va a ceder una) habría que descontar la proporción de matrimonios en segundas o posteriores nupcias.

¹¹³ A tenor de los datos, estas inquietudes están justificadas. Según los datos de la *Encuesta de Fecundidad* de 1999, las mujeres sin estudios de 15 a 49 años tienen una media de 2,7 hijos/as, mientras que entre las que tienen una licenciatura o son doctoras el número de hijos/as baja a 0,7. El 61% de estas últimas no tienen ningún hijo/a (frente a sólo el 8% de las primeras). De modo similar, las mujeres ocupadas tienen menos hijos (1,0 de media) que las que se dedican al trabajo doméstico (1,97).

madres. Crecen progresivamente las tasas de empleo femenino entre las madres con hijos/as menores de seis años: entre 1989 y 1999 pasan del 30% al 42% (OCDE 2001: 134). En el curso de los últimos años, las mujeres intentan resolver las contradicciones entre vida laboral y familiar, que las coloca en lo que Nicole-Drancourt (1989) denomina “situaciones imposibles”, desplegando un repertorio variado de estrategias: completando “jornadas interminables” (Durán 1986), ejerciendo presión sobre sus parejas para que sean “algo más que ganadores de pan” (Valiente 1997), transfiriendo responsabilidades de cuidado y atención de los niños/as a abuelas y parientes (Tobío 2001), eligiendo empleos que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar (Salido 2001),¹¹⁴ o recurriendo a asistentes/as domésticos remunerados (Tobío 2002). Ninguna de estas estrategias familiares logra impedir que una proporción considerable de mujeres que trabajan fuera del hogar tengan menos hijos/as de los que desean y algunas de ellas incluso se vean obligadas a renunciar a la maternidad.¹¹⁵

Estos datos configuran un panorama más sombrío que el que habitualmente se asocia a la juventud. La imagen de unos/as jóvenes dichosos e irresponsables, ante los que se abre un mundo infinito de oportunidades, está bastante alejada de una realidad que impone moratorias continuas y ajustes de expectativas. Los/as jóvenes de hoy están llamados a vivir una vida distinta a la de sus padres. Se trata de una generación para la cuál los cánones normativos de transición a la vida adulta que tan bien se ajustan a la trayectoria de sus padres, y que ellos/as intentan seguir al pie de la letra, se han quedado súbitamente obsoletos. En el futuro, es posible que la generación que les pisa los talones (que ahora se encuentra en la adolescencia) albergue menos reticencias normativas a modalidades de transición a la vida adulta más versátiles, adoptadas ya con cierto éxito por la mayoría de los/as jóvenes europeos (como trabajar mientras se estudia, convivir en pisos compartidos con compañeros/as, o iniciar proyectos de vida en pareja a través de la cohabitación). Pero no cabe duda de que para que se produzca una convergencia real con las pautas europeas tienen que cambiar imperiosamente de rumbo las prioridades públicas, y en

¹¹⁴ En los últimos tiempos crece la proporción de hogares en que las mujeres trabajan a tiempo parcial. En 1999 el 11% de las mujeres ya trabajan bajo esta modalidad de contratación (OCDE 2001: 135). Al mismo tiempo aumenta la proporción de mujeres que trabajan en el sector público. Según Salido (2001), en el período 1977-1998, prácticamente la mitad de las nuevas ocupadas asalariadas se produjo en el sector público. El Estado es un empresario más sensible a las dificultades de las mujeres para conciliar la vida familiar y profesional.

¹¹⁵ Según datos de 1995, el 16% de las mujeres de 34 a 49 años que trabajan no tienen hijos/as, en contraste con el 1,3% que no los/as tienen entre las que se dedican al trabajo doméstico (M. Marí-Klose y Nos Colom 1999, basado en datos del *Estudio 2.113* del CIS).

particular, las políticas de empleo y bienestar que afectan a los itinerarios de transición a la vida adulta de la juventud.

Capítulo 5

PRODUCCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS DE PROTECCIÓN

“Don’t trust anyone over 30”

lema de las revueltas estudiantiles californianas en 1968

“La juventud es una religión de la cual uno siempre acaba por apartarse”

André Malraux

La expansión de las políticas de bienestar para las personas ancianas supone un esfuerzo importante de colectivización de las responsabilidades hacia ese segmento de la población. El esfuerzo se refleja claramente en las partidas de gasto público. Como se tuvo la ocasión de comprobar en el Capítulo 2, las partidas de gasto orientadas preferentemente a ancianos (vejez y asistencia sanitaria) absorben una cantidad ingente de recursos en comparación a las políticas preferentemente destinadas a infancia (educación y políticas familiares y de apoyo a la infancia) o a políticas favorecedoras de la emancipación económica y residencial (políticas activas de empleo y políticas de vivienda).¹¹⁶ Ahora bien, los sesgos del Estado de Bienestar varían extraordinariamente entre países.

En un trabajo reciente, Julia Lynch (2006) ha calculado el gasto público que veinte países de la OCDE destinan a los programas orientados preferentemente a la población anciana y al resto de grupos de edad, ajustándolo por el tamaño del segmento demográfico potencialmente beneficiario y expresándolo como porcentaje del Producto Interior Bruto per cápita. Sus estimaciones, basadas en datos de la OCDE de principios del siglo XXI, sitúan a España como el segundo país con el sesgo más favorable a las personas ancianas, después de Grecia. España está a la cola de todos los países en gasto en transferencias y servicios para las familias (ajustado por el número de personas menores de 15 años) y sólo por encima de Grecia y Portugal en gasto educativo (ajustado por el número de personas de 0 a 20 años) (p. 32). El sesgo a favor de las personas de edad avanzada se ha acentuado desde 1960 a 2000 en 11 de los 20 países. Entre ellos figura España. Según Lynch, el indicador de sesgo en el gasto se ha incrementado en nuestro país en un 50% (p. 45).

Lynch atribuye los sesgos del Estado de Bienestar a la naturaleza de los sistemas de provisión públicos adoptados en cada país. Países con prestaciones universales (a los pensionistas, desempleados, familias), concebidas como derechos de ciudadanía, tienden a

¹¹⁶ Véase, especialmente la Tabla 2.3.

favorecer los programas destinados a personas más jóvenes.¹¹⁷ Esto es así con independencia del tamaño del Estado del Bienestar y otras características de los programas (existencia de mecanismos de comprobación de medios, existencia de beneficios complementarios ligados a contribuciones realizadas). En cambio, los países donde las prestaciones tienen carácter contributivo y están ligadas a las trayectorias ocupacionales de los beneficiarios/as suelen presentar un sesgo favorable a las personas mayores. Ese sesgo se intensifica en los países en que los agentes políticos son más proclives a desarrollar estrategias competitivas con el objetivo deliberado de favorecer a determinadas categorías de personas a fin y efecto de mantener, y a ser posible, aumentar sus apoyos. Lynch incluye a España entre los países con estilos políticos particularistas, donde los agentes políticos incurren en prácticas favorecedoras de determinados colectivos, aunque centra su investigación en el caso italiano.

Dos de los actores más claramente involucrados en la definición de políticas particularistas son los sindicatos de clase y los gobiernos. Las políticas de representación de los sindicatos pueden tener efectos importantes sobre el bienestar y la situación laboral de los distintos grupos de edad si intervienen directamente en la elaboración de las políticas sociales y laborales. La naturaleza de la políticas puede variar de forma considerable en función de que apuesten por políticas incluyentes que busquen integrar intereses diversos de la clase trabajadora (estén o no afiliados a las organizaciones sindicales, voten o no en las elecciones) o por políticas de representación de los intereses exclusivos de sus miembros (políticas excluyentes). Es razonable pensar que los sindicatos optarán por políticas incluyentes cuando piensen que hacerlo no representa una amenaza para los intereses de sus afiliados/as. De igual manera, los gobiernos pueden optar por estrategias "programáticas", que persiguen beneficiar a la sociedad en su conjunto, o por políticas "clientelistas", diseñadas deliberadamente para afianzar o reforzar sus coaliciones sociales de apoyo. Los cálculos electorales que realiza el partido en el gobierno influyen sobre el perfil de sus políticas públicas. En las siguientes dos secciones analizo la evolución de las algunas iniciativas de política social y laboral durante la etapa de consolidación del Estado de Bienestar en España —en la década de los ochenta y primera mitad de los años noventa— con objeto de determinar el papel de los sindicatos y el gobierno en la construcción de un modelo de bienestar que favorece los desequilibrios generacionales.

¹¹⁷ Las prestaciones universales se basan en un principio de no-discriminación. Van ligadas al derecho que tienen todas las personas, en su condición de ciudadanos iguales en una comunidad política, a un nivel de vida digno.

Políticas de representación sindical

Diversas teorías han analizado la capacidad de los sindicatos de clase de representar los intereses de los trabajadores/as. Desde los años ochenta el interés de los estudios se ha centrado en determinar en qué medida los sindicatos son capaces de desarrollar políticas de representación que integren los intereses diversos, e incluso antagónicos, de grupos de trabajadores diferentes (Cerviño 2003: 18). Con el declive del modelo de producción fordista en la mayoría de los países desarrollados se produce un incremento sustancial de las modalidades de contratación de la fuerza de trabajo. El arquetipo de trabajador fordista —varón, cabeza de familia, con empleo estable— que tradicionalmente ha constituido las bases de la afiliación sindical, pierde peso en el mercado laboral. La irrupción de modos alternativos de producción otorga un protagonismo creciente a un nuevo trabajador/a, que realiza trabajo precario y discontinuo, trabaja a tiempo parcial o lo hace "a la carta", en función de las demandas de su empleador/a. Se trata de un trabajador/a que negocia su relación contractual de forma individual con la empresa, lo que amenaza el papel que tradicionalmente han desempeñado las organizaciones sindicales en la organización de las relaciones laborales (Vilroxx 1996).

En las nuevas condiciones, los sindicatos ya no pueden aspirar a representar a una clase trabajadora con condiciones de empleo homogéneas, como sucedía durante el período de vigencia del modelo fordista, sino a grupos de trabajadores/as en situaciones diversas, con intereses y demandas diferentes. Muchos de estos trabajadores/as se mantienen al margen del mundo sindical. A raíz de ello, surge un volumen considerable de estudios que sostienen que los sindicatos se enfrentan en los últimos años a una crisis grave de representación. La cuestión a resolver es qué costes (y posibles ventajas) plantea a los sindicatos el representar a grupos nuevos de trabajadores que presentan niveles de afiliación bajos. Como hemos visto en el capítulo 2, los dilemas a que se enfrentan las organizaciones sindicales afectan particularmente a los trabajadores más jóvenes, que están concentrados desproporcionadamente (y más en España) en las nuevas modalidades de empleo.

Durante bastante tiempo, la literatura sociológica y económica se ha inclinado mayoritariamente a pensar que los sindicatos son en buena medida responsables de la segmentación del mercado de trabajo entre trabajadores que poseen un nivel elevado de protección (*insiders*) y trabajadores precarios o desempleados (*outsiders*), cuyos intereses no son tenidos en

cuenta en las negociaciones entre empresarios y sindicatos. La razón principal por la que los sindicatos representan los intereses de los *insiders* es porque éstos constituyen sus bases principales de afiliación y son sus apoyos más importantes en las elecciones sindicales. La defensa de los *insiders* puede implicar el empeoramiento de las condiciones de los *outsiders*. Por ejemplo, el mantenimiento de costes elevados de despido como resultado de la presión sindical redundaría en la inseguridad laboral de los *outsiders*, al hacer recaer los ajustes de empleo en trabajadores/as con costes bajos de sustitución. Los empresarios/as preferirán seguir pagando salarios elevados a los *insiders* si el coste en que deben incurrir para prescindir de ellos/as o sustituirlos por trabajadores temporales es muy alto.¹¹⁸

La introducción del trabajo precario en España no es ajena a la actuación de los sindicatos, aunque se han planteado dudas respecto a la importancia que jugó en este proceso la defensa de los/as *insiders*. Muchos autores/as consideran que la reorganización del marco laboral que se produce en muchos países a partir de la década de los setenta se debe a presiones empresariales y a la complicidad de los gobiernos. Desde este enfoque, diversos factores estructurales (especialmente, la intensificación de la competitividad empresarial a escala global y cambios en la estructura de la demanda) configuran desde finales de la década de los setenta un marco nuevo de funcionamiento de las economías capitalistas en que las empresas consiguen arrancar a los gobiernos concesiones pro-capitalistas. La diferenciación de las condiciones de contratación constituye un elemento clave de este proceso, ya que permite a las empresas una alta flexibilidad para adaptarse a escenarios económicos cambiantes. En España, los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores primero, y la reforma laboral de 1984 después, recogen esas concesiones pro-capitalistas.

Frente a estos cambios, los sindicatos oponen una resistencia escasa. En palabras de uno de los defensores más destacados de esta interpretación "la razón principal es que el inicio de la reorganización se produce cuando aún existe un bajo nivel de organización y donde los aspectos políticos de la transición democrática priman sobre otros imperativos" (Recio 1995: 104). Por otra parte, según este mismo autor: "en un contexto de destrucción neta de empleo se aceptan muchas de las medidas aplicadas con tal de salvar o crear puestos de trabajo. El poco peso inicial de estas medidas facilita *la mala comprensión* de lo que está sucediendo" (cursivas añadidas). Es

¹¹⁸ Estos costes son de dos tipos: 1) costes de productividad, invertidos en la selección, formación y motivación de los *insiders*, y 2) costes de sustitución, asociados a indemnizaciones por despido (Cervino 2003:54).

decir, desde este punto de vista, los sindicatos no intervienen por acción en la segmentación del mercado de trabajo, sino por omisión, omisión que estaría justificada por las circunstancias excepcionales que concurren en ese momento histórico y por cierta miopía de los agentes sindicales: "sólo cuando el crecimiento muestre un proceso de sustitución de unas formas de empleo por otras y los 'costes' sindicales de la diferenciación queden más claros se empezará a reaccionar, pero la situación está ya más consolidada y es más difícil de cambiar" (p. 104). La complicidad de los sindicatos en las reformas es, desde este punto de vista, involuntaria.

Un trabajo que llega a una conclusión ligeramente diferente es la investigación de Emma Cerviño sobre las políticas de representación sindical de UGT y CCOO en relación con el empleo temporal. Cerviño caracteriza las políticas de representación de los sindicatos a inicios de la transición y en la reforma laboral de 1984 como "estrategias de inclusión parcial". A pesar de mostrarse contrarios a las medidas que fomentan el empleo temporal, los sindicatos las aceptan u oponen poca resistencia. Así ocurre con las reformas incluidas en los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores. A ello contribuye el alcance limitado de las medidas adoptadas y la necesidad, compartida en el espectro social y político, de asumir costes y hacer concesiones en un momento en que el proceso de transición a la democracia corre peligro. Los sindicatos entienden que deben concentrar sus esfuerzos en la lucha por conseguir su reconocimiento en el nuevo marco de las relaciones laborales que abre el régimen democrático, y eso sólo puede conseguirse si se garantiza la estabilidad social.

El mayor impulso flexibilizador de la contratación temporal se produce con la reforma laboral aprobada por el gobierno socialista en 1984. Como se ha tenido ocasión de comprobar en los capítulos 2 y 3, esta reforma marca el inicio de una nueva etapa de las relaciones laborales en España, en que la contratación temporal se convierte en la puerta de entrada al mercado de trabajo de una nueva generación de jóvenes y la causa principal de la precariedad de su situación laboral. La reforma de 1984 se inscribe en una serie de reformas de carácter estructural llevadas a cabo para sanear la economía y fomentar la creación de empleo. La reforma laboral elimina muchos de los requisitos exigidos en la legislación anterior para aplicar los contratos laborales, creando un nuevo tipo de contrato temporal causal —los *contratos temporales para el lanzamiento de una nueva actividad*— y potenciando los contratos temporales no causales —ampliando la duración máxima de los contratos de dos a tres años, o eliminando topes fijados hasta entonces en relación a la plantilla fija de la empresa— así como los contratos de formación

—elevando la edad máxima del trabajador/a para acceder al contrato, incrementando bonificaciones económicas y disminuyendo la parte de la jornada destinada a enseñanzas teóricas.

La estrategia de flexibilización por la que opta el gobierno español se concentra en los problemas de "entrada" en el mercado de trabajo, renunciado a acometer reformas en las "vías de salida" del mismo. Esto es así a pesar de que los problemas de rigidez en el mercado de trabajo son fundamentalmente problemas relacionados con las fuertes restricciones legales para el ajuste del empleo a través del despido. En España los niveles de seguridad en el empleo de los trabajadores fijos se han situado hasta finales de los años noventa entre los más elevados de la OCDE (OCDE 1999, Polavieja 2004). La legislación española se encuentra en los momentos en que el gobierno socialista acomete la reforma laboral entre las que más requisitos procedimentales exige y la que establece indemnizaciones más elevadas (Cerviño 2003:163). Así lo reconoce el propio Ministro de Trabajo Joaquín Almunia en octubre de 1983, sólo unos meses antes de someter a aprobación la ley de reforma laboral que flexibiliza únicamente la contratación, pero deja intacto el despido.¹¹⁹ La elevada protección del empleo fijo es una herencia del franquismo. Diversos autores la han considerado una garantía otorgada por el régimen franquista a los segmentos activos de la población como mecanismo compensatorio por la falta de desarrollo de un sistema de bienestar (Lessenich 1995:9, Sarasa y Moreno 1993:8, Toharia 1986:1162).

En este contexto, la decisión del gobierno de concentrar la flexibilización en la "entrada" en el mercado de trabajo (en la contratación) resulta cuanto menos sorprendente. Desde la llegada al gobierno del partido socialista en 1982, la reestructuración del mercado laboral se convierte en una prioridad política. El objetivo es, por una parte, favorecer la flexibilidad demandada por las empresas en un contexto de crisis económica y creciente competitividad internacional y, por otra dar cumplimiento a la promesa electoral contenida en el programa socialista de crear 800.000 puestos de trabajo. A lo largo del año 1983, la prensa se hace eco de las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos sobre la reforma laboral.¹²⁰ Aunque el gobierno sólo llega a plantear de forma tímida la posibilidad de flexibilizar el despido, los sindicatos expresan de forma

¹¹⁹ "España posee [...] unas leyes laborales con más alta protección ante el despido que las que existen en Europa", *El País* 28 de octubre de 1983.

¹²⁰ Los siguientes comentarios son el resultado de un análisis de contenido de las noticias aparecidas en *El País* y *La Vanguardia* durante 1983 y 1984 que incluyen en el cuerpo del artículo las palabras "flexibilización laboral", "flexibilización del mercado de trabajo" o "despido", descartando aquellos artículos que carecen de relevancia para el tema. En total se analizan 99 artículos de *La Vanguardia* y 135 de *El País*.

contundente su oposición radical. Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores amenazan con movilizaciones en caso de que el gobierno se plantee fórmulas de flexibilización de las “vías de salida”, tal como reclama abiertamente la CEOE.

Hay razones para pensar que flexibilizar el despido de trabajadores/as indefinidos, y por tanto, haber hecho recaer los ajustes de empleo en los *insiders*, hubiera supuesto riesgos graves de enfrentamiento con los sindicatos en un momento en que el gobierno perseguía la cooperación con los sindicatos para asegurar la moderación salarial. El propio ministro Almunia se ve obligado a comparecer varias veces para tranquilizar a los sindicatos, asegurando que “el Gobierno nunca ha patrocinado el despido libre ni la conversión en temporales de todos los contratos existentes”.¹²¹ El temor de los sindicatos estaba probablemente fundamentado. Durante ese año, varios artículos de prensa se hacen eco de la voluntad gubernamental de estudiar la posibilidad de flexibilizar el despido.¹²² Diversos expertos cercanos al gobierno habían manifestado la conveniencia de esta opción. Emma Cerviño señala, basándose en el testimonio de expertos y cargos del gobierno, que las medidas de flexibilización finalmente aprobadas generaron gran controversia dentro del gobierno, donde un sector amplio se mostraba partidario de extender las medidas de flexibilización al problema del despido. Es posible que el gobierno incluso hubiera adquirido algún compromiso en ese sentido.¹²³ En todo caso, el poder sindical fue capaz de convertir la flexibilización de las “vías de salida” —que hubiera afectado directamente a los intereses de los *insiders*— en un *non-issue*, es decir, un tema que no podía siquiera plantearse en la agenda de discusión.¹²⁴

Los riesgos que comporta la flexibilización del despido hacen que el gobierno opte por una reforma que afecta únicamente a las nuevas contrataciones, con la aquiescencia de UGT (que firma el Acuerdo Económico y Social) y la oposición poco beligerante de Comisiones Obreras.

¹²¹ *El País*, 28 de octubre de 1983.

¹²² Por ejemplo, garantizando el despido libre en las empresas de nueva creación. *El País*, 25 de agosto de 1983.

¹²³ Por ejemplo, tras la firma del Acuerdo Económico y Social, Ángel Panero, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (CEPYME) denunció el incumplimiento del compromiso alcanzado por el gobierno con los/as empresarios de abaratar el despido colectivo, a través de la eliminación de la autorización administrativa. El portavoz del gobierno se aprestó a negar que se hubiera hecho esa promesa. *El País*, 6 de diciembre de 1984.

¹²⁴ En una entrevista mantenida por Cerviño con Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el año 2000, el Secretario de Economía y Planificación en el primer gobierno socialista declara: “Es que era como romper un tabú muy gordo, como pueda ser ahora la privatización de la sanidad. Era algo que a la gente no le cabía en la cabeza [...] Era decir, deja que tu hijo pueda conseguir trabajo aunque lo puedan echar; y el otro mensaje era: para que a lo mejor a tu hijo lo contraten tú pon en peligro tu puesto de trabajo. Este mensaje era imposible de vender hace 15 años” (citado en

Esto convierte a los jóvenes en los destinatarios de las medidas de reestructuración del mercado de trabajo adoptadas con la reforma laboral de 1984. Como reconoce Joaquín Almunia a Emma Cerviño en una entrevista concedida en el año 2000, “se abre camino, entonces, a un mercado a dos velocidades: una regulación más flexible para las entradas y un mantenimiento de la protección para impedir la salida de los que ya tienen empleo” (p.164-165). Que el resultado de la reforma va a ser la segmentación del mercado de trabajo es algo que no escapa a los sindicatos en aquel momento. Es dudoso que, como afirma Recio (1995), no se comprendieran las consecuencias de la reforma. Marcelino Camacho, líder de Comisiones, califica los planes del gobierno como “el mayor atentado que se puede cometer contra los sindicatos, si exceptuamos su ilegalización”, pues “significa introducir la insolidaridad entre los trabajadores, dividir el movimiento obrero y crear a trabajadores de primera clase (es decir con contrato de empleo fijo) y de segunda clase (los que a partir de ahora tengan que conformarse con un contrato temporal).¹²⁵ En líneas similares se expresa el secretario general de la UGT cuando afirma “esto significa parcelar el mercado de trabajo entre aquellos que tienen un puesto fijo y los que lo tienen de forma eventual, lo que significa tanto como introducir la insolidaridad entre los trabajadores y dividir a la clase obrera”.¹²⁶

A pesar de ello UGT acepta la reforma laboral. Lo hace a cambio de contrapartidas que benefician al sindicato y a los segmentos de la clase trabajadora más próximos a las organizaciones sindicales. Por lo que respecta a los beneficios de tipo organizativo, UGT confía en reforzar su colaboración con el gobierno y a tener una mayor participación en la política económica (Astudillo 2000). Además arranca al gobierno una serie de medidas que fortalecen los derechos de representación sindicales en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). Esta ley supone el reconocimiento de las secciones sindicales en empresas mayores de 250 trabajadores, que son las instituciones preferidas por la UGT para llevar a cabo la acción sindical (Cerviño 2003: 188). Por otra parte, en 1986 se aprueba la Ley 4/1986 de “Patrimonio Sindical Histórico” que establece mecanismos de compensación a los sindicatos por el patrimonio expropiado durante el franquismo. UGT es el principal beneficiario de la restitución de derechos de propiedad sobre los bienes incautados.

Cerviño 2003: 164). Obsérvese como Fernández Ordóñez sitúa a la generación adulta (los padres y madres) como aquella a la que se deben las explicaciones.

¹²⁵ *La Vanguardia*, 2 de noviembre de 1983.

¹²⁶ *La Vanguardia*, 27 de agosto de 1983.

Por lo que se refiere a las contrapartidas que benefician a los trabajadores/as, junto a las medidas de desregulación laboral, el gobierno amplía la duración máxima de las prestaciones contributivas por desempleo de dieciocho a veinticuatro meses y aumenta la cuantía de las mismas para los trabajadores/as mayores de 45 años con cargas familiares. La UGT consigue, además, que los trabajadores/as mayores de 55 con derecho a percibir prestaciones asistenciales por desempleo puedan hacerlo hasta alcanzar la edad de jubilación. Se trata de medidas claramente destinadas a sus afiliados/as y posibles votantes en elecciones sindicales, y que refuerzan la segmentación de derechos sociales. Por otra parte, UGT se asegura que las medidas adoptadas no promuevan la sustitución de empleados fijos (la clientela sindical) por temporales. Así, la ley prohíbe realizar contratos temporales a empresas que durante el año anterior hubieran amortizado puestos de trabajo por despido declarado improcedente, expediente de regulación de empleo, o cualquier otra causa objetiva.

Comisiones Obreras no apoya la reforma del gobierno y amenaza reiteradamente con movilizar a los trabajadores/as contra las medidas. Las escasas posibilidades de éxito de estas movilizaciones disuaden al sindicato de emprender tales movilizaciones. En entrevistas realizadas con Emma Cerviño en 2000, los máximos responsables de la organización sindical reconocen las dificultades que hubiera entrañado movilizar a trabajadores/as que no consideran las medidas adoptadas por el gobierno como un problema que les afecte directamente. De forma significativa, contraponen la capacidad de movilización del sindicato frente a los efectos de la legislación sobre contratación temporal con la que tendrían si el gobierno hubiera intentado “tocar las pensiones”.¹²⁷

Tanto Recio como Cerviño consideran que los sindicatos cambiaron sus estrategias frente a la temporalidad cuando se hizo evidente que la flexibilización estaba acarreando la sustitución del empleo fijo por empleo precario, lo que podía ser costoso y arriesgado para la fortaleza sindical a medio plazo. La reforma laboral creó una masa importante de trabajadores temporales con implicación sindical escasa o nula, y por tanto poco dispuestos a movilizarse en defensa de intereses comunes de la clase trabajadora. Ello restaba capacidad de presión a los sindicatos frente a gobierno y empresarios, poniendo en peligro su papel en el terreno de las relaciones

¹²⁷ Por ejemplo, Agustín Moreno, miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal y Secretario General de Enseñanza de Comisiones Obreras, declara a Cerviño: “Por aquella época la temporalidad era reducida. La reforma de las pensiones era una medida mucho más directa y que afectaba a muchos trabajadores, dejaba fuera del acceso a las

laborales y la negociación de políticas sociales. UGT y Comisiones obreras terminaron convocando una huelga general en diciembre de 1988 contra los intentos del gobierno socialista de seguir fomentando la temporalidad entre los jóvenes (a través del Plan de Empleo Juvenil), lo que ha sido interpretado como una “estrategia de representación inclusiva”, que antepone los intereses organizativos de los sindicatos (e indirectamente los intereses de los *outsiders*) a la defensa de los intereses de sus bases (Cerviño 2003: 243). Desde este punto de vista, la lucha de los sindicatos contra la precarización laboral entrañaba dificultades estratégicas. Cerviño considera que los sindicatos convocaron la huelga a pesar del riesgo que corrían de que los/as trabajadores fijos (*insiders*) no entendieran el compromiso con la defensa de los intereses de los/as trabajadores temporales (*outsiders*) y castigaran a sus representantes sindicales por ello, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, la conversión del empleo temporal en estable no figuraba entre las demandas de los afiliados/as.¹²⁸ Por otra, reducir la temporalidad podría dotar a los/as empresarios de mayores argumentos para conseguir el abaratamiento del despido, puesto que la conversión de los empleos temporales en fijos encarecía el coste de los ajustes de plantillas. Es decir, contrariamente a la teoría que sugiere que los sindicatos anteponen la defensa de los intereses los *insiders*, las organizaciones sindicales aparentemente terminan desarrollando una política de representación inclusiva.

Es dudoso que lo que Cerviño considera una política inclusiva no fuera, en realidad, una estrategia sutil de defensa de los *insiders* en la que los “intereses” de los jóvenes (tal como los entendían los jóvenes) podían tener cabida. Como reconoce la propia autora, la extensión de la temporalidad estaba comenzando a amenazar también a los trabajadores fijos (y no sólo a los sindicatos como organizaciones). Según datos de la EPA, en 1987 se destruyen 214.000 empleos fijos y se crean 625.536 empleos temporales. La destrucción de empleo fijo y su sustitución por empleo temporal era especialmente intensa entre los trabajadores menos cualificados (Alonso Borrego 1996). El Plan de Empleo Juvenil (PEJ) diseñado por el gobierno puede concebirse como una amenaza adicional para el empleo fijo, al abaratar considerablemente los costes de sustitución de empleados fijos por temporales. Así fue entendido por los líderes sindicales. A través del PEJ, el gobierno se propone crear un nuevo contrato temporal —el llamado *contrato*

pensiones a muchos trabajadores. Sin embargo, los efectos de la legislación sobre contratos estaban mucho más difuminados. Era más difícil atraer la atención frente a ello”.

de inserción— para trabajadores entre 16 y 25 años que busquen su primer empleo. El Plan se concibe como un conjunto de medidas excepcionales que permitan adquirir experiencia laboral a los/as 800.000 jóvenes que buscan su primer empleo, ya que se considera que la carencia de experiencia previa “coloca a los jóvenes en situación de desventaja manifiesta respecto a los otros demandantes de empleo”.¹²⁹ El Plan contempla una serie de bonificaciones y exenciones fiscales a las empresas que contraten a trabajadores jóvenes bajo esta modalidad de contratación.¹³⁰ Se trata de lograr, tal como lo describe Álvaro Espina, Secretario de Empleo del gobierno socialista "que si una empresa necesita ampliar su producción en una tercera parte y tiene actualmente tres puestos de trabajo de igual contenido, en lugar de crear un cuarto puesto de trabajo similar, contrate a tres ayudantes que, al tiempo que realizan su aprendizaje, colaboren con los veteranos, de modo que la producción de cada uno de ellos aumente en una tercera parte. En estas condiciones de reparto de trabajo, el rendimiento de cada uno de los tres jóvenes de nueva contratación será aproximadamente la tercera parte del de un trabajador experto en un puesto de trabajo pleno. Como es lógico, la empresa no elegirá esta alternativa a menos que el coste laboral de cada joven sea también aproximadamente la tercera parte del de un trabajador ordinario. Ello implica una retribución equivalente al salario mínimo, la exoneración de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y alguna forma de compensación económica que permita que el coste anual para la empresa fijado por la norma no sobrepase el medio millón de pesetas, ya que el coste medio en tablas de convenio de los oficiales es de 1,5 millones de pesetas anuales y éstos son los puestos de trabajo más susceptibles de ser objeto de desdoblamiento para facilitar la inserción laboral de los jóvenes".¹³¹ El Plan de Empleo Juvenil se concibe, pues, como un plan de choque, encaminado a crear empleo juvenil ocupando posibles vacantes con trabajadores/as jóvenes.

Sin embargo, como señala Cerviño (p. 208, nota 15) el Plan de Empleo Juvenil la exigencia de que el contrato de inserción se utilice para la creación de nuevos empleo no viene acompañada de ningún tipo de medidas para evitar que el nuevo empleo creado fuera en realidad una forma de sustituir el empleo fijo. En esas circunstancias, más que responder a una preocupación genuina por la precarización de la situación laboral de los jóvenes, la estrategia de

¹²⁸ Cerviño presenta datos del Estudio 1.771 del CIS (de junio y julio de 1988) que muestra la mayoría de los trabajadores/as fijos consideraban la temporalidad en el empleo como un problema que no reclamaba atención sindical prioritaria.

¹²⁹ Artículo de Álvaro de Espina, Secretario de Estado de Empleo, en *El País*, 3 de noviembre de 1988.

¹³⁰ También se prevé que los jóvenes contratados bajo la nueva modalidad cobren el salario mínimo interprofesional.

¹³¹ *El País*, 3 de noviembre de 1988.

confrontación hacia el Plan de Empleo Juvenil puede ser interpretada como el producto del temor sindical a que los empresarios pudieran prescindir de los *insiders* (o que se incrementara su capacidad de negociación salarial con ellos/as) al abaratarse considerablemente el coste de los *outsiders*. En la jerga de la teoría económica, los trabajadores/as menores de 25 años se convierten en “sustitutivos brutos” de los trabajadores/as adultos a más bajo precio. La reducción del precio de un factor productivo disminuye la demanda del otro.

A pesar de que la retórica sindical pusiera el énfasis en la defensa de los intereses de los/as jóvenes, el temor a que los verdaderos perjudicados fueran los trabajadores/as adultos se hizo patente en múltiples declaraciones. Por ejemplo, en un artículo en el *El País* convenientemente titulado “Los jóvenes no son ciudadanos de segunda”, la secretaria confederal de Empleo de Comisiones Obreras, Salce Elvira manifiesta: “desde el punto de vista social, se avanza en la degradación paulatina de la estabilidad del mercado laboral, a cambio de un contrato ineficaz para generar empleo e injusto para los jóvenes y adultos, ya que se producen dos clases de trabajadores para el mismo puesto de trabajo, los que no cuestan nada y los viejos con cargas sociales que desincentivan su permanencia en la empresa, por lo que hay que deshacerse poco a poco de ellos; al regalar la mano de obra para este contrato, las empresas que no lo adopten tendrán dificultades para competir en costes salariales con las otras, con las consecuencias de todos sabidas. Por otra parte, se margina objetivamente a más de dos millones de personas (los parados mayores de 25 años o que han trabajado alguna vez), condenándoles al paro y la miseria, al considerarles, de hecho, fuera de los canales prioritarios de bonificaciones”.¹³² Comisiones Obreras llega a elaborar un documento donde denuncia la inconstitucionalidad de las medidas propuestas por el gobierno, puesto que entiende que el Plan supone consagrar mecanismos de trato desigual por razón de edad, contraviniendo el artículo 14 de la Constitución que prohíbe cualquier tratamiento discriminatorio en las relaciones laborales sin justificación objetiva y razonable. En un clima de unidad de acción sindical, la UGT expresa el mismo temor. Por ejemplo, Jesús Vaca, responsable de Juventud del sindicato, declara que “las medidas de fomento de empleo juvenil suponen almacenar parados en naves industriales y condenan al paro a todos aquellos que tengan más de 25 años”.¹³³ En un clima de unidad sindical, ambas organizaciones llegan al mismo diagnóstico.

¹³² El País, 11 de noviembre de 1988.

¹³³ El País 22 de abril de 1988.

Hay que situar la reacción de la UGT en su contexto, caracterizado por el enfriamiento de las relaciones con su partido “hermano”. En la segunda mitad de la década de los ochenta los dirigentes de la UGT llegan de forma progresiva a la conclusión de que las contrapartidas que obtienen de su colaboración con el gobierno no se traducen en ventajas suficientes para la clase trabajadora en general y sus bases sindicales en particular. A juicio de los máximos dirigentes del sindicato, la colaboración de la UGT se estaba tornando improductiva y superflua. Desde inicios de 1987 había crecido el malestar de la central sindical con el gobierno —y en especial con las actuaciones del Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Solchaga, al que los dirigentes ugetistas acusaban de proximidad excesiva con las tesis de la patronal en la negociación salarial. Esas tensiones van a desembocar en enfrentamiento abierto a lo largo de 1988, en que el sindicato denuncia sin tapujos la falta de compromiso social del gobierno en un contexto de crecimiento económico (Astudillo 2000). En este escenario, las movilizaciones contra el Plan de Empleo Juvenil —y muy particularmente la huelga convocada el 14 de diciembre de 1988— persigue, por encima de la retirada del Plan de Empleo Juvenil, un “giro social” de la política del gobierno. Así lo expresa claramente Justo Domínguez, secretario general de la UGT en Cataluña unas semanas antes de la huelga: “creo que el gobierno no retirará el Plan de Empleo Juvenil, y aunque lo retirara, en la política económica del gobierno hay otros elementos incluso más poderosos que exigen que los sindicatos llevemos a cabo esta protesta”.¹³⁴ La unidad de acción con Comisiones Obreras incrementaba la probabilidad de éxito de la huelga (o en caso de fracasar, distribuía equitativamente los costes de este fracaso entre las dos centrales mayoritarias).

Durante la década de los noventa los sindicatos mostraron una sensibilidad cada vez mayor hacia los efectos negativos de la temporalidad. Detrás de las iniciativas emprendidas por los sindicatos para reducir la temporalidad hay un intento de frenar la sustitución de empleo fijo por temporal, que amenaza seriamente su poder organizativo (Cerviño 2003). Tras el éxito la huelga de diciembre de 1988, gobierno y sindicatos se sientan a negociar sobre diversas materias. La pérdida de apoyos al PSOE en las elecciones de 1989 —que habían privado al gobierno de la mayoría absoluta—convencieron a sus dirigentes de la necesidad de atender a las demandas de carácter social para evitar una mayor erosión (Boix 1996: 232). En este contexto, los sindicatos arrancan al gobierno una serie de compromisos sociales que suponen un incremento del gasto público en favor de las clientelas sindicales: en materia de pensiones, protección de trabajadores

¹³⁴ La Vanguardia, 24 de noviembre de 1988.

eventuales del campo, fijación de salarios de los empleados públicos. En materia laboral logran que el gobierno intensifique el control sobre la contratación temporal con objeto de evitar el fraude, y reconozca a los sindicatos un papel activo en estas tareas de seguimiento.¹³⁵ Pero fracasan en su intento de eliminar las dos modalidades contractuales a las que hacen responsables de los mayores incrementos de la temporalidad: el contrato de fomento de empleo y el de lanzamiento por nueva actividad. Tampoco consiguen impedir, ya en 1994, la legalización de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), pero logran equiparar las condiciones laborales de los trabajadores en misión con las de los demás empleados. La creación de ETTs era percibida como especialmente lesiva para los intereses sindicales, al entender que podía acelerar la sustitución de empleo fijo por temporal. En última instancia, sin embargo, la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de las ETT disminuye el atractivo de este tipo de contratación y el incentivo de los empresarios para sustituir trabajo fijo por temporal.

A partir de 1994 los sindicatos también se enfrentan a un nuevo reto que amenaza los intereses de sus principales bases de apoyo: la flexibilización de los procesos de despido de los trabajadores con contrato fijo. Un primer paso tímido en esa dirección es la reforma laboral de 1994 —adoptada por el gobierno contra el criterio sindical— que amplía las causas por las que se podía despedir y facilita los trámites para hacerlo bajo ciertas condiciones. La agilización de los procesos de despido resultaba especialmente amenazante para los sindicatos debido a la introducción de una nueva modalidad de contratación temporal —el contrato de aprendizaje— que podía facilitar la sustitución de empleo fijo por empleo temporal. Es por ello, que convocan una huelga general en enero de 1994.¹³⁶ La huelga no surte el efecto esperado y los sindicatos no logran impedir que la reforma laboral sea aprobada. La reforma de 1994, sin embargo, mantiene intactas las indemnizaciones por despido de los trabajadores estables, principal escollo para una flexibilización real de los procesos de despido.

La ley de 1994 es la antesala de la reforma de 1997, en la que los sindicatos aceptan por primera vez una reducción de los costes de despido de los trabajadores/as fijos, pero únicamente

¹³⁵ Sin embargo, como señala Cerviño (2003: 264, nota 15), las expectativas de control de los sindicatos se desvanecieron pronto a causa de la falta de recursos y capacidad de las organizaciones sindicales para llevar a cabo las labores de supervisión.

¹³⁶ En un documento para uso interno ante la huelga general convocada, los sindicatos señalan: el contrato de aprendizaje “no garantiza la formación; ni el derecho a las contingencias de enfermedad y desempleo; permite la contratación hasta los 28 años; la media de salario no llega a las 40.000 pts; por tanto va a suponer la degradación del empleo de los jóvenes y va a tener un importante efecto de sustitución sobre el empleo existente. En una imagen

si fueron contratados de manera estable a partir del momento en que se aprobara la reforma.¹³⁷ La reforma laboral de 1997 (Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo) se concibe como una iniciativa para reducir las elevadas tasas de temporalidad —que fundamentalmente afectan a los trabajadores/as jóvenes— sin exponer a los trabajadores que ya tienen contrato estable (más veteranos) al riesgo de perder sus prerrogativas. En la práctica, se propone combatir la elevadas tasas de temporalidad de los jóvenes flexibilizando los procesos de despido de la generaciones que se están incorporando a la estabilidad.

La reforma ha sido interpretada como un “mal menor” para los sindicatos, que se ven obligados a aceptar en un contexto poco propicio para sus intereses. El fracaso de las movilizaciones contra la reforma de 1994 había puesto de relieve la limitada capacidad de los sindicatos de frenar iniciativas gubernamentales que no son percibidas como lesivas para sus intereses por el grueso de la clase trabajadora. Por otra parte, la llegada del Partido Popular supone un cambio de escenario en las relaciones entre el gobierno y los sindicatos. El nuevo gobierno había declarado su disposición a alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales, pero también había dejado clara su intención de impulsar unilateralmente una reforma laboral si empresarios y sindicatos eran incapaces de alcanzar un acuerdo (Chari: 2001: 71, Cerviño 2003: 315). En este contexto, los sindicatos tenían razones para temer que el gobierno aprobara medidas para flexibilizar de manera importante los procesos de despido de los/as trabajadores estables, tal como reclamaban con intensidad los sectores empresariales. Ante esa eventualidad, en el acuerdo final los sindicatos logran salvaguardar la posición de sus bases de apoyo (los trabajadores que ya cuentan con un contrato estable) a costa de aceptar una nueva modalidad de contratación estable para los trabajadores que no habían conseguido todavía un empleo fijo. El acuerdo final supone mantener la segmentación entre trabajadores de las generaciones más jóvenes —cuyo despido se abarata cuando logran la estabilidad— y trabajadores/as veteranos— que siguen disfrutando de contratos estables con costes de despido elevados. Toda una serie de medidas encaminadas a

gráfica, puede afirmarse que un padre perderá su empleo de 150.000 pts para que su hijo lo ocupe por menos de 40.000 pts” (“27-E Huelga General por el empleo y la solidaridad”, citado en Cerviño 2003: 292).

¹³⁷ Para ello, se creó una nueva modalidad contractual — dirigida a los trabajadores menores de 30 años, mayores de 45, desempleados/as de larga duración y discapacitados — cuya indemnización por despido (cuando se tratara de un despido objetivo improcedente) fuera de 33 días de salario por año trabajado, en lugar de 45 días de salario, como había sucedido hasta entonces.

reducir la precariedad restringiendo la utilización de los contratos temporales conjuran la amenaza de sustitución de empleo fijo por temporal.¹³⁸

La evidencia examinada sugiere que los sindicatos se movilizaron intensamente en defensa de los intereses de los trabajadores/as más jóvenes cuando entendían que las medidas flexibilizadoras podían salpicar a los trabajadores/as que ya gozaban de contratos fijos (1988 y 1994), y no lo hicieron cuando creyeron que los intereses de éstos últimos no estaban siendo perjudicados e interpretaban que el escenario era poco propicio para el éxito de la movilización (1984 y 1997). Los sindicatos antepusieron los intereses organizativos y los de sus clientelas a los de trabajadores/as poco proclives a afiliarse y participar en las elecciones sindicales. Eso no significa que no manifestaran repetidamente su voluntad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as más jóvenes, y que este interés pueda considerarse ideológicamente genuino. Desde 1984, las centrales sindicales no han cejado en reclamar la creación de empleo para jóvenes y la adopción de medidas para favorecer la conversión del trabajo temporal en fijo.

Pero, como señalan Polavieja (2003: 196) y Boix (1996: 215), el contexto institucional en que operan los sindicatos españoles —con escasa presencia en las empresas, prevalencia de la negociación sectorial, descoordinada y excesivamente centrada en los salarios— obstaculiza la defensa de intereses inclusivos. Luchar por los intereses de los trabajadores/as más jóvenes resulta costoso desde un punto de vista organizativo y arriesgado en contextos de intensa competición sindical por el voto en las elecciones a los comités de empresa.¹³⁹ Los trabajadores/as jóvenes y los trabajadores/as temporales constituían un segmento minoritario de los afiliados/as. Según la Encuesta de Sindicatos, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 1994, el 77% de los trabajadores afiliados/as a algún sindicato son mayores de 30 años (el 80% de los afiliados a CCOO y el 83% de los afiliados a UGT) y el 79% tienen contrato de duración indefinida (el 89% de los afiliados/as de Comisiones Obreras y el 79% de los

¹³⁸ Entre ellas, cabe destacar la eliminación de contratos temporales para la promoción de empleo y de los contratos de lanzamiento de una nueva actividad, sustitución de los contratos de aprendizaje por contratos para la formación y la intensificación del control administrativo y sindical de las Empresas de Trabajo Temporal. También se impide que los nuevos contratos se puedan aplicar en empresas que en los doce meses anteriores hubieran realizado despidos objetivos improcedentes o hubieran procedido a un despido colectivo.

¹³⁹ El sindicalismo español ha sido caracterizado como un “sindicalismo de electores” en lugar de un “sindicalismo de afiliados” (Jordana 1994: 139). Las elecciones a los comités de empresa cobran una relevancia especial al ser el procedimiento que posibilita que un sindicato pueda participar en la negociación colectiva con los empresarios/as en sus distintos niveles, así como tener acceso a la arena política. Ello incentiva a los sindicatos a representar una fracción amplia de los trabajadores/as —aún cuando no estén afiliados/as— y a competir intensamente por su voto (Astudillo 2001).

afiliados/as a la UGT). Los trabajadores/as veteranos con contrato indefinido representan también la base de apoyo electoral de los sindicatos. Constituyen el grueso de la masa electoral en las empresas en que se celebran elecciones sindicales. El 83% de las personas que en 1994 reconocen haber votado en las últimas elecciones sindicales celebradas en su empresa son mayores de 30 años y el 88% tienen un contrato indefinido.¹⁴⁰ Las bases de afiliación y voto de los sindicatos difícilmente hubieran entendido que se volcaran los recursos organizativos en la defensa de trabajadores que mayoritariamente estaban poco implicados en la vida sindical y habitualmente no respondían a las llamadas de movilización de los sindicatos.¹⁴¹

Representación política de los intereses de la juventud

Buena parte de las políticas sociales y laborales que impulsa un gobierno tienen el carácter de bien público. No existe una clientela electoral que se beneficia en exclusiva de esta política. Dicho esto, los beneficiarios de otras políticas sociales tienen un perfil socio-demográfico bastante definido. También lo tienen las propuestas políticas que realizan los partidos en sus programas electorales. Los programas de los partidos son un documento especialmente interesante para analizar el perfil de las políticas que se proponen llevar a cabo. Son declaraciones políticas hechas en nombre del partido y aprobadas en convenciones nacionales, siendo un documento público, que los partidos se comprometen a cumplir (Budge, Robertson y Hearl 1987; Klingemann, Hofferbert y Budge 1994). A pesar de que en teoría los partidos no están obligados a llevar a cabo todas las promesas contenidas en estos documentos, diversos autores ofrecen evidencia empírica de que existe una tendencia a que las promesas incluidas en los programas electorales son tenidas en cuenta por los dirigentes políticos de los partidos en el gobierno a la

¹⁴⁰ En un análisis estadístico de la probabilidad de votar en las elecciones a comités de empresa con la Encuesta de Sindicatos del CIS 1994, Polavieja (2001: 207-210), muestra que los razón de razones de votar de un trabajador con contrato temporal es 0,42 en comparación con un trabajador con contrato indefinido, controlados otros factores objetivos (edad, sexo) y subjetivos (ideología, identificación subjetiva con los sindicatos). Polavieja atribuye el efecto del contrato sobre la probabilidad de voto a la “incertidumbre con respecto a los beneficios del voto”, debido a que, a causa del carácter transitorio de su vinculación con la empresa, los trabajadores temporales tienden a pensar que los resultados de las elecciones no les afectan.

¹⁴¹ En otro modelo estadístico, Polavieja (p. 211) muestra que, a igualdad de condiciones, la razón de razones de que un empleado/a con contrato temporal tome parte en huelgas o paros en el lugar de trabajo es 0,73 la de un trabajador con contrato indefinido. Junto a la “incertidumbre con respecto a los beneficios” de esta participación, hay que considerar los costes disciplinarios que puede acarrear. El riesgo de sufrir represalias (especialmente la no renovación de su contrato) tiende a inhibir la participación de los trabajadores temporales en acciones colectivas.

hora de diseñar sus políticas más importantes (Budge, Robertson y Hearl 1987; Klingemann, Hofferbert y Budge 1994). Hacer una proposición que no se piensa cumplir entraña el riesgo de que los/as votantes puedan percibir que los dirigentes en el gobierno han actuado de forma deshonesto y le pasen factura en el momento de rendir cuentas.

En este apartado me centro en el análisis de los programas electorales y las políticas del PSOE entre 1982 y 1996. El primer gobierno socialista es el responsable de grandes reformas de los regímenes de protección social y laboral que sientan las bases de los sesgos que son objeto de análisis en esta tesis. La duración del mandato socialista —cuatro legislaturas— permite rastrear en qué medida las propuestas inspiran la acción gubernamental en aquellos ámbitos que conciernen a la juventud, e, incluso, si el resultado de estas políticas, propician cambios de los discursos y promesas en ediciones posteriores de los programas. En los documentos analizados he identificado de forma semiautomática, con ayuda del programa ATLAS/ti las frases, que hacían referencia a los temas de interés. La interpretación final se basa en la selección y análisis de contenidos relevantes así identificados.

a) Programas electorales

Las iniciativas políticas de los primeros gobiernos socialistas en relación a los jóvenes estuvieron centradas en el mercado de trabajo. Así, la creación de empleo para “jóvenes y mujeres que acuden por primera vez a solicitar su ingreso en la vida laboral” es una de las prioridades del programa electoral del partido socialista en 1982. Para ello, el PSOE se propone crear más de 800.000 puestos de trabajo. Para facilitar la inserción de los jóvenes en la vida laboral se plantean una serie de iniciativas específicas: (1) “difundir la utilización de los contratos en prácticas y para la formación, poniendo los medios para que puedan concluir en contratos ordinarios” (2) retrasar la edad de jubilación y favorecer la jubilación anticipada, promoviendo la sustitución de trabajadores mayores por jóvenes en busca de su primer empleo, (3) aplicación estricta de un sistema de incompatibilidades laborales, (4) ayudar a los trabajadores/as jóvenes a acceder a la titularidad de explotaciones agrarias, y (5) desarrollar la formación de jóvenes desempleados. Los jóvenes forman parte, junto a niños y la “tercera edad”, de los “colectivos más olvidados de la sociedad”, por lo que se reclama la “solidaridad del resto de la sociedad a favor de los jóvenes”. El PSOE reconoce en su programa electoral que los jóvenes están llamados a desempeñar un papel de primer orden en la sociedad democrática: “los jóvenes constituyen el eje de

dinamización de la sociedad, reivindicando todas aquellas capacidades libertarias, creativas y antiautoritarias de las que son depositarios, impulsando sus valores y la incorporación de formas que les son propias, radicalmente innovadoras y democráticas”. El sistema educativo debe ocuparse de preservar esas actitudes, evitando la penetración de valores autoritarios.

El programa socialista menciona las palabras “joven”, “jóvenes”, “juventud” en 28 ocasiones, en diversos apartados.¹⁴² Además de un apartado específico dedicado a *Los Jóvenes*, aparecen propuestas específicas dirigidas a jóvenes en los siguientes epígrafes “Crear Empleo: Objetivo Prioritario”, “Cultura”, “Modernización de las Estructuras Productivas” y “Educación”. En el apartado “Mujer” se propone la creación de escuelas infantiles para mujeres con hijos menores de 6 años para favorecer la maternidad de las mujeres trabajadoras. Es de destacar que no se hace ninguna mención a los jóvenes en el apartado dedicado a la “Vivienda”. La atención se centra en crear buenas condiciones de financiación de la vivienda y fomentar la promoción pública (directa, de protección oficial y de rehabilitación) hasta alcanzar un ritmo de producción de 400.000 unidades. En líneas generales, puede afirmarse que el programa electoral con que el PSOE concurre a las elecciones entiende que el principal problema de la juventud es su inserción laboral. El apartado dedicado a “Jóvenes” se compone de 736 palabras, de un total de 32.796 (2,3%).

El programa de 1986 vuelve a situar a los jóvenes en el centro de atención de las políticas del gobierno socialista. El PSOE se define como “un partido joven desde el punto de vista de la edad de sus miembros”. El programa reconoce la vulnerabilidad de los jóvenes y la injusticia social de la que son víctimas: “nuestro objetivo de construir una sociedad más vertebrada y progresista obliga a tomar en consideración el hecho de que muchos españoles, por la sola razón de su sexo o edad, se sitúan en una posición más desventajosa para su inserción social o para su desarrollo personal. Estos colectivos sufren con especial gravedad las consecuencias de la crisis económica y la pervivencia de valores, actitudes y estructuras que empujan hacia su marginación en la vida social”. Los socialistas se proponen dotar de “medios de inserción profesional a la generación que más gravemente está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y del bloqueo del mercado de trabajo”. Los socialistas entienden que la raíz del difícil momento que

¹⁴² En el programa se dedica bastante menos atención a los mayores de 65 años. Las palabras “mayores de 65 años”, “tercera edad”, “vejez”, “anciano”, “pensionista” aparecen únicamente 13 veces. Se menciona 11 veces la palabra “jubilación” “jubilado”, habitualmente en relación a las jubilaciones anticipadas.

atraviesan los jóvenes es su situación en el mercado de trabajo. De esta situación se derivan otros problemas que azotan a la juventud.

El programa socialista relaciona explícitamente la marginación laboral de los jóvenes con problemas de exclusión social y, en particular, con las toxicomanías. La gravedad de la situación de los jóvenes reclama actuaciones transversales urgentes que puedan ayudar a resolver problemas en diversos campos. En palabras de los autores del programa electoral: “la sociedad en su conjunto debe asumir su responsabilidad en la génesis de estos fenómenos. Hay que propiciar un cambio de actitudes para evitar la estigmatización y el agravamiento de la marginación social de jóvenes con problemas”. El PSOE cree que la inserción laboral es la principal receta para prevenir las “graves consecuencias de la marginación productiva” y aboga, al igual que hiciera en el año 1982, por el fomento de la creación de empleo. Junto al fomento de la creación de empleo, se pone gran énfasis en la formación y capacitación de los jóvenes y el acercamiento de los jóvenes al trabajo a través de nuevas fórmulas de inserción laboral. La formación se concibe como la clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. En el apartado dedicado a las propuestas socialistas en relación a la cobertura por desempleo se hace una clara diferenciación entre “demandantes jóvenes de primer empleo” y “parados de larga duración”. “Los primeros deben beneficiarse de “cobertura económica a través de cursos de Formación Profesional dotados de la correspondiente beca, y mediante la garantía de contratos en prácticas y formación con subvención salarial”. Los segundos deben beneficiarse, además de programas de los programas de inserción y re-cualificación, de ayudas económicas “equivalentes a la prestación asistencial por desempleo” durante la asistencia a los cursos. El PSOE se propone ampliar la cobertura económica de los desempleados con necesidades especiales de protección (especialmente de aquéllos que tienen responsabilidades familiares).

El apartado “Juventud” consta de 1.461 palabras, de 38.782 de las que se compone todo el documento (3,7%). Las palabras “juventud”, “joven”, “jóvenes” aparece 47 veces en todo el texto.¹⁴³ La gran mayoría de veces se habla de jóvenes en relación a medidas de capacitación profesional e inserción en el mercado de trabajo. Subyace una concepción de la juventud como una etapa eminentemente de transición, bloqueada de una forma anómala por la concurrencia de factores excepcionales —la crisis económica— y estructuras productivas heredadas. Se entiende

¹⁴³ Las palabras “mayores de 65 años”, “Tercera edad”, “vejez”, “anciano” aparecen cinco veces. No se trata, en esta ocasión el tema de las jubilaciones ni se habla de “pensionistas”.

que el objetivo primordial de los jóvenes es el de prepararse para ser trabajadores adultos, para incorporarse a la vida adulta tan pronto han completado la etapa de capacitación. Los procesos de transición laboral “fallidos” abocan a los jóvenes a riesgos de exclusión intensos. Los programas socialistas de 1982 y 1986 no contemplan dimensión alguna de la emancipación que no sea la estrictamente económica. En el programa de 1986, el acceso a la vivienda sigue sin ser un problema de “jóvenes”, sino de las “familias con menor nivel de renta”.¹⁴⁴ A diferencia de 1982, no se hace mención a los problemas de conciliación de las familias con hijos pequeños en que la mujeres se incorporan al mercado de trabajo.

En el programa de 1989, se produce un cambio sustancial en los contenidos del programa. El PSOE sigue poniendo el acento en la capacitación profesional e inserción laboral, pero aparecen con fuerza nuevos temas. Reivindica haber creado millón y medio de puestos de trabajo, “muchos de los cuáles han sido para jóvenes”. No se entra a valorar la naturaleza de los empleos creados, pero se compromete a incentivar “la conversión en empleos duraderos de los contratos de duración determinada, celebrados durante los últimos años, cuando se trate de jóvenes”. Por vez primera se reconoce que los problemas de los jóvenes tienen otras dimensiones. El programa de 1989 es el primero que plantea las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes, aunque no las relaciona con las condiciones económicas y laborales en que se encuentran, sino únicamente con el encarecimiento de este bien. De acuerdo a los socialistas: “La política de vivienda debe hacer especial incidencia en solucionar las necesidades de este colectivo. De ahí que haya que crear -y fomentar con diversos instrumentos económicos- nuevas figuras de apoyo a la construcción y rehabilitación de viviendas que por su tamaño y distribución estén pensadas específicamente para jóvenes”. El apartado de “jóvenes” ocupa menor espacio que en 1986 (802 palabras, el 3,2% del documento), pero las palabras “joven/jóvenes/juventud aparecen prácticamente el mismo número de veces en todo el documento (45). Las cuestiones abordadas se diversifican. El partido socialista se compromete a impulsar iniciativas culturales de los jóvenes, a apoyar el turismo juvenil, a mejorar el ocio de los jóvenes, a dialogar con asociaciones juveniles y a reducir (por segunda vez) la duración del servicio militar obligatorio (a nueve meses). En el apartado dedicado a la *Mujer*, el programa socialista propone el desarrollo de escuelas infantiles para menores de cero a tres años.

¹⁴⁴ Se habla, por vez primera, de fomentar el uso de viviendas de alquiler “para colectivos que así lo requieran”.

Estas tendencias se consolidan en 1993. El apartado dedicado a los jóvenes *Los jóvenes, incorporemos todo su potencial* se inicia resumiendo lo que el PSOE entiende que han sido los logros de su etapa de gobierno: “para los jóvenes ha sido una etapa decisiva en la que la reducción del servicio militar y las reformas e innovaciones introducidas en los campos de la educación y del empleo han creado un contexto de referencia sin parangón en el pasado”. A pesar del progreso que se atribuyen, el PSOE entiende que quedan asignaturas en materia de integración social que hay que acometer en la siguiente legislatura. Se sigue reconociendo la necesidad de mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes, pero ésta aparece como una cuestión más entre muchas otras que merecen igual o incluso mayor atención. Se menciona explícitamente a los jóvenes en relación a un gran número de dimensiones: consumo, iniciativas de cooperación y voluntariado, salud, adicciones, turismo y movilidad, apoyo a la cultura, acceso a la vivienda. Este último apartado cobra un protagonismo inusitado en el programa del PSOE. Los socialistas dedican mayor atención que nunca al acceso a la vivienda de los jóvenes y se comprometen a orientar su política social para resolver sus problemas específicos. Para ello se propone (1) impulsar el alquiler social para estudiantes, parejas jóvenes y jóvenes con cargas familiares, y trabajadores jóvenes desplazados y (2) promover la adquisición de viviendas en régimen de protección oficial, con condiciones especiales para jóvenes. El PSOE se compromete a llevar a cabo un Plan de Vivienda (1996-1999) para 500.000 “familias y jóvenes” en favor de los sectores de la población con menos recursos. El Plan terminará presentándose dos meses antes de las elecciones generales de 1996, y se convierte en la propuesta central “para jóvenes” del programa electoral. En 1996 se reconoce sin tapujos que “el problema de la vivienda afecta de forma especial a los jóvenes. La vivienda es determinante para que los jóvenes puedan construir su propio proyecto personal y laboral”. El programa también dedica una atención insólita a la protección de la maternidad y al apoyo a familias que cuidan menores dependientes.¹⁴⁵

El manifiesto electoral del PSOE en 1996, elaborado en un clima en que los responsables del partido mascan su derrota inminente, deja entrever muy a las claras cuáles son las luces y cuáles son algunas sombras de su gobierno, que ahora conviene atender. El documento reivindica

¹⁴⁵ El programa socialista propone considerar la baja por maternidad como baja específica distinta de la baja por Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), que se pueda remunerar con el 100% del salario. Se quiere facilitar el cuidado de los niños y niñas, por terceras personas, mediante deducciones fiscales para los recursos destinados a este fin, así como aumentar la oferta de escuelas infantiles y comedores escolares con horarios amplios para menores de tres años. Se plantea cubrir la cotización a la Seguridad Social, durante un año, cuando se soliciten excedencias, por parte de hombres o mujeres, para atender a familiares que necesiten cuidados especiales.

los avances realizados, poniendo énfasis especial en los logros en gasto social: “la generalización de la cobertura de la sanidad pública, la mejora de las pensiones de la Seguridad Social y de la protección por desempleo, la creación de las pensiones no contributivas y la extensión de la educación pública, desde la infantil a la universitaria, son avances que en la Europa más desarrollada tardaron décadas en alcanzarse mientras aquí se han realizado en un tiempo comparativamente muy corto”. Ahora bien, concientes del desgaste sufrido en los años de gobierno, los socialistas admiten que “el impulso de 1982 necesita una reformulación y nuevas energías. No todo lo que hemos hecho nos satisface. Sabemos, además, que hay muchas cosas por hacer. Unas, porque se trata de afrontar nuevos problemas, otras porque no hemos sido capaces de hacerlas en años anteriores”. En su ejercicio de autocrítica, los socialistas ponen el acento en los problemas irresueltos de los jóvenes —“una generación que se siente postergada e incluso a veces imposibilitada de hacer oír su voz”. El PSOE reconoce los vínculos entre la emancipación laboral, económica y residencial. La juventud “tiene dificultades para conseguir un trabajo digno, y por ello para acceder a una vivienda y planificar su vida. Los jóvenes quieren emanciparse, ser autónomos, y el mercado por sí solo no aporta solución a este gran problema”. En este contexto, el partido se impone “como reto recuperar la confianza de los jóvenes”, con un programa de actuaciones transversales, “que ponga en relación esfuerzos y resultados en las políticas de educación, empleo, vivienda, participación ciudadana, defensa, voluntariado”. ¿Qué lleva al partido socialista a reconocer que no ha logrado resolver los problemas de los/as jóvenes y necesita recuperar su confianza? Una respuesta razonada a esta pregunta exige revisar en qué medida los objetivos expresados en los programas electorales se corresponden con la actuación de los gabinetes socialistas en las áreas políticas con un perfil más marcadamente juvenil: las políticas educativas y de empleo, las políticas de vivienda y las políticas de apoyo a las familias jóvenes

b) Políticas educativas y de empleo

La etapa socialista se salda con la incorporación masiva de los jóvenes a la enseñanza secundaria y superior, y la creación de más de tres millones de empleos —la mayoría para jóvenes. Consecuente con lo anunciado en sus programas electorales de la década de los ochenta, el gobierno socialista realiza un esfuerzo importante en pro de la formación de capital humano y el desarrollo políticas activas de empleo que puedan favorecer la inserción laboral de los jóvenes. El

gasto público en educación paso de representar el 2,5% del PIB en 1980 al 5% en 1996 (Cruz 2000, San Segundo 2005). Este incremento del gasto se traduce en aumentos considerables del gasto público por alumno. El crecimiento de los recursos disponibles en términos reales entre 1980 y 1998 es del 120% en infantil-primaria, el 26% en secundaria y el 55% en educación superior. Además de incrementar el gasto, los gobiernos socialistas adoptan diversas medidas para reorganizar la enseñanza primaria y secundaria (mediante legislación de 1985 y 1990) y modernizar el sistema universitario (mediante una ley de 1983). Todas estas iniciativas se traducen en aumentos espectaculares de las tasas netas de escolarización —a los 16 años, pasa del 52% en 1980-81 al 83% en 1995-1996— y la incorporación masiva de jóvenes a la educación superior —que supera el 25% de los jóvenes de 20 a 24 años en 1995 (Cruz 2000). Por otra parte, el gobierno también reformó los contenidos de los títulos de formación profesional con objeto de adaptarlos a las exigencias del sistema productivo. En diez años el número de alumnos de Formación Profesional se multiplica por dos (Cruz 2000, Boix 1996: 190).

Además de las políticas educativas, los gobiernos socialistas impulsaron significativamente las políticas activas en el mercado de trabajo. En las dos primeras legislaturas socialistas se incrementa de forma notable el gasto en políticas activas, aunque se reduce en momentos de crisis económica a inicios de los noventa (**Tabla 5.1**).¹⁴⁶ Buena parte del gasto en políticas activas se destina a ayudas a la contratación, lo que permite incrementar los contratos de formación y aprendizaje —de los que los jóvenes son los beneficiarios principales.¹⁴⁷ El gabinete socialista también emprende políticas activas de formación laboral, aunque el alcance de éstas para los jóvenes es limitado.¹⁴⁸ Entre 1985 y 1991, los gastos en formación laboral vinculada al ámbito laboral —formación continua a ocupados y de reinserción a desempleados/as— pasan del 0,03 al 0,22% del PIB.¹⁴⁹ Sin embargo, sólo una parte pequeña del gasto se destina a políticas de inserción para jóvenes. Buena parte de los recursos son absorbidos por programas de formación

¹⁴⁶ Los gastos en políticas activas se frenaron coincidiendo con el aumento de gastos pasivos en 1992. Los gastos pasivos se disparan coincidiendo con el aumento del desempleo que tiene lugar y la necesidad de hacer frente al pago de prestaciones por desempleo.

¹⁴⁷ Estos llegan a representar el 13% de todos los contratos suscritos en 1989.

¹⁴⁸ El objetivo de estas políticas es aumentar el perfil de cualificaciones de los trabajadores y de personas potencialmente empleables que reciben formación con el fin de favorecer su adecuación a las necesidades del sistema productivo.

¹⁴⁹ La crisis económica de inicios de los noventa empuja el gasto en formación profesional en sentido descendente. En 1993, el gasto había pasado a ser del 0,20% del PIB.

continúa en las empresas, destinadas a trabajadores/as ocupados.¹⁵⁰ Por lo que respecta al gasto en formación a desempleados/as sólo una parte va destinado a personas jóvenes.¹⁵¹

(Tabla 5.1)

Los gobiernos socialistas concentraron la mayoría de los recursos destinados a las políticas de empleo en gastos pasivos. Salvo en 1989, en una etapa de fuerte crecimiento económico y descenso acusado del paro, estos representan más del 75% del total del gasto dedicado a políticas de empleo. El gasto en políticas pasivas no deja de crecer a lo largo de las legislaturas socialistas. Ese crecimiento es moderado en etapas de bonanza económica y más intenso en el período de crisis a inicios de los noventa, donde las prestaciones y subsidios por desempleo llegan a representar el 6,9% del gasto social total. La razón bruta de cobertura de desempleo —la proporción de beneficiarios/as de una prestación contributiva o asistencial en relación a los parados existentes— se incrementa del 26% en 1984 al 67% en 1993. Este incremento es especialmente acusado en 1989, como consecuencia de la aceptación por parte del gobierno de las propuestas realizadas por los sindicatos tras el éxito de la huelga general de diciembre de 1988. La cobertura de desempleo paso del 28% al 52% entre 1988 y 1991.

El sesgo en favor de las políticas pasivas refleja la preferencia del gobierno socialista por asegurar niveles de ingreso a trabajadores que se quedaban sin empleo. La rentabilidad política de las políticas pasivas es mucho más alta que la de las políticas activas. Cualquier tipo de recorte de estas políticas entraña riesgos electorales importantes. En épocas de crisis, los gobiernos tienen dificultades para convencer a los trabajadores en riesgo de quedarse desempleados (y a los representantes sindicales) acerca de la pertinencia de sacrificar sus derechos a prestación a cambio de unos ingresos más altos en el futuro que pudieran derivarse de su mayor formación y productividad. A pesar de las tasas elevadas de desempleo, el PSOE consiguió mantener un respaldo importante entre los votantes desempleados —el 30% votaron al PSOE en 1993, quince puntos porcentuales más que los que votaron al PP—, especialmente cuando éstos habían

¹⁵⁰ En un análisis profundo de las políticas activas de empleo, Laura Cruz (2000) llega a la conclusión de que la estrategia de concentrar los recursos en la formación ocupacional de trabajadores en activo —en lugar de hacerlo en la formación de desempleados/as— respondía a los intereses sindicales de defensa de los/as *insiders*.

¹⁵¹ A lo largo de la década de los ochenta, el número de alumnos fue superior en el grupo de los jóvenes. A partir de 1993 se adoptan nuevos criterios que consideran prioritarios a los desempleados/a perceptores de una prestación por desempleo y a los mayores de 25 años que llevarán más de un año inscritos como parados/as.

trabajado antes (Boix 1996: 243). En este sentido, en un trabajo que analiza el apoyo electoral al PSOE de los desempleados/as con datos de 1995, Maravall y Fraile (1998) defienden que éstos tendieron a mostrar actitudes “exonerativas”, anteponiendo valoraciones “sociotrópicas” a consideraciones sobre su bienestar personal.¹⁵² Los desempleados/as siguieron votando al PSOE cuando consideraban que las medidas de política social del gobierno eran adecuadas. Los resultados de su análisis empírico ponen de manifiesto que los desempleados/as no castigaron al PSOE por sus políticas cuando la caída en el desempleo no supuso una merma importante de su nivel de ingresos —gracias a las políticas públicas de mantenimiento de rentas.

Pero no todos los desempleados/as salieron igualmente beneficiados/as por las políticas de empleo del gobierno, ni todos mostraron el mismo respaldo al PSOE. Los demandantes de primer empleo carecían del derecho a una prestación y, según datos de Carles Boix (1996), mostraron los niveles más bajos de respaldo al PSOE en 1993: sólo el 18% votó al partido en el gobierno (proporción similar a la que votó al PP). Ante las peticiones de los agentes sociales y de organizaciones juveniles, el gobierno se mostró contrario en reiteradas ocasiones a extender los subsidios de desempleo a las personas que buscasen su primer empleo, aunque tuviesen cargas familiares.¹⁵³ Eso significa, en la práctica, excluir de este derecho a buena parte de los/as jóvenes desempleados/as.¹⁵⁴ Por otra lado, la corta duración de buena parte de los contratos temporales de fomento de empleo impedía que muchos trabajadores/as jóvenes pudieran percibir una prestación o provocaban que, si lo hacían, la consumieran rápidamente.¹⁵⁵ Las reformas de las políticas de empleo que afectaron a la cobertura y la intensidad protectora de prestaciones y subsidios beneficiaron fundamentalmente a desempleados/as de mayor edad. Así, las contrapartidas otorgadas por el gobierno a la UGT a cambio de su respaldo a la reforma del mercado de trabajo en 1984 incluían, entre otras cosas, una ampliación de la duración máxima de

¹⁵² Los/as votantes “sociotrópicos” son votantes sensibles a la situación general del país o a políticas de las que no son beneficiarios directos.

¹⁵³ Por ejemplo, poco después de la huelga general de 14 de diciembre de 1988, Felipe González declara en el Congreso de los diputados: “Tenemos, ahora sí, derecho como Gobierno a sacar nuestras propuestas en la mesa de negociación para contrastarlas con las de los interlocutores sociales y, por consiguiente, buscar una vía de salida al problema del empleo juvenil, con una filosofía que conduzca sobre todo a conseguir empleo, no a subvencionar a jóvenes en paro (Congreso de los Diputados, 21-12-1988).

¹⁵⁴ Según datos del estudio 2.226 del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 42% de los jóvenes de 16 a 25 años y inscritos en el INEM y el 14% de los que tienen entre 26 y 35 eran demandantes de primer empleo. A esto, hay que añadir los jóvenes que buscan su primer empleo sin inscribirse en el INEM —que probablemente fueran muchos más.

¹⁵⁵ Esta situación se remedió parcialmente en 1992, con la ampliación de la duración mínima del contrato de fomento de empleo a un año.

las prestaciones contributivas por desempleo de dieciocho a veinticuatro meses, así como un aumento de la cuantía de las mismas para los trabajadores/as mayores de 45 años con cargas familiares. Más tarde, el “giro social” adoptado por el gobierno tras la huelga de 1988, que extendió sustancialmente la cobertura de desempleo, benefició fundamentalmente a colectivos de edad avanzada: se redujo a 52 años la edad para percibir el subsidio por desempleo hasta la edad de jubilación, se amplió la duración máxima de la prestación para los desempleados de larga duración y se creó un nuevo subsidio para los desempleados/as de larga duración mayores de 45 años.

Al final de la etapa de gobierno socialista, existía una clara segmentación de los derechos a prestaciones y subsidios entre trabajadores/as en función de su edad. La **Tabla 5.2** muestra la proporción de desempleados/as inscritos en las oficinas del INEM que perciben una prestación según su edad en 1996 y la cuantía media de sus prestaciones. Se excluyen los demandantes de primer empleo inscritos en el INEM, puesto que para ellos/as no existe la posibilidad de optar a una prestación.¹⁵⁶ Los resultados ponen de relieve el bajo grado de cobertura de la protección social contra el desempleo para los jóvenes que han trabajado antes en comparación con el de grupos de edad más avanzada. También queda patente la cuantía escasa de las prestaciones que reciben. La cuantía media de la prestación que percibe un joven menor de 26 años es un 32% más baja que el de la prestación de un adulto de 46 a 55 años.

(Tabla 5.2)

El sistema de protección estatal por desempleo desarrollado en la etapa socialista se concibe como un mecanismo de mantenimiento de rentas de los desempleados/as de edad avanzada y con responsabilidades familiares. Las medidas adoptadas durante las cuatro legislaturas socialistas aumentaron de forma extraordinaria el grupo de potenciales beneficiarios de las prestaciones. La ampliación de la duración máxima de las prestaciones contributivas y la extensión de la cobertura de los subsidios asistenciales estuvieron claramente encaminados a proteger a los trabajadores que perdían su empleo a edades avanzadas. Como consecuencia de ello, la protección por desempleo y la incidencia de este problema se distribuyen de forma inversa: son los más jóvenes quienes se enfrentan con más frecuencia a problemas de inserción

¹⁵⁶ Entre ellos el 80% tiene 35 años o menos.

laboral, pero están menos protegidos frente a ellos. El perfil de las políticas introducidas por los gobiernos socialistas contribuye a acentuar el sesgo familista de los sistemas de protección pública, al plantearse como fin preservar la posición económica del “cabeza de familia” y reforzar la dependencia de los/as jóvenes en situación laboral inestable respecto a sus progenitores.

En suma, el conjunto de las políticas educativas y de empleo, combinadas con tasas elevadas de crecimiento económico, contribuyen al descenso del número de jóvenes desempleados/as hacia finales de la última legislatura socialista, pero no el de jóvenes dependientes de sus padres, tanto desde el punto de vista económico como residencial. Al finalizar el período de gobierno socialista, ha aumentado la proporción de jóvenes que permanecen en casa de sus padres, tanto cuando trabajan como cuando no lo hacen.¹⁵⁷ El ritmo de conversión de los contratos temporales en fijos es lento. Los jóvenes pasan muchos años sin conseguir un contrato indefinido después de haber abandonado los estudios.¹⁵⁸ Los “logros” educativos de la etapa socialista no se traducen fácilmente en el progreso del horizonte laboral de los jóvenes. La incorporación de éstos a la educación superior no garantiza mejoras importantes en su posición en el mercado de trabajo. Un mercado laboral segmentado impide que capitalicen —al menos en el corto plazo— sus “ventajas comparativas” por lo que respecta al capital humano de que disponen. Como pudo apreciarse en el capítulo 2, en 1995 la relación entre el salario medio bruto de la población adulta y joven en 1995 sitúa a los jóvenes españoles muy lejos de la media de los países de la OCDE.¹⁵⁹ Esta situación no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. El diferencial salarial entre personas con título universitario y personas con niveles educativos inferiores ha caído a partir de la segunda mitad de la década de los noventa como producto de la incorporación de nuevos titulados que no logran rentabilizar fácilmente sus títulos (Informe Mensual La Caixa: abril 2007). Basándose en datos de 2001 de 15 países y tras controlar ventajas y costes de la titulación superior, Boarini y Strauss (2007) muestran que en España tener un título universitario reporta menos recompensas que en la mayoría de los países de la OCDE: España es el país donde resulta menos rentable a los varones, y el séptimo por la cola para las mujeres.

¹⁵⁷ Según datos de Fernández Cordon, basados en la EPA, la proporción de jóvenes varones de 25 a 29 años que trabajan que viven con sus padres pasa del 46% en 1986 al 59% en 1994. La de varones de estas edades que no trabajan pasa del 72 al 77%. Véase también la tabla 4.3, en el capítulo 4.

¹⁵⁸ Véase Tabla 3.4, en el capítulo 3.

Las políticas educativas y de empleo impulsadas por el gobierno socialista crean un nuevo marco de referencia para los/as jóvenes. Amplían considerablemente sus oportunidades educativas y mejoran sus perspectivas de encontrar un empleo. Pero están lejos de resolver los problemas de dependencia económica y residencial que aqueja a la juventud española desde inicios de la década de los ochenta. Las dificultades que tienen los/as jóvenes para acceder a la vivienda y formar una familia tampoco encuentran solución en las políticas de vivienda o de apoyo a las familias con hijos/as menores, hacia las que el gobierno socialista muestra interés escaso durante las cuatro legislaturas en el poder, como se refleja en la evolución de las partidas de gasto público.¹⁶⁰

c) Políticas de vivienda

La intervención de los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996 para dar solución a los problemas de acceso a la vivienda de los/as jóvenes son escasas y poco efectivas. Las principales ayudas financieras del Estado están centradas en la deducción fiscal y la subsidiación de intereses de las familias de rentas bajas que optan por la compra de vivienda, prosiguiendo políticas de promoción de la propiedad iniciadas bajo el régimen franquista en los años sesenta. El gasto fiscal es la principal forma de ayuda. Todas las familias que acceden a su primera vivienda en propiedad tienen derecho a deducciones fiscales, así como también aquellas que acceden a sucesivas viviendas siempre que las conviertan en su vivienda principal. Estas medidas tienen un carácter regresivo (el que más invierte, más desgrava). Su objetivo ha sido el de mitigar los elevados tipos de gravamen de las rentas altas, y no el de servir como un instrumento de política de vivienda. En sus informes periódicos sobre la situación del mercado de la vivienda en España, la OCDE atribuye a los beneficios fiscales la responsabilidad principal de la presión de la demanda sobre los precios (OCDE 2000).

El gasto público directo en materia de vivienda se mantiene a lo largo de las legislaturas socialistas a niveles bajos. Aproximadamente dos terceras partes de este gasto corresponde a la subsidiación de intereses del préstamo hipotecario. Esto se hace a partir de unas figuras tipificadas de vivienda, las llamadas viviendas de protección oficial. El encarecimiento de los precios del suelo y la falta de rentabilidad de la construcción de viviendas de protección social

¹⁵⁹ Véase la Tabla 2.2.

¹⁶⁰ Véase, Tabla 2. , en capítulo 2.

por parte del sector privado —que prefiere concentrarse en el segmento más lucrativo de la demanda de familias de rentas más altas— provoca a lo largo de la década de los ochenta y segunda mitad de la década de los noventa una fuerte caída de la construcción de viviendas de protección oficial, que afecta a las posibilidades de acceso a la vivienda de los sectores sociales con menos recursos. Esta disminución —que coincide con la llegada a la edad de emancipación y de formación potencial de familias por parte de las cohortes más numerosas en la pirámide demográfica española— no es paliada por la intervención directa de las administraciones públicas, cuya participación directa en la promoción de viviendas representa un porcentaje muy pequeño del total de viviendas de protección oficial.

A estas dificultades de acceso a la vivienda en propiedad para los sectores con menos recursos hay que sumar la reducción del mercado de alquiler. A pesar de las promesas realizadas a partir de 1989, el PSOE no logra paliar los graves problemas estructurales del parque de vivienda en alquiler. Estos problemas hunden sus raíces en dos peculiaridades de la estructura de tenencia de las viviendas en propiedad en España. En primer lugar, el parque de la vivienda en España se caracteriza por la inexistencia de una oferta pública de vivienda en alquiler. Según datos de la encuesta sobre alquileres realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la vivienda social en alquiler representaba el 1,4% del parque total de viviendas en 1991 (MOPTMA 1996). Estas cifras insignificantes son, en parte, el resultado de la venta de patrimonio público de las viviendas sociales durante los últimos años del régimen franquista y los primeros años de la democracia, generalmente a los inquilinos/as que las ocupaban (Leal 2005: 410-411, Trilla 2001: 77).

En segundo lugar, históricamente, la política de alquileres ha perseguido proteger los derechos de los inquilinos/as —mediante prórrogas forzosas, establecimiento de subrogaciones y revisión insuficiente de los precios del alquiler. Estas medidas terminan provocando un retraimiento de las inversiones en vivienda destinada al alquiler, y la consiguiente contracción de la oferta de alquiler por parte del sector privado. De constituir el régimen de tenencia más común —en 1950, el 51% de las viviendas principales— el alquiler pasa a ser un régimen de tenencia muy minoritario y en retroceso a inicios de la etapa de gobierno socialista —sólo el 19% en 1981. La política de gobierno socialista no frena la reducción de la tenencia en alquiler —que pasa a representar el 15% en 1991 y el 14% en 1996 (Leal 2005: 408, Trilla 2001: 55).

La primera gran medida de intervención pública impulsada por el gobierno socialista en materia de alquiler es el llamado *decreto Boyer*, que persigue liberalizar el mercado. Su aplicación afecta únicamente a los nuevos alquileres, lo que limita severamente su alcance. En la práctica, una medida de estas características supone reforzar la segmentación del mercado de la vivienda. Frente a los inquilinos/as “sobreprotegidos” por el mantenimiento de un régimen de alquiler “forzoso”, se alzan sectores de la población que tienen dificultades para acceder a una vivienda en propiedad —en un contexto de elevación de los precios de la vivienda libre y de contracción de la vivienda de régimen social— y encuentran una oferta de viviendas de alquiler escasa y poco asequible. Como es previsible, entre estos sectores, ocupan un lugar destacado los jóvenes —como admiten, por otra parte, los programas electorales del partido socialista a partir de 1993.¹⁶¹

El gobierno socialista no se decide a impulsar una política de promoción de vivienda en alquiler hasta 1992. El Plan de la Vivienda aprobado en este año fija que el 15% de las viviendas de protección pública a promover, acogidas a su financiación, sean destinadas al alquiler. Junto a esta medida se incentiva el alquiler vía fiscal, posibilitando deducciones de la cuota del IRPF de las cantidades pagada en concepto de alquiler y beneficios fiscales para la inversión en vivienda destinada al alquiler. Los resultados de estas iniciativas son modestos. La OCDE, en sus informes sobre la situación económica en España, pide reiteradamente la sustitución de las ayudas fiscales a la compra de viviendas por subvenciones al alquiler. Los expertos/as coinciden en que las medidas adoptadas son insuficientes y no eliminan las raíces principales de los déficits de inversión en viviendas para el alquiler: la regulación de los períodos de alquiler, la falta de garantías jurídicas para el arrendador, y la lentitud de los procesos de desahucio por impago de alquileres (Leal 2005: 414, OCDE 2000). Las políticas de alquiler no impiden la contracción de mercado de alquiler y su segmentación, convirtiéndose en una opción cara para los colectivos necesitados que no pueden sufragarse una vivienda en propiedad.¹⁶²

¹⁶¹ Según datos del Censo de 1991, el 34% de los jóvenes menores de 30 años que encabezan un hogar viven en régimen de alquiler. Esta proporción dobla a la de personas principales de cualquier grupo de edad residiendo en régimen de alquiler (Leal 2005: 408).

¹⁶² Ello obliga a algunos colectivos que buscan vivienda a alojar en viviendas en mal estado o inadecuadas, a abandonar los centros de las grandes ciudades —como sucede a parejas de nueva formación— o a optar por el

d) Políticas de apoyo a familias jóvenes

Desde finales de los años ochenta, las políticas familiares en Europa cambian sustancialmente, impulsadas por la transformación de las estructuras familiares. En gran número de países, las políticas de familia adquieren un protagonismo creciente como instrumento para dar respuesta a nuevas necesidades y demandas relacionadas con incrementos de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo o el aumento de los índices de divorcio. Por otra parte, durante estos años los órganos de la Unión Europea expresan un interés creciente por la dimensión familiar, a pesar de no tener competencias al respecto. Los principios generales enunciados en recomendaciones y directivas de la Unión Europea en materia de derechos mínimos de protección social afianzan nuevos discursos acerca de la necesidad de acometer reformas de la política familiar. A finales de los ochenta y principios de los años noventa un gran número de países adoptan profundos cambios en las políticas de apoyo económico a las familias, como, por ejemplo, la adopción de un sistema de tributación individual, el reforzamiento de las prestaciones bajo condición de recursos a las familias más necesitadas, y el desarrollo de políticas de ayuda a las familias monoparentales (Dumon 1992, Flaquer 2000). Por otra parte, diversos países incrementan la financiación pública de servicios de atención a la infancia para niños menores de tres años.

Las reformas de la política familiar durante la etapa socialista en España progresan a un ritmo muy lento, lo que agudiza necesidades insatisfechas. Como ha señalado Gerardo Meil, (1995: 70), durante los años de transición la protección económica a las familias salió de la agenda política. Durante la década de los ochenta y los noventa, apenas se registra actividad legislativa en el Parlamento para promover la protección económica de la familia, lo que refleja escasa sensibilidad por parte de todos los grupos parlamentarios.¹⁶³ La llegada del partido socialista al poder no supone un relanzamiento de las políticas familiares, en consonancia con el impulso dado a estas políticas en países europeos donde la socialdemocracia ha jugado un papel

hacinamiento de sus viviendas, en un intento de reducir los costes económicos que les supone pagarlas —como ocurre a los inmigrantes.

¹⁶³ Hasta 1990, Meil (1995: 69-70) contabiliza una proposición de ley que fue retirada sin llegar a discutirse —aunque se presentó nuevamente un año más tarde—; cinco proposiciones no de ley que o bien fueron aprobadas pero ignoradas, caducaron sin discutirse o se desestimaron; once preguntas con respuesta escrita que no tuvieron efecto alguno; y tres con respuesta oral que corrieron igual suerte. Durante todo el período, sí que tuvo lugar una expansión de la intervención legal en el ámbito familiar, en asuntos como la reforma de la legislación familiar heredada del

político de primer orden.¹⁶⁴ Como consecuencia de ese escaso interés, la política familiar pierde relevancia en el terreno de la protección social. Las partidas destinadas a la política familiar pasan de representar el 2,7% del total del gasto social en 1981 al 0,6% en 1991, afianzando la posición de España como país en la Unión Europea que menos gasta en protección económica a las familias.

A diferencia de otras áreas de política social, la mayoría de los programas contributivos heredados del franquismo no son modificados durante los primeros años del gobierno socialista.¹⁶⁵ Una excepción es la eliminación de la asignación mensual por esposa. Una asignación de esta naturaleza tenía un cariz marcadamente anti-feminista, incompatible con el nuevo sistema político y los valores dominantes, al subsidiar la permanencia de la mujer en el hogar. El importe de esta asignación era modesta: 375 pesetas mensuales. Más modesta era la asignación percibida destinada a compensar cargas familiares derivadas de la tenencia y cuidado de hijos. Durante los primeros ocho años de gobierno socialista el pago mensual se mantiene invariable, convirtiéndose en una cuantía ridícula: 250 pesetas. La supresión de la asignación por esposa y la congelación del importe de la asignación por hijos/as (con su consiguiente depreciación en términos reales) provocan una disminución del gasto en prestaciones familiares directas del 0,5% del PIB al 0,1% entre 1980 y 1991, situando a España muy por debajo de otros países en estas partidas (Meil 1995: 76).

En 1991 se produce un cambio relevante en la orientación de la política de prestaciones por hijos menores a cargo, al limitarse a familias con ingresos bajos. Junto a las prestaciones de carácter contributivo, se crea una modalidad no contributiva, que concede el derecho a la asignación a las familias que tengan hijos/as y no perciban ingresos anuales superiores al techo fijado para las prestaciones contributivas. El importe de la asignación es el mismo para las prestaciones contributivas y no contributivas: 36.000 ptas. Esta cantidad representó una mejora

franquismo (reforma del Código Civil de 1981), la aprobación de la Ley del divorcio (1981), la Ley reguladora del aborto (1983), la modificación de la Ley de adopción (1987), o La ley de protección jurídica del menor (1995).

¹⁶⁴ Las políticas de protección social de las cargas familiares son una de las señas de identidad de la socialdemocracia escandinava, donde los presupuestos de política familiar absorben una cantidad ingente de recursos públicos destinados a la protección social. En 1991, en Dinamarca representan el 10,3% del gasto social. En España, un exiguo 0,6%.

¹⁶⁵ El origen de estos programas es la Ley General de la Seguridad Social (1966), pero existen antecedentes ya a inicios del régimen franquista (Subsidio Familiar 1938; Plus Familiar 1995) (Flaquer 2000). Es necesario resaltar que, a pesar de la importancia simbólica que cobró la familia durante el franquismo en las ceremonias y discursos propagandísticos del régimen, la intensidad protectora de las políticas familiares fue, en general, baja. A inicios de la transición, el gasto en políticas familiares en España figura a la cola de Europa.

sustancial de la asignación para las familias beneficiarias, pero la asignación no volvió a revalorizarse durante toda la etapa de gobierno socialista, con la consiguiente pérdida de eficacia de la prestación con el paso del tiempo. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurría en otros países, a lo largo de todo el período España careció de un programa de ayudas específico para las familias monoparentales (Flaquer 2000).

Una segunda modalidad de apoyo económico a las familias es el tratamiento fiscal a las cargas familiares. Según Meil (1995), las incidencias de las prestaciones fiscales durante los años ochenta y noventa fue modesta. Desde 1991, cada miembro de una unión matrimonial tiene la oportunidad de tributar individualmente, lo que generalmente beneficia el nivel de renta de las familias.¹⁶⁶ En 1991 se crea también una deducción por gastos “de guardería de custodia” de hijos/as menores de tres años (con un máximo de 25.000 pesetas anuales), pero los requerimientos para tener derecho a la deducción restringen considerablemente el grupo de potenciales beneficiarios (Flaquer 2000).¹⁶⁷

A pesar de que en el programa electoral de 1982 ya se proponen tímidamente medidas para resolver el problema de la compatibilización entre maternidad y trabajo extradoméstico, las iniciativas adoptadas en este campo también son escasas. El cambio más destacado es la extensión de la escolarización entre los niños/as de tres a cinco años, que implica la expansión de la financiación pública a niveles no obligatorios.¹⁶⁸ Pero esta medida no fue concebida como una ayuda para que los padres (fundamentalmente las madres) con hijos/as menores pudieran compatibilizar responsabilidades profesionales y familiares. La extensión de la escolarización en edades tempranas consolida una tendencia iniciada a finales del franquismo, impulsada por las autoridades educativas con el fin de mejorar las capacidades de los niños una vez inicien la escolarización obligatoria. Como señala Celia Valiente (1997b) los programas educativos destinados a niños mayores de tres años no incluyeron consideraciones específicas para favorecer este objetivo, como hubiera sido la existencia de una oferta de servicios complementarios en los

¹⁶⁶ La reforma de la ley no fue impulsada por una decisión gubernamental. Fue consecuencia de dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional contra la Ley del IRPF, que contemplaba sólo un sistema de tributación conjunta.

¹⁶⁷ Los rendimientos netos del sujeto pasivo no podían superar los dos millones de pesetas anuales (tres millones en caso de tributación conjunta) y ambos padres han de trabajar fuera del domicilio familiar. En 1994, sólo 106.299 contribuyentes se vieron afectados por esta deducción de la cuota (Valiente 1997: 112). Esto equivale, aproximadamente, al 5% de las familias con hijos menores de tres años (los cálculos se basan en datos del Ministerio de Economía y Hacienda, y el Censo de 1991).

¹⁶⁸ La tasa de escolaridad en niños de tres años pasa del 15% al 53% entre 1980-81 y 1993-94. La de niños de cuatro del 68 al 98%. La de cinco del 92 al 100% (Pérez- Díaz, Chuliá y Álvarez Miranda, 1998: 145)

centros públicos (de comedor y de actividades extraescolares), o la adecuación de la jornada escolar y la jornada laboral de los adultos. El compromiso de desarrollar escuelas infantiles para menores de tres años —incluido en los programas electorales a partir de 1989— fue poco más que retórico. Durante la etapa socialista no se registra un aumento de las dotaciones destinadas a guarderías (Iglesias y Meil 2001: 120). Según datos de Celia Valiente (1995), en el curso 1991-1992, el porcentaje de niños/as de dos años o menos cuidados en centros públicos (1%) es el más bajo de Europa, por debajo de los niveles de Grecia (4%) y Portugal (6%), y a considerable distancia del resto de los países. La escasa provisión quedó en manos de las Comunidades Autónomas, entes locales y centros privados —que, generalmente, ofrecían los servicios de forma no gratuita— sin que se desarrollara una regulación específica al respecto.

Haciendo balance, Gerardo Meil (1995:74) ha calificado la política familiar durante la etapa socialista como “reticente”. El gobierno socialista dedicó poca atención a estos asuntos y los condenó a la invisibilidad institucional.¹⁶⁹ Esta reticencia no puede explicarse por la inexistencia de necesidades que reclamaran atención. El gobierno socialista renuncia a impulsar medidas decididas para favorecer la compatibilización de responsabilidades profesionales y familiares en el preciso momento en que se está produciendo un incremento sin precedentes de la proporción de mujeres que se incorporan al trabajo extra-doméstico. Las tasas de actividad de las mujeres pasan de un 28% en 1980 a un 36% en 1995, en gran medida como consecuencia de la participación masiva de las mujeres de edades más jóvenes en el mercado de trabajo formal.¹⁷⁰ El gobierno renuncia asimismo a utilizar las políticas familiares como instrumento para frenar la caída de las tasas de fecundidad, coincidiendo con un descenso histórico de éstas.¹⁷¹ Entre 1980 y 1996 la tasa de fecundidad pasa de 2,21 a 1,13, situándose en el último lugar mundial.

¹⁶⁹ A diferencia de otros países, no se creó un ministerio o departamento específico centrado en estas cuestiones. El tratamiento dado por el gobierno socialista a las políticas de apoyo a la familia careció de una perspectiva integral que impidiera su “fragmentación” (Meil 1995).

¹⁷⁰ En 1995, el 73% de las mujeres de 25 a 29 años y el 63% de las que tienen 30 a 34 años son activas.

Configuración de la agenda política

Según una visión extendida en la literatura sobre los determinantes de las políticas públicas, los gobiernos cuentan habitualmente con márgenes de maniobra escasos para introducir reformas políticas en los programas que heredan. Los legados políticos tienden a restringir la capacidad de adoptar reformas ambiciosas, limitando los cambios a modificaciones residuales (Weir y Skopol 1985). La agenda política suele estar ocupada por un número elevado de asuntos que se resisten a ceder el protagonismo del que disfrutaban a nuevas cuestiones y demandas. Los políticos se enfrentan habitualmente a gran variedad de cuestiones que reclaman su atención inmediata, por lo que se muestran renuentes ante la perspectiva de tener que ocuparse de materias adicionales. A ello hay que añadir que las políticas establecidas suelen tener “valedores” y clientelas favorables a su continuidad, dispuestos a oponerse a cualquier cambio del statu quo que amenace sus intereses. Todas estas consideraciones provocan que en la literatura académica sobre la adopción de políticas públicas predominen explicaciones que detectan ritmos de cambio lentos. A corto plazo, restricciones de todo tipo abortan la voluntad de introducir reformas ambiciosas.

Esta literatura ha sido cuestionada por trabajos que ponen de manifiesto la capacidad de algunos líderes de encontrar “ventanas de oportunidad” para acometer reformas de gran calado (Keeler 1993). Por ejemplo, tras la crisis del 29, Roosevelt impulsa una reorientación radical de la política económica, basada en el intervencionismo masivo en la economía. En el polo opuesto desde el punto de vista ideológico, tras frenar una inflación desbocada, Thatcher lanza un programa ambicioso de privatizaciones, desregulación del mercado de trabajo y reestructuración del sistema impositivo británico. En España, a partir de 1982, las reformas que acomete Felipe González tienen también una magnitud insólita. En poco más de una década, el gobierno socialista incrementa los impuestos en un tercio y embarca al Estado en el mayor esfuerzo inversor de toda Europa en la década de los ochenta (Boix 1996:24). En un momento de estancamiento del gasto social en Europa, las políticas sociales experimentan un crecimiento notable. Los criterios seguidos para mejorar las prestaciones son por lo general universalistas y compensatorios, financiados con presupuestos públicos. Se mejoran las pensiones contributivas y se extiende la protección a grupos de rentas bajas que no han cotizado a la Seguridad Social mediante pensiones no contributivas y subsidios de desempleo. Las pensiones (sobre todo las más

¹⁷¹ El objetivo pronatalista está en el origen de muchas políticas familiares desarrolladas en Europa.

bajas) ven mejorada su capacidad adquisitiva. El subsidio de desempleo la mantiene (Ayala 1995: 588). Desde 1986 la Ley General de Sanidad reconoce como titulares de derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a todos los españoles, lo que se garantiza a partir de 1989 con la ampliación de cobertura a todos aquellos ciudadanos que carecen de recursos económicos. Los beneficiarios de las pensiones y de la sanidad pública se expanden en 1,6 y 6,7 millones de personas respectivamente entre 1982 y 1992 (Maravall 1995: 235). Las prestaciones por desempleo se amplían hasta cubrir a cerca del 70% de los desempleados/as en 1993.

Ante esta “ventana de oportunidad”, ¿qué factores hay detrás del impulso que recibieron ciertas políticas? ¿qué inhibió el desarrollo de otras? Una corriente dominante dentro de la literatura sostiene que el impulso a las políticas públicas se lo dan “promotores/as” o “valedores/as de políticas” (*policy entrepreneurs*), con concepciones sólidas de cuáles son los problemas que hay que tratar y que es lo que corresponde hacer frente a determinadas condiciones objetivas. Las visiones, valores y creencias de estos “valedores” juegan un papel determinante si éstos agentes son capaces de trasladar esas visiones a las esferas en que se toman las decisiones. La entrada de un asunto en la agenda política se facilita si los “valedores” son los propios gobernantes o si éstos perciben incentivos electorales para promoverlo. Si no es así, deben existir “valedores” externos capaces de convencer a los decisores políticos para que examinen “su” problema e intenten darle “su” solución. Esto no es sencillo si los decisores políticos no encuentran ventajas para ocuparse de un nuevo asunto, o prefieren concentrar su atención en asuntos que más les conciernen. Todo esto es más difícil si otras demandas gozan de mayor legitimidad social.

a) Visiones intelectuales

Hay quien ha visto en las orientaciones de la tributación y el gasto durante la etapa socialista, la plasmación de determinadas “visiones intelectuales” de los dirigentes socialistas (Maravall 1995). Desde este punto de vista “la integración europea y la socialdemocracia del norte de Europa constituyeron las principales referencias intelectuales que influyeron en las opciones políticas de los dirigentes del PSOE” (p. 193). José M. Maravall rastrea influencias ideológicas directas de líderes y partidos europeos en el programa económico y social del gobierno. Estas influencias contribuyen a configurar nuevas señas de identidad, que se expresan a través de estrategias innovadoras para perseguir el equilibrio entre eficiencia económica y política social igualitaria.

Gracias a las políticas socialistas en pensiones, sanidad y desempleo se reducen las diferencias en los recursos asignados a políticas sociales entre España y la Comunidad Europea. Maravall no discute la evolución de las partidas asignadas a la política de vivienda o política familiar, donde la brecha con Europa se ensancha, o la naturaleza de las políticas de empleo, con su particular configuración de beneficiarios/as.¹⁷² Maravall tampoco ofrece razones para pensar que los dirigentes socialistas tuvieran “visiones intelectuales” más favorables a las políticas orientadas preferentemente a las personas de edad más avanzada.

Como ha podido comprobarse en la sección anterior, cuando llega al poder, el PSOE es conciente de la situación dramática que atraviesan los jóvenes. Tanto en 1982 como en 1986, los programas electorales del PSOE trasladan la idea de que es urgente actuar para favorecer la inserción laboral y social de los jóvenes, corregir situaciones de injusticia y discriminación y prevenir riesgos de marginación. Las ideas que propugna el PSOE para favorecer la integración social de los jóvenes son consistentes con visiones que se ponían de manifiesto en los informes y las recomendaciones de la UNESCO, la Comisión de la Comunidad Europea y la OCDE a finales de la década de los setenta e inicios de la década de los ochenta. En todos ellos se argumenta que la extensión de la educación obligatoria es una fórmula que favorece la capacidad de los individuos de integrarse al mercado de trabajo y de adaptarse a las distintas situaciones laborales que pueden encontrar a lo largo de la vida activa. Pero se entiende, asimismo, que la formación impartida en las instituciones educativas tradicionales puede resultar insuficiente para corregir los problemas de inserción de los jóvenes en una situación de deterioro del mercado laboral como la que se está viviendo.¹⁷³ Por ello abogan por la expansión de los programas de formación para jóvenes que habiendo abandonado el sistema educativo reglado encuentran problemas de inserción laboral. Los organismos internacionales entienden que la formación y el aprendizaje en competencias demandadas por el mercado es una de las herramientas más efectivas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Una de las mejores formas de procurar a los jóvenes esas

¹⁷² Aunque reconoce que “la carga de la crisis económica y el reajuste recayó sobre los hombros de los jóvenes, los parados de larga duración y, en menor grado, las mujeres” (p. 206)

¹⁷³ Desde finales de la década de los setenta, la OCDE viene detectando un deterioro de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo en la mayoría de los países que forman parte de este organismo (OCDE 1978, 1980, 1983). Estos problemas —se advierte— comienzan a afectar a jóvenes de “clase media” que habían sido, hasta entonces, capaces de integrarse en el mercado de trabajo sin mayores dificultades. Como consecuencia de los problemas de inserción, los miembros de las nuevas cohortes que acceden al mercado laboral ven prolongado el período de transición de la escuela al trabajo. La OCDE advierte que los problemas de desempleo que afectan a los jóvenes podrían transformarse, a largo plazo, en dificultades de la población adulta en el mercado de trabajo (OCDE 1985: 9-10).

competencias es promoviendo su inserción laboral a través programas de aprendizaje en instalaciones de las empresas. Para conseguirlo, los gobiernos deben incentivar a las empresas para contratar a trabajadores/as jóvenes. Se aboga por fórmulas de contratación específicas que puedan resultar atractivas al empresariado, subsidios e/o incentivos fiscales (Comisión de la Comunidad Europea 1982, OCDE 1984, OCDE 1985). Los responsables políticos del PSOE eran buenos conocedores de estos estudios e informes, y trataron de llevar a menudo a la práctica las recomendaciones que emanaban de esos organismos.¹⁷⁴

La atención a los problemas de las personas de edad avanzada recibe, en un primer momento, mucho menos atención que los problemas de la juventud. De hecho, las primeras reformas que acomete el PSOE en el campo de la protección social a la vejez persiguen la contención del gasto y fueron, en su momento, interpretadas por muchos sectores como un recorte de derechos sociales de las personas mayores. La reforma de la pensiones de 1985 modifica las reglas de acceso y cálculo de la cuantía de las pensiones con un objetivo de contención del gasto. La nueva ley persigue evitar los desequilibrios financieros de la Seguridad Social y las situaciones de fraude (Mota 2002). Las principales medidas introducidas consisten en establecer en quince años el período mínimo de cotización para tener acceso a la pensión de jubilación —en lugar de diez— y ampliar el período de cálculo de la base reguladora de dos a ocho años. El gobierno realiza un gran esfuerzo para convencer a la sociedad de que no se trata de un “recorte”, alegando que la ley garantiza por vez primera la revalorización automática de las pensiones, pero no vence cierto recelo social. La resistencia más fuerte proviene de los sindicatos, y se concreta en diversas movilizaciones y un paro general, convocado por Comisiones Obreras. Los sindicatos denuncian que las medidas introducidas impedirán a muchos trabajadores/as acceder al derecho a una prestación, además de representar una reducción de la cuantía de las pensiones.¹⁷⁵ La evolución del número de pensionistas y la cuantía de las pensiones no confirma los augurios pesimistas que se hacen en 1985.

Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de 1989, las prioridades de gasto cambian y las políticas que benefician a personas de edad más avanzada se convierten en “santo y

¹⁷⁴ Así lo acredita, por ejemplo, el estudio de Laura Cruz (2000: 259, 261, 268, 278) sobre políticas de formación ocupacional, basado en entrevistas a algunos de los principales responsables de las políticas educativas y de empleo del PSOE en aquellos años.

¹⁷⁵ En un editorial, *El País*, diario poco sospechoso de ser hostil al gobierno socialista, muestra su perplejidad de que la reforma — que admite que pueda ser necesaria para sanear las cuentas públicas— “haya de empezarse sobre las espaldas de los más menesterosos” (05 de junio de 1985).

seña” de la política socialista. Este cambio de énfasis se pone de manifiesto en el curso de las campañas electorales. A partir de 1993, el PSOE pone el acento en los “logros sociales” conseguidos en el campo de las pensiones y la atención sanitaria, y alerta sobre los peligros que entrañaría la llegada al poder del Partido Popular, a quien se acusa de abrigar la voluntad de privatizar servicios sociales e introducir recortes en la protección pública. En diversos mítines, Felipe González y otros dirigentes socialistas auguran que un gobierno del PP bajaría los impuestos a la población más rica, lo que condenaría el sistema de la Seguridad Social a la ruina, quedando sanidad y pensiones como “un mero subsidio de caridad” (*El País*, 29 de mayo de 1993).¹⁷⁶ El programa electoral del PSOE también dedica una atención insólita al colectivo de personas mayores de 65 años. Admite explícitamente: “hemos hecho un esfuerzo especial por mejorar la condición de los mayores, *favoreciéndolos más que a ningún otro sector* y pensamos seguir actuando igual en los próximos cuatro años” (las cursivas son añadidas). Gracias a ello, “nuestros mayores, cada día en mayor número, tienen hoy más seguridad económica que al inicio de los ochenta y disfrutan de un nivel de bienestar y de autonomía personal más elevado que entonces. Se ha incrementado en más de dos millones el número de pensiones y la pensión mínima se ha multiplicado por tres”.¹⁷⁷ Las personas mayores pasas a ser la prioridad política del PSOE.

b) Incentivos electorales

Carles Boix (1996) ofrece una clave para entender la creciente atención que reciben las políticas que favorecen a las personas de edad más avanzada. Sus argumentos sugieren que en la configuración de la agenda política pesaron las “visiones intelectuales”, pero también consideraciones electorales. Boix detecta, a principios de los años ochenta, el mismo cambio de rumbo de las políticas socialdemócratas que Maravall. La gran apuesta de la socialdemocracia en el contexto económico al que se enfrentan los gobiernos de este signo en los años ochenta son el gasto público en la formación de capital fijo y en formación de capital humano (a través de la inversión en educación y políticas activas de empleo), acompañadas de una estrategia agresiva

¹⁷⁶ En el segundo debate preelectoral el candidato popular José María Aznar conmina al presidente del gobierno a repetir las acusaciones que hace el PSOE al PP: “¡Diga usted que, si yo soy presidente, peligran las pensiones! Da cierta tristeza escucharlo”, a lo que Felipe González responde “Yo no temo que bajen las pensiones. Los que lo temen son los pensionistas” (reproducido en *El País*, 01-06-1993)

¹⁷⁷ Las palabras “personas mayores”, “tercera edad”, “anciano” aparecen un total de 33 veces, más que el doble que en 1982 o 1986, en un programa electoral de extensión similar.

para incrementar los ingresos fiscales (basada en la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de la progresividad de los tipos impositivos). Según Boix, el gobierno socialista de Felipe González hizo un esfuerzo enorme para incrementar los gastos de inversión, limitando la expansión de los gastos de consumo. Eso no impidió que expandiera, selectivamente, algunas políticas sociales. Tanto la asignación de inversiones públicas como la expansión del gasto social se vieron parcialmente impulsados por la necesidad de afianzar una estructura política de apoyo, que permitiera al PSOE proseguir sus proyectos de modernización. Gracias a ello, el PSOE logra afianzar su voto en zonas del país donde se volcó el mayor volumen de transferencias públicas y entre los sectores sociales a los que prestó mayor atención. Boix destaca la capacidad del PSOE de aumentar su apoyo social entre los votantes de mayor edad, aunque no analiza los perfiles redistributivos de las políticas del PSOE que pudieron propiciar esa tendencia. Entre 1982 y 1993, con un desgaste de ocho puntos reales de voto (el voto real del PSOE pasa del 38 al 30%), el PSOE incrementa su apoyo electoral en seis puntos entre las personas de 65 y más años y en cuatro puntos entre las personas de 55 a 64 años (**Tabla 5.3**). Mientras esto ocurría, se producía un desgaste importante del voto en el electorado más joven.

(Tabla 5.3)

El trabajo de Boix no proporciona evidencia de carácter “micro” de que la valoración de las políticas sociales del gobierno entre los votantes más jóvenes edad fuera un factor relevante a la hora de explicar su decisión de castigar al PSOE. Esta evidencia se presenta a continuación. Para ello se utiliza la encuesta (el estudio 1.789 del CIS), cuyo trabajo de campo se realiza en enero-febrero de ese año, ocho meses antes de las elecciones. El tamaño de la muestra (27.287 entrevistas) y la inclusión de indicadores de valoración política de la gestión del gobierno en distintas áreas permite desagregar los determinantes del voto en cuatro grupos de edad: 18 a 30 años, 31 a 45, 46 a 60, 60 años y más. Es la única encuesta del CIS encontrada durante las legislaturas socialista que permite realizar este tipo de análisis.¹⁷⁸

Lo primero que llama la atención es la proporción elevada de personas que valoran mal o muy mal la gestión del gobierno socialista en políticas como el paro, la droga, o la vivienda,

¹⁷⁸ Otros estudios, realizados en diferentes momentos de la etapa socialista, presentan problemas para alcanzar nuestros propósitos: tamaño muestral insuficiente, inexistencia de indicadores adecuados o calendario demasiado lejano a una convocatoria electoral.

campos que afectan de forma directa al bienestar de las personas jóvenes. Un porcentaje algo inferior valoran mal o muy mal la política de pensiones y el funcionamiento de la sanidad. La política mejor valorada es la educativa. Con independencia de las valoraciones concretas, hay que destacar el grado elevado de coincidencia en la valoración de las políticas sociales del PSOE. Los miembros de los distintos grupos de edad se distribuyen de forma similar en las valoraciones que realizan. Existen sólo diferencias pequeñas en su opinión sobre la política sanitaria. Las personas del grupo de edad más avanzada (y cuya utilización del sistema sanitario es más intensa) expresan valoraciones ligeramente más positivas que el resto de los grupos (**Tabla 5.4**). Esto no significa, sin embargo, que el impacto de estas valoraciones sobre el voto y el desgaste electoral del PSOE sean necesariamente similares en los distintos grupos. En la decisión de votar pueden pesar consideraciones “egocéntricas” —si las valoraciones acerca de las políticas que más le afectan pesan también bastante más en su voto— o “sociotrópicas” —si es sensible a las políticas que le afectan directamente, en función de su pertenencia a un grupo de edad específico, pero también lo es a políticas que influyen sobre el bienestar de otros grupos.

(Tabla 5.4)

En la **Tabla 5.5** aparecen los resultados de cuatro regresiones logísticas que analizan los determinantes de la intención de no votar al PSOE en las elecciones generales de 1989 habiéndolo apoyado en la convocatoria electoral anterior (1986). Es decir, se estudian los factores que propician la fuga de votantes del PSOE hacia otros partidos y la abstención. En los modelos presentados se analiza la intención de no renovar el apoyo al PSOE en función de la valoración de las políticas seguidas por el gobierno en materia de “la educación”, “vivienda”, “paro”, “droga”, “sueldos y salarios”, “pensiones” y “sanidad”.¹⁷⁹ Se ha incluido, por tanto, ámbitos que afectan de forma diferenciada a distintos grupos de edad. Los modelos controlan todos los efectos de las distintas valoraciones por la auto-ubicación ideológica de los/as votantes. Esta es una forma de depurar el efecto de las valoraciones de políticas concretas de las predisposiciones ideológicas que podrían estar condicionando el juicio del votante.

(Tabla 5.5)

¹⁷⁹ Esta valoración va desde muy buena (1) a muy mala (5).

Los resultados dejan entrever que la probabilidad de no votar al PSOE aumenta, por regla general, cuando se valora mal las políticas que desarrolla. El voto de los jóvenes que habían apoyado al PSOE en el 1986 es muy sensible a la valoración de la gestión del gobierno en relación a políticas que les afectan directamente (paro, educación y vivienda), pero también depende de la valoración de la política de pensiones y (algo menos) de la política sanitaria. Por ejemplo, la probabilidad de haber dejado de votar al PSOE de un elector joven que votó al PSOE en 1986 y ahora dice que el gobierno lo hecho muy mal en relación al paro es 48 puntos porcentuales más baja que un/a joven que dice que la gestión del gobierno ha sido muy buena en este campo (**Gráfico 5.1**). Pero los votantes jóvenes no cambian el sentido de su voto únicamente en respuesta a una valoración negativa sobre la gestión de materias que les atañen más directamente. En general muestran una orientación “sociotrópica” hacia la política social. Tienden también a castigar al gobierno si creen que éste gestiona mal las pensiones o la sanidad. Ocurre algo parecido con los votantes de 31 a 45 años, aunque en este caso su voto es insensible a la valoración de la política educativa del PSOE.

(Gráfico 5.1)

Los/as votantes de mayor edad muestran una orientación más pragmática y “egocéntrica”. Su fidelidad al PSOE depende fundamentalmente de la valoración de las políticas sociales que más los favorecen: sanidad y pensiones. Como puede observarse en el panel de la derecha del gráfico, las distintas líneas presentan pendientes diferenciadas. Las líneas que describen la variación de la probabilidad de haber dejado de votar al PSOE en función de la valoración de la gestión del gobierno en materia de paro o vivienda presentan una pendiente escasa. Eso indica que el voto de las personas de más de sesenta años es prácticamente insensible a la valoración que realizan sobre la gestión del gobierno en relación al paro o la vivienda (los efectos descritos en el gráfico no son significativos). Reaccionan débilmente cuando les desagrada la política educativa (el coeficiente sólo es significativo con un nivel de confianza del 90%). Pero el cambio de voto se hace muy probable cuando valoran negativamente la política sanitaria y, sobre todo, la política de pensiones (las pendientes son más pronunciadas).

Las personas mayores de sesenta años albergan una definición clara de sus intereses en política social, que se concreta en una renovación del apoyo al PSOE cuando la gestión del gobierno concuerda con esas preferencias. Las diferencias en el comportamiento electoral crean incentivos claros para el gobierno. Se puede asegurar apoyos transversales si apuesta por políticas que tienen impacto sobre el voto a lo largo de todas las etapas del ciclo vital. Las políticas orientadas preferentemente a la gente mayor influyen intensamente en el voto de éstos, pero también pueden arrastrar votantes de otros grupos de edad. Como apuntamos en el primer capítulo, los jóvenes tienen motivos para preocuparse por la suerte de colectivos de edad más avanzada. En primer lugar, forman parte de grupos sociales (como la familia) que integra personas situadas en diferentes etapas del ciclo vital. Por ejemplo, las políticas que benefician a las personas de edad avanzada pueden favorecer los intereses de las personas jóvenes si éstos tienen un interés altruista en el bienestar de personas ancianas con las que mantienen vínculos familiares y/o afectivos. En segundo lugar, los/as jóvenes están llamados a hacerse mayores. Su sensibilidad hacia las políticas favorecedoras de grupos de edad más avanzada es racional si se interpreta como una anticipación prematura de sus intereses futuros. No ocurre así con las personas de edad más avanzada, cuyo interés en las “políticas juveniles” sólo puede ser altruista.¹⁸⁰

Dos factores adicionales pueden ayudar a explicar la falta de incentivos del PSOE para concentrar sus esfuerzos políticos en atraer a los votantes jóvenes impulsando el tipo de políticas por las que manifiestan preferencias más intensas. En primer lugar, la participación electoral de los jóvenes en España es menor que la de otros grupos de edad. José Ignacio Wert (2003: 83) ha calculado que en las distintas elecciones generales celebradas entre 1982, la diferencia de participación del electorado joven (de 18 a 24 años) y del conjunto del electorado oscila entre -8% (en 1982) y -11% (en 1989). Entre el electorado joven algo más maduro (25 a 34 años), la diferencia oscila entre -2% (en 1982 y 1993) y -5% (en 1989). Estas diferencias son estadísticamente significativas en todos los años. Al igual que sucede con los sindicatos, los cálculos de un partido político no pueden ignorar los niveles de implicación política de los colectivos a los que pretenden representar. Resulta arriesgado intentar formar una coalición electoral amplia y estable, para desarrollar un programa de gobierno en varias legislaturas, si se confía sólo en el apoyo de grupos con baja implicación política.

¹⁸⁰ Aunque existe también la posibilidad de que reciban beneficios indirectos si conviven con personas jóvenes.

Hay otra razón para que la pérdida de voto juvenil por parte del PSOE no fuera un motivo de preocupación intensa. Los jóvenes desafectos del PSOE no engrosaban las filas del principal partido de la oposición. Herbert Kitschelt (2001: 274-76) ha argumentado que, al optar por estrategias de gasto social, los equipos de gobierno valoran la capacidad de los partidos competidores de arrancarle apoyos entre sectores descontentos con las políticas gubernamentales. Cuando la reputación del principal partido de la oposición como posible defensor de los intereses de esos colectivos agraviados es baja, los gobiernos gozan de un margen de maniobra considerable para ignorar los deseos y demandas de esos colectivos. El descontento de estos votantes se traduce difícilmente en una amenaza a la hegemonía electoral del partido en el gobierno, puesto que a la oposición le cuesta rentabilizar ese descontento. El mecanismo de control retrospectivo de la labor gubernamental a través del voto de castigo está bloqueado debido a la inexistencia de un partido al que los ciudadanos/as agraviados puedan otorgar su confianza.

Desde las primeras elecciones democráticas, Alianza Popular primero y el Partido Popular después concitaron niveles bajos de confianza en el electorado más joven. Sólo el 13% de los jóvenes menores de 25 años y el mismo porcentaje de los que tienen 25 a 34 años habían votado AP en 1982 (Boix 1996: 242). AP es percibido como un partido con escaso gancho entre los/as jóvenes.¹⁸¹ El desgaste electoral del PSOE entre los/as jóvenes se traduce en avances pequeños del apoyo juvenil a Alianza Popular. En 1986, el AP-CDS incrementa su apoyo entre los/as jóvenes menores de 25 años al 15%, y entre los jóvenes de 25 a 34 al 19% (datos del Estudio 1.737 del CIS, cifrados en González 2005: 266). Pero la mayoría de los jóvenes se muestran bastante recelosos respecto al partido conservador. Un 67% se declaran ideológicamente distantes o muy distantes de AP-CDS (sólo el 28% se ven distantes o muy distantes al PSOE).¹⁸² En 1989, las personas jóvenes que se mantienen ideológicamente distantes o muy distantes al PP apenas se ha reducido: es del 61% (los jóvenes distantes o muy distantes al PSOE han aumentado al 35%).

¹⁸¹ Mientras el 55% de las personas entrevistadas en el estudio post-electoral 1.357 del Centro de Investigaciones Sociológicas creen que el PSOE recibió “seguramente” el apoyo de “los jóvenes”, sólo el 7% piensa que AP se beneficia “seguramente” de ese respaldo.

¹⁸² Datos del estudio del CIS 1.529. Se han eliminado las respuestas de las personas que no contestan a la pregunta (pero no las de las que declaran que no saben contestarla). La proporción de personas que se declaran distantes o muy distantes a AP-CDS disminuye con la edad. Entre los mayores de 60 años es de un 48%.

El viraje hacia el centro que anuncia el partido conservador es visto con incredulidad por una parte considerable de jóvenes.¹⁸³

A pesar del desgaste del PSOE entre los sectores más jóvenes, en 1993 el 72% de los entrevistados/as de 30 o menos años declaran albergar poca o ninguna confianza en el PP.¹⁸⁴ Preguntados por los mejores resultados políticos para España antes de las elecciones de 1993, la mayoría de los jóvenes siguen prefiriendo un gobierno del PSOE, aunque, en comparación a los grupos de edad más avanzada, buena parte de ellos preferiría que no obtuviera mayoría absoluta (Tabla 5.6). El PSOE se beneficia de la inexistencia una alternativa política de gobierno que pudiera concitar la confianza de la mayoría del electorado joven.

(Tabla 5.6)

Los datos sugieren que, con el paso de los años, el apoyo que el PSOE consigue entre el electorado joven se esfuma como consecuencia —entre otros factores— de la valoración negativa de las políticas que el gobierno socialista lleva a cabo. Pero la pérdida de votantes jóvenes del PSOE no contribuyó a reforzar significativamente el voto al PP. En 1993, el PP obtuvo el 27% de los sufragios, pero no logró vencer las reticencias del electorado joven a otorgarle su respaldo. En 1993, el voto al PP entre los jóvenes de 18 a 24 años fue del 20% (7 puntos más que en 1982, pero 7 puntos menos que el porcentaje total de voto al PP) y el de los que tenían entre 25 y 34 años del 18% (5 puntos más que en 1982, pero nueve menos que el porcentaje total) (datos de Boix 1986: 242). El apoyo escaso obtenido entre los jóvenes restó al principal partido de la oposición opciones para ganar las elecciones.

Como sugiere el economista Albert. O. Hirschman (1970) en su conocido trabajo *Exit, Voice and Loyalty*, existen dos modos en que los/as dirigentes de una organización o de un gobierno pueden percatarse de que la calidad de los productos o servicios que ofrecen no están a la altura de lo que sus clientes o la población esperan de ellos/as. Clientes y ciudadanos/as pueden “salir”, otorgando su confianza a otro proveedor o gobernante, u expresar su “voz” de descontento, aireando sus quejas. “Salida” y “voz” son dos respuestas conceptualmente

¹⁸³ Preguntados si el cambio de nombre del PP obedece sólo a un cambio de nombre o a un cambio ideológico más profundo, el 44% de los jóvenes de 30 o menos años lo consideran sólo un cambio de nombre. Piensan lo mismo el 26% los mayores de 60 años. Éstos últimos muestran mayor grado de incerteza (el 49% de ellos/as declaran que “No saben”, por un 28% de los/as jóvenes).

diferenciadas a la decepción con el resultado de una “relación de agencia”.¹⁸⁵ Hirschman señala, sin embargo, que muchas veces clientes y ciudadanos/as se muestran reacios a ejercer las opciones de “salida” o “voz” cuando advierten las primeras señales de deterioro de la relación. Ello se debe a que guardan a su agente cierta “lealtad”. En una relación política entre votantes y gobiernos, la lealtad se puede expresar por ejemplo en la tendencia a “exonerar” a los gobernantes de culpa por la mala situación del país.

Agotada la lealtad, los ciudadanos/as dispuestos a “salir” o a expresar su “voz” de queja se enfrentan a ciertos costes. “Salida” y “voz” son opciones atractivas siempre y cuando quien se proponga ejecutarlas pueda confiar en la eficacia de estas acciones. La eficacia de las salidas depende de que exista una opción alternativa que pueda mejorar el status quo. Si no es así, la salida es una opción poco efectiva y es previsible que la “amenaza” de salida de los/as votantes genere menor grado de inquietud en el agente. En este sentido, la baja implicación política y el escaso atractivo de AP/PP entre los/as votantes más jóvenes durante las primeras legislaturas socialistas contribuía a reducir los riesgos que entrañaba su posible “salida” masiva como respuesta a políticas insensibles a sus intereses. Ello no hubiera ocurrido si el descontento se hubiera concentrado entre votantes de edad más avanzada, puesto que los niveles de desconfianza en una alternativa de gobierno conservadora eran significativamente más bajos.

Ante la falta de alternativas políticas mejores, los/as jóvenes cuentan sólo con la “voz” para trasladar su insatisfacción con la forma de gobernar. Pero, la eficacia de la “voz” está relacionada con la capacidad de hacerse oír allí donde se toman las decisiones.

c) Déficit de promotores.

Las iniciativas de apoyo a la juventud necesitan, al igual que otro tipo de políticas, “promotores” capaces de trasladar visiones y propuestas a los/as dirigentes —en el supuesto de que éstos no las alberguen ya. Necesitan también una “voz” que explice aquello que disgusta a los jóvenes. En 1982 el PSOE es un partido encabezado por dirigentes jóvenes. Su victoria es saludada como la de la llegada al poder de una nueva generación que no ha vivido la Guerra Civil en carne propia y

¹⁸⁴ Manifiestan lo mismo el 57% de las personas mayores de 60 años.

¹⁸⁵ En la teoría económica de la agencia un actor, el principal, selecciona otro, un agente, para que lleve a cabo gestiones que benefician los intereses del primero. En una democracia, los/as votantes, como actor principal, eligen a un agente de entre los diversos que concurren a las elecciones, le otorgan poder y esperarán que desarrolle las políticas que más les convienen. Es decir, que cumpla las promesas que han animado al principal a realizar dicha elección.

no había tenido responsabilidades políticas anteriores. Sólo 6 (3,3%) diputados/as tienen menos de 30 años, pero 84 (46%) tienen entre 30 y 39. En esos momentos, AP no tiene diputados/as menores de 30 años, y sólo 13 (el 15%) tienen menos de 40 años (datos de Gangas 2000).¹⁸⁶ El programa electoral del PSOE muestra, como se ha tenido ocasión de comprobar, un interés genuino por la suerte que están corriendo los jóvenes, y especialmente por la cuestión del desempleo, que afecta a este colectivo más que a ningún otro.¹⁸⁷

Con el paso de las legislaturas, el gabinete socialista envejece, y también lo hace el grupo parlamentario. En 1989 quedan dos diputados menores de 30 años (el 1,1%) y 46 (26%) con edades comprendidas entre 30 y 39. En 1993, por vez primera, no hay diputados/as menores de 30 años y sólo 21 (13%) menores de 40 (datos de Gangas 2000). Los/as jóvenes no encuentran acomodo en las listas electorales del PSOE, o al menos no en las candidaturas con probabilidad elevada de salir elegidas. La edad elevada de los diputados/as del PSOE contrasta con el rejuvenecimiento paulatino del PP. A partir de 1993, el PP tiene más diputados/as menores de cuarenta años que el PSOE. En los escaños socialistas aparecen cada vez más diputados/as mayores de 50 años (**Gráfico 5.2**).¹⁸⁸

(Gráfico 5.2)

El “encanecimiento” del grupo parlamentario y de las prioridades políticas del PSOE provoca una reacción débil por parte de posibles colectivos agraviados. Durante las cuatro legislaturas socialistas, las voces críticas más sonoras de grupos internos o colectivos afines provienen de la UGT, buena parte de cuyos militantes también pertenecían al PSOE. Como se ha tenido la ocasión de comprobar en la sección anterior, el interés de la UGT en los problemas de los/as jóvenes fue limitado y coyuntural. La organización juvenil del PSOE —Juventudes Socialistas— rara vez cuestionó las prioridades del gobierno.¹⁸⁹ Su alineamiento con el gobierno en relación a los proyectos de reforma del mercado laboral implicó que tuvieran que marcar

¹⁸⁶ Los datos proceden de un archivo del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la Fundación Juan March.

¹⁸⁷ Unión de Centro Democrático y Social tiene un diputado menor de 40 años y todos los representantes del Partido Comunista de España tienen más de 50 años.

¹⁸⁸ Ello es debido, en buena medida, a la continuidad elevada de los diputados/as socialistas en sus escaños, a diferencia de la de otros partidos, más afectados por períodos convulsos de renovación.

¹⁸⁹ Las siguientes consideraciones se basan en un análisis de los artículos de *El País* y *la Vanguardia* entre octubre de 1982 y junio de 1996 en que se menciona a las Juventudes Socialistas con cualquier pretexto.

distancias con la mayoría de organizaciones juveniles —críticas con el gobierno en diversas ocasiones.¹⁹⁰ Cuando plantean objeciones públicas a las iniciativas del Ejecutivo —como sucedió con motivo de la reforma laboral de 1994— se refieren a detalles pequeños, sin contradecir el espíritu de las reformas previstas.¹⁹¹ En líneas generales, Juventudes Socialistas tendió a justificar el desgaste del apoyo juvenil a los socialistas como el resultado de un “desencanto general de la juventud”, que afecta a actitudes generales de los jóvenes frente a la vida pública, y no sólo frente al partido en el gobierno.¹⁹²

Aún así, con el paso de las legislaturas, los dirigentes de Juventudes Socialistas se quejan amargamente del estado de bloqueo que les impide acceder a puestos de responsabilidad, pero sus críticas tienen, hasta el final de la etapa socialista, eco escaso en la confección de listas y de gobiernos. Los/as dirigentes de la organización juvenil muestran repetidamente su contrariedad por el hecho de que el éxito electoral de los políticos que encabezan el proyecto socialista durante los años ochenta representa un tapón generacional para los/as militantes más jóvenes. Estos/as últimos acaban habitualmente relegados a los últimos lugares de las listas electorales, sin posibilidad real de salir elegidos, y de adquirir así experiencia política. Frente a esta marginación política, alzan su voz los máximos responsables de la organización juvenil. Desde su punto de vista, el PSOE está, por un lado, desaprovechando a los militantes que deben asegurar el relevo generacional de los protagonistas políticos de la transición y la llegada al poder y, por otro, a “caras nuevas” con ideas renovadas y que pueden ayudar a atraer el voto joven.¹⁹³

Durante su etapa en el gobierno, el PSOE se caracteriza por ser un partido con un control elevado de los dirigentes sobre la organización. Las prácticas disciplinarias instauradas desde

¹⁹⁰ El ejemplo más evidente es el enfrentamiento de Juventudes Socialistas con otras organizaciones juveniles que habían convocado movilizaciones contra el Plan de Empleo Juvenil en 1988. Los dirigentes de Juventudes Socialistas se significan en la defensa de un “plan de choque” que consideran necesario para hacer frente a la situación de marginalidad social y laboral en que viven los jóvenes. Buen ejemplo de ello, son dos artículos sobre el tema de dirigentes de la organización juvenil Javier de Paz (1988), Carlos Alonso (*El País*, 20 de noviembre de 1988).

¹⁹¹ Por ejemplo, antes de que fuera adoptada la reforma de 1994, Juventudes Socialistas publica un manifiesto que da por buenas las medidas del gobierno, pero piden modificaciones puntuales por lo que respecta al contrato de aprendizaje. Solicitan que la edad máxima para la aplicación de estos contratos sea de 21 años, en vez de los 25 que quiere el Gobierno, y que no dure más de dos años, frente a los tres propuestos por el Ejecutivo. También reivindican que el sueldo no sea inferior al 90% del salario mínimo, en lugar del 70% previsto (*El País*, 5 de diciembre de 1993).

¹⁹² Un argumento para explicar la pasividad y desencanto que se escucha con cierta frecuencia a finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa es que los jóvenes de hoy han heredado las libertades por las que los jóvenes de la Transición tuvieron que luchar, lo que se traduce en cierto vacío ideológico y debilidad de ánimo (por ejemplo, declaraciones de Miguel Chover, Secretario de Organización de Juventudes Socialistas a *El País*, 19 de mayo de 1993).

inicios de la transición permiten que un pequeño órgano ejecutivo acumule un poder enorme para compensar y sancionar a los militantes —a través, fundamentalmente, del control de las listas de candidatos/as, cerradas y bloqueadas (Maravall 1992, Gangas 1995). Dicha disciplina fue de gran ayuda para hacer frente a conflictos difíciles (como la reconversión industrial, la reforma educativa o las reformas del mercado laboral) o prevenir la expresión pública de fisuras internas cuando el partido se vio obligado a rectificar posiciones anunciadas en el programa electoral (como sucedió cuando el Gobierno cambió su opinión respecto a la pertenencia a la OTAN), y contribuyó asimismo a reforzar las capacidades de persuasión del partido durante las campañas electorales. Sin embargo, el pluralismo interno salió malparado. A juicio de un observador privilegiado, José María Maravall —sociólogo y, en su momento, ministro y colaborador destacado de Felipe González—, la disciplina férrea practicada en el partido silenció las críticas, impidiendo que las opiniones de los afiliados/as sirvieran de “alerta temprana” acerca de los costes de políticas impopulares (Maravall 2003). Dentro de este contexto hay que inscribir la actitud general de conformidad mostrada por Juventudes Socialistas frente a la adopción de políticas gubernamentales que estaban provocando el rechazo de otras organizaciones juveniles y del propio electorado joven.¹⁹⁴

Si la “voz” de los jóvenes desde dentro del PSOE fue poco determinante en la configuración de la agenda política, no lo fueron tampoco las voces juveniles externas. A lo largo del período del gobierno socialista no existieron grandes asociaciones juveniles que pudieran erigirse en portavoces de segmentos significativos de la juventud en las diversas cuestiones que les atañe. Las más activas fueron las organizaciones estudiantiles, que plantaron cara al gobierno durante la tramitación de la reforma educativa mediante movilizaciones en la calle y la convocatoria de paros en los centros educativos, arrancando concesiones significativas. Pero la mayoría de estas organizaciones carecieron de la misma capacidad movilizadora frente a otras

¹⁹³ Por ejemplo, en 1996, el secretario general de Juventudes Socialistas, Juan Bouza demanda abiertamente que el PSOE incremente la representación de afiliados a la organización juvenil en las listas electorales con objeto de atraer el voto joven con propuestas lanzadas por jóvenes (*El País*, 09-01-1996).

¹⁹⁴ En momentos puntuales, Juventudes Socialistas expresó un nivel más alto de disenso con las políticas del Ejecutivo. Eso sucedió, por ejemplo, en los momentos de mayor conflicto interno en el PSOE, coincidiendo con la combinación de escándalos, deterioro económico y desgaste ante la opinión pública. En estas escasas “ventanas de oportunidad”, las opiniones vertidas por los dirigentes de Juventudes Socialistas se muestran muy críticas con la política del Ejecutivo en relación a los jóvenes. Por ejemplo, en octubre de 1992, un informe el Comité Federal de Juventudes Socialistas exige que los costes de la crisis económica no repercutan fundamentalmente sobre las espaldas de los jóvenes y reclama que la política gubernamental sea más solidaria y equilibrada: “los jóvenes no podemos pagar las consecuencias de los errores que se cometen en el área económica del Gobierno porque suficientes problemas tenemos ya” (*La Vanguardia*, 04 de octubre de 1992).

iniciativas gubernamentales. Durante el debate sobre el Plan de Empleo Juvenil, el Sindicato de Estudiantes, una organización estudiantil de corte marxista que había encabezado las movilizaciones de los años 1986 y 1987 contra la reforma educativa, cobró cierto protagonismo en la convocatoria de movilizaciones y de la huelga general. Pero cuando, tras el éxito de las movilizaciones, el gobierno acepta finalmente negociar la retirada del Plan y otras propuestas sociales, ignora el papel de las organizaciones juveniles y convierte a los sindicatos de clase en sus interlocutores preferentes.

Las demandas de la población joven tampoco se ven amplificadas por la “voz” de otros posibles promotores de políticas que benefician a la juventud. Un buen ejemplo de ello es el debilitamiento de los movimientos vecinales que durante los últimos años del franquismo se habían erigido en los portavoces principales del descontento con las necesidades insatisfechas de vivienda e infraestructura urbana. La Transición política trae consigo el apaciguamiento de estas reivindicaciones. Los partidos de izquierda, al hacerse con las riendas del poder en la mayoría de los grandes ayuntamientos, cooptan a los líderes y contribuyen a la desmovilización del movimiento vecinal (del Aguila 1988, Walliser 2002). Durante los años ochenta y primera mitad de los noventa ya no existen movimientos urbanos con la suficiente entidad para abanderar las demandas juveniles de acceso a la vivienda.

Otro ejemplo similar es el interés escaso demostrado por el movimiento feminista en España por cuestiones que atañen a parejas jóvenes, como son las políticas de cuidado de niños/as. Mientras en otros países, los grupos feministas y las feministas que ocupan cargos de responsabilidad política y sindical se erigen con frecuencia en “promotores” de una amplia oferta de servicios de cuidado para los niños/as pequeños —a fin de facilitar a sus madres la compatibilización de sus responsabilidades familiares y laborales—, esto no ocurrió en España. Celia Valiente (1996, 1997b) atribuye la singularidad del caso español a diversas razones que tienen que ver con el pasado autoritario. Según esta autora, la larga duración de un régimen autoritario de corte conservador significó que, llegada la democracia, el movimiento feminista tiene que acometer un número elevado de objetivos, alcanzados en otros países mucho tiempo atrás.¹⁹⁵ Esta acumulación de tareas pendientes obliga al movimiento feminista a fijar prioridades

¹⁹⁵ Entre otros, lograr la equidad de derechos políticos, la igualdad de varones y mujeres ante la ley, la despenalización y comercialización de anticonceptivos, el divorcio, el castigo de la violencia de género, la despenalización del aborto, etc.

entre las distintas reivindicaciones. La cuestión del cuidado de niños/as queda relegada a un segundo plano.

Al no luchar por políticas de apoyo a las familias con niños/as pequeños, la feministas estaban rechazando un pasado sumamente comprometido. Para las feministas que habían participado en la oposición al régimen franquista resultaba problemático ocuparse de un asunto —la maternidad— que había sido considerado por la ideología oficial del franquismo como la principal aportación de las mujeres a su país. Con la llegada de la democracia, optan por distanciarse de un tema cargado de connotaciones negativas. La centralidad que la Familia cobra durante el franquismo —como pilar básico de la sociedad— alimentó entre las feministas una postura de indiferencia respecto a las políticas de apoyo a las familias con niños/as pequeños, a pesar de que éstas pueden contribuir de forma decisiva a la liberación de la mujer, al reforzar su capacidad para integrarse plenamente en el mercado de trabajo y afianzar su posición económica en el seno de la pareja.¹⁹⁶ Esta indiferencia se reflejó en una tendencia a no incluir políticas familiares entre las demandas que las feministas se proponen avanzar desde los cargos institucionales que en muchas ocasiones llegaron a ocupar, tanto en el gobierno como en los sindicatos.

El déficit de “promotores” capaces de trasladar las demandas juveniles al gobierno y persuadirlo de la necesidad de acometer reformas legislativas relega las cuestiones que atañen al bienestar de los/as jóvenes fuera de la agenda política. Los responsables políticos admiten la existencia de problemas, pero eluden la adopción de medidas ambiciosas para corregir la situación. Otras preocupaciones cobran prioridad, reclaman soluciones urgentes, gracias a que cuentan con “promotores” eficaces, capaces de catapultarlas a la agenda pública. El gobierno encuentra mayores incentivos en re-orientar sus políticas para favorecer a colectivos cuyo bienestar no figuraba en sus prioridades originales. Con el curso del tiempo, y sin que hayan cambiado sustancialmente los parámetros de la situación, la vulnerabilidad de los/as jóvenes en el mercado de trabajo, sus dificultades para emanciparse y planificar su vida, pasan de ser una injusticia social grave frente a la que toda la sociedad debe movilizarse (como se sugiere en los programas del PSOE de 1982 y 1986), a ser una asignatura pendiente, que el PSOE relega para acometer otras reformas sociales. Las políticas sociales que podrían favorecer más directamente

¹⁹⁶ Como, por otra parte, argumenta una tradición larga de pensamiento feminista y acreditan las políticas impulsadas en los países escandinavos o Francia.

los intereses de la juventud sufren recortes o no se reajustan para hacer frente a nuevas necesidades y demandas. Las consecuencias se describen extensamente en los capítulos dos, tres y cuatro. En el capítulo seis se aborda la otra cara de la reorientación de las políticas públicas: el encanecimiento del bienestar.

Capítulo 6

REDISTRIBUCIÓN DEL BIENESTAR EN SOCIEDADES ENVEJECIDAS

“Se echa en cara la juventud el creer que el mundo empieza con ella. Ciertamente, pero la vejez cree aún más a menudo que el mundo acaba con ella. ¿Qué es peor?”

Friedrich Hebbel

“La gente fuerte se abre camino sola. De joven yo no me sentía solidario con los jóvenes; la juventud no era una categoría que me interesara (sí la inteligencia, la iniciativa, la belleza). El otro día vi en el cine a una chica rubia y linda que besaba cariñosamente a un viejo y pensé: ‘Qué simpática (ojala yo tuviera una así)’. Lo que pasa es que ahora hago causa común con los viejos. Los débiles necesitan agremiarse”

Adolfo Bioy Casares, Descanso de Caminantes

Las sociedades de consumo reservan a la juventud un lugar de privilegio. La imagen de personas jóvenes alegres puebla tanto la iconografía comercial (publicidad, moda) como otros productos culturales de consumo masivo, como el deporte, el cine o la televisión. Proliferan por doquier las representaciones vistosas, coloristas, atrayentes de jóvenes que toman las riendas de su vida, exhiben sin tapujos identidades y estilos de vida diferenciados, y resuelven con determinación los dilemas a los que se enfrentan. La visibilidad de la juventud es inversamente proporcional a la de las personas mayores. El prestigio de la juventud en la iconografía comercial se fundamenta en cualidades perecederas, que suelen verse mermadas a medida que uno se hace mayor: la salud, la belleza, la plenitud física.

A diferencia de lo que sucede con los/as jóvenes, hacerse viejo es visto por la mayoría de los españoles como un proceso eminentemente regresivo y degradante. Si bien es cierto que se reconoce que las personas mayores aportan a la sociedad experiencia y sabiduría, su imagen sigue asociada de forma habitual con situaciones de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, preguntados recientemente por los adjetivos que mejor definen a las personas mayores de 65 años, las respuestas más comunes de los entrevistados/as fueron “dependiente” (38%) y “enfermo/a” (28%) (Estudio 2.758 del CIS, 2008).¹⁹⁷ En esta misma encuesta, el 56% de los entrevistados/as afirman que, a su juicio, las personas mayores se sienten la mayor parte del tiempo “tristes, melancólicas, con sentimientos negativos”, y un porcentaje incluso mayor (el 59%) piensan que las personas mayores suelen sentirse “solos”.

Existe un consenso muy amplio en que los ancianos/as son un colectivo que merece protección especial. Este consenso se fundamenta en un entramado de normas y valores

¹⁹⁷ Los entrevistados/as tenían la oportunidad de proporcionar un máximo de tres respuestas.

favorables a la prestación de servicios a la personas de edades avanzadas, tanto dentro de la familia, como a nivel social más amplio. La conveniencia e incluso la obligación de que las familias presten cuidados y apoyo a las personas mayores es un presupuesto indiscutido en la mayor parte de culturas, aunque no todas las sociedades ponen el mismo énfasis en él. Las atenciones a las personas ancianas dentro de la familia se inscriben dentro de un circuito intertemporal de reciprocidad. Los hijos/as adeudan a sus padres y madres los cuidados que, en su momento, éstos últimos les dedicaron cuando eran niños/as. Los vínculos de afecto que habitualmente perviven entre padres e hijos después de la emancipación de éstos contribuyen a renovar la posibilidad de reclamar esta deuda. Pero, históricamente, este principio de reciprocidad ha tenido que sustentarse en dispositivos adicionales para garantizar su eficacia. Durante mucho tiempo, los cuidados recibidos por los ancianos en la familia han estado asociados al poder económico del patriarca, centrado en la titularidad de la tierra y el capital transmisible en herencia como patrimonio familiar, legado a sus sucesores, generalmente sus primogénitos varones. El declive del poder económico del patriarca agrario con el desarrollo del capitalismo ha restado a las personas mayores capacidad para reclamar el apoyo de sus descendientes, pero no la ha anulado por completo. Por ejemplo, la mayor parte de códigos legales modernos estipulan deberes de prestación alimentaria entre consanguíneos y afines en línea directa (como suegros) siempre que se hallen en estado de necesidad (Flaquer 1998:125-130).¹⁹⁸

En las sociedades modernas, el apoyo a las personas ancianas se extiende más allá de la familia. La emergencia de los sistemas públicos de prestaciones sociales ha descargado a las familias de buena parte de las responsabilidades directas asumidas en el cuidado y atención a ancianos. Aún así, entre la mayor parte de ciudadanos — incluso en los países que ofrecen las prestaciones públicas más generosas — subsiste un elevado grado de preocupación por su situación. Como puede observarse en la **Tabla 6.1**, en los distintos países desarrollados en que existen datos comparables (del *World Value Survey*) la mayor parte de los ciudadanos expresa inquietud acerca de las condiciones de vida de las personas ancianas en su país. En países como Portugal e Irlanda, cuyos sistemas públicos del bienestar se caracterizan por la baja intensidad protectora de los programas destinados a la población anciana —especialmente del sistema de

¹⁹⁸ El concepto de “prestación alimentaria” debe tomarse en sentido amplio. No sólo se incluyen los gastos de sustento propiamente dichos, sino que generalmente abarca una serie de capítulos adicionales que garantizan una asistencia integral a las personas en situación de vulnerabilidad: vestido y calzado, alojamiento, e incluso asistencia médica (Flaquer 1998: 126).

pensiones— más de la mitad de las personas entrevistadas declaran que están muy preocupadas por la situación de los mayores en su país. Pero incluso en países con políticas de bienestar muy desarrolladas, como Dinamarca y Suecia, hay un porcentaje muy elevado de personas que expresan bastante o mucha preocupación.

(Tabla 6.1)

En España, el porcentaje de personas “muy” preocupadas es comparativamente bajo, pero si le sumamos la proporción de personas “bastante preocupadas”, nos encontramos que dos de cada tres personas reconocen sentirse preocupadas por este tema. Estos resultados confirman la evidencia demoscópica de estudios recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Las personas mayores son, a juicio de la inmensa mayoría de los españoles/as, un colectivo necesitado de mayor protección que otros. Por ejemplo, preguntados acerca de responsabilidades sociales que el gobierno debe asumir, los capítulos que menos desacuerdo generan son aquellos que afectan más directamente a la población anciana: sanidad y pensiones (**Tabla 6.2**).

(Tabla 6.2)

No existe una correspondencia entre los problemas que tiene el país a juicio de los españoles/as y las políticas de protección a colectivos específicos que reclaman. A pesar de que el paro ha sido año tras año —desde inicios de la década de los ochenta— la preocupación principal de los/as españoles cuando se les ha preguntado por los principales problemas del país, la asistencia a los/as parados (creándoles un empleo, o a través de un subsidio digno) suscita niveles de desacuerdo bastante más elevados que las iniciativas de apoyo a las personas mayores. La protección a la población anciana debería ser, en opinión de la mayoría de los españoles/as, la principal prioridad de la política social.

(Tabla 6.3)

El mito de la vejez decadente

La prevalencia de las imágenes sociales sobre la juventud y la vejez descritas más arriba no se corresponde con la evidencia sociológica que tenemos acerca de las condiciones y oportunidades vitales de estos grupos. Ni la juventud es la etapa dorada en que las personas llevan una vida dichosa y despreocupada, ni la vejez un período oscuro, de decadencia, que las personas viven necesariamente desde la marginalidad y el desconsuelo. La vejez es universalmente reconocida como la etapa de la biografía más próxima a la muerte, en la que se desencadenan procesos biológicos que implican un deterioro de la capacidad funcional de las personas. Pocas sociedades, por no decir ninguna, definen la vejez como una etapa biográfica “deseable”. La vejez evoca el temor al declive físico y la muerte. En la cultura cristiana, la vejez pasa a identificarse a partir de san Agustín con el pecado original, consumado en la eterna condena del cuerpo a envejecer. Como sostiene en el siglo IV Efrén de Nísibe, “Adán era eternamente joven y bello en el paraíso, pero su desprecio del orden lo convirtió en un anciano, triste en su decrepitud, llevando el miserable peso de la vejez” (Minois 1989: 167).

Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado la fórmula para detener el paso del tiempo, e incluso rejuvenecer. Herodoto creía en la existencia de unas aguas milagrosas en Etiopía, que sus pobladores bebían a escondidas y a las que había que atribuir su longevidad excepcional. Las fuentes rejuvenecedoras son mencionadas en el romance de Alexandre, donde se glosan las hazañas de Alejandro Magno y su siervo. Son también, según la leyenda, el motivo que lleva a Juan Ponce de León al descubrimiento de la Florida, donde el conquistador castellano esperaba encontrar manantiales de aguas curativas. Otro referente cultural que evoca el temor al envejecimiento y la ambición humana de no envejecer son los “pactos con el diablo”, en el que la persona ofrecía al diablo su alma a cambio de la eterna juventud. Buena parte de estas leyendas tienen un final trágico, moralizante, que reafirma la irreversibilidad del envejecimiento y propugna el fatalismo frente a la decadencia. Prolongar en exceso la juventud es visto como un acto perverso y fatuo. En el *El Retrato de Dorian Gray*, de Oscar Wilde, el protagonista ambiciona a toda costa la eterna juventud. Su deseo se cumple, pero la desfiguración de su rostro en el retrato sirve como recordatorio de los pecados cometidos sobre su alma.

El proceso de medicalización del envejecimiento en las sociedades contemporáneas acentúa el negativismo respecto a la vejez. La medicalización supone centrar la atención sobre la

dimensión biológica de las personas, eclipsando otras realidades más positivas de la vejez (Estes y Binney 1989). La cruzada médica emprendida para controlar tecnológicamente el declive físico y mental de la persona contribuye, paradójicamente, a reforzar el clima de temor al envejecimiento al hacer presente la conexión íntima entre vejez y muerte. Los avances tecnológicos de la medicina han ralentizado la progresión de muchas enfermedades y suprimido las complicaciones letales de muchas otras. Pero eso significa también que las personas pasan cada vez más años enfermas (aunque la severidad de su morbilidad varíe) y que la certeza de que no se puede vencer a la muerte se termina siempre imponiendo.¹⁹⁹

Las percepciones negativas sobre la vejez anidadas en el imaginario colectivo contrastan con la evolución de los indicadores más importantes de bienestar y calidad de vida. En el siglo XX, los compromisos sociales adquiridos por los estados del bienestar y los avances médicos, han mejorado sustancialmente las condiciones materiales y físicas de la población anciana. El riesgo de pobreza y de experimentar situaciones de dependencia económica y residencial disminuye sustancialmente. Por otra parte, es cada vez mayor el número de personas que, gracias a las innovaciones tecnológicas, llegan a edades más avanzadas, y lo hacen en condiciones inimaginables hace sólo unas décadas. Actualmente la mayoría de las personas en la franja de los 60-70 años se encuentran a veinte o treinta años de la muerte, muchos de los cuáles van a disfrutar en buenas condiciones de salud. Enfermedades que condenaban a la muerte segura se han convertido en afecciones pasajeras. El riesgo de sufrir físicamente a causa de enfermedad ha sido, en parte, suprimido gracias al desarrollo de la medicina anestésica.

La inclusión indiscriminada de todas las personas mayores en el mismo saco impide capturar la gama de situaciones en que pueden encontrarse los individuos que integran este colectivo. La transición a la “tercera edad” acarrea, para muchas personas, el cese o la reducción de responsabilidades profesionales y familiares y un incremento de la capacidad de control sobre su tiempo. La “jubilación” y la emancipación de los hijos/as abre muchas veces espacios de libertad inusitados para personas que se encuentran en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Las personas mayores se convierten en el objetivo de publicistas de una industria

¹⁹⁹ Durante la primera mitad del siglo XX, el progreso más importante en salud y esperanza de vida de las personas se produce en edades prematuras, gracias a la mejora de la nutrición y los sistemas de salud pública (que permite reducir la incidencia de enfermedades infecciosas). A partir de la década de los setenta, la esperanza de vida aumenta para las personas mayores de 55 años. Por un lado, las personas de edad avanzada viven más tiempo porque su vida anterior ha transcurrido en mejores condiciones de salud. Por otro, gran parte de las innovaciones médicas van dirigidas a combatir enfermedades que afectan a las personas a edades avanzadas (Marmot y Nazroo 2001).

creada para llenar y dar sentido a su tiempo libre. El sector inmobiliario intenta incitarlos a adquirir segundas viviendas en lugares cálidos y agradables (Arizona o Florida en Estados Unidos, la costa mediterránea en Europa), atraerlos a complejos residenciales donde podrán vivir una segunda juventud, practicando deporte (como el golf o el tenis), cuidando su cuerpo (en centros de estética, spas, etc.), o relajarse lejos de las presiones y preocupaciones cotidianas que habían vivido en el pasado. La industria del ocio los invita a irse de vacaciones, ya sea en lujosos cruceros (a los sectores más acomodados) o en viajes colectivos subvencionados. La universidades se afanan en atraer a aquellos/as que perseveran en el deseo de conocer. Hasta los sexólogos recuerdan que el placer no conoce límites de edad.

Según datos de la *Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Anciana* (Estudio 2.647 del CIS, 2007), la mayoría de españoles/as mayores de 65 años viven una vida bastante diferente de la que transmiten las imágenes sociales más negativas. El 86% vive en su domicilio habitual, acompañado de su cónyuge o de otras personas. La gran mayoría son capaces de desarrollar las actividades de la vida cotidiana sin ayuda de otras personas. Más del 90% de las personas comen, se visten, se asean y arreglan, andan por casa, se levantan y acuestan, o se bañan o duchan sin necesidad de recurrir a nadie. Más del 80% no necesitan acompañamiento para salir y desplazarse por la calle, o para ir al médico. Las situaciones de dependencia se concentran más allá de los 85 años (entre los “viejos viejos”). Sólo a partir de estas edades avanzadas proliferan las demandas de ayuda para realizar actividades básicas. El 19% necesita ayuda para vestirse y desvestirse y el 8,1% no es capaz de hacerlo de ninguna manera, el 18% necesita ayuda para asearse y arreglarse, y el 10% es incapaz de hacerlo, el 14% necesita ayuda para acostarse y levantarse y el 7% no es capaz de hacerlo, el 34% necesita que le ayuden a bañarse o ducharse y el 14% es incapaz de hacerlo de ninguna manera. Es también, a partir de los 85 años, cuando aumenta sensiblemente el número de personas que necesitan ayuda para salir de casa o ir al médico. El 26% declaran que necesitan ayuda para salir o desplazarse en la calle y el 18% que ya no pueden hacerlo. El 40% necesitan ayuda para ir al médico y un 19% manifiesta que no es capaz de hacerlo de ninguna manera.

Los resultados del Estudio 2.647 del CIS contradicen así mismo la percepción de que las personas mayores suelen sentirse “tristes” y “solas”. Preguntados acerca de cómo se han sentido en las últimas semanas, dos de cada tres personas mayores responden que “bien, contentas”. Dos de cada tres personas mayores de 65 años declaran también que, durante un día cualquiera, pasan

el la mayor parte del tiempo en compañía de familiares (56%) o amigos (7,5%). El 35% pasa la mayor parte del tiempo sólo/a, pero eso no quiere decir necesariamente que esas personas no posean vínculos con otras personas. La mayoría de personas que declaran pasar el tiempo fundamentalmente solas mantienen contacto asiduo con familiares, amigos o vecinos. Los datos disponibles sugieren que la población anciana rara vez se ve abocada al aislamiento, la falta de compañía o de oportunidades de ocio. Más de tres de cada cuatro ancianos/as que tienen hijos/as residen en el mismo municipio que alguno de ellos/as (Meil 2000: 16). Cuando los hijos/as viven en la misma localidad, las relaciones intergeneracionales son frecuentes. Cuando no es así, tienden a mantener una intensa comunicación telefónica con ellos/as y las visitas son frecuentes. Todos estos vínculos configuran un modelo de “intimidad a distancia”, del que la mayoría de personas mayores dice estar muy o bastante satisfecha (IMSERSO 2002: 64-70). Gran parte de personas mayores declara, además, que se ve varias veces a la semana con vecinos/a, amigo/as o compañeros de club o asociación. Más del 80% de las personas ancianas declaran que pueden contar con alguien si necesitan pequeñas ayudas económicas o se sienten deprimidos (*Eurobarómetro 56.1*, 2001). Sólo un porcentaje reducido dice sentirse solo/a con frecuencia. La evidencia sugiere que la soledad está más relacionada con la viudedad (fundamentalmente de las mujeres) que con la ancianidad. Fuera de esta eventualidad, no existen diferencias apreciables entre los sentimientos de soledad que expresan los ancianos/as y otros grupos de edad (**Tabla 6.4**).

(Tabla 6.4)

En general, las encuestas sitúan el grado de satisfacción con la vida que declaran las personas jóvenes ligeramente por encima del de las personas mayores. En España, el 84% de los/as jóvenes de 25 a 34 años se declaran muy satisfechos o bastante satisfechos/as con la vida que llevan, frente a 73% de las personas que tienen 65 años o más (Sastre Cantero et al., 2003: 17). Si se controla estadísticamente por su estado de salud y los estudios (en general, las personas que disfrutan de mejores condiciones de salud y tienen un nivel educativo más elevado se declaran más satisfechas), la pequeña diferencia en el grado de satisfacción o felicidad que existe a favor de las personas jóvenes se desvanece.

En la **Tabla 6.5** puede vislumbrarse el escaso poder explicativo de la edad para dar cuenta del grado de satisfacción o felicidad declarada. Se trata de un análisis de regresión lineal sobre dos variables dependientes, el grado de satisfacción y el grado de felicidad.²⁰⁰ El coeficiente de la variable “Anciano (65+ años)”, que es una variable dicotómica que indica si la persona tiene 65 o más años, es negativo y significativo sólo en el Modelo 1 (aunque explica una parte muy reducida de la varianza), es decir, cuando no se controlan los efectos atribuibles a otras variables. En el momento en que se introducen otras variables independientes (primero dos variables dicotómicas que indican si la persona tiene estudios medios o superiores, luego una adicional en el Modelo 3, que calibra el nivel de salud subjetivo), la variable “Anciano (65+ años)” pierde progresivamente su poder explicativo y pasa a ser no significativa. Los resultados sugieren que lo que hace las personas jóvenes se sientan más felices o satisfechas que los/as mayores no es, pues, la edad por sí misma, sino otras circunstancias que mantienen con la edad una relación estadísticamente significativa.

(Tabla 6.5)

La mejora de la situación de las personas ancianas se refleja en la evolución de las tasas de suicidio. Según el último informe sobre salud de la OCDE (2007b: 32-33), las tasas de suicidio en la tercera edad han disminuido en las últimas dos décadas en la mayoría de los países que forman parte de la organización. Esta tendencia contrasta con las cifras de suicidio en la juventud, que se mantienen o aumentan. En España las tasas de defunción por suicidio aumentan entre 1980 a 2004 en un 50% (el incremento más notable de la OCDE).²⁰¹ Llama la atención, sin embargo, que entre las personas de sesenta y más años, la tasa de suicidios por 100.000 habitantes disminuye. Pasa de 10,8 suicidios por 100.000 habitantes en 1981 a 7,7 veinticinco años después (datos extraídos de Hernández Rodríguez 1996 para el año 1981 y www.ine.es para 2005). Esta última cifra se sitúa sólo ligeramente por encima de la tasa media de suicidio (6,6 por 100.000 habitantes). Dentro del grupo de personas jóvenes (20-29 años), la tasa de suicidio se

²⁰⁰ El grado de satisfacción con la vida está medido en una escala de 1 a 10, donde 1 significa “muy insatisfecho” y diez “muy satisfecho”. El grado de felicidad es una es un índice de 1 a 4, donde 1 es “nada feliz” y 4 “muy feliz”.

²⁰¹ Hay que decir, sin embargo, que estas tasas parten de un nivel muy bajo en términos comparativos (por debajo del 5%).

incrementa en un 49% entre 1981 y 2000: pasa del 3,3 por 100.000 al 4,9 (datos del INE, cifrados en Pinto Rodríguez 2006:154).²⁰²

Un análisis evolutivo de los indicadores de calidad de vida de personas jóvenes y mayores pone de manifiesto que, en las últimas décadas, las pautas que siguen son opuestas. Mientras que las personas jóvenes han visto disminuir sus oportunidades e incrementarse su grado de dependencia, los/as mayores de 64 años tienden a aumentar sus estándares de vida y a ganar autonomía. Esta tendencia está estrechamente relacionada con las prioridades de los sistemas públicos de protección social. La concentración progresiva del gasto público en programas como las pensiones (cada vez más generosas y menos restrictivas) y los servicios sanitarios propicia que la población anciana se encuentre en condiciones económicas y personales cada vez más favorables. Las cohortes más jóvenes no reciben el mismo tipo de atención por parte del Estado de Bienestar precisamente cuando las circunstancias que atraviesan más lo demandan: altos índices de desempleo, trabajo precario, encarecimiento del precio de la vivienda. El apoyo a los ancianos/as se colectiviza mientras el apoyo a jóvenes sigue siendo responsabilidad de la familia. El resultado de este proceso es que los ancianos/as disfrutan de cotas de autonomía mayores y, salvo segmentos cada vez más minoritarios, no experimentan estados de carestía. En contraste, el bienestar de la inmensa mayoría de los/as jóvenes depende hasta edades tardías de la solidaridad familiar.

Encanecimiento de la protección social

En el futuro próximo el envejecimiento de la población figura entre los retos más importantes a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas. La conjunción de tres factores demográficos hace peligrar las garantías sociales de bienestar conquistadas en un largo y tortuoso proceso de institucionalización política: la llegada de las generaciones del baby-boom a la edad de jubilación, el crecimiento continuado de la esperanza de vida, y una disminución drástica de las tasas de fecundidad. En las denominadas *sociedades envejecidas*, las tasas de dependencia (la proporción de las personas ancianas en relación a las personas en edad de trabajar) están

²⁰² Las mismas tendencias han sido detectadas en un trabajo epidemiológico reciente que analiza el período 1986-2002 (Aran Bares et al 2006).

aumentando de una forma vertiginosa. En el caso de España, el proceso de envejecimiento sólo acaba de comenzar. Las personas de 65 y más años representaban en 1971 el 9,7% de la población. Treinta años después este porcentaje se ha elevado al 16,8%. Se pronostica que en el 2050 representarán aproximadamente el doble.

Las implicaciones económicas y sociales del envejecimiento de la estructura de la población son enormes, habida cuenta de que no aumenta sólo la proporción de personas ancianas sobre el total de la población, sino también, debido a la longevidad creciente, la fracción de personas muy ancianas y dependientes. A medida que un porcentaje mayor de la población anciana supera los 80 años, crece también el número de personas mayores que arrastran hasta edades muy tardías enfermedades crónicas, hemiplejias o situaciones de deterioro mental severo, como las que provoca el Alzheimer.²⁰³ A esta extensión de los horizontes de la “vejez” “por arriba”, hay que añadir una ampliación “por abajo”, como resultado de compromisos políticos adquiridos en tiempos de desempleo con el contingente masivo de personas que salen precozmente del mercado de trabajo (se prejubilán) y forman parte del mundo de los improductivos.

En el pasado, la familia se erigía en la tabla de salvación principal para las personas mayores que no podían seguir trabajando o sufrían enfermedades o discapacidades que requerían el apoyo de terceros. Una de las obligaciones más importantes que contemplan los sistemas normativos que rigen la vida de las familias en todas las sociedades es la de que los hijos/as, y sus descendientes, deben honrar y ayudar a las personas mayores cuando se produce su deterioro físico o psíquico, o las circunstancias les impiden obtener rentas de trabajo. Tradicionalmente, la falta de este tipo de apoyo era el principal factor generador de vulnerabilidad a esas edades.

En la actualidad, las familias siguen socorriendo a sus mayores. Pero la naturaleza de las prestaciones que ofrecen es distinta a las que les correspondía proporcionar en el pasado. El apoyo que las personas mayores reciben de sus familiares ya no aboca necesariamente a situaciones de dependencia familiar. En la mayoría de los casos se trata de ayuda “de emergencia”, con la que pueden contar, gracias a la vigencia de las normas de solidaridad intergeneracional, cuando la situación así lo demanda. Un porcentaje considerable de personas

²⁰³ Mientras en el año 1900, sólo el 0,6% de la población superaba los 80 años, en el 2001 ya eran el 4%. Si se mantiene la evolución natural de la población (es decir, si no se produce un rejuvenecimiento importante de la población como consecuencia de factores externos, como la entrada masiva de inmigrantes), en el año 2050, las personas mayores de 80 años representarán el 10% de la población.

mayores sigue recabando la asistencia de sus hijos/as y nietos/as (principalmente de *ellas*) cuando se produce una quiebra importante en su salud o ven seriamente mermada su capacidad para la realización de tareas cotidianas. Pero, al mismo tiempo, se acentúa el papel que desempeñan personas ajenas a la familia en la atención y cuidado a los ancianos, ya sea en una residencia de ancianos o en el propio domicilio, por parte de servicios sociales o cuidadoras/es a sueldo. Por regla general, las personas mayores han dejado de representar una carga económica para sus familiares más jóvenes. Es más habitual que los flujos económicos intergeneracionales *inter vivos* beneficien a los segundos. En España, sólo el 8% de las personas mayores dice recibir ayuda económica de sus familiares.²⁰⁴ En cambio, un 22% de los/as mayores que tienen entre 65 y 69 años y un 12% de los que tienen entre 70 y 74 ayudan a algún familiar, excluyendo al cónyuge (Maravall Gómez-Allende 2003: 23).

La autonomía social y económica creciente de la población anciana ha sido propiciada fundamentalmente por el desarrollo del Estado del Bienestar. La práctica totalidad de las personas de 65 y más años perciben prestaciones sociales, ya sea pensiones de jubilación y/u otro tipo de transferencias monetarias y en especie. Los gastos sociales destinados a la vejez en la Unión Europea constituyen el componente principal de la política social. El capítulo al que se destina la mayor parte de recursos, y del que depende, en gran medida, el bienestar creciente de las personas mayores, es el sistema público de pensiones. En los sistemas de financiación vigentes las prestaciones económicas que perciben los/as pensionistas suponen transferencias intergeneracionales de recursos financieros de las generaciones que hoy cotizan a las que lo hicieron, o no necesariamente (como sucede con las pensiones no contributivas), en el pasado. No es la única modalidad de transmisión intergeneracional de recursos en que la población anciana es destinataria de la mayor parte de los recursos. En los países en que existe un sistema de cobertura sanitaria pública universal, las personas mayores son las grandes beneficiarias. Por razones de salud, tienden a acudir con mayor frecuencia a la consulta de médicos generalistas y especialistas, toman más medicamentos (en su caso, gratuitos o subvencionados), y pasan más tiempo que otros grupos de edad ingresados en un hospital o beneficiándose de tratamientos costosos. Según Ahn, Alonso Messeguer y Herce (2003: 52), el gasto sanitario total de las personas de 71 a 75 años en

²⁰⁴ Una comparación de estos datos con estudios anteriores pone de relieve la creciente autosuficiencia económica de la población anciana. Según los resultados del *Estudio 2.072* del CIS (1993), el porcentaje de personas de 65 y más años que afirma recibir algún tipo de ayuda económica de sus hijos/as o familiares es del 16%. En la misma línea, un estudio de Herce, y Pérez-Díaz (1995) señala que este porcentaje es del 18%.

España (1.650 euros año por persona) es aproximadamente 3,3 veces superior al de las personas de 26 a 30 años, y el de las personas de 76 años y más es cuatro veces superior.

Tanto el gasto en pensiones como en atención sanitaria se incrementa de forma notable en las últimas décadas. El envejecimiento de la población es sólo uno de los determinantes de este crecimiento.²⁰⁵ En la mayoría de los países desarrollados las pensiones que perciben las personas mayores son más generosas hoy que dos o tres décadas atrás, tanto en términos reales (de poder adquisitivo) como en comparación con el salario medio. La proporción de beneficiarios/as también aumenta. El sistema de pensiones ofrece hoy prestaciones a muchos grupos que no disfrutaban antes de este privilegio, como resultado de otorgar prestaciones a personas prejubiladas antes de los 65 años o de relajar otras condiciones de elegibilidad (concediendo, por ejemplo, pensiones no contributivas a personas que no han satisfecho los requisitos de duración mínima de la cotización). Algo parecido sucede con los niveles de cobertura sanitaria que producen los sistemas públicos. De acuerdo con un informe de la OCDE (1998), entre 1960 y 1995 la proporción de personas cubiertas por el sistema público de asistencia sanitaria en lo que habían sido hasta muy recientemente 15 países de la Unión Europea pasa del 70% a cerca del 100%. Paralelamente, se ha encarecido la atención sanitaria, tanto debido al incremento de los costes de los servicios que prestan los profesionales sanitarios como a los que se derivan de la innovación tecnológica y la aplicación de nuevos tratamientos.

Entre 1960 y finales de la década de los noventa las partidas presupuestarias que se destinan a pensiones en los países de la OCDE han pasado de representar un 4,5 % a suponer más de un 9% del PIB, mientras que el gasto público en atención sanitaria pasa del 2,5% a cerca del 6%. Estas cifras contrastan de forma acusada con el volumen de recursos que absorben programas cuyos destinatarios principales son personas más jóvenes. Por ejemplo, el hecho de que programas que favorecen a los jóvenes que se incorporan a la vida adulta, como son las políticas activas de empleo, los subsidios a las familias con hijos/as a cargo o las políticas de vivienda, representen conjuntamente menos del 5% del PIB en la mayoría de los países de la Unión Europea da una idea de la magnitud del sesgo generacional de sus Estados del Bienestar.²⁰⁶ Desde hace varias décadas, y salvo en los países escandinavos, estos capítulos del

²⁰⁵ De acuerdo a la OCDE (1988), la variación de la tasa de dependencia de las personas mayores entre 1960 y 1985 es responsable únicamente de un 25% del incremento del gasto en pensiones en relación al PIB. El resto de la variación refleja cambios no demográficos.

²⁰⁶ Véase la **Tabla 2.2**, en el Capítulo 2.

gasto público se mantienen en cotas bajas, e incluso en algunos países descienden (como ha sucedido en Italia). La concentración de los recursos financieros de los presupuestos sociales en la protección social de la población anciana —su *encanecimiento*— ha hecho que los Estados-Providencia se conviertan poco a poco en “Estados-Providencia para la vejez”, utilizando la expresión acuñada por John Myles (1984).

El envejecimiento de la población tiene implicaciones para el bienestar del resto de la sociedad. En la mayoría de los países europeos, los Estados están viéndose abocados a asumir responsabilidades fiscales enormes para mantener los compromisos adquiridos con las generaciones de edades más avanzadas. La carga financiera que comportan esos compromisos supone un factor de estrangulamiento que impide el desarrollo de otros programas. Según los pronósticos más agoreros, los Estados del Bienestar terminarán sucumbiendo bajo el peso de esa losa, privando no sólo a la población anciana sino a otros muchos colectivos necesitados del principal mecanismo compensatorio del infortunio social.

A esto hay que añadir otro tipo de implicaciones. Bajo las fórmulas vigentes en casi todos los países desarrollados, la fuente de financiación principal del sistema de pensiones son las cotizaciones que efectúa la población activa hoy (se trata de los sistemas también conocidos como de *pay-as-you-go*). Un incremento de la población anciana, una extensión del nivel de cobertura o un aumento de la intensidad protectora de las pensiones supone, por tanto, una carga adicional para las rentas del trabajo. Desde finales de la década de los años sesenta, las cotizaciones a la Seguridad Social han aumentado de forma considerable en casi todos los países. Por ejemplo, en Alemania, han pasado de representar el 24% del salario bruto en 1965 al 41% en 1996, lo que se traduce en altos costes de contratación para los empresarios/as.²⁰⁷ La OCDE calcula que en la mayoría de países que pertenecen a este organismo los costes laborales se sitúan a día de hoy cerca del 40% —en la Unión Europea-15 se sitúa por término medio en el 42%. Diversos trabajos (Esping-Andersen 1996, Scharpf 1997, Manow y Seils 2000), relacionan el incremento de los costes laborales con los problemas endémicos de creación de empleo que sufren muchos países de la Europa continental. Dentro de ellos, los colectivos más afectados son grupos de rentas más bajas, como mujeres y jóvenes.

²⁰⁷ Philip Manow (1997, cfr. Pierson 2001: 90) calcula que aproximadamente una cuarta parte de este incremento va destinado a sufragar las prestaciones por desempleo de un número creciente de parados/as. Las tres cuartas partes restantes sirven para sufragar los gastos de las políticas de vejez y atención sanitaria.

Ancianidad y bienestar económico

Los Estados de Bienestar han contribuido a mejorar de forma considerable las condiciones de vida de la población anciana, de forma directa e indirecta. Por un lado, un número creciente de pensionistas se beneficia de pensiones más altas que las que disfrutaron generaciones anteriores, gracias a la extensión de la cobertura y a las políticas de revalorización de estas prestaciones. Por otro lado, el valor al alza de las pensiones que perciben los jubilados/as refleja características de su trayectoria laboral. Habiendo transcurrido la mayor parte de ésta en un entorno laboral que presentaba bajas tasas de desempleo y volatilidad laboral, un segmento importante de la población jubilada en Europa ha conseguido completar sus carreras de seguro, lo que, dentro de los marcos normativos vigentes, suele dar lugar a tasas altas de sustitución (la relación entre la pensión que se empieza a percibir y el último sueldo que se ha cobrado).²⁰⁸

En las últimas dos décadas, tanto el número de pensionistas como el valor real de las pensiones en España han crecido notablemente. El número de pensiones de jubilación y el de pensiones de viudedad se ha doblado desde 1980, aunque la población de 65 y más años sólo haya crecido en un 70%. Desde inicios de los 90, la cobertura del sistema de pensiones se ha ampliado a personas de edad avanzada sin recursos sin derecho a una pensión contributiva, gracias a la aprobación de la *Ley de Prestaciones no Contributivas*. También ha mejorado la cuantía de las pensiones, especialmente las situadas en los escalones más bajos del sistema (Mota 2002). Según resultados de un análisis realizado por Sebastià Sarasa (2007) con datos del *Panel de Hogares de la Unión Europea*, entre 1994 y 2000 los ingresos medios personales procedentes de las pensiones (valores en pesetas constantes) han aumentado un 9,1% en los perceptores/as de 65 a 70 años y un 9,3 en los perceptores/as de 71 a 76 años. Como consecuencia de esta mejora del valor de las pensiones, la renta disponible total de estas personas se incrementado un 5,8 y un 7,3 respectivamente.²⁰⁹ Los incrementos de valor de sus pensiones han sido especialmente

²⁰⁸ En España, el 74% jubilados/as cuya pensión pertenece al Régimen General de la Seguridad Social (que integra a más de la mitad de los pensionistas), el 77% de los jubilados/as bajo el Régimen del Mar o el 94% inscritos en el Régimen del Carbón, han cotizado 35 o más años. Sólo en el Régimen de Autónomos y en el del Hogar (que integran conjuntamente al 16% de los/as pensionistas) los niveles de cotización son claramente insuficientes entre la mayoría de los jubilados/as.

²⁰⁹ La pequeña discordancia entre los ingresos y la renta disponible se debe a que, además de los ingresos de las pensiones, las personas de estas edades pueden obtener rentas de otras fuentes: trabajo, transferencias, activos, etc. En el período que va de 1994 a 2004, la investigación de Sarasa detecta una caída importante de los ingresos provenientes del trabajo, que prácticamente desaparecen en 2000 cuando representaban más del 10% en 1994. Es

importantes en las personas con ingresos más bajos. Así, mientras los ingresos medios personales entre varones con el estatus de jubilados en 1994 y situados en el primer cuartil de ingresos (rentas más bajas) han aumentado un 14,7%, los del cuarto cuartil (rentas más altas, se han reducido en un 7,4 (a pesetas constantes). Como resultado de esta revalorización de las pensiones más bajas se ha reducido la ratio entre el cuarto y primer cuartil, de 3,5 a 2,9, lo que significa que ha disminuido la desigualdad de rentas entre pensionistas.

Los resultados apuntan en la misma dirección que los cálculos del INSS, Instituto Nacional de Seguridad Social, que estima que, en el período de 1992 al 2000, tanto las pensiones de todas las clases tomadas conjuntamente, como las de jubilación y viudedad tomadas por separado, han experimentado incrementos por encima de los precios. Al final del período, mientras los precios aumentaban en un 33%, las pensiones de jubilación lo hacían en un 49% y las de viudedad en un 41% (INSS 2001). Según López-Casasnovas y Mosterín (2007: 8), el ratio entre el valor de la pensión media y el salario medio se ha incrementado entre 1980 y 2005, del 38% al 43%. Las personas jubiladas que cumplen los requisitos para cobrar íntegramente la pensión a que tienen derecho cobran más del 95% de su último salario. La tasa de sustitución promedio es algo más baja (65%), pero es aún sensiblemente superior a la de las pensiones que perciben los jubilados/as alemanes (33%), belgas (36%), finlandeses (50%), italianos (53%), y daneses (56%); y equivalente a la de los suecos y austriacos (Ecofin 2000: 26). En estas condiciones, para una proporción considerable de personas mayores el sistema de protección pública ofrece la oportunidad de mantener estándares de vida próximos a los que disfrutaban antes de retirarse. Según datos del *Eurobarómetro 56.1* de 2001, algo más de la mitad de las personas mayores de 64 años en España declaran que su situación financiera es similar (el 41%) o mejor que antes de jubilarse (el 11%).²¹⁰

Las personas ancianas han ido afianzando su situación económica en las últimas décadas del siglo XX. Como resultado de ello, el 70% de las personas mayores de 65 años considera que su situación es mejor que la que tenían sus padres a la misma edad, el 15% que es igual y sólo un 5,2 que es peor (Maravall Gómez-Allende 2003: 33)²¹¹. La ampliación de la cobertura y la

plausible que gracias a la mejora de las pensiones, un número menor de personas mayores de 65 años sigan trabajando (sin afiliación a la Seguridad Social) para complementar unas pensiones insuficientes.

²¹⁰ En la misma línea, el *Estudio Internacional AXA sobre Jubilación 2007*, revela que el 19% de los/as jubilados creen que, desde el punto de vista financiero su nivel de vida ha mejorado tras la jubilación y un 46% creen que sigue igual.

²¹¹ El 9% restante declara que sus padres no vivían a esa edad.

mejora de las cuantías que perciben los pensionistas se traducen en una elevación de sus niveles de renta. Desde mediados de los años noventa, puede rastrearse la mejora de la posición relativa de la renta media de los hogares cuya persona de referencia es mayor de 65 años con respecto a la renta media del total de los hogares.²¹² Mientras en 1995, la renta media de este tipo de hogares supone el 59% de la renta media total, en 2005 ya representa el 67% (datos del Panel de Hogares de la Unión Europea y la Encuesta de Condiciones de Vida 2006).

Los niveles de gasto de los hogares encabezados por una persona anciana se han situado tradicionalmente por debajo de la media poblacional. El consumo menor de las personas mayores no obedece necesariamente a que se hallen en una posición económica desfavorable. Hay que atribuirlo en parte a hábitos y predisposiciones más frugales, forjadas durante las etapas menos prosperas en que les ha tocado vivir.²¹³ Llama la atención, sin embargo, que las diferencias entre el gasto medio de los/as mayores y segmentos de la población que presentan niveles de gasto más alto se hayan acortado. Mientras en 1990, el gasto medio por unidad de consumo de un hogar encabezado por una persona mayor de 65 años es el 84% del gasto medio del conjunto de la población, en 2002 este gasto equivale ya al 93%. Más espectacular todavía es la evolución del gasto medio de las personas mayores de 65 años que viven solas, que si en 1990 gastaban el 81 % del gasto medio del conjunto de la población, en 2002 alcanzan el 104% (es decir, un 4% más que un español/a medio).

La mejora de los niveles de renta y la capacidad de gasto de las personas mayores se refleja también en una menor incidencia de la pobreza. Utilizando datos de la encuesta de Presupuestos Familiares de 1981 y 2001, los economistas Guillem López Casasnovas y Ana Mosterín (2007) ponen de relieve que los riesgos de pobreza en la tercera edad se han reducido más que en ningún otro grupo.²¹⁴ Los más ancianos/as (con edades superiores a 70 años) han visto reducido su riesgo de pobreza más intensamente. En 1981 más del 40% de las personas de 80 años eran pobres. Veinte años después el porcentaje no llega al 25%. A diferencia de lo que ocurre en 1981, en la distribución (estática) de ingresos de 2001 no se observa una tendencia a la baja a partir del momento de la jubilación: los ingresos personales de las personas de edad más avanzada son equivalentes a los de las personas en edad de jubilarse. La **Tabla 6.6** ofrece una

²¹² Gracias a los datos que proporciona desde 1993 a 2000 el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE), y de 2003 en adelante la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

²¹³ El 49% de la población mayor de 65 años reserva parte de sus ingresos para gastos futuros o ahorro (Maravall Gómez-Allende 2003: 23).

radiografía de la situación de precariedad de los españoles/as según su edad en 1999, utilizando evidencia acerca de los ingresos (por unidad de consumo) de los hogares en que residen. El porcentaje más bajo de personas que viven en hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana de ingresos se da entre quienes tienen más de 64 años, mientras que los porcentajes más altos corresponden a los grupos de menor edad.

(Tabla 6.6)

Estos datos incorporan a España a un club cada vez más numeroso de países en que las tasas de pobreza relativa de la población más joven son superiores a las de las personas mayores de 65 años (Föster y Pellizari 2000). En seis de los trece países de la Unión Europea sobre los que ofrece información el *Panel de Hogares de la Unión Europea* en 1999 —Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido— los porcentajes de pobreza relativa de la población infantil (de 0 a 15 años) son más altos que los de la población anciana. En ocho (Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Finlandia y Reino Unido) la población de 16 a 24 años presenta también tasas superiores de pobreza relativa que la de los/as mayores.²¹⁵

La **Tabla 6.7** ofrece algunas claves para entender la situación económica de jóvenes y ancianos/as. De la evidencia presentada puede inferirse que las diferencias en los niveles de precariedad económica en que viven personas ancianas y más jóvenes en diferentes países reflejan en buena medida prioridades en la protección social. Existen pocas diferencias en los índices de pobreza de las personas ancianas antes de percibir transferencias monetarias públicas (pensiones u otros subsidios). Más de tres de cada cuatro personas de edades superiores a los 64 años serían pobres si no pudieran contar con apoyo público. Esto no resulta sorprendente, pues, tras salir del mercado de trabajo, para la inmensa mayoría de estas personas la pensión es su principal (muchas veces su única) fuente de ingreso. Quizás sólo cabe destacar que España es el país en que el porcentaje más alto de personas ancianas tienen ingresos superiores al umbral de pobreza (26%) si se excluyen las rentas que perciben del Estado.

²¹⁴ La medición del riesgo de pobreza se basa en rentas personales (en lugar de la renta del hogar, como es habitual).

²¹⁵ Información accesible en <http://epp.eurostat.cec.eu.int>.

(Tabla 6.7)

Los índices de pobreza que presentan los/as jóvenes menores de 16 años antes de percibir transferencias monetarias públicas son sensiblemente más bajos. Salvo en Portugal y el Reino Unido, no llegan al 40%. La situación de los/as menores mejora algo gracias al apoyo público. Si se extrae una media conjunta de todos los países (no ponderada por la población de cada uno), el 43% de los menores de 16 años que eran pobres salen de esta situación precaria después de percibir (ellos/as o las personas con las que conviven) las prestaciones monetarias, aunque existen diferencias notables entre países. Por ejemplo, en Italia, España, Grecia o el Reino Unido, el impacto de las transferencias públicas sobre la pobreza de este colectivo está claramente por debajo de la media. En otros países, como Alemania, Bélgica, Finlandia o Austria, la proporción de población menor de edad que es pobre y que sale de esta situación gracias a las transferencias públicas se sitúa en torno al 60%. Incluso en estos países, la magnitud del impacto de las transferencias públicas sobre la pobreza infantil queda lejos del efecto de las prestaciones sociales sobre la pobreza de las personas ancianas. En promedio, el 75% de los/as mayores que eran pobres salen de esta situación. Las diferencias entre países son también notables. Mientras en Holanda, Luxemburgo o Alemania, las transferencias públicas sacan de la pobreza entre un 87 y 93% de las personas ancianas que eran pobres antes de recabar apoyo público, en Grecia, Portugal e Irlanda, el porcentaje no alcanza el 60%.

La posición aventajada de las personas mayores de 65 años se pone también de manifiesto cuando se examinan las situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Se trata de la *pobreza alta* y la *pobreza severa*, que identifican a los hogares cuyos niveles de renta se sitúan por debajo del 40% de la renta mediana del país o el 25% de la renta media, respectivamente. Como puede apreciarse en el **Gráfico 6.1**, el riesgo de sufrir pobreza alta y severa en España se concentra entre niños/as y jóvenes menores de 26 años. En cambio, las personas mayores de 65 años presentan riesgos de pobreza comparativamente más bajos. Estos resultados ponen de manifiesto el impacto escaso de las transferencias públicas sobre los niveles de pobreza infantil y juvenil, que impide corregir la elevada incidencia de la precariedad económica en estas edades.

(Gráfico 6.1)

En el **Gráfico 6.2** aparecen perfilados tres (quizás, cuatro) grupos de países, en función de la capacidad de las prestaciones públicas para elevar el nivel de vida de las personas pobres. En el *Cuadrante A*, el impacto de las transferencias monetarias sobre la pobreza de las personas mayores es alto. En cambio, los/as menores de 16 años se benefician poco de las prestaciones sociales. Los dos países donde el sesgo generacional es más acusado son España e Italia. El *Cuadrante C* incluye a dos países, Grecia y Portugal cuyos sistemas públicos de bienestar están claramente subdesarrollados en comparación con el resto de los países, y cuyas prestaciones, tanto para las personas ancianas como para los/as menores, se caracterizan por su intensidad protectora baja. En el *Cuadrante B* figuran Estados de Bienestar generosos con las personas ancianas, pero que no descuidan la pobreza infantil. Finalmente, el *Cuadrante D* es el menos homogéneo. En los países integrados en él, el apoyo público que reciben los/as menores está por encima de la media (especialmente en Bélgica y Austria). En cambio, las transferencias de las que son beneficiarias las personas ancianas permiten que una proporción relativamente baja de ellas (en comparación con el resto de los países) salga de la pobreza. Se trata de países en que el impacto de las políticas sociales es bastante equitativo desde un punto de vista intergeneracional. En el gráfico queda patente la singularidad del caso español (y del italiano). El esfuerzo que realiza el sistema de protección público se traduce en una mejora sustancial de la posición económica de las personas mayores tras percibir transferencias y en tasas bastante bajas de pobreza en comparación con las de otros países u otros grupos de edad. En cambio, la falta de políticas efectivas centradas en los problemas de la población menor de 16 años se refleja en una tasa inusualmente alta de pobreza entre las familias con hijos/as a cargo.

(Gráfico 6.2)

La mejora de la posición económica de las personas mayores en España se proyecta en su posición relativa dentro de los hogares. En 1980 el 45% de las personas mayores figuran como sustentadoras principales del hogar. En 1990 son el 53% y en el 2000 aumentan hasta el 62%. La mayor parte de este crecimiento tiene como origen el aumento de ancianos/as que viven en su propio hogar, solos o con su pareja. Pero también se incrementa ligeramente la proporción de ancianos/as que se hace cargo de hijos/as y nietos/as. En 1980 el 4,8% de los adultos y niños/as vivían en hogares encabezados por ancianos/as, en 1990 eran el 6,5% (SECOT, 1995). Como

puede observarse en la **Tabla 6.8**, en el año 2002, la inmensa mayoría de los varones mayores de 65 años y casi la mitad de mujeres encabezan los hogares en que residen.²¹⁶ El contraste con la situación de los/as jóvenes es llamativo. Sólo un 36% de los varones de 18 a 33 años y un 12% de las mujeres ocupan ese mismo lugar.

(Tabla 6.8)

Otro factor que ayuda a los ancianos/as a afianzar su autonomía económica y residencial es el hecho de que una amplia mayoría es propietaria de las viviendas en que residen y que éstas tienden a estar libres de cargas (**Tabla 6.9**).²¹⁷ La vivienda es el activo principal de las familias españolas. El 81% de los titulares de una vivienda en España las disfrutan en régimen de propiedad. En líneas generales, los españoles/as son reacios a escoger otras opciones. El alquiler suele ser una alternativa transitoria, que emplea un porcentaje importante de jóvenes que desean emanciparse y no pueden permitirse comprar una vivienda. Según datos del *Panel de Hogares de la Unión Europea* de 2001, el 49% de las personas menores de treinta años que viven solos dispone de una vivienda en régimen de alquiler y sólo el 29% la tiene en propiedad. La opción del alquiler es menos habitual entre las personas jóvenes que se emancipan para casarse. Sólo el 31% de los recién casados habitan una vivienda alquilada. Pasados seis años de matrimonio ya sólo un 10% de los casados/as sigue residiendo en este tipo de vivienda (Meil 2000b: 26). El 90% de las personas de 45 a 64 años residen en una vivienda de la que ellos mismos/as o las personas con que conviven son propietarios/as. A las puertas de la vejez, la mayoría de las viviendas en régimen de propiedad ya están libres de las cargas en que se tuvo que incurrir para adquirirlas. Los pagos por la compra de vivienda se concentran en los tramos centrales del ciclo vital, entre los 25 y 45 años. El 47% de los hogares encabezados por una persona menor de 35 años y el 40% de los hogares en que la persona de referencia tiene entre 35 y 44 años pagan deudas contraídas en la compra de la vivienda propia (Banco de España 2004). En los hogares encabezados por personas mayores de 45 años este porcentaje disminuye sensiblemente. Cuando tienen entre los

²¹⁶ Las mujeres lo hacen habitualmente cuando viven solas.

²¹⁷ No es, sin embargo, el único activo que posee un buen número de familias encabezadas por una persona anciana. Según los resultados preliminares de la *Encuesta Financiera* del Banco de España (2004), el 33% de las familias cuya persona de referencia tiene entre 65 y 74 años declara tener otras propiedades inmobiliarias (frente al 17% de las encabezadas por una persona menor de 35 años). El 17% tiene acciones cotizadas en bolsa, el 12% tiene fondos

45 y 54 años, más del 80% de los hogares han pagado íntegramente su vivienda. Entre los 55 y los 64, el 90%. Tras superar el umbral de los 65 años, queda menos de un 3% de hogares con deudas pendientes relacionadas con la vivienda habitual.²¹⁸ Es más, una de cada seis personas ancianas es titular de una segunda vivienda (IMSERSO 2005: 332).

(Tabla 6.9)

Es preciso señalar que el envejecimiento de los presupuestos públicos está lejos de asegurar el bienestar económico a todas las personas de edad avanzada. En 2003, el 30% de las pensiones de jubilación se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional, de 450 euros al mes (Maravall Allende-Gómez 2003:64). La cara menos favorecida es femenina. Sólo tres de cada diez mujeres perciben pensiones de jubilación. Otras tres de cada diez se dedican a tareas domésticas y dependen de los ingresos de su cónyuge. El resto son perceptoras de una pensión distinta a la de jubilación. Se trata, en su mayoría, de pensiones no contributivas, el importe de las cuáles es sustancialmente inferior a las pensiones de jubilación.²¹⁹ Las ancianas que viven solas son las peor tratadas por el sistema de bienestar. En 2005, los datos de la *Encuesta de Condiciones de Vida* indican que el 52% de las mujeres mayores que viven solas están en situación de pobreza (es decir, con ingresos equivalentes inferiores al 60% de la mediana de ingresos de todos los hogares).

A pesar de ello hay que decir que tanto la implantación de las pensiones no contributivas en 1990 —que garantiza una protección mínima a todos los ciudadanos mayores, con independencia de su historia laboral— como la actualización de las pensiones mínimas a lo largo de los últimos años ha beneficiado a los tramos inferiores de la distribución de ingresos, y especialmente a las mujeres, corrigiendo en buena medida las situaciones de pobreza extrema (Sarasa 2007). Gracias a ello, en 2005, el riesgo de *pobreza alta* de las mujeres solas se sitúa en

de inversión y el 2,6 valores de renta fija. Los porcentajes de familias cuya persona de referencia tiene menos de 35 años y tienen este tipo de activos son el 3,4%, 2,4% y 1% respectivamente.

²¹⁸ Un porcentaje adicional de hogares tiene otro tipo de deudas, derivadas de la adquisición de otras propiedades inmobiliarias o créditos personales. De nuevo, la edad del cabeza de familia, condiciona de forma importante la incidencia de este tipo de endeudamiento. Por ejemplo, el 24% de los hogares encabezados por una persona menor de 35 años pagan deudas relacionadas con un crédito personal, frente a un 10% de los hogares encabezados por una persona de 65 a 74 años (Banco de España 2004).

²¹⁹ En el año 2000, la pensión media de las mujeres representa un 61% de la pensión media de los varones (IMSERSO 2002).

el 9,2,% (sólo ligeramente por encima de la tasa de pobreza media, y por debajo de los hogares en que viven menores de 16 años), y el riesgo de *pobreza severa* en el 4,3 % (claramente por debajo del riesgo de pobreza infantil, como puede apreciarse en el Gráfico 6.1) (datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2006 del INE, elaboración propia).

Buena parte de los trabajadores/as en activo encaran su jubilación sin inquietud. Según el *Estudio Internacional AXA 2007*, el 34% de los trabajadores piensan que la jubilación supone una mejora en la calidad de vida y un 47% piensan que no trae consigo cambios. Sólo el 19% advierten un empeoramiento en el horizonte. Los estudios realizados con trabajadores/as que están a las puertas de su jubilación confirman que está muy extendido el deseo de jubilarse, y es igualmente mayoritario el rechazo al aumento de la edad de jubilación. Según datos del *Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE)* de 2005, dos de cada tres trabajadores/as mayores de 50 a 59 años expresan el deseo de cesar su actividad laboral lo antes posible (citado en CEOAMA 2006: 22). Estos resultados coinciden con evidencia presentada por Víctor Pérez Díaz y Juan C. Rodríguez (2007: 66) en un estudio reciente sobre la generación de la transición. De acuerdo a su investigación, el 64% de las personas de 50 a 54 años y el 62% de las que tienen 55 a 59, son contrarias a aumentar la edad de jubilación. Dentro de estos grupos, la jubilación se entiende como un derecho social que redime de una vida dedicada al trabajo. Lejos de temer la transición a esta nueva etapa por miedo al empeoramiento de condiciones de vida, la jubilación —y a ser posible, la pre-jubilación— es vista por los trabajadores de mayor edad y sus representantes sindicales como la vía de escape de posible escenarios menos deseables (trabajo embrutecedor, horizontes laborales inciertos, precariedad, etc.).

Futuro del pacto intergeneracional

Tal como fueron concebidos, los sistemas de protección pública a la tercera edad se basan en un pacto implícito entre generaciones. La contribución que realizan las generaciones que componen la población activa al bienestar de la población anciana se justifica habitualmente conforme a dos principios éticos: (1) el Estado debe ocuparse de las necesidades más acuciantes de colectivos que no están en condiciones de obtener por sí mismos recursos básicos en el mercado de trabajo, ya sea porque son demasiado jóvenes o demasiado ancianos/as para participar en la creación de

riqueza; (2) el Estado debe compensar a quienes, con sus cotizaciones o impuestos, contribuyeron a financiar los sistemas de protección de las generaciones que los precedieron. Para ello debe garantizar a los trabajadores/as que participan en el sostenimiento del sistema de protección hoy que las generaciones futuras seguirán implicadas en un sistema de “reciprocidad generalizada”, en que cada generación se sacrifica por la que le antecede. Todos los regímenes de protección social a la tercera edad vigentes incorporan en mayor o menor grado estos dos principios. Su legitimidad se fundamenta en la aceptación de la idea —ampliamente extendida— de que las generaciones son interdependientes y se deben ayuda mutua.²²⁰

En una situación como la actual, hay motivos para pensar que estos principios no bastan para apuntalar el pacto intergeneracional. Por una parte, resulta cada vez más evidente que ciertos segmentos de la población mayor de 64 años disfrutan de una “sobrepotección” difícilmente justificable cuando las necesidades de otros colectivos vulnerables son sistemáticamente ignoradas. Por otra, las fórmulas de financiación vigentes (basadas en las cotizaciones que realiza la población activa) se antojan inadecuadas para obtener los fondos adicionales necesarios para sufragar los costes asociados al envejecimiento de la población. Gracias a su creciente capital humano y a la mejora de su estado de salud, muchas personas mayores de 64 años están hoy en día en condiciones de proseguir sus carreras laborales hasta edades más tardías de no mediar obstáculos legales y políticas que los desincentivaran a hacerlo. De ahí que, ante el calibre de las exigencias presupuestarias que plantea la creciente longevidad, un buen número de expertos/as hayan comenzado a sugerir la pertinencia de elevar el umbral legal de la jubilación y desincentivar la retirada anticipada del mercado laboral. En esta línea, algunos países han introducido recientemente medidas que penalizan la jubilación anticipada y/o facilitan la permanencia en el mercado laboral de personas de edad avanzada que no quieren interrumpir su carrera laboral (a través, por ejemplo, de la reducción parcial de actividades laborales antes de la edad legal de jubilación o la utilización de subsidios para incentivar a las empresas a contratar a estas personas).

Gracias a la mejora de las prestaciones públicas, actualmente el Estado no sólo garantiza a la mayoría de las personas ancianas recursos económicos suficientes para satisfacer necesidades

²²⁰ Se trata de un precepto cuyas raíces pueden encontrarse en la regulación de las relaciones intergeneracionales dentro de la familia. La deberes filiales respecto a los padres ocupan un lugar de primer orden entre los mandamientos recogidos en los textos sagrados y la jurisprudencia de las principales religiones. El Libro del Exodo

básicas, sino que contribuye (en el caso de España y otros países) a que más de la mitad pueda reconocer que su situación económica es similar o mejor a la que tenía antes de jubilarse. La pobreza ha dejado de ser un problema endémico de la población anciana para convertirse en un problema que afecta a segmentos específicos, que debido a la naturaleza de sus trayectorias biográficas, no consiguen satisfacer los requisitos que dan derecho a una pensión adecuada.

Mientras, desde hace unas décadas, los sistemas públicos de bienestar destinan una cantidad creciente de recursos a paliar las necesidades de la población anciana, otros colectivos más jóvenes ven incrementarse los riesgos de exclusión y falta de oportunidades ante la pasividad o ineficacia de los poderes públicos. En los últimos tiempos en distintos países han empezado a surgir voces académicas críticas con la distribución de recursos públicos entre distintos grupos de edad. Hasta ahora, en pocos países este debate ha saltado de los foros académicos a la palestra pública. La excepción principal es Estados Unidos (aunque el debate también se ha suscitado con cierta fuerza en el Reino Unido o Alemania), donde se ha articulado de forma más clara y contundente una retórica de la competición intergeneracional por recursos limitados.²²¹ El foco principal de atención son los déficits crecientes de bienestar de la infancia en comparación con la sobreprotección de que disfruta la población anciana (Preston 1984). En España, el debate apenas se ha planteado, a pesar de las más que evidentes necesidades insatisfechas de colectivos más jóvenes y a que todos los augurios demográficos apuntan a que en las próximas décadas los presupuestos públicos estarán sometidos a presiones extraordinarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con las generaciones que se jubilen.

España afronta a medio plazo uno de los escenarios demográficos más preocupantes del conjunto de países desarrollados. Hay una coincidencia general en que los desequilibrios demográficos que se avecinan como producto de la crisis de fecundidad y la longevidad creciente difícilmente podrán resolverse a través de la inmigración o el crecimiento de la productividad económica. Ello obligará a la población activa a hacer esfuerzos suplementarios para mantener el nivel de protección de la vejez a niveles constantes. Irónicamente, las primeras generaciones a las que corresponda hacer este sobreesfuerzo son precisamente las mismas a las que no se ayuda hoy

(20-12) recoge el siguiente mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (es el fundamento del quinto mandamiento del decálogo de la Iglesia Católica).

²²¹ En contra de los sesgos generacionales del sistema público de bienestar se postulan asociaciones en defensa de la equidad generacional, segmentos de la clase política (fundamentalmente del Partido Republicano) y grupos directa o indirectamente interesados en la privatización del sistema de protección público, como la Asociación Americana de la Banca o la Asociación Médica Americana.

a hacer la transición a la vida adulta y cuyas pensiones, a causa de la naturaleza de sus carreras laborales (más cortas e irregulares que las de sus progenitores) se presentan como más inseguras. Para muchos integrantes de estas generaciones la probabilidad de que no alcancen a lo largo de su vida laboral los períodos de cotización que dan derecho a una pensión de jubilación adecuada es alta.

El sistema de compromisos recíprocos entre generaciones en que se fundamenta la protección social a la vejez está siendo socavado por la evolución de los parámetros demográficos y por la reorganización de los ciclos vitales. Los/as jóvenes de hoy acumulan razones que para pensar que el Estado de Bienestar no está en condiciones de ofrecerles garantías de protección adecuadas ni en el presente, ni previsiblemente en el futuro. Aunque, a todas luces, se hayan convertido en un colectivo vulnerable, expuesto a numerosos riesgos, los sistemas de protección ignoran sus necesidades y demandas, y gravan de forma onerosa (y regresiva) sus rentas de trabajo en cuanto, tras muchos avatares, les resulta posible acceder por fin al mercado laboral. Por otra parte, su confianza en la capacidad del Estado para hacer frente a los compromisos adquiridos puede verse seriamente erosionada a medida que las cargas financieras se hagan más insostenibles. Un síntoma inequívoco de esta creciente falta de confianza en la capacidad del sistema público como proveedor de pensiones futuras es el incremento vertiginoso de los ciudadanos/as que suscriben fondos de pensiones privados con objeto de asegurarse una cobertura doble (véase el **Gráfico 6.3**).²²²

(Gráfico 6.3)

Algunos especialistas pronostican un deterioro de las relaciones intergeneracionales asociado a los procesos descritos. Uno de los factores principales que propiciarían este desenlace es la capacidad creciente del electorado de edad avanzada de imponer sus preferencias en el juego político democrático (Hinrichs 2002). Como consecuencia de la mayor longevidad y la baja fecundidad, la edad del votante mediano va a aumentar de forma importante en las próximas décadas. Por ejemplo, según cálculos recientes de Galasso y Profeta (2004) para España, la edad del votante mediano va a pasar de 44 años en 2000 a 57 años en 2050. Aunque nunca resulta fácil

²²² Esos comportamientos han sido incentivados por la Administración Pública mediante tratamientos fiscales favorables.

realizar pronósticos acerca de su presumible comportamiento político, es previsible que el envejecimiento del votante mediano vaya a traducirse en un mayor apoyo a los agentes políticos que muestren mayor sensibilidad por los intereses y preocupaciones de grupos de edad avanzada.²²³ En estas condiciones, sería lógico pensar que las oportunidades de reformar el sistema de bienestar para asegurar su viabilidad financiera y una mayor equidad intergeneracional se están agotando.

Hasta el momento, la crisis intergeneracional parece más teórica que real. Estudios de Hicks (2001) y Kohli (2004) muestran que, a pesar de las sombras que se ciernen sobre el futuro, en todos los países subsiste un apoyo mayoritario a la continuidad del régimen de pensiones. Existe asimismo una buena predisposición por parte de las generaciones más jóvenes a seguir financiando el sistema de protección público para la vejez. Sin embargo, en algunos países donde este apoyo es alto, como Suecia, Reino Unido o Italia, la brecha entre el porcentaje de personas mayores y jóvenes menores de treinta años que aceptarían nuevas cargas impositivas para hacer frente a los gastos de vejez se sitúa ya entre los 20 y 25 puntos.

En España, el apoyo al sistema de pensiones es aparentemente sólido, incluso entre los grupos más jóvenes. Un exiguo 2,1 % de los/as jóvenes entre 18 y 33 años piensa que el Estado invierte demasiado en pensiones (CIS, *Estudio 2.594*, 2005).²²⁴ Algo más de un 80% de los españoles de todas las edades consideran que las personas que trabajan tienen la obligación de sostener, con sus impuestos y cotizaciones, un sistema de protección que asegure a las personas ancianas un nivel de vida adecuado. Un porcentaje algo menor, pero todavía ampliamente mayoritario (un 73%) estaría dispuesto a pagar más impuestos o cotizaciones más elevadas si fuera necesario para mantener el valor actual de las pensiones.²²⁵

En comparación con otros países europeos, estas respuestas reflejan una buena predisposición a financiar el sistema público de pensiones. Sin embargo, no permiten calibrar dónde se sitúa el

²²³ Uno de los trabajos más conocidos que apunta en esta dirección es el libro del economista Lester C. Thurow *The Future of Capitalism* (1997). En él Thurow dibuja un futuro sombrío en que la lucha de clases da paso a una guerra entre jóvenes y ancianos/as. Este enfrentamiento ya está siendo librado en algunos lugares. Thurow cita el ejemplo de una pequeña localidad de Michigan, Kalkaska, convertida en refugio de residentes de edad avanzada. La mayoría de residentes decidió recortar el presupuesto destinado a la escuela para dedicar los recursos a reforzar los servicios de limpieza de nieve y a otros usos, terminando por provocar el cierre de la escuela.

²²⁴ Sin embargo, un porcentaje significativo de jóvenes de 18 a 33 años (uno de cada tres) se muestra partidario de incrementar la ayuda a los jóvenes respecto a empleo y vivienda “aún a costa de los ancianos” (CIS, *Estudio 2594*, 2005).

²²⁵ Pese a este apoyo extenso al sistema de pensiones, existe un cierto desacuerdo con las pautas de distribución de los recursos entre la población anciana. Es reseñable que algo más de la mitad de los entrevistados/as declara que las personas con riqueza suficiente no deben tener derecho a una pensión pública (*Eurobarómetro 56.1*, 2001).

umbral de tolerancia de la población activa. De acuerdo a los cálculos que efectúa la OCDE, haciendo asunciones bastante optimistas sobre la evolución de la inmigración y el empleo, es previsible que el gasto en pensiones vaya a incrementarse en al menos ocho puntos porcentuales sobre el PIB hasta 2050 (OECD 2005: 7). En un ejercicio de simulación interesante que tiene en cuenta los efectos políticos que va a provocar el envejecimiento del votante mediano, Galasso y Profeta (2004) calculan que el valor de la cotización media aumentará en más de un tercera parte en un escenario en el que los niveles de pensiones se mantengan constantes. Estos datos sitúan el esfuerzo económico que las generaciones activas se verán obligadas a hacer para sufragar las pensiones futuras muy por encima del que tenga que hacerse en otros países con tasas de dependencia más favorables.

Conviene situar el apoyo que actualmente recibe el sistema de pensiones en España en un contexto en que la mayor presión sobre los recursos públicos, y con ello, los posibles conatos de competición intergeneracional, están por llegar. A ello hay que sumar el hecho de que existe un desconocimiento considerable sobre las fuentes de financiación del sistema de pensiones y los problemas que se avecinan. Este desconocimiento ha sido puesto de manifiesto en las pocas investigaciones que en España se han dedicado al tema. Por ejemplo, según una encuesta pionera realizada por Herce y Pérez Díaz en abril de 1995, el 64% de los entrevistados/as se consideraban poco o nada informados en cuanto al panorama general del sistema de pensiones. Más recientemente, un estudio comparativo de Boeri et al. (2001), con una muestra en cuatro países (Francia, Alemania, Italia, España) de personas que trabajan, en torno a la mitad de los entrevistados/as en España declara que no sabe qué fracción de su salario se destina a sufragar las pensiones públicas. Entre quienes dicen saberlo, dos de cada tres creen que el porcentaje que es menor al real.²²⁶ Los datos de este mismo estudio reflejan que, en comparación con países como Francia, Alemania e Italia, los españoles/as mantienen un optimismo desmedido respecto al futuro de su sistema de pensiones. Un 43% de entrevistados/as en España admite que en los próximos diez o quince años pueda producirse una crisis financiera del sistema que obligue a reducir la cuantía de las pensiones, muy por debajo de la proporción que anticipa esta crisis en Francia (82%), Alemania (81%) o Italia (72%). Los datos de un barómetro reciente del CIS (*Estudio 2.594*, 2005) confirman estas percepciones. En contraste con los vaticinios que efectúan

la mayoría de los expertos/as,²²⁷ uno de cada cuatro españoles consultados creen que el sistema de pensiones “mejorará” en el futuro y casi dos de cada cuatro que seguirá igual.²²⁸

Los datos aconsejan tomar con cautela las expresiones mayoritarias de apoyo al sistema de pensiones e invitan a analizar la evolución de las actitudes entre los segmentos de la población que puedan ver peligrar sus pensiones públicas, se procuren formas de cobertura privada, o simplemente comprueben cómo se les hurta una fracción cada vez más elevada de su salario con objeto de sufragar un sistema paulatinamente más caro. Hasta ahora las normas sociales que prescriben la solidaridad entre generaciones gozan de un respaldo mayoritario entre la población. Ahora bien, ningún sistema normativo está blindado frente a cambios que se producen en el contexto social y en España estas transformaciones se están produciendo de forma acelerada. Algunos de los cambios principales atañen a la familia, que a juicio de muchos expertos/as, es el verdadero semillero de las expectativas y obligaciones que los españoles/as sienten hacia las personas mayores.

²²⁶ Estos porcentajes son sustancialmente superiores en España que en los demás países incluidos en el estudio. Los autores atribuyen la desinformación de los españoles al escaso eco que reciben estas cuestiones en los medios de comunicación.

²²⁷ Entre los trabajos que auguran déficits importantes en el sistema de pensiones a una o dos décadas vista, pueden destacarse los trabajos de Conde-Ruiz y Alonso Meseguer (2004), Herce (2004) y Pampillón y Mingorance (2005).

²²⁸ Quienes creen que el sistema mejorará suelen tener un nivel de estudios más bajo que los que manifiestan un mayor pesimismo, lo que quizás signifique que su nivel de información sobre el sistema de pensiones es menor. Según los resultados de un análisis de regresión multinominal realizado con datos de *Estudio 2.594* del CIS, existe toda una serie de características sociodemográficas y actitudinales adicionales relacionadas con la valoración que las personas realizan sobre el futuro del sistema de pensiones. Las personas de edad avanzada se muestran más optimistas respecto al futuro de las pensiones que las más jóvenes. Los votantes del PSOE y los entrevistados/as que valoran más positivamente la situación económica y política actual se muestran más optimistas sobre la evolución futura del sistema de pensiones. Por último, quienes creen que parte o la totalidad de las cotizaciones deberían destinarse a planes privados tienden a vislumbrar un deterioro del sistema de pensiones en el futuro.

Capítulo 7

NUEVOS ESCENARIOS DE LA SOLIDARIDAD FAMILIAR

Home is the place where, when you have to go there, they have to let you in, Robert Frost, "Death of the Hired Man"

Buena parte de la Sociología de la familia está teñida de cierto funcionalismo. Se ha convertido en un lugar común afirmar que la institución familiar desempeña tareas fundamentales para satisfacer las necesidades humanas, tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto. Esta tesis central en la disciplina tiene un fuerte carácter ahistórico. A pesar de las transformaciones de la estructura interna de las familias, de su funcionamiento interno y del entorno social en que desarrollan sus cometidos, los sociólogos/as dedicados a estos temas siguen evidenciando que la familia desarrolla tareas esenciales en la moderna sociedad postindustrial. Esta labor no es siempre del todo visible. El proceso de modernización que atraviesan las sociedades occidentales comporta la transferencia de muchas de las funciones familiares a otras instancias, fundamentalmente (pero no sólo) al sector público.²²⁹

La expansión de las políticas de bienestar ha contribuido a “desfamiliarizar” hasta cierto punto la provisión de bienes y servicios. Las familias continúan desempeñando una labor muy importante de apoyo en ciertos aspectos, pero en otros su papel se está desdibujando con la aparición de otros dispositivos de protección social. Por ejemplo, como consecuencia de la expansión de los sistemas sanitarios públicos, la responsabilidad que asumen las familias en el cuidado y atención a sus miembros enfermos se ha reducido. Muchas veces siguen prestando servicios fundamentales, desde el acompañamiento al paciente en sus visitas médicas o estancias hospitalarias, la averiguación de toda clase de información sobre la dolencia y posibilidades de tratamiento, hasta los cuidados al paciente cuando regresa a su domicilio. Pero las principales funciones de asistencia en caso de enfermedad corresponden al sistema sanitario. Desde que en la primera mitad de la década de los 40 del siglo pasado se regulara en nuestro país el Seguro Obligatorio de Enfermedad, el sistema sanitario ha ido ampliando su cobertura y el abanico de prestaciones que ofrece. El desarrollo de un sistema privado también ha contribuido en este

²²⁹ El sistema de bienestar de las sociedades contemporáneas se basa en la articulación de prestaciones de origen diverso, entre las que hay que incluir la labor que realizan las familias y la oferta pública, pero también las prestaciones que proporcionan las empresas a cambio de una contraprestación económica (restaurantes, hospitales de titularidad privada, planes de pensiones privados) o las asociaciones sin ánimo de lucro (como por ejemplo las asociaciones de beneficencia, fundaciones y ONGs). El peso de cada una de estos agentes sociales y políticos configura sistemas de bienestar específicos, más o menos eficaces a la hora de resolver problemas sociales (desempleo, pobreza, marginalidad, déficit educativos) que surgen en las sociedades postindustriales.

sentido. Entre uno y otro han “desfamiliarizado” en buena medida la gestión y el tratamiento de la enfermedad.

Otro ejemplo de desfamiliarización de la provisión de bienestar a colectivos específicos es, como hemos visto, el desarrollo de los sistemas públicos de pensiones. La autonomía económica de las personas mayores depende, en nuestro país y en todos los países desarrollados en mayor o menor medida, del sistema de pensiones. Hasta finales del siglo XIX, para la mayoría de las personas ancianas en los países en vías de industrialización, la jubilación era una experiencia desconocida para las personas que llegaban a edades avanzadas. El desarrollo de los sistemas de pensiones en el siglo XX contribuye a paliar las situaciones a las que se veían abocadas las personas ancianas cuando, a causa del deterioro de su fuerza física o problemas de salud, no conseguían intercambiar su fuerza de trabajo. Buena parte encontraba en la familia su principal tabla de salvación. Otras personas ancianas incapaces de valerse por sí mismas acababan institucionalizadas en casas de caridad, en condiciones de penuria extrema. En la actualidad, la mayoría de las familias sigue socorriendo a sus mayores. Ahora bien, la naturaleza de las prestaciones que ofrecen es distinta a la que les correspondía ofrecer en el pasado. La mayoría de las personas mayores mantiene su autonomía residencial hasta edades muy tardías o no la pierde nunca. El apoyo que reciben de sus familiares es habitualmente apoyo ocasional, ayuda de emergencia, con la que pueden contar gracias a la vigencia de normas de solidaridad intergeneracional, cuando la situación así lo requiere.²³⁰

La Sociología española demuestra a lo largo de los años una sensibilidad especial hacia el papel que desempeña la familia en el sistema de bienestar (J. de Miguel 1998). Por razones propias de su objeto de estudio, esto no podía ser de otra manera. Las redes familiares presentan en España un grado de cohesión considerablemente superior al de otros países. Desde finales de los años setenta, numerosas investigaciones empíricas ponen de relieve que los contactos intergeneracionales no son sólo frecuentes, sino que además son especialmente beneficiosos para los miembros más vulnerables de la familia, en particular ancianos/as y jóvenes (de Pablo 1976, del Campo 1982, Del Campo y Navarro 1985, Alberdi 1995, Naldini y Jurado 1996, Iglesias de Ussel 1997, Meil 2000, y Naldini 2003). El régimen de bienestar en España es etiquetado como “familista” debido al protagonismo que cobra la familia en la protección de las personas

²³⁰ Es previsible que, en nuestro país, el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas Dependientes, aprobada en 2007, refuerce la independencia de las personas mayores respecto a sus familias (o compense económicamente a las familias que sigan haciéndose cargo del cuidado de las personas dependientes).

necesitadas. La mayoría de los estudios coinciden más o menos en la misma conclusión. Los mecanismos de solidaridad familiar aseguran niveles mínimos de bienestar allá donde la cobertura pública no llega o es insuficiente. La familia suple la falta de prestaciones públicas, amortiguando los efectos del desempleo y la carestía económica derivados del ciclo económico adverso, así como los problemas de soledad y desvalimiento de los ancianos/as en una sociedad que envejece a un ritmo acelerado. El diagnóstico que realizan muchos/as analistas tiene un cierto tono autocomplaciente. A su juicio, el sistema de bienestar español, sustentado en el papel preponderante de las redes familiares, es “más humano” que otros modelos que delegan funciones en el Estado, goza de una legitimidad social considerable, y además desarrolla bastante eficazmente las funciones encomendadas. Cada uno de estos postulados exige una revisión analítica más crítica que la que se realiza habitualmente en España.

Familia como entramado afectivo

El papel de la familia está en el centro de algunas de las principales polémicas morales de hoy en día. Son muchas las voces que argumentan que la pérdida de funciones de la familia frente al Estado es una amenaza moral seria para las sociedades desarrolladas. Desde la perspectiva católica, que impregna no pocas veces el discurso sociológico sobre la familia en España, la participación del Estado en la provisión de bienestar debe ser mínima, residual. El principio de subsidiariedad, recogido explícitamente por la encíclica papal *Quadragesimo Anno* y que posteriormente inspira las políticas de bienestar cristianodemócratas, aconseja que las intervenciones del Estado se ciñan básicamente a salvaguardar el orden público y a crear las condiciones para que otros agentes de la sociedad civil (en especial la familia y las asociaciones voluntarias sin ánimo de lucro) puedan desarrollar labores de asistencia a los miembros más necesitados de la comunidad (van Kersbergen 1995). Este planteamiento no aboga por que el Estado se desentienda por completo de las responsabilidades de protección social, como se propone desde un enfoque neoliberal. El gasto social es necesario, pero la implementación de las funciones de bienestar debe correr a cargo de las familias y las asociaciones sin ánimo de lucro, a quienes, por lo tanto, corresponde ser destinatarias de las ayudas y subsidios públicos. Del Estado se espera una intervención más activa sólo si las familias y asociaciones cívicas así lo reclaman,

para hacer frente a problemas que requieren el compromiso de la sociedad en su conjunto.²³¹ Desde este punto de vista, la sociedad civil (idealmente socializada en los valores de la Iglesia católica) está más capacitada moralmente que el Estado para identificar las necesidades que requieren atención y ofrecer una ayuda eficaz.

Desde una perspectiva laica, otros autores/as critican la intromisión del Estado en el terreno de la protección social, por considerar que es autoritaria y desnaturaliza los fundamentos intrínsecamente morales del intercambio de apoyo familiar, basados en el afecto y la confianza (Suttles y Street 1970, Lasch 1977). Los planteamientos que se realizan son diversos. A juicio de algunos autores, el acaparamiento de funciones por parte del Estado vulnera derechos fundamentales de algunos integrantes de las familias, como por ejemplo la libertad de los padres a elegir cómo quieren educar a su hijos/as, o el derecho de las personas enfermas a decidir cómo quieren convivir con su enfermedad o morir dignamente (Illich 1971, 1976). Otros enfoques enfatizan los efectos corrosivos de las actuaciones públicas sobre el tejido familiar, y en particular sobre elementos emocionales y afectivos imprescindibles en la vida de las personas. Las familias son, en conocida expresión de Christopher Lasch, un refugio en un mundo sin corazón (*haven in a heartless world*). La economía de los afectos que promueve la familia corre peligro si el Estado se arroga las responsabilidades actualmente en manos de las familias. Con ello, corren también peligro muchas modalidades de solidaridad que hunden sus raíces en actitudes y sentimientos que se cultivan dentro de la familia.

Dentro de la Sociología española de los últimos años abundan los estudios que hacen hincapié en la idea de que la familia ha sabido adaptarse a un entorno cambiante (Orizo 1996; Iglesias de Ussel 1997, 1998; Alberdi 1999). La crisis económica exige un grado elevado de solidaridad por parte de las generaciones adultas en un momento en que cambios profundos en las orientaciones normativas de los/as integrantes más jóvenes hacen difícil una convivencia en armonía bajo los códigos de convivencia profundamente autoritarios que habían presidido las relaciones dentro de la familia en el pasado. La necesidad de apoyo refuerza los lazos de comunicación, respeto y entendimiento (Iglesias de Ussel 1997: 15). Las imágenes de conflicto familiar, en que los padres censuraban a los/as hijos su desconsideración hacia las líneas de autoridad y las normas morales vigentes en el seno familiar, y los hijos/as se quejaban del control

²³¹ Un ejemplo de este tipo de intervenciones estatales legítimas sería el sistema público de pensiones vigente en la mayoría de sociedades desarrolladas, que utiliza las contribuciones de los cotizantes de hoy para pagar derechos adquiridos por los pensionistas en el pasado.

asfixiante que sobre ellos/as ejercía la familia, parecen pertenecer a un pasado remoto. Los datos confirman que son una amplia mayoría los jóvenes que dicen llevarse bien con sus padres y un porcentaje importante los que dicen coincidir con mucha o bastante frecuencia sobre cuestiones políticas, morales o, incluso, con el modo de gestionar su vida personal (**Gráfico 7.1**).

(Gráfico 7.1)

El tono general que preside muchos discursos sociológicos sobre la familia es optimista. La familia española ha cambiado a mejor, interiorizando valores éticamente superiores a los que presidieron las instituciones del pasado (Alberdi 1999: 34). La desaparición de los rasgos más “antipáticos” de la familia confiere legitimidad a la opción de quienes reclaman un reconocimiento social del papel de la familia a través de políticas que apoyen el trabajo que se realiza en su seno para mejorar el bienestar de sus integrantes. El Estado debe respetar, desde este punto de vista, el carácter central de las tradiciones que asignan a la familia un papel preponderante en la provisión de bienestar. Sería conveniente evitar que la tendencia del Estado a arrogarse nuevas responsabilidades malogre las ventajas comparativas de un sistema de bienestar como el español (Pérez-Díaz, Chuliá y Valiente 2000; Pérez-Díaz, Chuliá y Álvarez Miranda 1998).

Desafortunadamente la autocomplacencia lleva a silenciar otras caras menos amables de la realidad familiar. El cambio profundo de la institución familiar no ha servido para reducir las desigualdades entre familias. Como ya advirtiera Marx, la solidaridad familiar es uno de los mecanismos principales de reproducción de la estructura social. En todas las sociedades capitalistas el esfuerzo de los padres por transmitir su posición social a sus hijos/as determina en mayor o menor medida la clase social de éstos últimos. Obviamente la capacidad de los padres de asegurar que sus hijos/as lleguen a disfrutar de una posición comparable a la suya ha disminuido desde que la teoría marxista denunciara en los siglos XIX y XX la injusticia de este mecanismo. El origen de los cambios que se han producido tiene que ver con la generalización del acceso a las oportunidades educativas, las transformaciones del proceso productivo y las políticas redistributivas del Estado de Bienestar, y mucho menos con los cambios en la institución familiar. La capacidad de las familias de transmitir su patrimonio económico, así como su capital social y cultural, a sus descendientes, sigue siendo un obstáculo para una mayor igualación de

oportunidades.²³² Es lógico pensar que este objetivo es más difícil de conseguir en sociedades que presentan vínculos intergeneracionales “fuertes”, donde las familias que pueden permitírselo invierten una parte significativa de sus recursos en “solidaridad promocional” para sus descendientes, sufragando costosos programas educativos o ayudándoles a establecer sus propios negocios. Los datos sugieren que tal puede haber sido el caso en España. Aunque el acceso a la educación se democratiza, sigue habiendo una estrecha correspondencia entre el nivel de estudios del padre y el de los hijos/as (**Tabla 7.1**). Así, según datos de la *Encuesta de Condiciones de Vida* de 2005, el 75% de los hijos/as de padres con estudios superiores alcanzan el mismo nivel educativo, por sólo el 18% de los hijos/as de padres que no tienen estudios y el 35% de aquellos hijos cuyos padres tienen estudios inferiores.

(Tabla 7.1)

Persisten asimismo desigualdades importantes dentro de la familia que afectan negativamente a las generaciones jóvenes. En España las tasa de desempleo de los/as jóvenes es 2,9 veces superior a la de un adulto/a,²³³ la tasa de desempleo de larga duración más de un 20% superior,²³⁴ la tasa de contratación temporal 2,7 veces superior,²³⁵ y el salario representa sólo el 54% del de un adulto/a.²³⁶ Este panorama laboral configura una realidad de desequilibrios económicos considerables entre integrantes de la familia que conviven bajo un mismo techo. Parece obvio que las causas directas de estas desigualdades no hay que buscarlas en la familia, sino en el mercado de trabajo. Ahora bien, como señalan los sociólogos/as y economistas que han estudiado a fondo las singularidades del mercado de trabajo en España (Bentolina y Dolado 1994; Esping-Andersen 1996, 1999, 2002), su configuración no es ajena a las preferencias de las familias. La brecha entre los “que están dentro” (*insiders*) y los “que están fuera” (*outsiders*), que

²³² Durante la década de los cincuenta, los sociólogos/as que se ocupan de las desigualdades sociales expresaron a menudo su confianza en que las desigualdades de origen terminarían siendo suprimidas por los procesos de modernización (Lipset 1963). Hoy se tiende a ser mucho más escéptico. Los estudiosos/as identifican nuevos mecanismos de reproducción de las desigualdades de origen, como el capital social (redes de acceso a recursos y oportunidades) y cultural (disposiciones e inquietudes cultivadas en el hogar de origen que favorecen el rendimiento académico y el éxito social) (Granovetter 1973, Lin y Dumin 1986, Bourdieu 1984, DiMaggio 1982).

²³³ Datos de 2003; los jóvenes tienen entre 15 y 24 años; los adultos entre 35 y 44 (www1.oecd.org/scripts/cde/, *Labor Market Statistics-Data*, consultado en noviembre de-2004).

²³⁴ Datos de 1997 (Eurostat 1997).

²³⁵ Datos de 2000. Los jóvenes tienen entre 15 y 24 años. Los adultos entre 25 y 54 (OCDE 2002: 138).

²³⁶ Datos de 1995.

caracteriza al modelo español, es el resultado de políticas laborales encaminadas a favorecer la posición de los varones cabezas de familia como sostenes económicos del hogar familiar. Tales políticas generan grandes consensos. Cuentan con el beneplácito de sindicatos (integrados principalmente por varones de edades adultas), el apoyo del electorado (en el que las personas adultas tienen mayor peso demográfico que los jóvenes), e incluso el de jóvenes económicamente dependientes (cuyo bienestar está ligado a los recursos económicos del cabeza de familia).

Junto a las desigualdades económicas, subsisten desigualdades de género tanto en lo que se refiere al control que los adultos/as ejercen sobre sus hijos/as como en el grado de implicación en las tareas domésticas. En líneas generales, las mujeres jóvenes que viven en casa de sus padres están sometidas a un régimen disciplinario más severo que los varones, aunque disfrutan de la misma libertad para cuestiones menores (como “levantarse cuando les apetece”). Detrás de muchas de las restricciones de conducta subyace una concepción de la mujer joven como ser vulnerable, que requiere protección especial. Los padres conceden a los hijos varones un margen más amplio de autonomía que a sus hijas en cuestión de conductas y hábitos que consideran perjudiciales (como “tomar alcohol” o “fumar porros”) o entrañan riesgos (como “llegar por la noche a la hora que quiera” o “pasar la noche fuera”). Se observan también diferencias significativas en el control de la sexualidad (**Tabla 7.2**). Mientras que el 44% de los varones manifiesta que tienen prohibido acostarse “con una chica” en casa, el 67% de las mujeres no podría hacerlo con un chico. Existen incluso diferencias, aunque sensiblemente menores, en la proporción de varones y mujeres que pueden reunirse con su novio/a en casa “sin ningún problema” (75% y 65% respectivamente).

(Tabla 7.2)

Más acusadas son las desigualdades en cuanto al grado de participación en tareas domésticas. Las mujeres jóvenes que viven en casa de sus padres dedican buena parte de su tiempo a los trabajos en el hogar (**Tabla 7.3**). Algo más de la mitad declara dedicar mucho o bastante tiempo a limpiar y ordenar la casa, el 38% manifiesta dedicar mucho o bastante tiempo a trabajar en la cocina, el 28% a lavar la ropa, planchar, o coser, el 21% a cuidar hijos/as o hermanos/as menores y el 45% a hacer la compra de alimentos. La mayoría de los varones jóvenes están exentos de realizar estas tareas. Un exiguo 14% dice invertir mucho o bastante

tiempo en limpiar y ordenar la casa, el 18% trabaja mucho o bastante en la cocina, sólo un 6,2% reconoce lavar la ropa, planchar o coser, un 11% manifiesta cuidar hijos/as o hermanos menores, y un 27% hacer la compra de alimentos. Esto quiere decir que un número de mujeres jóvenes 3,4 veces superior al de varones dedica mucho o bastante tiempo a limpiar y ordenar, 2,1 veces superior a trabajar en la cocina, 4,5 veces superior a lavar la ropa, planchar o coser, 1,9 veces superior a cuidar niños/as y 1,7 veces superior a hacer la compra de alimentos (CIS, *Estudio 2.469*, 2002).²³⁷

(Tabla 7.3)

Las desigualdades en función del género se acentúan cuando varones y mujeres que siguen en casa de sus padres trabajan. Mientras la proporción de mujeres jóvenes implicadas en las tareas domésticas es prácticamente la misma estudien o trabajen, no sucede lo mismo con los varones. Una proporción significativa de varones que trabajan, y por tanto cuentan con una fuente de ingresos propia, obtienen licencia para desentenderse de las labores domésticas, como queda de manifiesto en la **Tabla 7.4**.

(Tabla 7.4)

Vivir en pareja contribuye a menudo a desterrar hábitos sexistas aprendidos en casa. El porcentaje de varones solteros que realizan algún tipo de tareas domésticas mientras permanecen en casa de sus padres es bastante inferior a la proporción que llevan a cabo estas labores en el seno de una convivencia en pareja (**Tabla 7.5**). En casa de sus padres, un 32% reconoce que “nunca” se hace la cama, un 52% que “nunca” participa en la limpieza. La proporción de varones que comparten tareas con otras personas es muy bajo. Entre los casados, los varones que comparten responsabilidades aumenta significativamente y los que dicen “no hacer nada” disminuye. Hay todavía menos varones que dicen no hacer nada cuando conviven en pareja fuera del matrimonio.

²³⁷ La medición de estas diferencias es conservadora. Mientras los varones tienden a manifestar que dedican “bastante” tiempo a esas tareas, es más frecuente que las mujeres digan que invierten “mucho” tiempo”.

(Tabla 7.5)

Las causas de los niveles de desigualdad por género que persisten en los hogares paternos en comparación con los hogares en que viven parejas jóvenes son múltiples. Algunas de ellas tienen que ver simplemente con los valores sexistas que todavía subsisten entre las generaciones adultas. Los varones que se desentienden de las tareas domésticas en casa de sus padres suelen enfrentarse a niveles de presión normativa bajos para implicarse en ellas. Un segundo bloque de factores explicativos invita a examinar las condiciones de convivencia en los nuevos hogares que forman las parejas jóvenes. Desde esta perspectiva, serían más bien las pautas de selección de pareja, y la presión y enseñanzas de sus cónyuges o compañeras las que empujan a los varones a tomar parte en los quehaceres domésticos. En primer lugar, es probable que los varones más reticentes a compartir tareas encuentren más dificultades para formar pareja. Los cambios culturales y educativos vividos en las últimas décadas han propiciado que cada vez más mujeres estén interesadas en encontrar una pareja que les ayude a conciliar la vida privada y profesional. El hecho de que muchas jóvenes pasen buena parte de su tiempo fuera del hogar, estudiando o trabajando, está colocando a los varones bajo presiones estructurales para realizar trabajo doméstico, al no encontrar parejas que quieran (o puedan) hacerlo por ellos (Fassinger 1993:195).

La capacidad de las mujeres para ejercer presión sobre sus parejas descansa también en la amenaza de ruptura de la relación. La disminución de los costes de separación o divorcio permite que las mujeres casadas pongan más fácilmente fin a una relación insatisfactoria y utilicen esta baza para arrancar de sus maridos mayores niveles de compromiso en las labores domésticas. Esto explicaría también la mayor disposición de los varones implicados en parejas de hecho (concebidas a menudo por los miembros de la pareja como “convivencias a prueba”) a compartir tareas domésticas.²³⁸

Un último factor crucial que favorece la renegociación de la división del trabajo dentro del hogar es el cambio en la posición económica de la mujer. La mejora de la posición económica de la mujer no resulta siempre igualmente determinante. El trabajo extradoméstico suele otorgar mayor poder de negociación a las mujeres frente a su marido que frente a sus padres mientras

²³⁸ Según este planteamiento, las mujeres más proclives a comenzar su relación a través de una unión de hecho serían precisamente aquellas que más ponen en juego en una relación desigualitaria, como son las mujeres con niveles educativos altos, que aspiran a desarrollar un proyecto profesional propio, y por tanto, están más interesadas en la

viven con ellos. Ello se debe a sus responsabilidades económicas dentro del hogar. Son pocas las familias españolas en que una hija joven hace aportaciones económicas significativas a la economía familiar. Lo más habitual es que sus familias no necesiten reclamar esas aportaciones y que las jóvenes (y los jóvenes) que trabajan y siguen en casa de sus padres puedan disponer libremente de sus ingresos.²³⁹ En cambio, en el marco de la convivencia en pareja, los ingresos de la mujer cobran cada vez mayor importancia. Un modelo de convivencia en que ambos cónyuges trabajan aumenta el nivel de ingresos total del hogar y la capacidad para hacer frente a situaciones de crisis. En un contexto en que adquirir una vivienda supone incurrir en niveles elevados de endeudamiento e impera una situación de precariedad laboral, las viejas estrategias familiares que vislumbraba la teoría funcionalista de la familia de Parsons y Bales (1955), según la cual cada cónyuge tiende a especializarse en aquello en que tiene “ventajas comparativas” (esto es, los varones en la producción de bienes y servicios para el mercado, y las mujeres en la producción de bienes y servicios domésticos) suenan del todo obsoletas. La clave para iniciar una convivencia en pareja es, con cada vez más frecuencia, conjugar dos fuentes simultáneas de ingreso. Esto se traduce en un mayor éxito de las mujeres con ingresos potencialmente más elevados en el mercado matrimonial (Oppenheimer y Lew 1995). De este planteamiento se deriva que las mujeres que pueden aportar ingresos significativos al hogar, también se encuentren en una posición más favorable para negociar el reparto de labores domésticas (**Tabla 7.6**).

(Tabla 7.6)

Pero la iniciación de los varones en las labores domésticas no está exenta de dificultades. Muchas de las mujeres jóvenes que trabajan siguen asumiendo gran parte de la carga doméstica. Como señala Celia Valiente (1997), los varones llegan a menudo a la convivencia en pareja con prejuicios aprendidos en su familia de origen y todavía se resisten a colaborar en tareas “de mujeres” en pie de igualdad. Esta resistencia puede dar lugar a conflictos en la pareja. Con objeto de prevenir la desestabilización de la relación, muchas mujeres rebajan sus pretensiones de lograr

conciliación de la vida familiar y profesional. Los resultados de un análisis empírico que realiza Gerardo Meil (2003: 84) con los datos de la *Encuesta de Fecundidad y Familia* de 1994/1995 confirman esta hipótesis.

²³⁹ El 73% de las jóvenes que viven con sus padres y tienen ingresos propios pueden decidir en qué gastar la totalidad de ellos (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). Estos datos desmienten la tesis de que en sociedades familistas como la española persiste una tendencia a la puesta en común de los recursos de los hogares (*resource pooling*).

la igualación de roles o desisten completamente de su empeño y asumen la totalidad o la mayor parte de las responsabilidades domésticas.

Las relaciones intergeneracionales dentro de la familia tienen caras diversas. Las tendencias desinstitucionalizadoras de la postmodernidad han anidado en el ámbito familiar, incrementando los espacios de autonomía y libertad de que disfrutaban sus integrantes. La crisis del patriarcalismo tradicional contribuye a la pacificación de las relaciones intergeneracionales y a la preservación de la legitimidad social de la institución familiar. El universo familiar es seguramente un espacio más cálido que antaño, en que un número creciente de jóvenes puede sentirse a gusto, divertirse, e incluso encontrar consejo. Pero bajo este entramado de afectos que constituye la familia actual, subyace también una realidad más sombría, la de las desigualdades que la familia ampara y reproduce.

Una sociedad de vínculos familiares “fuertes” no es necesariamente más deseable, desde el punto de vista del bienestar material y subjetivo que procura, que una sociedad que invierte colectivamente en formulas públicas de solidaridad . Depende, como casi siempre, para quién, es decir, *cui bono*. Desde este planteamiento de la equidad generacional, la experiencia de otros países de nuestro entorno pone de manifiesto que el mejor antídoto contra las desigualdades es una intervención pública a favor de los colectivos desfavorecidos por la distribución asimétrica de recursos, obligaciones y esfuerzos que promueve un sistema de bienestar basado en el papel preponderante de la familia. Ahora bien, como sociedad, ¿deseamos ese antídoto? ¿Lo necesitamos?

Crisis del familismo

Existe un consenso académico bastante amplio en considerar que España constituye, junto a otras sociedades mediterráneas, un bloque aparentemente compacto de países en que predominan actitudes y orientaciones favorables hacia el familismo, entendido como sistema de bienestar en que los problemas individuales de los/as integrantes de la red familiar (como desempleo, falta de recursos económicos o de vivienda, enfermedad) tienden a ser definidos como “asuntos familiares”. Como tales reclaman la movilización de los recursos colectivos disponibles, tanto simbólicos como económicos y organizativos. Un número considerable de autores/as destaca que

esa “ética” comunitarista descansa en un sistema característico de valores y representaciones morales sobre la solidaridad familiar, y se refleja en un ordenamiento jurídico que prescribe un abanico amplio de obligaciones de solidaridad mutua entre los integrantes de la familia y sanciona su incumplimiento (Martín 1997, Naldini y Jurado 1996, Moreno Mínguez 2002, Naldini 2003).

La expresión más emblemática de la solidaridad familiar es el compromiso de los padres con el bienestar de sus hijos/as. Salvo en regímenes colectivistas como los kibutz, los temas concernientes al bienestar de los hijos/as son fundamentalmente “asuntos familiares”. Desde que el mundo es mundo, la voluntad de la inmensa mayoría de los padres es sacar sus hijos/as adelante, aunque ello represente una merma en su bienestar. En todos los países en que periódicamente se realizan las encuestas del *World Values Survey*, más de la mitad de los entrevistados/as de cada país declara que el deber de los padres es procurar por el bien de sus hijos/as aunque para ello tengan que hacer sacrificios personales. Ser buen padre/madre implica, en todo tiempo y lugar, una dosis considerable de altruismo. Ahora bien, no conviene minimizar las variaciones culturales en el apego y la expresión de los sentimientos de afecto hacia los hijos/as, así como la disposición a sacrificarse por ellos.

Viajeros y antropólogos primero, así como las encuestas con universos “multinacionales” en los últimos tiempos, ponen de manifiesto la intensa vocación de los padres y, sobre todo, de las madres españolas por proteger a sus hijos/as. Según datos del *World Values Survey* de inicios de la década de los noventa, el 76% de los españoles (y el 78% de los italianos/as) considera que “el deber de los padres es hacer lo posible por el bienestar de sus hijos/as incluso a costa del suyo propio”. La proporción de daneses o alemanes (de la República Federal) que se muestran de acuerdo con la frase apenas supera el 50% (*World Values Survey* 1990-1993: 224, citado en Naldini y Jurado 1996: 59-60). Este tipo de diferencias son invocadas para avalar la singularidad del modelo cultural de las sociedades mediterráneas.²⁴⁰

²⁴⁰ En realidad la tabla que prueba, de acuerdo a Naldini y Jurado, la singularidad cultural de España e Italia evidencia que un porcentaje prácticamente equivalente de británicos/as (75%) se adhieren a la frase. Paradójicamente, Reino Unido se sitúa en el extremo opuesto de España e Italia en cuanto a la edad media de emancipación de los/as jóvenes o las tasas de pobreza entre los jóvenes desempleados/as. Según datos del *World Values Survey* de 1990, en otros países, como Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria, Canadá, Noruega, Suecia, Eslovenia, Suiza, Francia, Portugal, México, Argentina, Brasil o Chile, la proporción de ciudadanos/as que manifiestan la misma opinión sobre el deber de los padres supera también el 70%, y en algunos casos, las cifras que se dan en España e Italia (datos disponibles en www.worldvaluessurvey.org/services/index.html).

Igualmente significativo es el hecho de que la variación entre segmentos poblacionales dentro de un mismo país suelen ser tanto o más grandes que las que se observan entre países. Las diferencias actitudinales reflejan no sólo una herencia cultural que hunde sus raíces en el pasado más remoto sino también la interiorización de experiencias vitales. Por ejemplo, el impacto de los cambios en los itinerarios educativos y laborales tiene una expresión clara en las opiniones de las mujeres sobre la maternidad. En un estudio realizado por Marga Marí-Klose y Anna Nos Colom (1999:51) con datos del CIS de 1992 (*Estudio 1.990*), se evidencia que el porcentaje de mujeres españolas que están de acuerdo con la frase “una persona que demuestra ser buen padre/madre puede estar satisfecha”, y en general las opiniones sobre la maternidad/paternidad, varían de forma considerable dependiendo del grupo de edad a que pertenece y su estatus laboral (**Tabla 7.7**). El porcentaje de las mujeres de 18 a 33 años que manifiestan estar de acuerdo con la frase es veinte puntos inferior al de las que tienen más de 50 años, mientras que entre las mujeres que trabajan la proporción es más de diez puntos inferior a la de las que se dedican a labores domésticas dentro de cada grupo de edad.

(Tabla 7.7)

Con el paso del tiempo, y la incorporación de la mujer al ámbito público, la maternidad pierde relevancia como el único (ni siquiera el principal) factor configurador de la identidad femenina. Las trayectorias biográficas de las mujeres se diversifican (J. de Miguel 1998: 497). Algunas mujeres deciden tener a sus hijos/as y criarlos antes de entrar en el mercado de trabajo. Otras prefieren adquirir cierta experiencia laboral primero, abandonar el mercado de trabajo para tener/criar hijos/as, y volver a él más tarde. Algunas trabajan y son madres. Entre ellas, las hay que eligen ser madres solas. Muchas mujeres experimentan dificultades para conciliar su vida familiar y laboral; algunas lo consiguen, otras desisten y renuncian a una u otra opción. No es extraño que, en estas condiciones, *la maternidad* signifique cosas distintas entre la población femenina.

Las bases morales y actitudinales del familismo están siendo socavadas lentamente. Es innegable que, como sugiere con voz casi unánime la Sociología española de la familia, la institución familiar sigue gozando de “buena salud”, como prueba la valoración tan alta que merece entre la población más joven, o el hecho de que los/as jóvenes siguen eligiendo el

matrimonio como la fórmula más deseable para organizar su vida privada. Pero, la apuesta de la juventud de hoy (fundamentalmente de las mujeres), y cada vez más la de la sociedad en su conjunto, es por un modelo de convivencia distinto, en que los “deberes familiares” más onerosos no recaigan en exclusiva sobre la mitad femenina de la pareja. Una proporción creciente de españoles consideran conveniente que tanto el varón como la mujer que conviven juntos trabajen fuera del hogar y repartan las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Según datos del estudio 2.556 del Centro de Investigaciones Sociológicas (2004), el 83% de los jóvenes de 18 a 24 años se muestran partidarios del modelo igualitario, y sólo un 6% declara su preferencia por el modelo tradicional, en que las mujeres quedan a cargo del hogar y del cuidado de los hijos/as (**Tabla 7.8**).²⁴¹

(Tabla 7.8)

En los últimos años, el nivel de presión normativa al que están sometidas las mujeres que trabajan para que no se desentiendan de sus “obligaciones” domésticas ha disminuido. En las cohortes más jóvenes, la mayoría de las mujeres entienden dedicarse en exclusiva a las labores domésticas entra en contradicción con sus aspiraciones. Según datos del *World Value Survey* de 1999, sólo el 37% de las mujeres de 15 a 29 años aceptan que “ser ama de casa puede ser tan satisfactorio como trabajar en un empleo remunerado”. La proporción que se muestran de acuerdo con esta frase prácticamente se dobla entre las que tienen 50 años o más. Pero tan o más importante es el hecho de que la mayoría de los varones de las nuevas cohortes admiten que la mujer tenga la voluntad de trabajar e incluso lo consideran conveniente. El 59% se muestra en desacuerdo con que “ser ama de casa puede ser tan satisfactorio como trabajar en un empleo remunerado”. Más del 80% de los varones de la generación más joven creen conveniente que ambos miembros de la pareja contribuyan al sostenimiento económico de la familia, y un

²⁴¹ Esta tipología sigue el esquema propuesto por Arlie Hochschild (1990). En el *modelo tradicional* la mujer se identifica con sus actividades en la esfera doméstica (como *esposa* y *madre*). Se trata de una relación de pareja hipergámica en que la posición social de la mujer está supeditada al estatus socioeconómico del varón que trabaja fuera del hogar. En el *modelo igualitario* ambos cónyuges se identifican con esferas de actividad parecidas (ya sea el hogar o la carrera profesional), y existe un equilibrio relativo de poder entre los miembros de la pareja. El *modelo de transición*, a medio camino de los modelos anteriores, presenta una mujer que se identifica con su rol doméstico al tiempo que trabaja algo fuera del hogar. El marido apenas participa de las responsabilidades de la esfera doméstica y su actividad continua centrada en el mercado laboral (Marí-Klose y Nos Colom 1999: 65).

porcentaje similar reconocen que tener un trabajo remunerado es la mejor forma de ser independiente para una mujer (**Tabla 7.9**).

(Tabla 7.9)

La proporción de españoles/as que cree que la mujer debe dejar de trabajar después de casarse y/o tener hijos/as está cayendo significativamente (**Tabla 7.10**). La mayoría de los españoles —sobre todo de las mujeres— ve con buenos ojos que las mujeres opten por compatibilizar fecundidad y trabajo extradoméstico. Las únicas dudas que subsisten en segmentos amplios de la población se refieren a la conveniencia de que la mujer trabaje o no (o lo haga a tiempo completo) cuando sus hijos/as son pequeños.²⁴² Incluso por lo que respecta a esta última cuestión, las cosas están cambiando de forma muy rápida. Según un estudio publicado recientemente por el Observatorio para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Instituto de la Mujer (2005: 71) la opinión acerca de la conveniencia de que la mujer abandone su ocupación cuando los hijos/as son pequeños está muy diferenciada en función de las cohortes a que pertenecen. En las cohortes más jóvenes predominan las personas que o bien consideran que ninguno de los miembros de la pareja debe abandonar su ocupación (lo creen así el 35% de los jóvenes menores de treinta años) o bien que debe ser una determinación que no refleje connotaciones de género (el 14% cree que la decisión debe tomarse de mutuo acuerdo en la pareja, el 4% cree que debe abandonar su puesto de trabajo el/la que menos gane, otro 4% cree que es indistinto quién la abandone). Las actitudes más favorables a que sea la mujer la que deje su puesto de trabajo se concentran en la cohorte nacida antes de 1955. Más del 50% considera que debe ser la mujer quien lo haga.

(Tabla 7.10)

Con la incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo y su determinación a permanecer en él después de casarse y tener hijos/as, se están creando condiciones propicias para

²⁴² No está claro si la mayor predisposición a dejar de trabajar en estas circunstancias refleja la pervivencia de un deseo profundamente arraigado de monopolizar la crianza de los niños/as más pequeños/as o es simplemente un caso de *preferencias adaptativas*, por las que, frente a la ausencia de alternativas de crianza (por ejemplo, guarderías públicas), se termina queriendo lo que puede conseguirse.

la implosión definitiva del familismo. Por un lado, el tiempo disponible para ocuparse de “asuntos familiares” es cada vez más escaso, abocando a las familias, y en especial a las mujeres, a “situaciones imposibles”. Por otro, la “jornada interminable” de las mujeres es vista como algo intrínsecamente injusto y discriminatorio (Flaquer 1998: 188). Las estrategias para salvaguardar la preponderancia de la solidaridad familiar, a través por ejemplo del apoyo de abuelas, demuestran una eficacia cuestionable,²⁴³ además de ser inviables en el largo plazo a tenor de los cambios que se están produciendo en las pautas de participación laboral femenina de las generaciones adultas.²⁴⁴ Las circunstancias empujan a cada vez más familias a adquirir apoyo asistencial en el mercado. Muchas de ellas reclaman del Estado una intervención más decidida en los asuntos familiares.²⁴⁵

Confrontadas con sus propias limitaciones, las familias tienden a mostrar cierto disgusto por tener que asumir las consecuencias de un contexto laboral e inmobiliario que aboca a la juventud a la prolongación de su permanencia en el hogar familiar. En la encuesta del *Eurobarómetro* de 1993 (Estudio 39.0), España aparece como el país de la Unión Europea donde un porcentaje superior de personas adultas (con edades comprendidas entre los 40 y 54 años) manifiesta que la prolongación de la estancia de los/as jóvenes en el hogar familiar es una “mala opción”. En otro sondeo dirigido por Amando de Miguel (1997), se pone de manifiesto que entre las personas mayores de 45 años abundan las recriminaciones hacia las generaciones más jóvenes. Algo más de la mitad declara que los/as jóvenes “no quieren salir de casa de sus padres porque así les resulta más cómodo vivir”. Tres de cada cuatro personas mayores de 45 años tienen la impresión de que a la juventud se le “consienten” demasiadas cosas.

Detrás de estas recriminaciones subyacen diversos puntos de fricción intergeneracional dentro de las familias. Es fácil entender que las personas mayores de 45 años expresen ciertas suspicacias ante una situación que se antoja anómala a la luz de su propia trayectoria biográfica y sus convicciones personales acerca de la edad apropiada para emanciparse. Pero la situación presenta, además, otras complicaciones añadidas. Entre las generaciones adultas activas (mayores de 40 años y menores de 65), las manifestaciones de descontento con la situación pueden evidenciar además cierto desgaste provocado por la sobrecarga de responsabilidades. A estas

²⁴³ En la próxima sección de este capítulo se proporcionan argumentos que fundamentan esa afirmación.

²⁴⁴ Las últimas generaciones de abuelas inactivas van a ser sustituidas pronto por abuelas ocupadas, cuya propia participación en el mercado de trabajo les impedirá hacerse cargo del cuidado de sus nietos/as (Tobío 2002: 184).

edades centrales de la vida, muchas personas atraviesan la fase álgida de su ciclo vital. Los retos y obligaciones se acumulan y, con ello, los episodios de estrés y tensión asociados con la percepción de que, por muy grande que sea el empreño, resulta imposible hacer frente a todas las demandas sobrevenidas (Gil Calvo 2001). En el plano profesional, sus carreras suelen entrar durante estos años en etapas críticas, en que aumentan los niveles de responsabilidad y dedicación que sus posiciones laborales demandan. Estos retos profesionales son difícilmente conciliables con presiones que se originan de forma cada vez más habitual en el plano doméstico. La confluencia de dos fenómenos demográficos aparentemente independientes como son la mayor longevidad de la población anciana y la emancipación tardía de los jóvenes emplaza a la generación intermedia (la también llamada *generación sándwich*) en una nueva posición estructural, en que sus “obligaciones intergeneracionales” respecto a sus hijos/as y sus padres tienden a solaparse durante un período cada vez más prolongado. Esto puede dar lugar a una multiplicación de demandas económicas, afectivas y asistenciales difíciles de compaginar procedentes de hijos/a que prolongan la estancia en casa de sus padres y abuelos/as que, por razones de salud o discapacidad, reclaman atención y cuidados. Los costes personales derivados de esta sobrecarga de obligaciones y expectativas pueden ser enormes. Las mujeres de mediana edad suelen llevarse la peor parte.²⁴⁶

Visto desde el punto de vista de una población anciana cada vez más longeva y necesitada de cuidados y atenciones por parte de sus familiares, la prolongación de la dependencia juvenil origina otro tipo de inquietudes. Es plausible que las recriminaciones de los ancianos/as hacen a la juventud puedan reflejar, como sugiere Amando de Miguel (1998: 110), la competición que se entabla entre estos dos colectivos por los recursos limitados (fundamentalmente de tiempo disponible para prestar servicios) de la generación intermedia.

Los sentimientos ambivalentes respecto a la labor que corresponde ejercer a la familia tienen otra expresión en las demandas de apoyo a la intervención pública. Es posible que, como sugiere Valiente (1996: 269), la contribución de las familias a paliar los efectos de problemas

²⁴⁵ Por ejemplo, según una encuesta reciente del CIS (*Estudio 2.529*, 2003), el 79% de la población es partidaria de que las familias reciban una subvención para el cuidado de los hijos/as cuando el padre y la madre trabajan.

²⁴⁶ Por ejemplo, según un estudio de Gerardo Meil (2000:50-51), basado en el estudio 2.117 del CIS (1994), el 51% de las cuidadoras de 45 y más años perciben su estado de salud como regular o malo. Un porcentaje importante tiene que renunciar a trabajar (el 31% de la mujeres no pueden plantearse trabajar y el 21% han dejado su trabajo); otras muchas ven reducido significativamente su tiempo de ocio y vacaciones (el 47% no puede ir de vacaciones, el 39% no tiene tiempo de frecuentar amigos/as) o tienen que descuidar la atención a otras personas (29%). El 10% reconoce tener conflictos conyugales con motivo de la situación a la que se ve abocada.

sociales como el desempleo, la precariedad laboral o la carestía de la vivienda haya permitido desactivar la exteriorización de estas demandas, proporcionando a los gobiernos una coartada para ocuparse de asuntos “más urgentes”. Pero, la ausencia de reivindicaciones públicas, de fuerzas políticas, sindicales o movimientos sociales que hagan bandera de esta causa, no equivale a la inexistencia de actitudes favorables a la intervención pública. En una serie de investigaciones comparativas recientes se evidencia que España es uno de los países de la OCDE donde una proporción más alta de ciudadanos/as se declara partidaria de que el Estado adopte medidas para garantizar la satisfacción de necesidades básicas y la corrección de desigualdades de renta excesivas (Gelissen 2001, Suleiman 2002). La mayoría de los españoles/as cree que el Estado debe ser el garante principal del derecho a recibir cuidados cuando se está enfermo, a tener vivienda digna, a recibir ayuda en situaciones de necesidad, a la educación y al trabajo (**Tabla 7.11**). A tenor de los datos, los españoles/as tienden a considerar que la responsabilidad de la familia debe ceñirse a situaciones “de emergencia”, ocupándose fundamentalmente a garantizar el derecho de los/as integrantes de la unidad familiar a la alimentación.²⁴⁷

(Tabla 7.11)

Existen diferencias significativas en las opiniones de las distintas cohortes. La perspectiva típica de los ancianos/as es que la familia debe estar involucrada en la provisión de bienestar. Entre ellos/as prevalecen los valores del familismo. Es probable que en esta opinión pese mucho el deseo personal de recibir ayuda por parte de sus familiares en caso de necesitarlo. La opción preferida de los ancianos/as es que su familia se ocupe de asistirlos cuando no puedan valerse por sí mismos en la realización de actividades cotidianas (**Tabla 7.12**). El 87% desearía que se ocupara de ellos la familia, ya sea su cónyuge, sus hijos/as, otros familiares, o la familia y servicios sociales públicos conjuntamente.²⁴⁸ Sólo un 16% de los ancianos/as mencionan que desearían que fueran los servicios sociales públicos quienes les prestaran ayuda, ya sea exclusivamente (13%) o en conjunción con la familia (3%) (CIS, *Estudio 2.072*, 1993).

²⁴⁷ En España el deber de prestar asistencia para el sustento de familiares necesitados viene recogido en el Código Civil. La obligación de alimentar a los familiares y el derecho de éstos a reclamar asistencia se extiende incluso a personas adultas que viven en hogares separados (Flaquer 1998: 127-129).

²⁴⁸ Existen diferencias significativas entre los deseos de varones y mujeres. Mientras entre los mayores de 65 años varones que tienen hijos/as la opción preferida es el cuidado del cónyuge (40%), las mujeres prefieren que los

(Tabla 7.12)

La juventud muestra actitudes menos familistas. Preguntados por quien debe ser el responsable de prestar apoyo a las personas que lo necesitan, el 52% de los/as jóvenes (por sólo el 35% de las personas mayores de 64 años) reclaman en primer lugar el compromiso público. Sólo el 23% de los/as jóvenes menciona la familia, en contraste con el 40% de los ancianos. A pesar de estas divergencias, unos y otros coinciden en que existe un deber social de ayudar a las personas que lo necesitan. Un porcentaje muy minoritario cree que el individuo debe, en estas circunstancias, resolver sus propios problemas.

Las diferencias entre jóvenes y ancianos no se circunscriben al grado de responsabilidad que en cuestiones de bienestar asignan a la familia o al Estado. Jóvenes y personas mayores albergan intereses claramente que se reflejan en sus actitudes frente a la inversión pública. Preguntados por el área que consideran de mayor interés para los ciudadanos, jóvenes y ancianos tienen opiniones inversas. Según datos del Barómetro Sanitario de 2008 (**Tabla 7.13**), los ámbitos que concitan el mayor interés en la juventud son la vivienda y la educación. Entre las personas de edad avanzada, interesan las pensiones y la sanidad.

(Tabla 7.13)

Las prioridades de unos/as y otros/as se evidencian en las demandas de inversión pública. Como puede apreciarse en la **Tabla 7.14**, que utiliza datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (*Estudio 2.594*, 2005) las personas jóvenes muestran un nivel de insatisfacción más alto con las inversiones que realiza el Estado, salvo cuando se les pregunta por las inversiones en pensiones, que un porcentaje mayoritario de personas adultas y ancianas considera insuficiente. Son sintomáticas las diferencias entre jóvenes y ancianos en capítulos como enseñanza, desempleo y vivienda, de lo que los primeros son los máximos beneficiarios.²⁴⁹

hijos/as (66%) se ocupen de ellas. Entre las mujeres predominan las que prefieren que sean sus hijas (en lugar de sus hijos, y eventualmente, sus nueras) las que organicen estas labores de apoyo (37%). (CIS, *Estudio 2.072*, 1993).

²⁴⁹ Preguntados acerca de la ayuda que reciben colectivos específicos como jóvenes o parados, la mayoría de los entrevistados/as coinciden en considerarla baja. Aún así pueden apreciarse diferencias reseñables. El 81% de los jóvenes menores de 34 años creen que la juventud recibe poca o ninguna ayuda por parte de la administración, frente

(Tabla 7.14)

Un año más tarde el Centro de Investigaciones Sociológicas (estudio 2.671) pregunta a los entrevistados si el Estado debe gastar “más” o “mucho más” en una serie de capítulos de inversión, teniendo en cuenta que para gastar “mucho más” podría ser necesario aumentar los impuestos. Existen diferencias considerables en la opinión de jóvenes y personas mayores de 65 años sobre la necesidad de sufragar capítulos como pensiones y educación incrementando significativamente el gasto (y por tanto, el riesgo de tener que recurrir a nuevos impuestos). Mientras el porcentaje de personas mayores que creen que habría que “gastar mucho más” en pensiones es del 43%, el de personas de 25 a 34 años es del 19%. Por el contrario, mientras el 35% de estas últimas piensan que hay que “gastar mucho más” en educación, lo cree un 24% de las personas de 65 años o más.²⁵⁰

A juicio de un número creciente de españoles/as, la familia es cada vez menos la entidad autosuficiente que en el pasado, en palabras de Banfield (1967), dio lugar en las sociedades mediterráneas al llamado “familismo amorale”, esto es, un sistema de bienestar en que la solidaridad sólo es concebible cuando se ejercita dentro de las fronteras del grupo familiar. Amplios segmentos de la población muestran su agotamiento con un modelo que es incapaz de garantizar derechos sociales fundamentales (a trabajo, vivienda) o hace recaer en ellos/as responsabilidades y cargas mucho mayores que las que están dispuestos o en condiciones de asumir. Es en este contexto donde se vería con buenos ojos un mayor protagonismo de la iniciativa pública y donde, a falta de respuestas políticas, tienen que recurrir a servicios extradomésticos remunerados para suplir la falta de recursos propios (fundamentalmente de tiempo) para prestar cuidados y atención.

al 62% de los ancianos que piensan así. La diferencia entre el porcentaje de jóvenes y ancianos que creen que los parados reciben poca o ninguna ayuda es de 18 puntos, 72% y 54% respectivamente.

²⁵⁰ Los datos están disponible en la página web del CIS: www.cis.es (consultados en agosto de 2008).

(In)eficacia de la privatización del riesgo

Muchas de las diferencias entre las sociedades desarrolladas derivan, bien directa o indirectamente, de la naturaleza de sus sistemas de bienestar. En los últimos años los sociólogos/as vienen agrupando los sistemas de bienestar en bloques que se pretenden relativamente homogéneos por haber seguido lógicas de institucionalización propias y diferenciadoras en el curso de las fases de expansión del Estado de Bienestar. La más conocida de estas clasificaciones tipológicas es la de Gösta Esping-Andersen (1990), que identifica tres regímenes de bienestar: el “socialdemócrata” (característico de los países escandinavos), el “liberal” (propio de los países anglosajones) y el “corporatista” (común en los países de la Europa continental). Esta tipología ha sido completada con un cuarto tipo, el “familista”, que a juicio de varios autores, incluido el propio Esping-Andersen en sus últimos trabajos, caracteriza a las sociedades mediterráneas (y Japón) (Leibfried 1992, Ferrera 1996, Esping-Andersen 1999, Naldini 2003).

Cada uno de estos regímenes presenta ciertas ventajas comparativas. Los sistemas de bienestar liberales suele ser capaces de crear más empleo que los corporatistas y socialdemócratas. También son más efectivos en incorporar a la mujer al mercado de trabajo, así como en desbloquear su acceso a puestos de responsabilidad. Sin embargo, el coste de estas ventajas es bastante alto. La distribución de la renta en estos países tiende a ser muy desigual y la exclusión social afecta a segmentos importantes de la ciudadanía. La iniciativa pública propicia que en los países socialdemócratas y corporatistas haya mucha mayor cohesión social, aunque también bastantes más dificultades para generar empleo. Los países corporatistas presentan habitualmente las tasas más altas de desempleo y las más bajas de participación de la mujer en el mercado laboral, pero tienden a apoyar a las familias necesitadas con subsidios y deducciones fiscales generosas. Los países socialdemócratas escandinavos resuelven este problema a través de la creación de empleo público, lo que requiere una alta presión fiscal.

Los sistemas de bienestar familistas, como el español, comparten buena parte de los rasgos del sistema corporatista. La diferencia principal radica en la poca ayuda que las familias reciben por parte del Estado para desarrollar su labor. En España, las familias apenas cuentan con apoyo público para hacer frente a los problemas del paro y la prolongación de la dependencia de los jóvenes. La configuración de la protección pública por desempleo en España establece la

prestación en función de la duración del período de cotización previo y la cuantía de las aportaciones. Ello condena a los/as jóvenes, sobre quienes incide el riesgo de desempleo de forma más intensa, a prestaciones modestas, cuando no simplemente a la desprotección. Por ejemplo, en 1999, sólo el 4,5% de los desempleados/as de 15 a 19 años, el 17% de los parados/as de 20 a 24 años, y el 27% de los de 25 a 29 años recibían ayudas (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).²⁵¹

La administración pública ayuda poco a los/as jóvenes que quieren establecerse por su cuenta. Las políticas gubernamentales de vivienda han apostado tradicionalmente por fomentar el acceso a la propiedad, descuidando las necesidades de segmentos de la población con menos recursos para comprar. Para estos grupos apenas existen ayudas. Por un lado, la reserva de viviendas en régimen de alquiler social es manifiestamente insuficiente en comparación con otros países europeos. Constituye únicamente el 2% del parque total de viviendas, frente al 10% en Alemania, el 17% en Francia, el 21% en el Reino Unido o el 35% en Holanda (Trilla 2001: 55). Por otro, brillan por su ausencia las subvenciones e incentivos fiscales al uso de viviendas en alquiler, así como los estímulos a los propietarios/as de viviendas para incentivarlos/as a ofertar su patrimonio inmobiliario en el mercado de alquiler. Muchos/as prefieren mantener segundas viviendas vacías en lugar de sacarlas al mercado de alquiler privado.²⁵²

Dados estos parámetros de la protección pública, es fácil comprender por qué, en un contexto de crisis de empleo, precariedad laboral y precios de la vivienda inasequibles, se catalogue a la institución familiar como “el mayor Ministerio de Asuntos Sociales de España” (Iglesias de Ussel 1998). Su principal labor auxiliar se produce bajo la forma de “solidaridad de subsistencia” (Pitrou 1978). Las ayudas familiares en forma de hospedaje y manutención a jóvenes sin recursos propios permite evitar que una proporción importante de ellos/as caigan en la pobreza, como sucede en países como el Reino Unido, donde estas formas de apoyo son menos frecuentes.²⁵³ La inmensa mayoría de los/as jóvenes que no trabajan viven en un hogar en que al

²⁵¹En cambio, según datos sobre 1995 de Víctor Pérez-Díaz, Elisa Chuliá, Berta Álvarez-Miranda (1998: 43), el 47% de los desempleados/as de 35 a 44 años, y el 86% de los de 45 o más años disfruta de prestaciones.

²⁵²En 1991, el 15% de las viviendas permanecían vacías (OECD 2003: 95), un porcentaje muy superior al resto de países europeos con excepción de Italia.

²⁵³En 1994, el 75% de los/as jóvenes británicos de 20 a 29 años que no trabajan viven fuera de casa de sus padres. Cerca de la mitad de los/as jóvenes de estas edades viven en hogares cuyas rentas los sitúan bajo el umbral de la pobreza. En España sólo el 23% de los/as jóvenes de la misma edad que no trabajan viven fuera del hogar familiar. La incidencia de la pobreza es bastante menor. Afecta a un 33% de los/as jóvenes de 18 a 24 años, y a un 27% de los/as que tienen entre 25 y 34 años. Los datos de pobreza proceden de Gallie y Paugam 2001, y están basados en el Panel de Hogares de 1994; las pautas residenciales de los/as jóvenes que no trabajan proceden de Fernández Cordon 1997, y están basados en la Encuestas de Población Activa.

menos una persona trabaja o percibe una pensión (habitualmente un varón, cabeza de familia)²⁵⁴. Gracias a ello, estos/as jóvenes pueden mantener un nivel de vida estable a pesar de la intensidad de los riesgos laborales (de desempleo y precariedad) a los que están expuestos/as.²⁵⁵

Esta situación presenta ventajas indudables, pero también algún inconveniente. Según un estudio reciente de Vogel (2002), gracias a los bienes y servicios disponibles en el hogar familiar, las condiciones de vida de los/as jóvenes del sur de Europa son sustancialmente mejores que las de los/as jóvenes de los países nórdicos y centroeuropeos. Sin embargo, en contraste con estos últimos, la mayoría de los jóvenes que no trabajan (o lo hacen esporádicamente) maneja recursos económicos propios modestos. Las diferencias en los niveles de renta son especialmente evidentes entre los/as jóvenes desempleados/as de los distintos países. Según un estudio de Bison y Esping-Andersen (2000:76-77), basado en datos del Panel de Hogares de 1994, mientras los ingresos de un/a joven desempleado/a danés, procedentes fundamentalmente de subsidios estatales, equivalen al 62% del nivel medio de ingresos en el país, los de un belga al 46%, o los de un alemán al 41%, los de un/a joven en paro en España suponen tan sólo el 26% de los ingresos medios. Con estos ingresos, no es de extrañar que el 59% de los/as jóvenes desempleados/as en España declare que sólo puede pagar sus gastos de bolsillo, y sólo un 21% manifiesten que pueden pagar todos sus gastos (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). En estas condiciones, la opción de permanecer en el hogar familiar es la única económicamente viable, aunque pocas veces la preferida. El 76 % de los/as jóvenes desempleados/as que viven en casa de sus padres desearía hacerlo en otro lugar (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

La solidaridad familiar se presenta habitualmente como una solución transitoria hasta adquirir la autosuficiencia económica para poder iniciar un proyecto de vida propio en un hogar independiente. Algunas veces incluye también otro componente: la llamada “solidaridad de promoción” (Pitrou 1978). En este capítulo de la solidaridad familiar hay que incluir todas las ayudas familiares que facilitan la permanencia del joven en el sistema educativo y, por tanto,

²⁵⁴ El 60% de los desempleados/as de 15 a 29 años viven en un hogar donde el cabeza de familia tiene un trabajo fijo. En el 17% de los hogares de estos desempleados/as, el cabeza de familia tiene trabajo temporal, esporádico o inestable. Sólo en un 4,5% de los casos, el cabeza de familia esta también desempleado/a. En los hogares de los/as jóvenes que estudian, el cabeza de familia suele ser una persona que tiene un trabajo fijo y estable (84% de los casos) (CIS, *Estudio 2.370*, 1999).

²⁵⁵ Se dice a menudo que la solidaridad familiar actúa como un instrumento poderoso de estabilización social, contribuyendo a prevenir situaciones de conflicto intergeneracional. Bajo este diagnóstico subyace una visión negativa del conflicto, como algo que conviene desterrar. Desde otro punto de vista, podría argumentarse que la desactivación de las fuentes de conflicto intergeneracional ha ralentizado la adaptación de las estructuras de bienestar a una realidad cambiante, que engendra necesidades y demandas nuevas que reclaman soluciones innovadoras.

pueden favorecer una formación de calidad que permita desarrollar con más garantías de éxito un proyecto profesional en el futuro. La forma de ayuda más extendida, y no por eso menos fundamental, es proporcionar cobijo hasta que los/as jóvenes hayan adquirido el capital humano necesario en el mercado laboral para encontrar un trabajo adecuado (esto es, cuyo estatus se corresponda con las expectativas que abrigan sus parientes) y puedan plantearse “volar solos”.

Algunas familias siguen funcionando también como “agencias de colocación”. En 1999, el 8,6 % de los jóvenes de 15 a 29 años que trabajan (o han trabajado) declaró hacerlo (o haberlo hecho en su último trabajo) en un negocio familiar (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). Muchos más acceden a su puesto de trabajo gracias al capital social de sus padres. Según los resultados de la Encuesta de la Juventud de 2004, las relaciones personales constituyen la vía principal de acceso de los jóvenes al primer empleo. Uno de cada dos jóvenes de 15 a 29 años que trabaja por vez primera declara haber encontrado su empleo a través de padres, otros familiares, amigos/as y conocidos/as. Además, la vía de acceso a un trabajo a través de los padres es, cuando se puede contar con ella, la más rápida. Los jóvenes que consiguen su primer empleo a través de sus padres tardan por término medio 2,9 meses, en torno a dos y medio meses menos que si lo han conseguido ofreciéndose directamente a la empresa y cuatro meses y medio menos que si accede al empleo con una oferta del INEM (Chacón 2004: 72).

El protagonismo de la familia en las “actividades de promoción” es inversamente proporcional a la intervención del Estado. España es uno de los países europeos que menos subsidios y ayudas otorga a los/as jóvenes que estudian. Preguntados/as por su dos fuentes principales de ingreso sólo un 3,4% de los/las jóvenes de 15 a 29 menciona una beca o ayuda de estudios (CIS, *Estudio 2.370*, 1999). El *Informe Bricall* (2000) cifra la proporción de estudiantes universitarios que reciben algún tipo de ayuda pública en un 17%, lejos del 75% aproximadamente de estudiantes británicos, holandeses o escandinavos que se benefician de este tipo de apoyo. El sistema de becas es poco generoso y el acceso a las becas bastante regresivo. En el curso 1998-1999, el importe medio de las ayudas compensatorias a jóvenes de familias de la decila de renta más baja asciende sólo a 271.000 pesetas (1.633 euros), cantidad que, según los cálculos que efectúan los propios autores del informe no llega a cubrir el 50% de los costes de

oportunidad de estudiar. En cuanto a las condiciones de elegibilidad, menos de la mitad de estudiantes universitarios con familias de menor renta son becarios/as.²⁵⁶

Por otra parte, la inversión pública en políticas activas de empleo es escasa. En 2000, el gasto público en políticas activas de empleo equivale al 0,7% del PIB, aproximadamente el 54% de la media de la Unión europea (que entonces formaban sólo 15 países). Los recursos que emplea el INEM son manifiestamente mejorables. Según un informe de la OECD sobre la situación económica en España (2003), la mayor parte de los recursos administrativos de que dispone tienen que dedicarse a registrar nuevos contratos (15 millones por año, debido a las tasas elevadas de temporalidad). Durante el año 2000, por ejemplo, sólo un 17% de las nuevas contrataciones de desempleados/as fueron propiciadas por el INEM. (Sáez et al. 2001, Saez 2004). Un informe reciente de la OCDE (2007) revela que la proporción del gasto en políticas activas de empleo dedicado específicamente a programas destinados a jóvenes es baja si se compara con la que dedican otros países. Los datos disponibles indican que esta partida ha tendido a reducirse (entre 1995 y 2002). En 2002, sólo el 6,5% del total del presupuesto destinado a políticas activas de empleo se destina a programas para jóvenes, cuando éstos constituyen alrededor del 26% de todos los desempleados/as. En 1995 esa partida representaba el 16% del total. El informe concluye que, salvo excepciones (las *Escuelas Taller* y las *Casas de Oficios*), la eficacia de los programas en activo es limitada.²⁵⁷

La falta de protagonismo del Estado en las funciones de promoción produce resultados socialmente ineficientes y discriminatorios. Muchas familias de rentas bajas siguen sin poder asumir los costes de la educación superior de sus hijos/as, y en especial, la pérdida de ingresos que comporta la dedicación a estudiar (Bricall 2000: 279). Por otra parte, no todas las familias tienen la misma capacidad de encontrar empleo a través de sus redes de parientes y conocidos. Como se han encargado de demostrar la investigación sociológica internacional sobre la cuestión (Bourdieu 1979 y Passeron 1979, Lin 2000), el capital social suele estar distribuido desigualmente entre los grupos familiares. Las ofertas de ayuda que pueden hacer a los jóvenes las familias acomodadas son, por regla general, más “valiosas” que las que están en condiciones

²⁵⁶ Un número considerable de becarios/as (que los autores no llegan a cifrar) pertenecen a familias de renta elevada, que utilizan declaraciones fiscales fraudulentas para conseguir becas para sus hijos/as.

²⁵⁷ También reconoce la precariedad de los métodos de evaluación utilizados por el INEM.

de prestar familias de clase trabajadora. Las redes de contacto de las familias de clase media o alta suelen proporcionar más y mejor información sobre oportunidades de empleo.

A todo esto se suma el hecho de que los “rendimientos” de las redes personales son decrecientes después de la primera experiencia de búsqueda de empleo. La eficacia de las redes personales es menor cuando los/as jóvenes con experiencia laboral previa buscan nuevos empleos, lo que en las condiciones de alta rotación laboral en España, sucede con gran frecuencia.²⁵⁸ Las redes personales tampoco “tratan” a todo el mundo por igual. Por ejemplo, una proporción algo mayor de varones que de mujeres (28 y 21% respectivamente) consiguen empleo a través de sus padres o familiares (Chacón 2004).

El modelo presenta otros síntomas de agotamiento cada vez más evidentes. Aunque el esfuerzo de las familias siga siendo crucial para abrir las puertas de la educación superior a los/as jóvenes, no garantiza el logro de un título, especialmente entre estudiantes poco motivados/a, pero inducidos por las circunstancias laborales adversas o presiones familiares a proseguir sus estudios. Un número considerable de estudiantes que se matricula en la Universidad nunca consigue finalizar sus estudios.²⁵⁹ Además, con la entrada masiva de los/as jóvenes en la Universidad, el valor de muchos títulos universitarios en el mercado laboral se ha devaluado. En los últimos tiempos, los poseedores/as de un título universitario están expuestos a riesgos de desempleo y precariedad similares a los/as demás jóvenes (véase capítulo 2) y comienzan sus vidas laborales en empleos para los que antes bastaban títulos académicos inferiores (Carabaña 1996).²⁶⁰ Aunque la evidencia existente es escasamente concluyente, los datos parecen apuntar a que las estrategias familiares de prolongación del esfuerzo inversor en la educación de los/hijos tienen, a partir de cierto umbral, rendimientos decrecientes.

Por otra parte, la naturaleza cambiante de los entornos ocupativos reclama nuevas estrategias de búsqueda de empleo. El papel de familiares y amigos/as como intermediarios/as en

²⁵⁸ Es importante destacar que poco más del 50% de los jóvenes desempleados/as han trabajado con anterioridad (Comisión Europea 1997: 49).

²⁵⁹ En 1992 la tasa de acceso a la universidad –los nuevos matriculados en relación a la población en edad teórica de iniciar sus estudios universitarios– era del 41% para los varones y del 46% de las mujeres (Bricall 2000: 11). No todos lograron finalizar sus estudios. Diez años más tarde sólo el 24% de los jóvenes de 25 a 34 años tiene un título universitario (OECD 2003: 81).

²⁶⁰ Según los datos de la Encuesta de Población Activa que maneja Carabaña, mientras en 1972-76, por ejemplo, el 60% de los/as licenciados en Letras iniciaban sus carreras como profesionales superiores, un 25% como profesionales medios y un 15% como administrativos y en otras actividades, en 1987-91 los porcentajes eran de 40%, 25% y 35% respectivamente (Carabaña 1996: 183).

el proceso está pasando a un segundo plano. Así se refleja en el **Gráfico 7.2**, que representa las respuestas de desempleados/as a preguntas sobre su forma principal y secundaria de búsqueda de empleo, recogidas en la *Encuesta de Población Activa* de los últimos diecisiete años.²⁶¹ Mientras en 1987 la modalidad de búsqueda de empleo en que se concentran la mayoría de las respuestas es el recurso a las relaciones personales, diecisiete años más tarde la imagen es muy distinta. La opción que los desempleados/as mencionan con más frecuencia entre sus dos formas principales de búsqueda es la de dirigirse directamente a los empresarios/as. También se incrementa, aunque menos, el porcentaje de desempleados/as que recurre a agencias de colocación privadas (las famosas ETTs). Las personas desempleadas que utilizan las relaciones personales pasan del 60% a poco menos del 35%. Buscar empleo significa cada vez menos activar la red de familiares y amigos/as, probablemente debido en gran medida a que la eficacia de esta red como agencia de colocación se ve mermada en un entorno en que la rotación laboral se convierte en la norma.

(Gráfico 7.2)

Pero sin duda el talón de Aquiles del *familismo* como mecanismo de solidaridad en los tiempos que corren es la determinación cada vez mayor de las mujeres a proseguir carreras laborales. La incorporación de las mujeres jóvenes al mercado laboral, y fundamentalmente su permanencia en él tras casarse y dar a luz, priva al sistema de su auténtica piedra angular: la mujer “ama de casa”. Este proceso tiene implicaciones que ponen en jaque los encajes actuales del bienestar entre poderes públicos, familias y mercados. Son cada vez más evidentes las dificultades de las familias para encontrar el tiempo que requieren las tareas del hogar, y en especial, el cuidado de niños/as. Estos problemas se evidencian de diversas formas. Algunas mujeres, en especial entre las que han alcanzado un nivel educativo elevado, deciden renunciar a la vida familiar para centrarse en sus proyectos profesionales. Esta renuncia no es necesariamente permanente. Las hay que optan por aplazar la vida familiar hasta consolidar su carrera laboral.

²⁶¹ Ese gráfico describe porcentajes que son el resultado de sumar las proporciones de desempleados/as que utilizan cada modalidad de búsqueda como forma principal y secundaria. Cerca de nueve de cada diez desempleados/as declara que su forma principal de búsqueda de empleo es “la inscripción en una oficina de empleo de la administración”. Inscribirse en una oficina del INEM es, para muchos de ellos/as, un trámite obligatorio para percibir la prestación de desempleo. De cara a determinar de forma más precisa las estrategias con las que confían encontrar un empleo es, por tanto, más importante conocer su segunda opción de búsqueda de empleo.

Muchas parejas se decantan por no tener hijos/as o tenerlos más tarde,²⁶² cuando se dan condiciones adecuadas para compaginar la atención que requieren y las exigencias de su profesión. Que se den estas condiciones depende de la posibilidad de reducir o reorganizar compromisos profesionales (por ejemplo, a través de jornadas flexibles o a tiempo parcial), la presencia de un pariente que pueda colaborar en la crianza de los niños/as (fundamentalmente abuelas) o de alcanzar el poder adquisitivo necesario para contratar ayuda. Todavía muchas mujeres interrumpen sus carreras laborales tras dar a luz, aunque para un número cada vez mayor de ellas se trata de una interrupción transitoria (Moreno 2001, M. Marí-Klose y Nos 1999).

Según el reciente *Estudio sobre la Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Laboral* del Instituto de la Mujer (2005), un 46% de la población española considera que compatibilizar vida familiar y la vida laboral presenta complicaciones (algo más de un 15% lo considera incluso “muy complicado”). Más de dos de cada tres españoles/as creen que los esfuerzos para compaginar familia y trabajo productivo están directamente o indirectamente relacionados con problemas de incomunicación y conflicto dentro de la familia. Pese a este reconocimiento, un número creciente de mujeres deciden correr esos riesgos. En diez años (entre 1991 y 2001), la tasa de participación laboral de las mujeres de 25 a 54 años pasa del 47% al 61%, un ritmo de crecimiento sólo inferior en Europa al de las mujeres irlandesas. El aumento de mujeres activas se produce en casi todos los segmentos de la población femenina. En el curso de pocos años muchas mujeres han superado escollos culturales aparentemente insalvables, como la reticencia a dejar a sus hijos/as pequeños al cuidado de otras personas. Es especialmente significativo el hecho de que el porcentaje de mujeres que trabajan haya crecido de forma sustancial en los hogares compuestos por una pareja con hijos/as a cargo. Entre 1989 y 1999, el porcentaje de madres que trabajan pasa del 30% al 42%, y el de madres con hijos/as menores de seis años del 28% al 40% (OECD 2001: 134-135). Casi el 80% de estas madres que trabajan fuera de casa lo hacen a tiempo completo y conviven con una pareja en la misma situación laboral.

El número de mujeres que ejercen sólo de amas de casa está disminuyendo a marchas forzadas. Entre las que aparentemente todavía lo hacen, hay un número importante que presta

²⁶² El crecimiento del número de hogares ocupados por parejas sin hijos/as es uno de los fenómenos demográficos más significativos de los últimos tiempos en España. Responde tanto a la tendencia de parejas de ancianos/as a mantener la autonomía residencial como al incremento del número de parejas jóvenes que retrasan la fecundidad. En 1999, los hogares formados por pareja sin hijos/as representan el 34% del total de hogares formados por una pareja con o sin hijos/as. Lo más llamativo es que, en sólo cinco años, de 1994 a 1999, la proporción de estos hogares se incrementa en un 24%, cifra muy superior a la de cualquier otro país desarrollado (OECD 2001: 158).

ayudas ocasionales a sus cónyuges o compañeros en sus tareas profesionales o en el negocio familiar. Las amas de casa “recalcitrantes”, es decir aquellas que están centradas en sus responsabilidades familiares únicamente y no se han planteado hacer otra cosa, representan ya un grupo minoritario. Al resto les gustaría trabajar fuera de casa de poder permitírselo. En torno a tres de cada cuatro mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 49 años que ejercen sólo de amas de casa desearían desarrollar un trabajo remunerado.²⁶³ Lo que impide a la mayoría de ellas colmar sus aspiraciones son problemas para conciliar estos deseos con su vida familiar.²⁶⁴

La desaparición progresiva de las amas de casa a tiempo completo presenta otra vertiente sociológica que merece ser destacada: los efectos de este fenómeno a medio y largo plazo. Posiblemente, el proceso de erosión del familismo terminará de cerrarse cuando sus últimos bastiones, las llamadas “abuelas-mamá”, que habiendo cuidado a sus propios hijos/as ahora son reclamadas para hacerse cargo de sus nietos/as, comiencen a ser reemplazadas por abuelas que participan en el mercado laboral, con menos tiempo para ejercer de “madres sustitutas” (Tobío 2002: 184, Moreno 2001: 54). La labor auxiliar que realizan las abuelas (y en mucha menor medida por los abuelos) ha sido un recurso importante con que han contado muchas madres trabajadoras en los últimos años para conciliar las exigencias de la vida laboral y crianza de los/as hijos/as. Pero, ahora que las “abuelas-mama” están a punto de prestar sus últimos servicios, conviene hacer un balance ajustado de su contribución real a resolver los problemas que genera la conciliación de vida familiar y laboral. Los datos invitan a no dejarse llevar por descripciones poco matizadas que atribuyen a las abuelas poco menos que la oportunidad histórica de que gozan las mujeres jóvenes hoy de acceder al mercado de trabajo. Según evidencia la *Encuesta de Compatibilización de Familia y Empleo*, el 73% de las madres que trabajan y tienen al menos un hijo/a menor de cuatro años tiene que recurrir a los servicios de guarderías y centros preescolares, la inmensa mayoría de los cuáles siguen siendo privados (Tobío 2002: 175). La ayuda que

²⁶³ Entre las mujeres mayores de 50 años y menores de 65, el porcentaje es más reducido (52%). El resto constituye el último gran bloque de mujeres dedicadas “en cuerpo y alma” a las responsabilidades domésticas.

²⁶⁴ La formulación de la pregunta en la encuesta permitía la exposición de múltiples motivos que pesan en la decisión. El 60% declara que no trabaja fuera del hogar “para poder atender mejor a sus hijos/as”. El 54% encuentra motivo para quedarse en casa en las dificultades para encontrar un empleo compatible con la dispensación de cuidados familiares. El 30% lo atribuye a la falta de ayudas y servicios sociales para atender a las personas a su cargo. En ausencia de estos recursos, la conciliación no sale a cuenta desde un punto de vista económico. El 46% de las amas de casa dicen que en el caso de trabajar tendrían que pagar por el cuidado de personas dependientes y eso no les compensa (Instituto de la Mujer 2005: 89-90).

prestan las abuelas a sus hijas y nueras tiende a ser ocasional y se produce sobre todo cuando viven en las cercanías de la vivienda de sus hijas/os.²⁶⁵

Los servicios adquiridos en el mercado absorben una parte creciente del presupuesto familiar. Los destinatarios de las nuevas partidas de gasto incluyen asistentas de hogar para aligerar la carga de quehaceres domésticos, restaurantes que sirven las comidas que se dejan de preparar en casa, así como un amplio capítulo de servicios de atención personal —canguros, guarderías, residencias de ancianos, actividades extraescolares o psicólogos infantiles.²⁶⁶ El mercado tiende a generar la oferta que los consumidores demandan, pero no necesariamente a precios asequibles para todo el mundo. En un régimen en que el poder adquisitivo determina el acceso a este tipo de servicios, familias con necesidades de asistencia acuciantes pero que suelen tener bajos niveles de renta, como las encabezadas por una madre sola o a las familias con proles numerosas, son las primeras en sufrir la exclusión.

El desarrollo de servicios públicos de apoyo a la familia es la gran tarea pendiente del Estado de Bienestar en España. En particular, los servicios de atención a la primera infancia son fundamentales para que padres y madres, y en especial estas últimas, puedan participar en el mercado laboral si así lo desean y contribuir, de este modo, al sostenimiento económico de sus familias. La inactividad laboral de las mujeres presenta desventajas evidentes para la mujer, al reforzar su dependencia económica respecto a sus parejas y restarle poder de negociación en el hogar. A estas desventajas hay que sumarle los efectos negativos que la inactividad femenina tiene sobre el bienestar económico de sus familias. Como ha puesto de manifiesto Esping-Andersen (1999, 2002), las rentas del trabajo que aportan las mujeres son un factor de primer orden para sacar de la pobreza a muchas parejas que tienen hijos a cargo, y resultan decisivas

²⁶⁵ La principal investigación que se ha realizado en España sobre la labor de las “abuelas-mamá” (Tobío 2002) ofrece únicamente datos detallados sobre el cuidado de nietos/as por parte de abuelas maternas (las más proclives a ofrecer ayuda) que viven en la misma localidad. Pero, sólo en el 56% de los casos, la abuela materna vive en la misma localidad que su hija. Los resultados que presenta Tobío sugieren que la implicación de las abuelas maternas en el cuidado de nietos/as está claramente asociada con la proximidad espacial de la vivienda de su hija, lo que hace pensar que, en términos agregados, la implicación de las abuelas en el cuidado de los nietos/as es menor de lo que se podría pensar. El 79% de las abuelas maternas que viven en la misma vivienda que la madre trabajadora ayudan en el cuidado de los nietos/as, pero sólo constituyen el 11% de las que viven en la misma localidad, y por inferencia, un 6% del total de abuelas. Cerca de tres de cada cuatro abuelas maternas viven en otro barrio o localidad que sus hijas. Entre las que viven dentro de la misma localidad pero en un barrio distinto que sus hijas ya sólo un 38% participa en el cuidado de nietos/as. El estudio de Constanza Tobío no da a conocer la dedicación de las abuelas maternas que viven en otra localidad.

²⁶⁶ Por ejemplo, mientras hace medio siglo las familias españolas gastaban poco más del 1% de su presupuesto en alimetarse fuera de casa, actualmente los gastos en restaurantes y cafeterías se aproximan al 8% del presupuesto total

para combatir la precariedad de las familias monoparentales. Para minimizar los riesgos de pobreza infantil, y por ende, sus consecuencias a largo plazo sobre las biografías de los niños/as, es necesario que las administraciones inviertan en políticas que faciliten los esfuerzos que realizan (o realizarían, en caso de recibir apoyo suficiente) muchas mujeres para conciliar vida privada y la vida profesional. En juego está el futuro de un número considerable de niños/as que, a causa de los ingresos inadecuados de sus progenitores, son más proclives a experimentar toda una serie de problemas a lo largo de su vida: desescolarización prematura, desordenes psicológicos, conductas asociales, embarazos prematuros, desempleo, divorcio.

En las condiciones actuales, los costes personales y sociales de un sistema de bienestar basado en los principios del familismo rebasan ya holgadamente los servicios prestados. Por mucho que sea el empeño, y no cabe duda que en las familias españolas éste nunca ha faltado, la institución familiar no consigue arropar a sus integrantes de la misma forma que lo hacía en el pasado. Todo parece indicar, además, que ciertos desarrollos sociales van a acentuar las tensiones y contradicciones del sistema de bienestar en que muchos españoles/as han depositando a lo largo de mucho tiempo su confianza. Aparentemente, las familias españolas sólo han comenzado a recorrer el camino que muchas sociedades europeas iniciaron hace ya dos o tres décadas en cuestiones como la incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico, el divorcio, la monoparentalidad o la adopción de estilos de socialización igualitarios de niños y niñas. La previsible consumación de estos procesos de convergencia obliga a plantearse qué márgenes y opciones de intervención pública en la provisión de bienestar existen, y cuáles de estas estrategias han demostrado su eficacia en países equiparables a España.

(cálculos propios a partir de la *Encuesta sobre cuentas familiares* de 1958 y la *Encuesta continua de presupuestos familiares* de 2000).

CONCLUSIONES

“Estoy cumpliendo los cuarenta, y eso lleva su tiempo”.

Harold Lloyd

La presente tesis doctoral es un análisis de la relación de los/as jóvenes con los sistemas de bienestar y, en particular, el lugar que ocupan en los *circuitos de solidaridad intergeneracional*. Esta centrada en el análisis sociológico de políticas sociales, del mercado laboral y de las transformaciones familiares, que afectan a los procesos de transición de los/as jóvenes a la vida adulta. Su foco de atención es la realidad española, aunque son constantes los análisis comparativos con otros países. La hipótesis de partida es que, durante las últimas décadas, se están produciendo alteraciones sustanciales de la estructura biográfica y de los niveles de bienestar que disfrutaban las personas en las distintas etapas del ciclo vital. Como consecuencia de estas transformaciones, las personas jóvenes están protagonizando una transición inédita a la vida adulta. El tiempo que pasan siendo jóvenes (esto es, no siendo niños/as ni personas adultas) se incrementa de forma considerable en las últimas décadas. Coincidiendo con esta dilatación de la juventud, los/as jóvenes se están perfilando como un colectivo con identidad e intereses diferenciados, determinados por su posición subordinada en la estructura social. Los datos y análisis presentados aquí demuestran que las estructuras de desigualdad intergeneracional, presentes en todas las sociedades, se están desequilibrando en perjuicio de las personas jóvenes. Estos desequilibrios afectan a los procesos de inserción laboral, la emancipación residencial, y la formación de nuevas familias. Hay razones para pensar que las desventajas experimentadas durante la juventud puedan arrastrarse a lo largo del ciclo vital, convirtiéndose en desventajas generacionales.

La presente investigación pone de relieve la importancia de la *edad* y la *generación* como factores de desigualdad. En todas las sociedades, la edad es uno de los criterios principales de diferenciación social. Determina el papel que las personas representan y el estatus que ocupan en gran número de instituciones sociales. La edad dicta la participación de una persona en el sistema educativo, las secuencias y trayectorias que sigue, así como los “logros” sociales que le corresponde haber alcanzado en cada momento. Es algo más que una categoría biológica. La edad es un factor social, que contribuye a emplazar a las personas en la estructura social. La dimensión

social de la edad cobra su verdadero significado sociológico en intersección con la evolución de las sociedades. Las personas de la misma edad —desde los lugares característicos que ocupan— están expuestas a circunstancias históricas similares en el mismo momento de sus biografías personales. Esto imprime un sentido diferenciado a sus vidas. Aquí se analizan algunas de las vicisitudes (demográficas, sociales, económicas y políticas) experimentadas en España por las personas que transitan a la vida adulta en las últimas dos décadas. Su vida viene marcada por cambios de gran significación en los mercados de trabajo, la familia, y los sistemas de protección social.

La juventud es una etapa crucial en la vida de las personas. Durante la juventud se acumulan algunos de los episodios de mayor trascendencia en la biografía individual: la emancipación económica y residencial, la formación de una unión conyugal o consensual, la paternidad o maternidad, etc. Los/as jóvenes se encuentran ante encrucijadas vitales que determinan en buena medida su destino personal futuro. Durante esos años de transición a la vida adulta, se concentra un número insólito de riesgos, que han sido objeto de estudio recurrente por parte de la Sociología, como embarazos no deseados, consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, comisión de faltas y delitos o accidentes de tráfico. A estos riesgos conocidos, hay que añadir en las últimas décadas los que se derivan de la vulnerabilidad creciente de los/as jóvenes en el mercado de trabajo y el desarrollo desequilibrado de los sistemas públicos de protección social, que dedican mayor atención a los colectivos de edad más avanzada. Todo ello se refleja en un incremento de los riesgos de pobreza entre los/as jóvenes de diversos países, dificultades crecientes para emanciparse, formar una pareja y tener hijos. El resultado final es un aumento del malestar juvenil con unas estructuras de bienestar incapaces de asegurarles las ventajas y privilegios de los que disfrutaron sus padres: empleo fijo, acceso a la vivienda en propiedad, la satisfacción de sus aspiraciones a la fecundidad, protección social ante la eventualidad del desempleo o una pensión.

Hace sólo unas décadas, el enfoque sociológico predominante consideraba —con buen criterio— que la juventud venía definida fundamentalmente por su carácter transicional, y como tal debía ser estudiada. En la actualidad, es dudoso que pueda seguir analizándose la juventud meramente como una transición, y no como una auténtica condición o estado social, en que las personas ocupan una posición social singular y se enfrentan a riesgos sociales característicos. Hace unas décadas, la mayoría de las personas que hoy llamamos

“jóvenes” transitaban apresuradamente de la infancia a la vida adulta. Hoy, gran número de ellos/as viven atrapados durante etapas prolongadas de su vida en una suerte de limbo social, donde viven “estancados” a la espera de que surjan oportunidades para convertirse en personas adultas. La transición de la formación al trabajo se alarga. Una proporción creciente de jóvenes españoles estudian más años. La salida del sistema educativo inaugura una etapa de incertidumbres, en que resulta difícil hacer planes de futuro. Con la finalización de los estudios muchos/as jóvenes atraviesan un largo periplo —de búsqueda de primer empleo, trabajos precarios, períodos de desempleo y formación ocupacional— hasta encontrar un empleo estable. Según datos del *Panel de hogares de la Unión Europea*, España es el país europeo donde los jóvenes tardan más en encontrar su empleo. También es uno de los países en que tardan más en conseguir un contrato estable. Durante estos años de espera, la experiencia de tener un empleo apenas contribuye a la emancipación económica. Muchos/as disponen de ingresos propios, pero esos recursos resultan insuficientes para emprender un proyecto de vida autónomo.

En España las políticas de regulación del mercado de trabajo han producido un deterioro de la calidad del empleo, que afecta de forma diferenciada a los trabajadores/as a lo largo del ciclo vital. Las evidencias empíricas presentadas en el capítulo tercero avalan la existencia de una segmentación entre trabajadores/as que tienen empleos de tipo estable, bien remunerado y que confieren derechos a prestaciones sociales a los trabajadores/as y a sus familias (*insiders*), vis a vis una masa de trabajadores/as con vinculaciones precarias al mercado laboral, sueldos bajos y derechos restringidos (*outsiders*). Estos últimos suelen enfrentarse a etapas cada vez más largas de inserción laboral. En un mercado laboral segmentado, los riesgos de pérdida de empleo se concentran en esos *outsiders*. Las barreras para desprenderse de trabajadores/as con contrato indefinido en situaciones económicas desfavorables —debido fundamentalmente a elevados costes de despido— empujan a los empresarios a concentrar los reajustes de plantilla en una bolsa de trabajadores “desechables” que la legislación permite contratar de forma flexible. Los resultados del análisis de los períodos de contracción del ciclo económico en España en las últimas dos décadas, presentados en el capítulo tercero, revelan que las mayores pérdidas de empleo se producen dentro de los colectivos juveniles.

Ligados a la precariedad contractual, aparecen otros ejes de desigualdad. Algunos de los efectos más importantes de la segmentación laboral estudiados aquí tienen que ver con la dualización en la calidad del empleo en cuestiones como el empleo a tiempo parcial, las

remuneraciones salariales, los beneficios no salariales o las oportunidades de participación en las organizaciones en las que trabajan. Los datos apuntan en general en la misma dirección. Los/as jóvenes se ven abocados a menudo a trabajos a tiempo parcial contra su voluntad, como una forma de precariedad contractual y salarial. La proporción de empleos a tiempo parcial que se realizan bajo modalidades de contratación temporal prácticamente dobla a la de los empleos a tiempo completo. La renta salarial que recibe un trabajador a tiempo parcial suele ser significativamente más baja que la que recibe un trabajador a tiempo completo, a igualdad de condiciones. Las desventajas salariales de los/as jóvenes son también habituales en empleos a tiempo completo. La incidencia del empleo de baja remuneración afecta a algo más de uno de cada cuatro trabajadores de 16 a 25 años y disminuye de forma drástica en edades más avanzada. Los trabajadores/as jóvenes sufren una doble penalización: la de trabajar mayoritariamente en empleos temporales (que tienden a pagar menos) y la de ser jóvenes. Los resultados presentados en el capítulo tercero ponen de relieve que, con independencia del carácter permanente o temporal de su trabajo y de otras características individuales —del empleo y del entorno laboral— las personas jóvenes tienden a percibir salarios más bajos que los trabajadores/as veteranos. A esas situaciones de desventaja en el terreno contractual y salarial hay que sumar desigualdades en beneficios no salariales y oportunidades de participación en la empresa. En general, las empresas tienen menor interés en conceder beneficios no salariales a los trabajadores/as con los que mantienen vinculaciones débiles. Ello explica que, entre los trabajadores/as jóvenes (donde se concentra la temporalidad) la proporción que percibe una paga extraordinaria, la que tiene seguro médico o la que recibe formación se reduce de forma considerable. Los/as jóvenes ocupan además posiciones subordinadas en las relaciones de control dentro de la empresa, incluso cuando sus credenciales educativas o su experiencia en el desempeño del trabajo son similares a las de otros trabajadores/as. Las posiciones de supervisión e influencia tienden a estar monopolizadas por trabajadores/as de edad más avanzada.

En este contexto laboral desfavorable, otras pautas de comportamiento de los/as jóvenes también cambian. Una de las transformaciones más significativas de las últimas décadas es el retraso de la emancipación y la formación de una nueva familia. Los españoles/as abandonan el hogar de sus padres cada vez más tarde. A lo largo de la segunda mitad de los ochenta y buena parte de los noventa se incrementa el porcentaje de jóvenes que trabajan pero continúan viviendo con sus padres. Entre 1986 y 2002, la proporción de jóvenes de 20 a 29 años que trabajan y viven

con sus padres pasa de del 19% al 39% del total de jóvenes de esas edades. Paradójicamente, la reducción del desempleo durante esos años no se traduce en un retorno a pautas de emancipación vigentes en el pasado. Esto ha llevado a la Sociología española a plantearse dos hipótesis: (1) los/as jóvenes permanecen en casa de sus padres porque esta opción les resulta cada vez más conveniente; y (2) los/as jóvenes se enfrentan a dificultades económicas que dificultan la emancipación. Las evidencias presentadas en el capítulo cuarto respaldan la segunda de las explicaciones. Los datos no avalan la idea de que los/as jóvenes que viven en situaciones “ventajosas” (poco control social por parte de sus padres y escasa carga de obligaciones domésticas) muestren una motivación menor por abandonar el hogar de sus padres que los/as jóvenes en entornos familiares menos atractivos. Sugieren, en cambio, que existe una relación estrecha entre aspectos económicos y emancipación. A nivel micro, la probabilidad de que los/as jóvenes se planteen la posibilidad de independizarse es mayor cuando cuentan con recursos propios (a igualdad de otras condiciones). A nivel macro, puede advertirse que existe una relación estrecha entre coste de acceso a la vivienda para un hogar joven (de 25 a 29 años), o las condiciones laborales en las distintas Comunidades Autónomas, y el porcentaje de jóvenes que ya han abandonado la casa de sus padres.

Cuando finalmente abandonan el hogar de sus padres, tal y como sucedía en el pasado, la mayoría de los/as jóvenes lo hacen para vivir en pareja. Pero no todos eligen —al menos en primera instancia— la convivencia matrimonial. Las trayectorias de emancipación se desestandarizan. Algunos/as jóvenes *cohabitan* durante un período, antes de formalizar su relación o de disolverla. Pocos se plantean la cohabitación como una opción definitiva. La mayoría de los/as jóvenes optan al final por casarse. Pero lo hacen bastante más tarde que sus progenitores. A inicios del siglo XXI la edad media al contraer el primer matrimonio alcanza máximos históricos. También aumenta de forma considerable la edad media a la primera maternidad. Actualmente la mayoría de las mujeres españolas tiene su primer hijo/a superado el umbral de los treinta años. Además un número creciente de mujeres no tienen hijos/as propios.

Como consecuencia de todos estos cambios, los/as jóvenes de hoy están llamados a vivir una vida distinta a la de sus padres. Las trayectorias que se les presentan por delante no coinciden habitualmente con sus aspiraciones, similares a las que podían albergar sus progenitores cuando eran jóvenes. Pese al calado de las transformaciones sociales, los datos actitudinales presentados aquí evidencian una continuidad clara entre generaciones en cuanto a orientaciones hacia la

carrera laboral y familiar. La transición a la vida adulta que realizaron las generaciones anteriores es un patrón valorado, que se intenta imitar. La mayoría de jóvenes expresa una preferencia por la emancipación temprana. Siguen deseando encontrar un puesto de trabajo fijo, consolidar su relación de pareja a través del matrimonio, y tener hijos/as. Pero los tiempos han cambiado. En los últimos años se está produciendo un desajuste creciente entre preferencias y pautas impuestas por la realidad. Entre los 16 y 29 años, el porcentaje de jóvenes que desean vivir independientes se mantiene bastante por encima de los que lo consiguen. Existe asimismo una brecha entre el promedio de hijos/as deseados y el número que se cree que se llegará a tener, que se ensancha a medida que los/as jóvenes se hacen mayores. Detrás de esos desajustes hay causas fundamentalmente económicas. La mayoría de jóvenes que trabajan pero no disponen de vivienda propia argumentan que no pueden pagar todos los gastos que conlleva la emancipación. De forma similar, la mayoría de jóvenes que cree que no llegará a tener el número de hijos/as que le gustaría aduce la falta de ingresos y la inseguridad laboral como motivos principales.

La presente investigación dedica una atención considerable a las condiciones económicas y políticas en que emergen las *nuevas modalidades de transición a la vida adulta* en España. El cambio biográfico está ligado a transformaciones de naturaleza global y local. En el contexto de un régimen económico crecientemente globalizado, diversos factores estructurales (especialmente, la intensificación de la competitividad empresarial a escala internacional y cambios en la estructura de la demanda) configuran desde finales de la década de los setenta un marco nuevo de funcionamiento de las economías capitalistas en que las empresas consiguen arrancar a los gobiernos concesiones pro-capitalistas. Las políticas de desregulación del mercado de trabajo son un paso decisivo en esa dirección. A partir de la mitad de la década de los ochenta, en España el primer gobierno socialista impone una reorganización de las condiciones de contratación que facilita la adaptación de las empresas a escenarios económicos cambiantes con el objetivo de contrarrestar la destrucción acelerada de empleo que tiene lugar desde finales de la década de los setenta. En poco tiempo se invierte la tendencia y la economía española empieza a crear empleo. La mayor parte de este empleo es de carácter precario. En el capítulo quinto se estudian las condiciones políticas y sociales en que se tomó la decisión de flexibilizar el mercado de trabajo para afrontar problemas “de entrada”, renunciando a corregir problemas de rigidez relacionados con las restricciones legales para el ajuste del empleo a través del despido. Como resultado de esta decisión, el mercado de trabajo español presenta una estructura segmentada, con

un componente generacional claro. La precariedad laboral, los salarios bajos y la falta de derechos sociales se concentran en los grupos de trabajadores/as más jóvenes.

La reforma laboral contribuye a consolidar un nuevo régimen de distribución de riesgos sociales a lo largo del ciclo vital. En ese contexto, los/as jóvenes son los más expuestos a la inseguridad laboral y los menos protegidos frente a la eventualidad del desempleo. En el curso de tres legislaturas, las políticas de empleo del PSOE contribuyen a reducir el número de jóvenes desempleados/as, pero no el de jóvenes dependientes de sus padres, desde el punto de vista económico o residencial. Las políticas del partido socialista fueron alejándose progresivamente de uno de sus grandes objetivos iniciales: corregir situaciones de injusticia y marginalidad que afectaban a los/as jóvenes, reclamando para ello la solidaridad del resto de la sociedad. Durante los catorce años de gobierno socialista —1982-1996— las políticas de protección social cuyos beneficiarios/as son las personas jóvenes se desarrollan poco, a diferencia de lo que sucede con las políticas de apoyo a colectivos de edad más avanzada, que experimentan un gran avance. Esto es evidente en tres ámbitos de política pública especialmente relevantes para la juventud en un contexto en que las necesidades aumentan: protección social por desempleo, política de vivienda y política familiar.

El sistema de protección estatal por desempleo desarrollado en esta etapa persigue el mantenimiento de las rentas de los desempleados/as de edad más avanzada y con responsabilidades familiares, ignorando a las personas jóvenes con dificultades de inserción laboral. El porcentaje de personas de edad avanzada (56 a 64 años) en paro que en 1996 reciben una prestación contributiva o subsidio de desempleo es tres veces más alta que el de personas desempleadas de 18 a 25 años, a pesar de que las tasas de desempleo más altas se concentran en esta última franja de edad. Cuando esos jóvenes reciben prestaciones, son sustancialmente más bajas que las de los desempleados/as más veteranos. Las iniciativas encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda son escasas y poco efectivas. La falta de atención a la política de vivienda coincide con la llegada de las cohortes más numerosas en la pirámide demográfica española a la edad de emancipación y de formación potencial de familias. La principal ayuda financiera del Estado durante estos años se basa en la deducción fiscal por compra de una vivienda, lo que favorece a familias con rentas altas y contribuye al incremento de los precios de la vivienda. La participación directa de la Administración Pública en la promoción de vivienda pública se mantiene a niveles bajos a lo largo del período. Las intervenciones públicas para favorecer el

desarrollo del mercado de alquiler son inefectivas y no consiguen frenar la caída de la tenencia en régimen de alquiler. Tampoco existe una apuesta por el alquiler social, como sucede en países del norte de Europa. Con ello se contraen las oportunidades de acceso a la vivienda para los/as jóvenes con pocos recursos y un grado elevado de inseguridad laboral (condiciones que imposibilitan optar a la compra de una vivienda). El panorama es parecido si se examina las políticas de apoyo a las familias jóvenes. Las reformas políticas en materia de política familiar avanzan a un ritmo lento en el preciso momento en que las necesidades de las familias jóvenes se agudizan como consecuencia de la rápida incorporación de las mujeres jóvenes al mercado laboral. Los programas de apoyo económico a las familias son modestos y tienen una cobertura escasa. Las dotaciones para crear guarderías públicas son insignificantes, contribuyendo a situar a España a la cola de Europa en la proporción de niños/as de menos de tres años cuidados en centros públicos. El reflejo de estas insuficiencias es el descenso de las tasas de fecundidad, que alcanza en la mitad de la década de los noventa mínimos mundiales.

Los sesgos de la protección social son el resultado de una configuración de la agenda política donde los intereses y demandas de los jóvenes encuentran acomodo difícil. Como se muestra en el capítulo quinto, durante los años ochenta y primera mitad de los noventa, el gobierno socialista acomete reformas ambiciosas, dando respuesta a las demandas y anhelos de numerosos grupos sociales vulnerables. La política social se convierte en la seña de identidad de los gobiernos socialistas. Pero no todas las iniciativas de política social reciben el mismo impulso. Gracias a las políticas socialistas en pensiones, sanidad y desempleo se recorta la distancia en gasto social entre España y los países de la Europa más avanzada. Detrás del impulso que reciben esas políticas pueden encontrarse, por un lado, la acción decidida de “valedores”, y por otro, estrategias electorales para afianzar una base electoral amplia y estable. Las políticas de representación sindical en defensa de los/as *insiders* juegan un papel de primer orden en el desarrollo y consolidación de sistemas de protección sesgados a favor de las personas de edad más avanzada. Las contrapartidas que los sindicatos demandan al gobierno a cambio de la aceptación de la reorganización del marco laboral pasan a menudo por el desarrollo de políticas de mantenimiento de rentas para los desempleados/as de edad avanzada, así como el incremento de la intensidad protectora y la cobertura de las pensiones. En contraste, las cuestiones que atañen al bienestar de los/as jóvenes quedan relegados ante el déficit de “promotores” capaces de trasladar visiones y propuestas a los responsables políticos. La voz de los/as jóvenes no encuentra

eco en el Parlamento, donde la proporción de diputados/as socialistas menores de treinta años disminuye gradualmente. Dentro del Partido Socialista, la organización juvenil rara vez cuestiona las líneas de actuación del gobierno. En un partido caracterizado por su capacidad de control sobre la militancia, los/as dirigentes de Juventudes Socialistas exhiben un grado de disciplina elevado, mostrándose insensibles al rechazo que las políticas del gobierno están provocando en otras organizaciones juveniles o entre segmentos del electorado joven. Cuando las Juventudes Socialistas alzan su voz de protesta, lo suelen hacer para reclamar mayor representación en cargos institucionales o en los órganos de gobierno del PSOE.

Otro factor que contribuye a explicar la desatención a los asuntos que conciernen a los jóvenes y la prioridad concedida a otros temas durante esos años son los cálculos electorales que realiza el partido en el gobierno. A lo largo de las cuatro legislaturas el apoyo electoral al PSOE se fue concentrando progresivamente en los segmentos de edad más avanzada. Entre las elecciones de 1982 y 1993, a pesar de la erosión que supone la presencia en el gobierno durante tantos años, el PSOE incrementa su apoyo entre los colectivos de 65 y más años en un seis puntos. La fidelidad de estos colectivos al PSOE refleja estrechamente su valoración de las actuaciones del gobierno en aquellos ámbitos que más los favorecen: sanidad y pensiones. Los resultados de los análisis multivariantes presentados en el capítulo quinto demuestran también que el voto de las personas mayores de sesenta años es insensible a la valoración de las políticas que interesan a colectivos más jóvenes (paro, educación y vivienda).

El apoyo al PSOE se desgasta entre los/as jóvenes, especialmente entre aquellos/as que valoran negativamente la gestión del gobierno en relación a las políticas que los afectan más directamente. Entre 1982 y 1993, el apoyo electoral al PSOE de los/as jóvenes de 18 a 24 años disminuye a menos de la mitad y el de las jóvenes maduras (25 a 34) se reduce en algo más de una tercera parte. Pero ese descontento no se traduce en incrementos significativos del voto al principal partido de la oposición. Por un lado, el voto de los jóvenes depende tanto de su rechazo a la labor del PSOE en cuestiones que atañen al bienestar de la juventud como de su valoración de otras actuaciones del gobierno en materia social (que tienden a ver con buenos ojos). Por otro lado, los niveles relativamente bajos de participación electoral de la juventud (en comparación con otros grupos) y el escaso atractivo de Alianza Popular (después Partido Popular) entre los votantes más jóvenes contribuyen a reducir los riesgos que entraña para el PSOE la pérdida de apoyo de este electorado como respuesta a políticas poco sensibles a sus intereses. Los jóvenes

descontentos con la labor del gobierno no representaron una amenaza para la hegemonía electoral del PSOE de la misma magnitud que una posible desafección del electorado de edad avanzada.

El PSOE descubre que las políticas orientadas preferentemente a la gente mayor influyen en el voto de éstos, pero también pueden arrastrar votantes de otros grupos de edad, y apuesta de forma decidida por ellas. Las cuatro legislaturas socialistas son años de expansión de los programas diseñados para mejorar la condición de las personas de 65 y más años. A resultas de estas iniciativas, tanto el gasto en pensiones como en atención sanitaria se incrementa de forma notable. Las evidencias presentadas en el capítulo sexto sugieren que aumentan tanto la cobertura como la intensidad protectora de los programas que benefician a las personas de 65 y más años. Gracias a estos desarrollos, se incrementa el número de pensionistas, se universaliza el acceso a la atención sanitaria y mejora el valor real de las pensiones (especialmente de las más bajas). Los sistemas de protección contribuyen a mejorar de forma considerable las condiciones de vida de la población anciana. Desde hace algo más de una década se produce un afianzamiento claro de la situación económica de los hogares cuya persona de referencia es mayor de 65 años. Sus niveles de renta y capacidad de gasto se incrementan y la incidencia de la pobreza disminuye. Hoy en día, la mayoría de trabajadores/as en activo encara su jubilación sin inquietud. La transición a la “tercera edad” trae consigo, para muchas personas, el cese o reducción de responsabilidades y un incremento del control sobre su tiempo. Gracias a los avances médicos y el acceso universal a la atención sanitaria, las personas en la franja de los 60-70 años se encuentran a veinte o treinta años de su muerte, muchos de los cuáles van a disfrutar en uso pleno de sus facultades físicas y mentales. Por todo ello, la vejez ha dejado de ser una etapa biográfica en la vida que las personas viven desde la marginalidad y el desconsuelo. El nivel de satisfacción con la vida o de felicidad que declaran las personas ancianas es sólo ligeramente inferior al de las personas más jóvenes. Si se controla estadísticamente por su estado de salud y estudios (es decir, a igualdad de condiciones), esa pequeña diferencia desaparece.

La coincidencia del empeoramiento de las condiciones de vida de la población joven y la mejora del bienestar económico y social de los colectivos de edad avanzada —en un contexto de envejecimiento acelerado de la pirámide demográfica y reorganización de los ciclos vitales— alimenta cada vez mayor reflexión y debates acerca de la adecuación de los sistemas de protección a nuevas necesidades y demandas. Los/as jóvenes de hoy acumulan motivos para sospechar que el Estado de Bienestar no está en condiciones de ofrecerles garantías de protección

ni en el presente, ni previsiblemente en el futuro. Aunque se hayan convertido en un colectivo vulnerable —expuesto a muchos riesgos— los sistemas de protección tienden a desatender sus necesidades, y gravan de forma onerosa (y regresiva) sus rentas de trabajo en cuanto, tras muchos avatares, consiguen estabilizarse en el mercado laboral. Su confianza en la capacidad del Estado para hacer frente a los compromisos adquiridos puede verse erosionada a medida que el envejecimiento demográfico imponga cargas fiscales cada vez mayores.

En los últimos tiempos, desde instancias diversas, se está cuestionado el *contrato intergeneracional* que fundamenta la arquitectura del Estado de Bienestar. Un número creciente de expertos/as alerta que la transformación de la composición demográfica de la población hace inviable el mantenimiento a largo plazo de los compromisos que el sistema público adquiere con las generaciones que vayan a jubilarse en el futuro. El envejecimiento de la población es visto como una amenaza para la competitividad de la economía y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Según esta retórica, de no cambiar nada, los déficits fiscales en que deberá incurrir el Estado para financiar los programas destinados a personas de edad avanzada pueden dificultar el desarrollo de políticas en favor de los colectivos más jóvenes. El peso demográfico creciente de la población anciana en la sociedad la convierte no sólo en una amenaza económica para los Estados de Bienestar, sino también en una amenaza política, dado que su tamaño demográfico pueda traducirse previsiblemente en el fortalecimiento de las opciones políticas que muestren mayor sensibilidad hacia las cuestiones que preocupan a este colectivo.

Hasta el momento la crisis intergeneracional parece más teórica que real. Todas las generaciones —incluso las más jóvenes— siguen expresando un apoyo mayoritario a los programas de protección destinados a personas de edad avanzada. Pero conviene situar este apoyo en un contexto en que la mayor presión sobre los recursos públicos, y con ello, los posibles conatos de competición intergeneracional, están por llegar. En los últimos años, coincidiendo con el agravamiento de las dificultades de transición a la vida adulta, los/as jóvenes están cobrando conciencia de su situación de desventaja. En varios países (Francia, Chile, Grecia, España) miles de jóvenes se lanzan a la calle para reivindicar cuestiones de índole material, ligadas a experiencias biográficas de precariedad. El descontento juvenil se refleja también en una intensificación de las demandas al Estado para que asuma mayores responsabilidades de protección social. Actualmente, en comparación con otros grupos, la juventud muestra un nivel alto de insatisfacción con las inversiones que realiza el Estado en materia social. Los datos

presentados en el capítulo séptimo sugieren que, en ámbitos como la enseñanza, el desempleo o la vivienda, personas jóvenes y ancianas muestran discrepancias significativas respecto la dosis de responsabilidad que debe asumir el Estado.

Uno de los motivos principales para pensar que la confrontación intergeneracional puede intensificarse en el futuro es el declive del familismo. En España, las prácticas familistas han sido el mecanismo más importante de desactivación de los agravios de índole económica y material. Durante años, las familias han ofrecido a los/as jóvenes en situación de precariedad techo y sustento, han financiado la prolongación de sus carreras educativas, y han participado activamente en el proceso de búsqueda de un empleo para sus hijos/as. En los nuevos escenarios demográficos y laborales, es probable que las familias no puedan desempeñar esos cometidos con la misma efectividad. La prolongación de los períodos de convivencia de los hijos/as con sus padres está revelándose como una solución que provoca disgustos y frustraciones. Los/as jóvenes se ven abocados a retrasar el momento de la emancipación y formación de una nueva familia, con el consiguiente riesgo de que no vayan a colmar sus aspiraciones de fecundidad. Los padres se enfrentan, en un momento en que se les acumulan los retos profesionales, a una sobrecarga de responsabilidades que puede originar tensiones y episodios de estrés. La confluencia de dos fenómenos demográficos aparentemente independientes, como son la mayor longevidad de la población anciana y la emancipación tardía de los jóvenes, emplaza a la generación intermedia en una nueva posición estructural, en que las “obligaciones intergeneracionales” respecto a sus hijos/as y sus padres tienden a solaparse durante un período cada vez más prolongado. Esto puede dar lugar a una multiplicación de demandas económicas, afectivas y asistenciales difíciles de compaginar derivadas de hijos/as que prolongan su estancia en casa de sus padres o no tienen recursos suficientes para mantener su autonomía residencial, y abuelos/as que, por razones de salud o discapacidad, requieren de atención y cuidados.

En los nuevos escenarios laborales la familia ha perdido eficacia como “agencia de colocación”. Por un lado, las estrategias familiares de prolongación del esfuerzo inversor en la educación de los hijos/as no consiguen siempre lo que se proponen. Un número considerable de estudiantes que prosiguen sus estudios con la intención de alcanzar el estatus social de sus familias, nunca consiguen finalizarlos. Entre quienes sí lo hacen, la posesión del título ya no asegura que el/la joven pueda esquivar los riesgos del desempleo y la precariedad. Por otro lado, la capacidad de las redes personales para apoyar en la búsqueda de empleo disminuye en un

marco laboral en que la rotación laboral está a la orden del día. La mayor parte de los desempleados/as jóvenes son “parados experimentados”, que han atravesado varias situaciones de empleo y desempleo. Sus estrategias más comunes de búsqueda de empleo son la de dirigirse directamente a los empresarios/as o recurrir a agencias de colocación.

Pero el factor que está contribuyendo más que ningún otro a socavar las bases del familismo como mecanismo de *solidaridad intergeneracional* es la determinación de las mujeres a proseguir sus carreras laborales. En el curso de pocos años muchas mujeres jóvenes han superado escollos culturales aparentemente insalvables —como la reticencia a dejar a sus hijos/as pequeños al cuidado de otras personas— y siguen mayoritariamente en el mercado de trabajo tras el nacimiento de sus hijos/as. El número de mujeres que ejerce sólo de amas de casa está disminuyendo rápidamente y, con ello, el pilar que apuntala el régimen familista. Los ingresos que aportan las madres son cada vez más decisivos para proteger a las familias con hijos/as del riesgo de pobreza. Las “abuelas-mama”, que habiendo cuidado a sus propios hijos/as son reclamadas para hacerse cargo de sus nietos/as, comienzan a ser reemplazadas por abuelas que participan en el mercado laboral, con menos tiempo para ejercer de “madres sustitutas”. En estas condiciones, la familia es cada vez menos una entidad autosuficiente. El déficit de servicios públicos de apoyo a la familia se está convirtiendo en los tiempos que corren en el talón de Aquiles de los sistemas de protección.

El destino inmediato de la sociedad española es salir de la encrucijada en que actualmente se encuentra. La crisis de legitimidad y eficacia del familismo nos aboca colectivamente a tener que escoger entre un modelo en que la mayoría de las actividades que se realizaban tradicionalmente en el seno del ámbito doméstico pasan a mercantilizarse, y otro en que se conviertan en objeto de planificación pública. Cuanto más largo sea este periodo de indeterminación, más probable es que el modelo que termine imponiéndose sea el que transfiere las responsabilidades domésticas al mercado. Las inercias juegan a favor de una solución de corte “liberal”. En los tiempos que corren, de globalización de mercados y estrangulamiento fiscal de los Estados del Bienestar, sobran razones para pensar que la administración pública tenderá a mostrarse reacia a asumir compromisos sociales adicionales. Sin embargo, no es menos cierto que la apuesta por la opción liberal entraría en contradicción con un estado de opinión latente que aboga por que sea el Estado el que descargue a las familias de sus responsabilidades más onerosas y facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. Los “Estados-providencia para la

vejez” dejan cada vez más necesidades insatisfechas, en especial las de los segmentos más jóvenes de la ciudadanía. Es previsible que el desenlace de la situación actual dependa, en gran medida, de que las desigualdades intergeneracionales se conviertan en materia de conflicto político. En un contexto de rápido envejecimiento del electorado, las ventanas de oportunidad para tomar decisiones que corrijan esas desigualdades se cierran. *Tempus fugit.*

BIBLIOGRAFÍA

- Aguila, Rafael del (1988) “El problema del diseño político de la transición en España”, *Documentación Social* 73 (octubre-noviembre): 25-40.
- Ahn, Namkee, José Alonso Meseguer, y José. A. Herce (2003) “Gasto sanitario y envejecimiento de la población en España”, *Documentos de Trabajo* 7. Madrid: Fundación BBVA.
- Alberdi, Inés (1999) *La nueva familia española*. Madrid: Taurus.
- (1995) *Informe sobre la situación de la familia en España*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
- Andrés Orizo, Francisco (1996) *Sistema de valores en la España de los 90*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Aran Bares, María, Rosa Gispert, Xavier Puig, Adriana Freitas, Gloria Ribas y Anna Puigdefábregas (2006) “Evolución temporal y distribución geográfica de la mortalidad por suicidio en Cataluña y España (1986-2002)”, *Gaceta Sanitaria* 6: 473-480.
- Astudilllo, Javier (1998) *Los recursos del socialismo: Las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT (1982-1993)*. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, tesis doctoral.
- Attias-Donfut, Claudine y François C. Wolff (2000), “The redistributive effects of generational transfers”, pp 22-46, en Sara Arber y Claudine Attias-Donfut (eds.), *The Myth of Generational Conflict: The Family and State in Ageing Societies*. Londres: Routledge.
- Auerbach, Alan, Jagadeesh Gokhale, y Laurence J. Kotlikoff (1994) “Generational accounting: A meaningful way to evaluate fiscal policy”, *Journal of Economic Perspectives* 8 (1): 73-94.
- Ayala, Luis, Rosa Martínez, y Jesús Ruiz-Huerta (1995) *La distribución de la renta en España desde una perspectiva internacional: Tendencias y factores de cambio*. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
- Banco de España (2004) “Encuesta financiera de las familias (EFF): Descripción, métodos y resultados preliminares”, pp. 61-82, *Boletín Económico* 11. Madrid: Banco de España.
- Banfield, Edward (1967) *The Moral Basis of a Backward Society*. Nueva York: Free Press.
- Bauman, Zigmunt (2003) *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*. Cambridge, Reino Unido: Polity Press.
- Bazo, María Teresa (2002) “Dar y recibir: Análisis comparativo de las prácticas de intercambio entre generaciones. Preferencias y valores en las familias españolas”, *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado* 45: 55-65.
- (2001) “Intercambios familiares entre las generaciones y ambivalencia: Una perspectiva internacional comparada”, *Revista Española de Sociología* 2: 117-128.
- Beck, Ulrich (2000) *La precarización del trabajo en la era de la globalización*. Barcelona: Paidós.
- (1998) *La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Becker, Gary (1985) “The capital, effort, and the sexual division of labor”, *Journal of Labor Economics* 31: 553-558.
- (1981) *A Treatise on the Family*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Bengston, Vern L. (1993) “Is the ‘contract across generations’ changing? Effects of population aging on obligations and expectations across age groups”, pp.3-23 en Vern L. Bengston y

- Andrew W. Achenbaum. (eds.), *The Changing Contract Across Generations*. Nueva York: Aldine de Gruyter.
- (1989) “The problem of generations: Age group contrasts, continuities and social change”, pp. 25-54 en Vern L. Bengtson y K. Warner Schaie (eds.), *The Course of Later Life: Research and Reflections*. Nueva York: Springer.
- Bentolina, Samuel y Juan J. Dolado (1994) “Labor flexibility and wages: Lessons from Spain”, *Economic Policy* 18: 54-99.
- Berger, Peter L. y Thomas Luckmann (1966) *The Social Construction of Reality. A Treatise in Sociology of Knowledge*. Nueva York: Random House.
- Binstock, Robert H. (2000) “Old age policies, politics, ageism”, *Generations* 29 (3): 73-78.
- Bison, Ivano y Gösta Esping-Andersen (2000) “Unemployment, welfare regimes and income packaging”, pp. 69-86 en Duncan Gallie y Serge Paugam (eds.) *Welfare Regime and the Experience of Unemployment in Europe*. Nueva York: Oxford University Press.
- Blanchflower, David G. y Richard B. Freeman (2000) “The declining economic status of young workers in OECD countries”, pp. 19-56, en David G. Blanchflower y Richard B. Freeman (eds.), *Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Boeri, Tito, Alex Boersch-Supan y Guido Tabellini (2001) “Would you like to shrink the Welfare State? The opinions of European citizens”, *Economic Policy*, 16(32): 7-50.
- Boix, Carles (1996) *Partidos políticos, crecimiento e igualdad: Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*. Madrid: Alianza.
- Bourdieu, Pierre (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- y Jean-Claude Passeron (1979) *The Inheritors*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bradshaw, Jonathan (2006) “Child benefit packages in 15 countries in 2004”, pp. 69-89 en Jane Lewis (ed.), *Children, Changing Families and Welfare States*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
- Breen, Richard (1997) “Risk, recommodification and stratification”, *Sociology* 31 (3): 473-389.
- Bricall, Josep M. (2000) *Informe Universidad 2000*, Madrid: Secretaría General de la CRUE. Conferencia de Rectores de las Universidades españolas consultado en www.crue.org/informe2000.htm.
- Brinton, Marie C. y Hang-Yue Ngo (1993) “Age and sex in the occupational structure: A United States-Japan comparison” *Sociological Forum* 8: 93-111.
- Budge, Ian, David Robertson y Derek Hearl (1987) *Ideology, Strategy and Party Change. Spatial Analysis of Post-War Election Programmes in 19 Democracies*. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
- Campo, Salustiano del (1982) *La evolución de la familia española en el siglo XX*. Madrid: Alianza.
- y Manuel Navarro (1985) *Análisis sociológico de la familia española*. Barcelona: Ariel.
- Carabaña, Julio (1999) *Dos estudios sobre movilidad intergeneracional*. Madrid: Fundación Argentaria.
- (1996) “¿Se devaluaron los títulos?”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 75:173-213.
- Castilla, Emilio J. (1998) *Análisis dinámico*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Castles, Francis G. y Mauricio Ferrera (1996) “Home ownership and the Welfare State: Is Southern Europe different?”, *Southern European Society and Politics* 1 (2): 163-185.

- Castro, Teresa (1999) "Pautas recientes en la formación de pareja", *Revista Internacional de Sociología* 23: 61-94.
- Centro de Investigaciones Sociológicas (2004) *Datos de Opinión* 34. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Disponible online en www.cis.es.
- (1995) *Datos de Opinión* 2. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. En www.cis.es.
- Cerviño, Emma (2003) *Políticas de representación sindical: UGT y CCOO ante el empleo temporal 1977-1997*. Madrid: Fundación Juan March.
- CIRES (1994) *Demandas sociales de bienestar*. Madrid: Centro de Estudios sobre la Realidad Social.
- Comas, Domingo (ed.) (2003) *Jóvenes y estilos de vida: Valores y riesgos en los jóvenes urbanos*. Madrid: INJUVE y FAD.
- Comisión Europea (2008) *Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008*. Bruselas: Comisión Europea.
- (1997) *Youth in the European Union: From Education to Working Life*. Luxemburgo: Office for Official Publications of the European Communities.
- Conde-Ruiz, José I., y José Alonso Meseguer (2004) "El futuro de las pensiones en España: Perspectivas y lecciones", *Documentos de Trabajo* 3. Madrid: Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
- Consejo de la Juventud en España CJE (2004) *Boletín 7 Observatorio Joven de Vivienda en España* disponible en www.cje.org/actividades.nsf/docs/5LVHAZISAZ!opendocument.
- Costa, Dora L. (1998) *The Evolution of Retirement*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cruz, Laura (2000) *Gobiernos, mercado de trabajo y formación profesional: Un análisis comparativo de España y Gran Bretaña*. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, tesis doctoral.
- Cruz Cantero, Pepa, y Paloma Santiago Gordillo (1999) *Juventud y entorno familiar*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- y Rosa Cobo (1991) *Las mujeres españolas: Lo privado y lo público*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Chacón Rodríguez, Lorenzo (2004) "Economía y empleo: procesos de transición", pp.151-276, en *Informe de la Juventud en España 2004*. Madrid: Instituto Nacional de la Juventud.
- Chari, Raj (2001) "The EU 'dimensions' in economic policy-making at the domestic level: Evidence from labor market reform in Spain", *South European Society & Politics* 6 (1): 51-74.
- Cherlin, Andrew J. (2000) "Toward a new socioeconomics of union formation", pp.126-146 en Linda Waite (ed.), *The Ties That Bind: Perspectives on Marriage and Cohabitation*. Nueva York: Aldine de Gruyter.
- DiMaggio, Paul (1982) "Cultural capital and school success", *American Sociological Review* 47: 189-201.
- Dundes, Lauren y Jeff Marx (2006) "Balancing work and academics in College: Why do students working 10 to 19 hours per week excel?", *Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice* 8 (1): 107-120.
- Durán, María Ángeles (1986) *La jornada interminable*. Barcelona: Icaria.
- Durkheim, Émile (2003) *El suicidio*. Barcelona: Akal. La edición original en francés es del año 1898.
- Easterlin, Richard (1987) *Birth and Fortune: The Impact of Numbers on Personal Welfare*. Chicago: Chicago University Press.

- Ecofin (2000) *Progress Report to the Ecofin Council on the Impact of Ageing Populations on Public Pension Systems*. Bruselas: Ecofin.
- Elder, Glen H. (1974) *Children of the Great Depression*. Chicago: University of Chicago Press.
- Elzo, Javier *et al.* (1994) *Jóvenes españoles 94*. Madrid: Ediciones SM.
- Esping-Andersen, Gösta (2007) *Family Formation and Family Dilemmas in Contemporary Europe*. Madrid: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
- (2002) “A child-centred social investment strategy”, en Gösta Esping-Andersen (ed.) *Why We Need a New Welfare State*. Nueva York: Oxford University Press, pp. 26-67.
- (2000) *Why Deregulate Labour Markets*. Nueva York: Oxford University Press.
- (1999) *Social Foundations of Postindustrial Economies*. Nueva York: Oxford University Press.
- (1996) *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies*. Londres: Sage.
- (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge, Reino Unido: Polity Press.
- y Sebastián Sarasa (2002) “The generational conflict reoriented”, *Journal of European Social Policy* 12 (1): 5-21.
- Estes, Carol L. y Elisabet A. Binney (1989) “The biomedicalization of aging. Dangers and dilemmas”, *Gerontologist* 29 (5): 587-596.
- Eurostat (2004) *Living Conditions in Europe: Statistical Pocketbook*. Luxemburgo: European Comission. Publicado online en http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-53-03-831/EN/KS-53-03-831-EN.PDF.
- (2003) *Social Protection Expenditure and Receipts 1991-2000*. Luxemburgo: European Commission.
- (2002) *Key Data on Education in Europe*. Luxemburgo: European Commission, publicado online en www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_set_data.html.
- (2001) *Eurobarómetro 55.1, The Young Europeans*. Luxemburgo: European Commission. Disponible en http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.
- (2000, 1980) *Population and Social Conditions: Marriage Indicators*. Véase en <http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/reference>.
- (1997) *Eurobarómetro 47.2, The Young Europeans*. Luxemburgo: European Commission. Véase en http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.
- (1996) *Social Protection Expenditure and Receipts: European Union, Iceland and Norway, 1980-1996*. Luxemburgo: European Commission.
- (1994) *European Community Household Panel*. Luxemburgo: European Comission.
- (1993) *Eurobarómetro 39.0, Europeans and the Family*. Luxemburgo: European Commission. Véase en http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.
- (1990) *Eurobarómetro 32.0, The Family and the Desire for Children*. Luxemburgo: European Commission. Véase en http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.
- (1987) *General Government Accounts and Statistics 1970-1987*. Luxemburgo: European Commission.
- Eurydice (2005) *Key Data on Education in Europe*. Luxemburgo: European Commission.

- (2002) *Key Data on Education in Europe*. Luxemburgo: European Commission, publicado online en www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_set_data.html.
- Fassinger, Polly A. (1993) “Meanings of housework for single fathers and mothers: Insights into gender inequality”, pp. 195-216 en Jane C. Hood (ed.), *Men, Work, and the Family*. Newbury Park, California: Sage.
- Fernández Cordón, Juan A. (1997) “Youth residential independence and autonomy”, *Journal of Family Issues* 18 (6): 600-601.
- Ferrera, Maurizio (1996) “The southern model of welfare in social Europe”, *Journal of European Social Policy* 6 (2): 17-37.
- Flaquer, Lluís (2000) *Las políticas familiares en una perspectiva comparada*. Barcelona: Fundación La Caixa.
- (1999) *La estrella menguante del padre*. Barcelona: Ariel.
- (1998) *El destino de la familia*. Barcelona: Ariel.
- (1997) “La emancipación juvenil de los jóvenes”, *Revista de Estudios de la Juventud* 39: 37-46.
- Freeman, Richard B. (2007) “The great doubling: The challenge of the new global labor market”, pp. 55-65, en J. Edwards, M. Crain y A. L. Kallenberg (eds.), *Ending poverty in America: How to Restore the American Dream*. New York: The New Press.
- Foner, Anne (1974) “Age stratification and age conflict in political life”, *American Sociological Review* 39:187-196.
- Föster, Michael F. y Michelle Pellizari (2000) “Trends and driving factors in income distribution and poverty in OECD area”, *Labour Market and Social Policy Occasional Paper* no. 42. París: OECD.
- Furnham, Adrian (1994) *Personalidad y trabajo*. Madrid: Pirámide.
- Galazo, Vincenzo y Paola Profeta (2004) “Lessons for an ageing society: The political sustainability of social security systems”, *Economic Policy*, 19 (38): 63-115.
- Gallie, Duncan y Serge Paugman (2004) “Unemployment, poverty and social isolation: An assessment of the current state of social exclusion theory”, pp. 34-54 en Duncan Gallie (ed.), *Resisting Marginalisation, Unemployment Experience and Social Policy in the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Gallie, Duncan (2000), “The experience of unemployment: the debates”, pp. 25-46, en Duncan Gallie y Serge Paugam (eds.), *Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Gallie, Duncan, Sheila Jacobs y Serge Paugam (2000) “Poverty and financial hardship among the unemployed”, pp. 47-68 en Duncan Gallie y Serge Paugam (2000) *Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe*. Nueva York: Oxford University Press.
- Gangas, Pilar (1995) *El desarrollo organizativo de los partidos políticos de implantación nacional*. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
- Garrido, Luis J. (1996) “Paro juvenil o desigualdad”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 75: 235-267.
- y Enrique Gil Calvo (eds.) (1993) *Estrategias familiares*. Madrid: Alianza Universidad.
- y Miguel Requena (1996) *La emancipación de los jóvenes en España*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- Gelissen, John y Will Arts (2001) “Welfare States, solidarity and justice principles: Does the type really matter?”, *Acta Sociologica* 44 (4): 283-299.

- Gil, Joan y Gillem López Casanovas (1999) "Redistribution in the Spanish pension system: An approach to its life time effects", *Estudios sobre la Economía Española* 55, FEDEA. <http://www.fedea.es/pub/eee/eee55.pdf>.
- Gil Calvo, Enrique (2003) *El poder gris. Una nueva forma de entender la vejez*. Barcelona: Mondadori.
- (2002) "Emancipación tardía y estrategia familiar", *Revista de Estudios de la Juventud* 58: 9-12.
- (2001) *Nacidos para cambiar*. Madrid: Taurus.
- (1995) *Prisa por tardar*. Madrid: Taurus.
- Gradín, Carlos y Conchita D'Ambrosio (2000) "Are children in growing danger of social exclusion? Evidence from Italy and Spain", *Luxemburg Income Study Working Paper* 262, CEPS/INSTEAD.
- Granovetter, Mark (1973) "The strength of weak ties", *American Journal of Sociology* 78, (6): 1.360-1.380.
- Gray, Jeffrey (1997) "The fall in men's return to marriage: Declining productivity effects or changing selection?", *Journal of Human Resources* 32: 481-504.
- Güell-Rotllan, María (2000) "Fixed-term contracts and unemployment: An efficiency wage analysis" *Centre for Economic Performance Discussion Papers* 0461. Londres: London School of Economics.
- y Barbara Petrongolo (1998) "The transition of workers from temporary to permanent employment: The Spanish case", *Working Paper* 98-81. Madrid: Universidad Carlos III.
- Guillemard, Anne Marie (1992) *Análisis de las políticas de vejez en Europa*. Madrid: INSERSO.
- Hacker, Jacob (2006) *The Great Risk Shift*. New York: Oxford University Press.
- Herce, José A. (2004) "Las pensiones 2004-2008", *Cuadernos de Información Económica* 178: 61-64.
- y Javier Alonso (2000) *La reforma de les pensions davant de la revisió del Pacte de Toledo*. Barcelona: Fundació La Caixa.
- y Víctor Pérez-Díaz (1995) *La reforma del sistema público de pensiones en España*. Barcelona: Fundación La Caixa.
- Hernández Rodríguez (1996) "El suicidio en la ancianidad en España", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 73: 127-148.
- Hicks, Peter (2001) "Public support for retirement income reform", *OECD Labor Market and Social Policy Occasional Paper* No 55. París: OCDE. Disponible en <http://econpapers.repec.org/paper/oecelsaaa/55-en.htm>.
- Hinrichs, Karl (2002) "Do the old exploit the young? Is enfranchising children a good idea?", *European Journal of Sociology*, 43 (1): 35-58.
- Hirschman, Albert O. (1970) *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hochschild, Arlie R. (1990) *The Second Shift*. Nueva York: Avon Books.
- Hurd, Michael D. y John B. Shoven (1985) "The distributional impact of Social Security", pp. 193-222 en David A. Wise (ed.), *Pensions, Labor and Individual Choice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Iglesias de Ussel, Julio (2001) *La soledad en las personas mayores: Influencias personales, familiares y sociales. Análisis cualitativo*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
- (1998) *La familia y el cambio político en España*. Madrid: Tecnos.
- (1997) "Valores familiares de los jóvenes", *Revista de Estudios de la Juventud* 39: 9-16.

- Jesús M. de Miguel, y Antonio Trinidad (2009) *Sistemas y políticas de educación superior*. Madrid: Consejo Económico y Social.
- y Gerardo Meil (2001) *La política familiar en España*. Barcelona: Ariel.
- Illich, Ivan (1976) *Limits to Medicine. Medical Nemesis, the Expropriation of Health*. Londres: Boyards.
- (1971) *Deschooling Society*. Nueva York: Harper and Row.
- IMSERSO (2005) *Las personas mayores en España. Datos estadísticos estatales y por Comunidades Autónomas*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
- (2002) *Envejecer en España*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
- INSERSO (1995) *Las personas mayores en España: Perfiles. Reciprocidad familiar*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.
- INE (2006a) *Anuario Estadístico*, Madrid: INE.
- (2006b) *Encuesta de condiciones de vida*. Disponible en <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=caxis&file=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453%2F%2Fa2006>.
- (2001a) *Boletín Informativo 6* publicado online en www.ine.es/revistas/cifraine/cifraine6.pdf.
- (2001b) *Censos de población y viviendas: Resultados definitivos*. Consultados en www.ine.es/censo/es/consulta.jsp.
- (2001c) *Panel de hogares de la Unión Europea*. Disponible en www.ine.es/inebase/menu2.htm#11.
- (1999) *Encuesta de fecundidad*. Disponible en www.ine.es/inebase/menu1.htm#5.
- (1990–2000) *Encuesta de salarios en la industria y los servicios*. Disponible en www.ine.es/inebase/menu2.htm#11.
- (1987–2004) *Encuesta de población activa*. Disponible en www.ine.es/inebase/menu2.htm#11.
- (1958, 1980, 1981, 1985, 1990, 1998, 2000) *Encuesta de presupuestos familiares* disponible en [ww.ine.es/inebase/menu2.htm#11](http://www.ine.es/inebase/menu2.htm#11).
- INJUVE (2001) *Juventud en cifras 2000/01*. Disponible en www.mtas.es/injuve/.
- INSS (2001) *Informes estadísticos*. Disponibles en www.seg-social.es.
- Instituto de la Mujer (2005) *Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida laboral: Situación actual, necesidades y demandas*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Irwin, Sarah (1996) “Age related distributive justice and claims on resources”, *The British Journal of Sociology* 47 (1):68-92.
- Jacobsen, Joyce y Lawrence Levin (1995) “The effects of intermittent labor force attachment on female earnings”, *Monthly Labor Review* 118: 14-19.
- Jahoda, Marie (1982) *Employment and Unemployment: A Social Psychological Analysis*. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
- , Paul Lazarsferl y Hans Zeisel (1933) *Die Arbeitslosen Von Marienthal*. Leipzig: Hirzel.
- Jenson, Jane (2006) “The LEGOTM paradigm and new social risks: consequences for children”, pp. 27-50 en Jane Lewis (ed.), *Children, Changing Families and Welfare States*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
- Jiménez, Beatriz, et al. (2008) *La emancipación precaria*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Jordana, Jacint (1994) “Sindicatos y política en España: La influencia de las condiciones organizativas en las estrategias sindicales. *Revista Internacional de Sociología* 8 y 9: 137-186.

- Jurado, Teresa (2003) "La vivienda como determinante de la formación familiar en España desde una perspectiva comparada", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 103: 113-157.
- Kalleberg, Arne L. (2009) "Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition", *American Sociological Review* 74: 1-22.
- Keeler, John T. (1993) "Opening the window for reform: Mandates, crises, and extraordinary policy-making", *Comparative Political Studies* 25 (4): 433-486.
- Kersbergen, Kees van (1995) *Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State*. Nueva York: Routledge.
- Kertzer, David L. (1983) "Generations as a sociological problem", *Annual Review of Sociology* 9: 125-149.
- Kiernan, Kathleen (2000) "European perspectives on union formation", pp. 40-58, en Linda Waite (ed.) *The Ties that Bind: Perspectives on Marriage and Cohabitation*. Nueva York: Aldine de Gruyter.
- Kieselbach, Thomas (2004) "Psychology of unemployment and social exclusion: Youth unemployment and the risk of social exclusion", pp. 54-80, en Duncan Gallie (ed.), *Resisting Marginalisation, Unemployment Experience and Social Policy in the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Klingemann, Hand Dieter, Richard I. Hofferbert, e Ian Budge (1994) *Parties, Policies and Democracy*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Kohli, Martin (2006) "Aging and justice", pp. 457-475 en Robert H. Binstol y Linda K. George (eds.), *Handbook of Aging and the Social Sciences*. Sexta edición. San Diego: Elsevier.
- (2004) "Generational changes and generational equity", pp. 518-526, en Malcolm L. Johnson y Vern Bengtson (eds.), *The Cambridge Handbook of Age and Ageing*. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
- Koopmans, Ruud (1995) *Democracy from Below: New Social Movements and the Political System in West Germany*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Korenman, Sanders y David Neumann (1991) "Does marriage really make men more productive?", *Journal of Human Resources* 26 (2): 282-307.
- Kotlikoff, Laurence J. (1992) *Generational Accounting: Knowing Who Pays, and When, for What We Spend*. Nueva York: Free Press.
- y William Liebfritz (1998) "An international comparison of generational accounts", *NBER Working Paper* 6447. Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- Lasch, Cristopher (1977) *Heaven in a Heartless World: The Family Besieged*. Nueva York: Basic Books.
- Layard, Richard, Stephen Nickell y Richard Jackman (1991) *Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market*. Oxford: Oxford University Press.
- Leibfried, Stephan (1992) "Towards a European Welfare State? On integrating poverty regimes into the European Community", pp. 133-156 en Catherine Jones (ed.), *New Perspectives on the Welfare State in Europe*. Londres: Routledge.
- Lessenich, Stephan (1995) "España y 'los tres mundos del Estado del Bienestar'. Elementos para una clasificación", *Documento de Trabajo* 95/9. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
- Lin, Nan (2000) "Inequality in social capital", *Contemporary Sociology* 29, 6: 785-795.
- y Mary Dumin (1986) "Access to occupations through social ties", *Social Networks* 8 (4): 365-385.
- Lipset, Seymour M. (1963) *Political Man: The Social Bases of Politics*. Nueva York: Doubleday.

- Lister, Ruth (2006) "An agenda for children: Investing in the future or promoting well-being in the present?", pp. 51-67 en Jane Lewis (ed.), *Children, Changing Families and Welfare States*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
- Loewenberg, Peter (1972) "The psychohistorical origins of the Nazi youth cohort". *American History Review*. 76: 1.457-1.502.
- López Casanovas, Guillem y Ana Mosterín (2007) *The Drift of Public Spending Towards the Elderly: A Generational Analysis of the Trend of Public Policies in Spain*. Disponible en SSRN. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1020572.
- Malthus, Thomas R. (1958) *An Essay on the Principle of Population*. Londres: Dent. Publicado originalmente en 1798.
- Mannheim, Karl (1993) "El problema de las generaciones", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 62: 193-242. La edición original en alemán es de 1928.
- Manow Philip (1997) "Social insurance and the German Political Economy", presentado en el Congreso *Germany and Japan: The Breaking up of Nationally Organized Capitalism*. University of Washington, Seattle, 10-12 de abril.
- y Eric Seils (2000) "Adjusting badly: The German Welfare State, structural change and the open economy", Fritz W. Scharpf y Vivien A. Schmidt (eds.) *Welfare and Work in the Open Economy: Diverse Responses to Common Challenges*. Oxford: Oxford University Press. Vol. 2, pp. 264-307.
- Marí-Klose, Marga, y Anna Nos (1999) *Itinerarios vitales: Educación, trabajo y fecundidad de las mujeres*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Marí-Klose, Pau, et al. (2008) *Informe de la inclusión en España 2008*. Barcelona: Obra Social de Caixa Catalunya.
- Carme Gómez-Granell, Cristina Brullet y Sandra Escapa (2008) *Temps de les famílies: Anàlisi sociològica dels usos del temps a les llars catalanes a partir del Pànel de Famílies i Infància*. Barcelona: Departament d'Acció Social i Ciutadania.
- Maravall, José M. (2003) *El control de los políticos*. Madrid: Taurus.
- y Marta Fraile, (1998) *The Politics of Unemployment. The Spanish Experience in Comparative Perspective, Working Paper 124*. Madrid: Instituto Juan March
- (1995) *Los resultados de la democracia*. Madrid: Alianza Editorial.
- (1992) "From opposition to government. The politics and policies of the PSOE", pp. 5-34, en José M. Maravall et al. (ed.), *Socialist Parties in Europe*. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.
- Maravall Gómez-Allende, Héctor (2003) *El envejecimiento en España*. Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
- Marmot, Michael G. y M. James Y. Nazroo (2001) "Social inequalities in health in an ageing population", *European Review* 9 (4): 445-460.
- Martin, Claude (1997) "Social welfare and the family in Southern Europe", pp. 23-41 en Martin Rhodes (ed.), *Southern European Welfare States*. Londres: Frank Cass.
- Martín Escudero, Mauricio (1994) "Estudio y trabajo", pp. 75-101 en Manuel Martín Serrano (ed.), *Historia de los cambios de mentalidades de los jóvenes entre 1960-1990*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- Martín Serrano, Manuel y Olivia Velarde Hermida (1996) *Informe Juventud en España 96*. Madrid: Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Meil, Gerardo (2003) *Las uniones de hecho en España*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- (2000a) “Cambio familiar y solidaridad familiar en España”, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Sociología* 26: 129-154.
- (2000b) *Imágenes de la solidaridad familiar*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, colección Opiniones y Actitudes, nº 30.
- (1999) *La postmodernización de la familia española*. Madrid: Acento.
- (1998) “La sociología de la familia en España 1978/1998”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 83: 179-215.
- (1995) “Presente y futuro de la política familiar en España”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 70: 67-90.
- Miguel, Amando de (1997) *La sociedad española 1996-1997*. Madrid: Editorial Complutense.
- Miguel, Jesús M. de (2005) *Universidad y Democracia*. Cádiz: Fundación Municipal de Cultura
- (1998) *Estructura y cambio social en España*. Madrid: Alianza.
- Emilio Castilla, y Jordi Caïs (1994) *La sociedad transversal*. Barcelona: Fundació La Caixa.
- Ministerio de Educación y Ciencia (1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001) *Estadística universitaria: Principales series*. Datos extraídos de www.mec.es/educa/jsp/plantilla.
- Ministerio de la Vivienda (1990–2000) *Índice de precios de las viviendas*. Serie temporal en www.mviv.es/estadisticas/atlas/pdf/cap_precios_vivienda.pdf.
- Minois, Georges (1989) *Historia de la vejez*. Madrid: Narcea.
- Moreno, Luis (2001) “Bienestar mediterráneo y ‘supermujeres’”, *Revista Española de Sociología* 2: 41-58.
- Moreno Mínguez, Almudena (2002) “El mito de la ruptura intergeneracional en los jóvenes españoles”, *Revista de Estudios de Juventud* 58: 33-44.
- Myles, John (1984) *Old Age in the Welfare State: The Political Economy of Public Pensions*. Boston: Little Brown.
- Naldini, Manuela (2003) *The Family in the Mediterranean Welfare State*. Londres: Frank Cass.
- y Teresa Jurado (1996) “Is the South so different? Italian and Spanish families in comparative perspective”, *South European Society and Politics* 1 (3): 42-66.
- Nicole-Drancourt, Chantal (1989) “Stratégies professionnelles et organisation des familles”, *Revue Française de Sociologie* 40 (1): 57-79.
- OCDE (2008) *Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries*. París: OCDE.
- (2007a) *Jobs for Youth*. Spain. París: OCDE.
- (2007b) *Health at Glance*. París: OCDE.
- (2006) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (2005) *Economic Survey of Spain 2005: The Need to Reform the Public Pensions System*. París: OCDE.
- (2004) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (2003) *OECD Economic Surveys: Spain*. París: OCDE.
- (2002) *Employment Outlook*, París, OCDE.
- (2001) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (2000) *Economic Outlook*. París. OCDE.
- (1999) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (1998a) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (1998b) *Education Outlook*. París: OCDE.
- (1997) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (1988) *Reforming Public Pensions*. París : OCDE

- (1986) *New Politics for the Young*. París: OCDE.
- (1985) *Education and Training after Basic Schooling*. París: OCDE.
- (1983) *Employment Outlook*. París: OCDE.
- (1981) *Youth Without Work: Three Countries Approach the Problem*. París: OCDE.
- (1978) *Youth Unemployment*. París: OCDE.
- (varios años) *Corporate Data Environment: Labour Market Statistics-Data*. Datos disponibles en www1.oecd.org/scripts/cde/lfsdataauthenticate.asp.
- (varios años) *Labour Force Statistics*, disponible en www.oecd.org/scripts/cde/members/lfsdataauthenticate.asp.
- O'Higgins, Michael (1988) "The allocation of public resources to children and the elderly in OECD countries", pp. 214-222 en John L. Palmer, Timothy Smeeding y Barbara B. Torrey (eds.), *The Vulnerable*. Washington DC: Urban Institute.
- Oppenheimer, Valerie K. y Vivian Lew (1995) "Marriage formation in the eighties: How important was women's economic independence?", pp. 105-138 en Karen Oppenheim Mason y An-Magritt Jensen (eds.), *Gender and Family Change in Industrialized Countries*. Oxford: Clarendon Press.
- Ortiz, Luis (2007) "Not the right job, but a secure one: Over-education and temporary employment in France, Italy and Spain", *Demosoc Working Paper* 27. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
- Pablo, Antonio de (1976) "La familia española en cambio", pp. 323-456 en Fundación FOESSA (eds.), *Estudios sociológicos sobre la situación social de España 1975*. Madrid: Euroamérica.
- Pampel, Fred C. y John B. Williamson (1989) *Age, Class, Politics and the Welfare State*. Nueva York: Cambridge University Press.
- (1988) "Welfare spending in advanced industrial democracies", *The American Journal of Sociology* 93 (6): 1.424-1.456.
- Pampillón, Rafael y Ana C. Mingorance (2005) "Envejecimiento demográfico. ¿Es necesaria una reforma en el sistema de pensiones español?", *Papeles de Economía Española* 104: 286-301.
- Parsons, Talcott y Robert Bales (1955) *Family Socialization and Interaction Process*. Glencoe, Illinois: Free Press.
- Paz, Javier de (1988) "Respuestas de las Juventudes Socialistas al plan de empleo juvenil", *Economía y Sociología del Trabajo* 1-2, 208-210.
- Pérez-Díaz, Víctor, Elisa Chuliá, y Berta Álvarez-Miranda (1998) *Familia y sistema de bienestar: La experiencia española con el paro, las pensiones, la sanidad y la educación*. Madrid: Fundación Argentaria.
- Pérez-Díaz, Víctor, Elisa Chuliá, y Celia Valiente (2000) *La familia española en el año 2000: Innovación y respuesta de las familias a sus condiciones económicas, políticas y culturales*. Madrid: Fundación Argentaria.
- Pérez Ortiz, Lourdes (1996) "La posición económica de los ancianos españoles", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 73: 149-176.
- Pfaff, William (2006) "France: The Children's Hour". *The New York Review of Books* 53 (8), 11 de mayo. Consultado en http://www.nybooks.com/articles/article-review?article_id=18978.
- Pierson, Paul (2001) *The New Politics of Welfare State*. Princeton: Princeton University Press.
- (1994) *Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment*. Nueva York: Cambridge University Press.

- Pinto Rodríguez, M. Elena (2006) *Suicidio Juvenil: Sociología de una Realidad Social*. Madrid: Facultad Complutense, tesis doctoral.
- Pitrou, Agnès (1978) *Vivre sans famille? Les solidarités familiales dans le monde d'aujourd'hui*. Toulouse: Privat.
- Polavieja, Javier (2004) "Demand-side, supply-side and institutional determinants of temporary employment: Spain in a comparative context", *Working Paper* 212. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
- (2003) *Estables y precarios: Desregulación laboral y estratificación social en España 1984-1997*. Madrid: Siglo XXI/Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Quadagno, John (1989) "Generational equity and the politics of the Welfare State", *Politics and Society* 17 (3): 352-376.
- Quintini, Glenda y Sébastien Martin (2006) "Stating well or losing their way?", *OECD Social Employment and Migration Working Papers* 39. París: OCDE.
- Reher, David-Sven (2001) "Lazos familiares en la Europa Occidental: Una lección de contrastes perdurables", pp. 313-342, en M. Ángeles Durán et al. (eds.), *Estructura y cambio social*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Requena, Miguel (2002) "Juventud y dependencia familiar en España", *Revista de Estudios de la Juventud* 58: 19-32.
- (2001) "Los jóvenes españoles de los años noventa: Formación, trabajo y convivencia", *Revista de Educación* 25: 33-47.
- (1999) "Pautas contemporáneas de evolución de los hogares en España", *Revista Internacional de Sociología* 22: 33-65.
- (1997) "Sobre el calendario reproductivo de las mujeres españolas", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 79: 45-80.
- Rifkin Jeremy y Robert L. Heilbroner (1995) *End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era*. Nueva York: G. P. Putnam's Sons.
- Riley, Matilda H. (1987) "On the significance of age in Sociology", *American Sociological Review* 52 (1): 1-14.
- Rindfuss, Ronald R. (1991) "The young adult years: Diversity, structural change, and fertility", *Demography* 28 (4): 493-512.
- Roussel, Louis (1992) "La famille en Europe occidentale: Divergences et convergences", *Population* 1: 133-152.
- Ruiz Salvador, Pedro (2003) *El entorno económico y social en 2003*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. disponible en www.ine.es/daco/daco42/sociales/entorno_ecosocial4.pdf.
- Ryan, Paul (2001) "The school-to-work transition: A cross-national perspective", *Journal of Economic Literature* 39 (1): 34-92.
- Ryder, Norman (1965) "The cohort as a concept in the study of social change", *American Sociological Review* 30: 843-861.
- Sáez, Francisco (2004) *Evaluación de la Estrategia Europea de Empleo de las Comunidades Autónomas*. Madrid: Universidad Autónoma.
- Salamonson, Yenna y Sharon Andrews (2006) "Academic performance of nursing students: Influence of part-time employment, age and ethnicity", *Journal of Advanced Nursing* 55 (3): 342-351.
- Salido, Olga (2001) *La movilidad ocupacional de las mujeres en España: Por una sociología de la movilidad femenina*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Samek Lodovici, Manuela (2000) "The dynamics of labour market reform in European countries", pp. 30-65 en Gøsta Esping-Andersen y Mariano Regini (eds.), *Why Deregulate Labour Markets*, Oxford: Oxford University Press.
- San Segundo, María J. (2005) "Luces y sombras de la expansión educativa", en J. Ruiz-Huerta (ed.), *Políticas públicas y distribución de la renta*. Madrid: Fundación BBVA.
- Sarasa, Sebastià (2007) "Pensiones de jubilación en España: Reformas recientes y algunas consecuencias sobre el riesgo de pobreza", *Política y Sociedad* 44 (2):87-89.
- y Luis Moreno (1993) "The Spanish 'via media' to the development of the Welfare State", *Estudio de Trabajo* 93/3. Barcelona: Institut d'Estudis Avançats, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Sastre Cantero, María J. et al. (2003) *Indicadores de calidad de vida: Un retrato del bienestar en España*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Scharpf, Fritz (1997) "Employment and the Welfare State: A continental dilemma", *Max Planck Institute Working Paper* 7.
- Seniors Españoles para la Cooperación Técnica SECOT (ed.), (1995) *Las actividades económicas de las personas mayores*. Madrid: SECOT.
- Sgritta, Giovanni B. (2001) "Family and welfare systems in the transition to adulthood: An emblematic case-study". *European Observatory Paper*. Milán: Università degli Studi di Milano.
- (1994) "The generational division of welfare: Equity and conflict", pp. 335-361, en Jens Qvortrup et al. (eds.), *Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics*. Avebury, Reino Unido: Aldershot.
- Smeeding, Timothy M. y Katherine Ross Phillips (2002) "Cross-national differences in employment and economic sufficiency", *The Annals of the American Academy* 580: 103-136.
- Steuerle, C. Eugene y Jon M. Bakija (1994) *Retooling Social Security for the 21st Century: Right and Wrong Approaches to Reform*. Washington, DC: Urban Institute.
- Suleiman, Ezra (2003) *Dismantling Democratic States*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Suttles, Gerald D. y David Street (1970) "Aid to the poor and social exchange", pp. 744-762 en Edward O. Laumann, Paul M. Siegel y Robert W. Hodge (eds.), *The Logic of Social Hierarchies*. Chicago: Markham.
- Thomson, David (1993) "A lifetime of privilege? Age and generations at century's end", en Vern L. Bengtson y W. Andrew Achenbaum (eds.), *The Changing Contract Across Generations*. Nueva York: De Gruyter, pp. 215-238.
- Thurrow, Lester C (1997) *The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*. New York: Penguin Books
- Tobío, Constanza (2002) "Conciliación o contradicción: Cómo hacen las madres trabajadoras", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 97: 155-186.
- (1999) "Marriage, cohabitation and residential independence of young people in Spain", *International Journal of Law, Policy and the Family* 15, 1: 68-87.
- Toharia, Luis (1986) "Un fordismo inacabado, entre la transición política y la crisis económica: España, en Robert Boyer (ed.), *La flexibilidad del trabajo en Europa. Un estudio comparativo de las transformaciones del trabajo asalariado en siete países, entre 1973 y 1985*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Trilla, Carme (2001) *La política de vivienda en una perspectiva europea comparada*. Barcelona: Fundació La Caixa.

- y Joffre López (2005) “Els habitatges de la població catalana”, pp. 286-319, en Fundació Jaume Bofill (eds.), *Estructura social i desigualtats a Catalunya*. Barcelona: Editorial Mediterrànea, Volum 2.
- Uitermark, Justus (2004) “Framing urban injustices: The case of the Amsterdam squatter movement”, *Space and Polity* 8 (2): 227-244.
- Valiente, Celia (1997a) “¿Algo más que ‘ganadores de pan’? El papel de los hombres en el ámbito familiar en España (1975-1996)”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 79: 221-246.
- (1997b) “Las políticas de cuidado de los niños a nivel nacional en España (1975-1996)”, *Papers Revista de Sociologia* 53: 101-136.
- (1996) “The rejection of authoritarian policy legacies: Family policy in Spain 1975-1995”, *Southern European Society and Politics* 1: 95-114.
- Vaquera, Elisabeth G. y Jesús M. de Miguel (2001) “Mujeres en la torre de marfil” *Gestión y Análisis de Políticas Públicas* 22: 77-94.
- Vilroxx, Jacques (1996) “Trade unions in postrepresentative society”, pp. 31-51 en Peter Leisink, Jim Van Leemput, y Jacques Vilroxx (eds.), *The Challenges of Trade Unions in Europe: Innovation and Adaptation*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
- Vogel, Joachim (2002) “European welfare regimes and the transitions to adulthood: A comparative and longitudinal perspective”, *Social Indicators Research* 59: 275-299.
- Waldfogel, Jane (1997) “The effect of children on women’s wages”, *American Sociological Review* 62 (2): 209-217.
- Wallisser, Andrés (2003) *Participación y ciudad*. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
- Warr, Peter B. (1987) *Work, Unemployment, and Mental Health*. Oxford: Oxford University Press.
- Weir, Margaret y Theda Skocpol (1985) *Bringing the State Back In*. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
- Wilenski, Harold (1975) *The Welfare State and Equality*. Berkeley: University of California Press.
- Winefield, Anthony H. y Marika Tiggeman (1990) “Psychological correlates of employment and unemployment: Effects predisposing factors, and sex differences”, *Journal of Occupational Psychology* 58: 229-242.
- World Values Survey* (1981, 1990, 1995) Datos para esos años disponibles en www.worldvaluessurvey.org/services/index.html.

Apéndice

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO (ECVT)

Institución responsable: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ámbito: Nacional

Universo: Población ocupada de 16 y más años que reside en viviendas familiares.

Tamaño de la muestra: 9.086 ocupados.

Procedimiento de muestreo: muestreo trietápico estratificado.

Año: 2006

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ECV)

Ámbito: Nacional.

Institución responsable: Instituto Nacional de Estadística

Universo: La población objeto de investigación son las personas miembros de hogares privados que residen en viviendas familiares principales, así como dichos hogares. Aunque las personas de todas las edades forman parte de la población objetivo no todas las personas son investigadas exhaustivamente, ya que sólo son seleccionables para una investigación exhaustiva las personas, miembros del hogar, con 16 o más años el 31 de diciembre del año anterior al de entrevista.

Tamaño de la muestra realizada: 16.000 viviendas.

Procedimiento de muestreo: es una encuesta anual con un diseño de panel rotante en el que la muestra la forman cuatro submuestras independientes, cada una de las cuales es un panel de cuatro años de duración. Cada año se renueva la muestra en uno de los paneles. Para la selección de cada submuestra se sigue un diseño bietápico con estratificación de las unidades de primera etapa. La primera etapa la forman las secciones censales y la segunda etapa las viviendas familiares principales. Dentro de ellas no se realiza submuestreo alguno, investigándose a todos los hogares que tienen su residencia habitual en las mismas.

Fecha de realización: 2005 y 2006.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

Ámbito: Nacional, autonómico, provincial, UE.

Institución responsable: Instituto Nacional de Estadística

Universo: Población que reside en viviendas familiares

Tamaño de la muestra: Aproximadamente 60.000 familias.

Procedimiento de muestreo: Muestreo bietápico con estratificación de las unidades de primera etapa (secciones censales) y unidades de segunda etapa (viviendas familiares)

Año: Segundo trimestre de 2007 (trimestral)

ESTUDIO CIS 1.327

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas

Universo: Población española de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño de la muestra: 2.394 entrevistas.

Puntos de muestreo: 90 municipios.

Procedimiento de muestreo: Unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las regiones autonómicas con el tamaño del hábitat, dividiendo éste en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000 y más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de $\pm 2,7$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización: Noviembre de 1982.

ESTUDIO CIS 1.789

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas

Universo: Población española de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño de la muestra: 27.287 entrevistas.

Puntos de muestreo: 838 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por comarcas y tamaño de hábitat, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple y de las unidades últimas (individuos) por sus rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P=Q$ el error es de $\pm 0,6\%$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización: Enero-Febrero 1983.

ESTUDIO CIS 2.048

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas

Universo: Población española de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño de la muestra: 2.502 entrevistas.

Puntos de muestreo: 139 municipios, 46 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades de muestreo de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido éste en 4 categorías: menos de 5.000 habitantes; de 5.001 a 30.000; de 30.001 a 250.000 y áreas metropolitanas.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de ± 2 para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización: Febrero 1983.

ESTUDIO CIS 2.063

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Universo: Población española de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño de la muestra: 2.500 entrevistas.

Puntos de muestreo: 160 municipios y 46 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P=Q$, el error es de ± 2 para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización: Julio de 1993.

ESTUDIO CIS 2.221

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla. Dentro de este ámbito, general, el estudio se ha circunscrito a los municipios de más de 2.000 habitantes.

Institución responsable: Centro de investigaciones Sociológicas.

Universo: Población española; varones y mujeres, de 15 a 29 años, ambos inclusive.

Tamaño de la muestra: 2.400 entrevistas distribuidas en tres submuestras.

Puntos de muestreo: 129 municipios y 41 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido en 6 categorías: de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error es de $\pm 3,62$ para cada una de las submuestras y de $\pm 2,09$ para la muestra total, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: Septiembre a octubre de 1996.

ESTUDIO CIS 2.226

Convenio: Instituto Nacional de Empleo (INEM).

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo: Población de ambos sexos inscrita en las oficinas del INEM a fecha de 30 Agosto de 1996.

Tamaño de la muestra realizada: 4.658 entrevistas, con el siguiente desglose: beneficiarios de prestación contributiva 788, beneficiarios de subsidio de desempleo 737, demandantes de primer empleo 805, anteriormente beneficiarios (menos de un año) 680, anteriormente beneficiarios (más de un año) 901, nunca beneficiario 747.

Puntos de muestreo: 356 municipios.

Procedimiento de muestreo: Se han realizado seis submuestras independientes para cada categoría. En cada categoría el procedimiento es polietápico, estratificado según el tamaño de hábitat, con selección de las unidades primarias (municipios) de forma aleatoria proporcional. Las unidades finales (desempleados) se han seleccionado mediante una selección sistemática con arranque aleatorio del listado de desempleados facilitado por el INEM, previa ordenación del mismo por la fecha de inscripción en el registro. Los estratos de hábitat considerados son: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P=Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple, el error es del 1,44% para el conjunto de la muestra; y, para las categorías consideradas, beneficiarios de prestación contributiva 3,50 %, beneficiarios de subsidio de desempleo 3,61 %, demandantes de primer empleo 3,49 %, anteriormente beneficiarios (menos de un año) 3,72 %, anteriormente beneficiarios (más de un año) 3,29 %, nunca beneficiario 3,64 %,.

Fecha de realización: Noviembre de 1996 a enero de 1997.

ESTUDIO CIS 2.302

Convenio: Instituto de la Juventud.

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Universo: Población española, varones y mujeres, entre 15 y 29 años.

Tamaño de la muestra realizada: 2.467 entrevistas

Puntos de muestreo: 269 municipios y 49 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error es de ± 2 para el conjunto de la muestra, y del $\pm 3,46\%$ para cada uno de los grupos de edad.

Fecha de realización: Septiembre de 1998.

ESTUDIO CIS 2.370

Ámbito: Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Universo: Población española, de varones y mujeres, entre 15 y 29 años.

Tamaño de la muestra realizada: 6.492 entrevistas.

Puntos de muestreo: 563 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error es de $\pm 1,23\%$ para el conjunto de la muestra.

Fecha de realización: Noviembre de 1999.

ESTUDIO CIS 2.442

Ámbito: Nacional.

Universo: Población española, varones y mujeres, de 18 años y más.

Institución responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Tamaño de la muestra realizada: 2.493 entrevistas.

Puntos de muestreo: 168 municipios y 48 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error es de $\pm 2\%$ para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: Enero de 2002.

ESTUDIO CIS 2.469

Ámbito: Nacional.

Institución responsable: Centro de investigaciones Sociológicas.

Universo: Población española, varones y mujeres, entre 15 y 29 años.

Tamaño de la muestra realizada: 1.484 entrevistas.

Puntos de muestreo: 123 municipios y 45 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: En el supuesto de muestreo aleatorio simple, nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P = Q$, el error real de muestreo es de $\pm 2,6 \%$.

Fecha de realización: Octubre de 2002.

ESTUDIO CIS 2.594

Ámbito: Nacional.

Institución responsable: Centro de investigaciones Sociológicas.

Universo: Población española de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño de la muestra realizada: 2.490 entrevistas.

Puntos de muestreo: 167 municipios y 46 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: En el supuesto de muestreo aleatorio simple, nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P = Q$, el error real es de $\pm 2,0\%$ para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: Febrero de 2005.

ESTUDIO CIS 2.634

Ámbito: Nacional.

Universo: Población residente de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra: 8.265 entrevistas.

Puntos de muestreo: 560 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad por tasa de ocupación. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a

400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 1,10$ % para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: Febrero-marzo de 2006.

ESTUDIO CIS 2.647

Convenio: IMSERSO

Ámbito: Nacional.

Universo: Población española de ambos sexos de 65 años y más.

Tamaño de la muestra: 3.507 entrevistas.

Puntos de muestreo: 555 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 1,69$ % para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: Septiembre 2006.

ESTUDIO CIS 2.671

Ámbito: Nacional.

Universo: Población residente de ambos sexos de 18 y más.

Tamaño de la muestra: 2.517 entrevistas.

Puntos de muestreo: 341 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por selección aleatoria nominal realizada sobre el marco de vivienda generado por el INE a partir del Padrón Continuo (septiembre de 2006). Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 1,99$ % para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización: Enero-Marzo 2007.

ESTUCIO CIS 2.756 (BARÓMETRO SANITARIO 2008, Primera oleada)

Convenio: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ámbito: Nacional. Se incluyen las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Universo: Población residente de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra: 2.385 entrevistas.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral: El conjunto de la muestra es representativo a nivel nacional con un error de muestreo del $\pm 1,17$ % para un nivel de confianza del 95,5%, y $P = Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Las muestras de cada una de las Comunidades Autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 200 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5% en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de $\pm 7,0$ %; en submuestras de 400 entrevistas es de ± 5 %, y en las de 800 entrevistas es de $\pm 3,5$ %.

Fecha de realización: Septiembre 2006.

EUROBARÓMETRO 56.1

Ámbito: Nacional.

Institución responsable: Comisión Europea.

Universo: Población residente de los 15 países de la Unión Europea, de 15 y más años de edad.

Tamaño de la muestra: La muestra de España contiene 1000 entrevistas.

Procedimiento de muestreo: Muestra representativa a nivel nacional de los países de la UE-15. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades de muestreo por rutas aleatorias. Cada unidad de muestreo responde al nivel de estratificación EUROSTAT-NUTS 2 (o equivalente) y siguiendo la distribución de la población residente en términos de área metropolitana, urbana y rural.

Fecha de realización: Septiembre 2001.